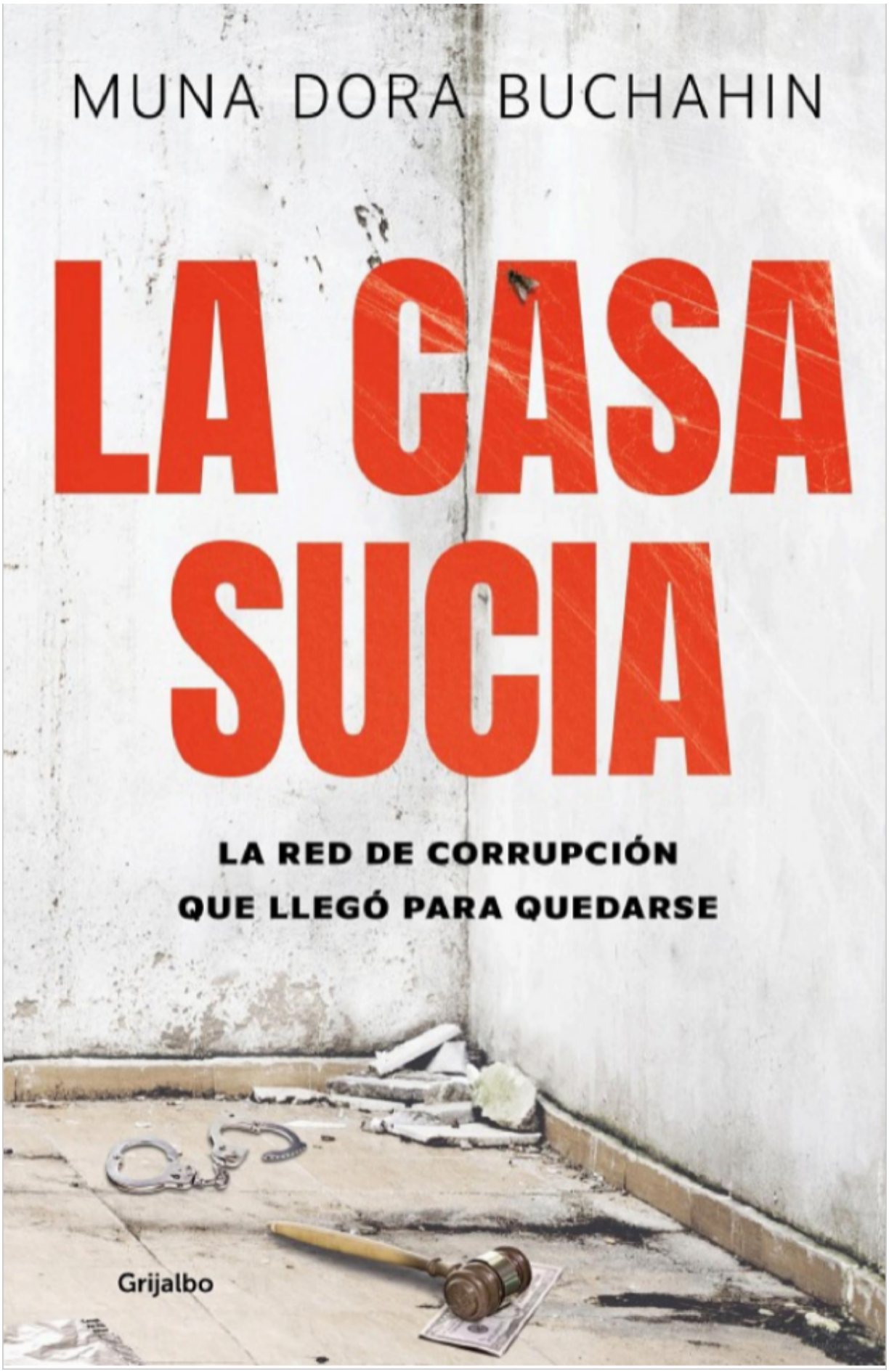

MUNA DORA BUCHAHIN
LA CASA SUCIA
LA RED DE CORRUPCIÓN
QUE LLEGÓ PARA QUEDARSE
Grijalbo

Prólogo

Necesario limpiar la casa

Humberto Musacchio

Etimológicamente, auditar es escuchar, pero también es informarse, conocer, aprender, saber y, si atendemos a términos cercanos del latín, de alguna manera implica también audacia, osadía e intrepidez, pues todo eso se requiere para la tarea bien cumplida de un auditor.

En su acepción moderna y más frecuente, auditar es hacer el análisis del comportamiento económico de una empresa, un gobierno o una dependencia pública para confirmar si se apega a las normas o si no se ajusta a ellas, lo que requiere escuchar, informarse, conocer, aprender, saber. Pero el estudio de los entes citados conlleva necesariamente al análisis del comportamiento humano, en especial de quienes tienen la responsabilidad en el manejo de los bienes de la entidad auditada, tarea que, como lo sabe cualquiera que haya incursionado en ese campo, requiere de intrepidez, pues quien audita no ha de conformarse con la versión que le proporciona la institución en análisis y debe resistir presiones, actuar con osadía y con audacia para ir más lejos en su indagación, mediante una estrategia que abarque todo el campo necesario y permita establecer la validez de las cifras y los datos que aparezcan o, por el contrario, que revele aquello que se pretenda ocultar.

En tales condiciones, la auditoría es una actividad de valientes. En la empresa Privada lo es porque ha de informarse de toda irregularidad a los accionistas o propietarios, aun cuando algunos de ellos o sus subordinados estén en falta; en las instituciones públicas, porque quienes auditan han de ir al fondo de sus investigaciones, pues los contribuyentes esperan comportamientos acordes con las leyes generales y la reglamentación interna de una institución. Igualmente, el cumplimiento de sus obligaciones y el pago de impuestos dan a cada ciudadano el derecho de exigir el cumplimiento de las responsabilidades de todo servidor público. En suma, cuentas claras y precisas. Al menos eso esperamos.

Por supuesto, las tareas de toda auditoría resultan chocantes para los auditados. Si todo está en orden, el solo hecho de indagar intensivamente en la documentación pone a los investigados bajo la lupa, pues han de confrontarse los hechos con los dichos, los inventarios con los inventos, los haberes con los deberes. Se trata de un análisis en toda forma, y si arroja resultados irregulares o adversos puede afectar la imagen, la carrera y hasta la libertad de quien resulte responsable.

Una auditoría somete irremediablemente a escrutinio la honestidad del funcionario, pero también su capacidad para dirigir, su talento para establecer y aplicar estrategias eficientes, su visión para seguir puntualmente los procesos necesarios, su agudeza para detectar fallas y evitar anomalías, así como su aptitud para aplicar como es debido el patrimonio encomendado y, si es el caso, preservarlo. Sin embargo, con lamentable frecuencia se

designa a personas deshonestas o incapaces para desempeñar tareas que están fuera de su alcance o de las normas éticas exigibles.

Ese cúmulo de cualidades y capacidades debe reunirlas todo aquel que participa en las indagaciones, pues debe ser ajeno a toda sospecha, lo que implica que el auditor también ha de ser auditado, ya que debe mostrar irrefutablemente un perfil confiable. Sobra decir que en ese contexto resultan inadmisibles las auditorías ejecutadas por quienes dependen de la autoridad auditada, lo mismo que todo intento de coartar la independencia de quien realiza la auditoría.

Para desgracia de los mexicanos, lejos estamos de contar con una administración pública satisfactoria. Privan en el ámbito gubernamental no el acatamiento de las normas ni el manejo impoluto de los fondos, sino la arbitrariedad de los poderosos, las ocurrencias más costosas, el desprecio por la ley, las cooptaciones indebidas, las complicidades, los caprichos de quien manda y los compromisos inconfesables, todo lo cual propicia el desorden, la falta de control, las ineficiencias de todo orden y, como consecuencia, la corrupción, una enfermedad contagiosa, progresiva y disolvente.

El libro de Muna D. Buchahin es un valiente "yo acuso", una elocuente radiografía de ese submundo de lo inconfesable, una implacable relación de procesos recientes que, lejos de afrontarse con la ley en la mano, se eluden, se minimizan, se esconden o se disfrazan porque, al menos hasta ahora, pueden más los intereses políticos, el amiguismo y, por supuesto, la corrupción, esa especie de cemento que une a los sinvergüenzas.

Si hubiera voluntad política, las autoridades podrían hacer mucho. Pero no es el caso. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que se supone es el organismo cúpula en la materia, es una construcción más propicia al ocultamiento que a la clarificación. Está formado por la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Tribunal de Justicia Administrativa y un sinnúmero de instituciones de los gobiernos estatales y municipales.

Se diría que con esa composición el mencionado sistema tiene la fuerza suficiente para denunciar y atajar corruptelas, pero no es así. Quien se asome al portal del SNA hallará que su definición jurídica lo hace una entidad inútil, pues se define como "un mecanismo de coordinación entre distintos entes, por lo tanto, no es un sujeto obligado de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de lo dispuesto en el artículo 1 de la misma Ley General. Cualquier solicitud de información que se requiera, debe hacerse a las autoridades o entidades que lo integran a través de la Plataforma Nacional de Transparencia".

De este modo, el Sistema Nacional Anticorrupción muestra de entrada su inutilidad, pues se supondría que está para ofrecer a los ciudadanos la información que se escamotea al público. De ahí que resulte superfluo que su Comité Coordinador (obsérvese que no todos

los integrantes, sino solo su Comité Coordinador) haya aprobado el 29 de enero de 2020 la Política Nacional Anticorrupción, que supuestamente "define el rumbo estratégico para combatir el problema de la corrupción en México", aunque obviamente no es de acatamiento obligatorio.

Integrante destacadísimo de dicho sistema es David Colmenares Páramo, quien representa la mejor garantía de que nada se hará para combatir corruptelas. En 2018 fue designado auditor superior de la Federación, pese a que años antes había sido despedido de la ASF por escandalosas omisiones cometidas en su revisión de las cuentas dejadas por el que fuera gobernador de Tabasco, Andrés Granier, a quien Colmenares llama "hermano".

Con ese antecedente, parecería inexplicable el nombramiento de Colmenares, pero esto es México y aquí la resbaladiza política propicia tales desfiguros. El analista financiero Ricardo Alexander Márquez, en su artículo "Una Auditoría Superior al servicio del poder" (16/VII/23), escribió que la ASF "publicó que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México había tenido un costo 232% mayor a lo previsto" por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, "al ascender a 331 mil millones de pesos, monto que podría incrementarse, ya que no se encontraban identificados ni cuantificados los costos adicionales por la liquidación de los contratos pendientes, ni por los juicios y demandas interpuestos, lo que implica que era más barato terminar la obra que cancelarla". Un completo lavado de manos.

Alexander Márquez dice que "a partir de ese momento la Auditoría Superior de la Federación había sido cooptada. Renunciaba a cumplir con sus funciones constitucionales. Redujo su desempeño, logró peores resultados y se alejó de su función de combate a la corrupción". En realidad Colmenares, desde su llegada al cargo en 2018, hizo de la ASF un juguete de los intereses políticos, pues lo que motivó la salida de Muna Buchahin fue que ella y su equipo revelaron la Estafa Maestra, el "extravío" de más de siete mil millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que llevó a Rosario Robles a la cárcel, de donde salió sin que le hayan comprobado las acusaciones, lo que muestra, si hiciera falta, que no solo la Auditoría Superior de la Federación, sino también la Fiscalía federal y otros organismos han sido incapaces de realizar una investigación digna de ese nombre.

En la red de complicidades políticas era inaceptable que funcionarios honrados denunciaran un atraco a la nación por siete mil millones de pesos. Fue así como Colmenares y sus compinches desataron una guerra feroz contra la autora de este libro y su equipo, hasta que lograron sacarlos de la Auditoría, pues ya se sabe que los funcionarios honestos y eficientes son indeseables en los pantanos de la complicidad.

Acostumbrados a pisotear la dignidad y los derechos de los demás, los corruptos no se imaginaron que la valiente Muna Buchahin, lejos de amilanarse ante la sucia campaña de difamación y las amenazas, respondería con responsabilidad patriótica y valor civil a sus acusadores, a quienes no ha cesado de señalar con índice flamígero.

Tan le asiste la razón, que el proceder de Colmenares no deja de aportar elementos que confirman su ineficiencia, muy probablemente interesada, pues señala Alexander Márquez que si en 2018 la ASF realizó 1 813 auditorías, en el primer año del actual sexenio fueron 455 menos. En el mismo tenor, bajo el gobierno de López Obrador se redujo a menos de la mitad el número de acciones legales emprendidas por la ASF.

Además, agrega que "las denuncias penales de los últimos cinco años principal mente se han concentrado en irregularidades del sexenio pasado. El único caso denunciado del gobierno actual es el desvío ocurrido en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado en esta administración y cuyo exdirector, Ignacio Ovalle, aún mantiene un cargo público". En defensa del funcionario responsable del mayor fraude del presente sexenio, el presidente dice "lo engañaron", aunque es obvio que contaba con los medios para evitar el presunto engaño.

Por si algo faltara, en el informe de la Cuenta Pública de 2022, la ASF solo detectó irregularidades por 61.5 millones de pesos, fiscalización que es "la que menos auditorías ha realizado", lo que explica que las irregularidades sean mínimas. Muy a tono con la alta opinión que le merece el militarismo al actual gobierno, "las auditorías no se han centrado en las fuerzas armadas —señala Alexander—, que ejercen miles de millones de pesos", manejos "que se han distinguido por su opacidad".

Un reportaje firmado por Laura Islas, Frida Mendoza, Concepción Peralta Silverio, Ami Sosa Vera y Eduardo Buendía (15/II/23) muestra que la Auditoría Superior de la Federación, bajo el mando de Colmenares, solo ha recuperado 17 de cada 100 pesos "que se ejercieron de manera incorrecta", mientras que entre 2000 y 2016 el promedio de dinero recuperado era de 53 pesos de cada 100. Por lo demás, la ASF se ha negado a informar sobre los avances en este renglón e "incluso clasificó como reservados documentos de observaciones ya aclaradas". Como complemento, en septiembre de 2022 se produjo una "caída del sistema", recurso providencial para tapar corruptelas.

Bajo la dirección de Colmenares, las denuncias de hechos ante el Ministerio Público suman la mitad de las presentadas durante un lapso semejante cuando era Juan Manuel Portal el auditor. En consonancia con el desgarriate actual, se han presentado errores en la revisión de la Cuenta Pública y fallas que no parecen casuales en el Sistema Público de Consulta de Auditorías.

"La gestión de Colmenares —dice el reportaje citado— tampoco ha considerado la realización de auditorías forenses cuando existan casos emblemáticos de posible corrupción, como las realizadas al caso de la Estafa Maestra. Solo para la Cuenta Pública 2017 se realizaron 12 informes de este tipo y fue una de las revisiones con menor cantidad. A partir de la fiscalización a 2018, se dejaron de practicar".

En julio de 2023, en la sesión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, órgano integrado por legisladores, la diputada panista María Elena Pérez-Jaén

señaló que “no se cuenta con un análisis profundo que permita a esta Comisión tomar decisiones respecto a la labor de fiscalización en la Auditoría Superior de la Federación, así como en las metodologías para los procedimientos de planeación, ejecución y seguimiento de auditoría ni para generar mecanismos que permitan la mejora de este ente fiscalizador”.

Por su parte, la también diputada Inés Parra Juárez, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), advirtió que “ya pasaron dos años y no se puede justificar el tiempo para seguir aplazando esa promoción de denuncias de hechos; hay muchas auditorías, pero no denuncias. ¿De verdad estamos por el efectivo combate a la corrupción o por la mera simulación? La corrupción es el cáncer”, añadió.

La diputada Parra, en la comparecencia de Colmenares ante el pleno, muy significativamente le obsequió unos ratones de juguete al auditor y el miércoles 26 de julio de 2023 presentó una denuncia penal por el desvío de 273 millones de pesos en el Instituto Politécnico Nacional, irregularidades que, dijo la legisladora, están documentadas en las cuentas públicas de 2019 a 2022, pese a lo cual no ha actuado la ASF, por lo que acusó a Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, quien está al frente de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, y a Víctor Manuel Andrade Martínez, que encabeza la Unidad de Asuntos Jurídicos, de “negligentes y encubridores”.

Lamentablemente, concluyó la valiente diputada Parra, “soy una voz en el desierto y hay toda una política de encubrimiento por parte de una mayoría de legisladores de todos los partidos en colusión con los auditores de la Auditoría Superior”. Sí, pero no solo son diputados de todos los partidos, pues abundan los políticos que, como dice la expresión popular, tienen cola que les pisen. El presidente López Obrador repite en favor de él y los suyos: “No somos iguales”. Muna Buchahin, con abundancia de datos irrebatibles y un criterio altamente profesional, demuestra que, por lo menos, se parecen mucho.

1

El sistema de la corrupción

México es uno de los países con más complacencia con el poder; esa condición impide el avance en el combate a la impunidad y, por lo tanto, a la corrupción, que está prácticamente incrustada en la estructura y el corazón gubernamental en contubernio con quienes se prestan en el sector privado a formar parte del engranaje. El sistema ha creado una coraza de complicidades que permite y favorece los desfalcos. Hay incapacidad para lidiar con los saqueos a las instituciones, quienes las representan o carecen del tono y la fuerza para contender con la alta estructura de poder vinculada a la corrupción o forman parte de esa práctica normalizada que ha imperado en nuestro país por décadas.

Los números no mienten, ni fabricamos teorías especulativas. Los resultados en las investigaciones por actos deshonestos y corrupción no han logrado recuperar las cifras millonarias dedicadas a enriquecer vidas de políticos y sus felices familiares, quienes disfrutan plenamente de los beneficios económicos de la ilicitud y las añoradas complacencias del poder. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2021, que realiza Transparencia Internacional desde 1995, el país obtuvo 31 puntos (100 significarían que es altamente limpio y 0 altamente corrupto). México también es el peor evaluado de los 38 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ya sé que estoy diciendo una obviedad, pero nada les acongoja ni les mortifica.

Para un vistazo, según otra medición, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2022, que clasifica a 15 naciones latinoamericanas, nuestro país está en el sitio 12 en su eficacia para luchar contra ésta, solo delante de Venezuela, Bolivia y Guatemala.

Según ese informe, los órganos anticorrupción en México tienen nombramientos basados en fines partidistas y políticos, y su actuar se enfoca en obtener prebendas personales —una vieja tradición—.

Este contexto brinda un panorama del tamaño de la corrupción en la vida pública del país, y aunque sabemos que el vínculo de complicidades es uno de los factores que explica su avance, no deja de sorprender la mezquindad con la que se desenvuelven los actores políticos sabedores del daño que ocasionan en el núcleo social y, por tanto, individual.

Mi propósito en esta narrativa es develar la maraña y el *modus operandi*, en mi experiencia como auditora forense, donde por primera vez en la historia de este país el enfoque y la metodología de las investigaciones permitió desenmascarar una red de funcionarios, y otros terceros participantes, que intervinieron en uno de los casos más emblemáticos de desvíos y saqueo descarado al erario: la Estafa Maestra (conocida así mediáticamente), que implicó un cúmulo de actos ilegales y diversas acciones que permitieron cantidades estratosféricas de desvío de recursos, involucrando a dependencias del gobierno federal, de

administraciones estatales e instituciones de educación superior, entre otros, mediante la simulación de actos y encubrimiento tendiente a disponer del dinero destinado a programas sociales con mecanismos que implicaron la "creación" de empresas fachada.

Pero primero permítanme hablarles un poco de mí, de los caminos que me llevaron a colaborar en distintas áreas de gobierno, desde trabajar en una escuela secundaria pública, hasta mi trabajo como fiscalizadora del gasto público, y cómo me convertí en una persona incómoda y perseguida para y por la élite política del país, que optó por fabricar denuncias con evidencias "a modo" para intimidarme, amenazarme y destruir con ello la confianza y credibilidad ganada en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), soportada con los hallazgos y resultados de las auditorías forenses, que fueron un parteaguas para que ahora se realicen este tipo de investigaciones por parte de periodistas y organizaciones civiles. Eso enorgullece al equipo que conformamos la Dirección General de Auditoría Forense (DGAF), dejar plasmadas las mejores prácticas y procedimientos para las indagatorias en casos de corrupción.

Originaria de la capital, desde joven he sido testigo de injusticias, acosos y arreglos, comunes en la burocracia y las organizaciones de este país. Al no tener los amigos o contactos necesarios, como muchas personas, padecí tratos indignantes, negativa de servicios, días enteros para ajustar trámites y otros más para arreglar lo que se había hecho mal; en fin, luchar, discutir, exigir y padecer el diseño institucional, que debo decir, ha evolucionado favorablemente en muchos aspectos, pero aún falta mucho por mejorar y sistematizar, a fin de evitar la mano corrupta del servidor público en diversos trámites. Probablemente eso influyó en mi decisión de estudiar la carrera de Derecho. Era, de alguna forma, una manera de rebelarme y exigir justicia ante un entorno que yo no aceptaba. Aprendí a luchar, no solo a ganar.

Los actos deshonestos y el crecimiento de la corrupción son los factores que han permitido que cada vez haya más requisitos para efectuar cualquier trámite y eso refleja la desconfianza ganada a base del incremento de fraudes descarados. Hace 30 años, para abrir una cuenta bancaria solo se necesitaba el dinero. De niños se nos incentivaba a ahorrar con la cartilla del ahorro, había palabra y confianza; hoy en día, pensar en abrir una cuenta es dedicar un día a los trámites, esperar otros más para la autorización, y qué decir si intempestivamente la institución bancaria decide unilateralmente cancelar la cuenta de ahorros y meternos en un brete, sin ninguna explicación, así nomás porque le vino en gana. Ya ni hablar de los grandes problemas de las personas de la tercera edad, es un verdadero terror el que sufren al hacer un trámite ante la indolencia de las autoridades reguladoras que deben supervisar a las instituciones financieras. En fin, este breve recuento nos puede llevar a indignarnos un poco más.

Como estudiante, laboré como empleada mientras estudiaba en la Preparatoria 6 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Coyoacán; no pasaba por mi mente trabajar en el gobierno, mucho menos en auditoría o hacer investigaciones; decidí estudiar

Derecho, simplemente así fue. Mis inicios en la administración pública fueron en Chiapas, a donde me fui a vivir en 1979.

Laboré en una secundaria técnica, también en el Poder Legislativo; luego, en 1993, inicié en el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) una actividad que me llevó a conocer los rincones más alejados de Chiapas: era promotora de difusión de la credencial para votar. Era un reto llegar a los lugares remotos del estado para informar, en comunidades indígenas, en qué consistía la campaña de credencialización; convocarlos de manera grupal en los parques o tocar casa por casa, para darles trípticos traducidos a su lengua, platicarles los beneficios y convencerlos de asistir a los módulos en cuanto fueran instalados; qué trabajo tan bonito, aunque extenuante.

Éramos mi alma y yo al inicio, sin que el gobierno otorgara los recursos indispensables para los recorridos y poder realizar así las actividades primordiales que requería esa encomienda, pero eso me ayudó a forjar carácter, también a entender lo que implica trabajar en instituciones públicas: la gasolina no llega a quien debe, si necesitas un auto, te dan el más viejo; simplemente no interesaba en lo más mínimo la integridad del personal ni la promoción del programa. Pienso que los funcionarios estatales no tenían ni idea del alcance y magnitud de eso. Como no había estructura de personal, no podían incrustar aviadores y, por ello, el dinero no llegaba. Pero la vida me abrió oportunidades, al tener que tocar puerta tras puerta para pedir apoyo de recursos, conocí gente buena.

Recuerdo que estaba sola en un escritorio oxidado —que de milagro no me provocó tétanos—, en un espacio del edificio donde me ubicaron. Pero miren la evidencia de lo que cuento, unos meses después me asignaron del gobierno estatal a un colaborador; yo no lo conocía, pero me alegré porque implicaba ayuda en el gran trabajo de difusión de la credencial para votar, pues imaginen cuántas comunidades y lugares alejados teníamos que visitar. Ilusa yo, le di un oficio de comisión para ir a las comunidades, los viáticos que ahora sí estaba dispuesta a pagar la Subsecretaría de Gobierno, pero qué desilusión, fue mi primer encuentro con la corrupción. Él era "un aviador". No había ido a ninguna de las actividades que debía realizar y de eso me enteré indagando, como pude, porque no había computadoras y menos internet en esos tiempos.

Para la mala suerte de ese infame funcionario, dado mis obsesiones, descubrí que era pediatra, amigo del subsecretario de Gobierno, que lo había enviado para ayudarle con el sueldo, pero no para trabajar. Qué coraje me dio, no sé si fue que quisiera tomarme el pelo o su descaro para quedarse con los emolumentos. Enfurecí. Marqué al teléfono de su consultorio para constatar que no había ido a ninguna de las comunidades que debía visitar; me contestó sin saber que era yo. La que se armó. ¿Cómo me atrevía yo a hablarle de esa manera al respetable amigo de la alta jerarquía en gobierno? Redacté un oficio donde evidencié lo que ocurría y lo envié con copia al "recomendado" (el subsecretario de Gobierno); todavía lo conservo. Seguramente a quienes lo colocaron en el puesto no les

cayó en gracia mi denuncia, porque nunca logré apoyo alguno, aunque estaban obligados ante el IFE para las actividades de difusión.

Después entendí que ese *modus operandi* es recurrente; así prohijan a los cuates o afectos y les quitan el espacio de trabajo a jóvenes con necesidad, ganas de laborar y hacer bien las cosas. Creo que difícilmente eso ha cambiado.

El cinismo parece ser una de las características requeridas en el poder. Y desde entonces comencé a observar y entender lo que ha sido una constante en los gobiernos: la corrupción. A los deshonestos, su reputación poco les importa.

Posteriormente, la Federación otorgó nuevas plazas temporales. Era intenso el trabajo y el tiempo apremiaba. El desdén y menosprecio para apoyar a los que laborábamos en las entidades federativas era lamentable. Pero nos crecíamos al castigo. Fui feliz de emprender esa odisea. Tengo mi credencial para votar de prueba y conozco la historia de su implementación; es un bonito recuerdo, así como las redes de amigos, colegas de medios y comunicación social que hasta hoy mantengo.

Laboré también en la delegación de Gobernación del estado de Chiapas y tuve la fortuna de conocer y participar en las mesas de diálogo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Mi jefe fue el doctor José Narro, entonces subsecretario de Gobernación, a quien le profeso un gran afecto y reconocimiento profesional.

Me he preparado de manera continua para mí misma en primer lugar, pero también para servir en mi profesión con un currículum académico y laboral producto de auténtico esfuerzo. Quiero compartir mi experiencia y transmitir conocimientos como ahora lo hago en la vida académica. Nací en la Ciudad de México y estudié en la Escuela Secundaria Técnica No. 11, cuando los planteles eran mayoritariamente exclusivos para mujeres o varones. Comentaba alguna vez que en aquel entonces la falda debía ir “tres dedos debajo de la rodilla”, regla que se obedecía puntualmente.

Estudié una maestría en Administración en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Muy activa siempre, me mantuve en la senda de las leyes y consolidé mi decisión de mejorar la administración pública.

En la ASF empecé con la supervisión de las auditorías que se practicaban a los gobiernos estatales y municipales, gracias a mi experiencia adquirida en Chiapas. Acababa de aceptar un cargo en la UNAM cuando me llamaron para formar parte de la ASF; ahí fortalecí mi preparación en disciplinas forenses y pude concretar propuestas de mejoría en la fiscalización gubernamental.

Me gusta todo el conocimiento que considero formativo y enriquecedor, trato de actualizarme, ser perseverante ante la adversidad, para intentar derrumbar condiciones de machismo que ya no deberían existir, porque de por sí la vida profesional, política y social es más difícil para las mujeres. La cultura machista y la resistencia a reconocer la capacidad

femenina hace casi imposible que una mujer sea valorada por sus destrezas y conocimientos, prefieren ignorar ese talento, sepultarlo, y el único medio a su alcance para intentar controlar es el sometimiento a partir del uso de un poder arbitrario. Y lo ejercen, por ejemplo, con dinámicas perversas que impiden el crecimiento profesional de las mujeres para los altos nombramientos y ascensos. Espero que algún día podamos tener ese espacio que nos merecemos, por competencias, respeto y dignidad.

No sé si los cargos me buscaban a mí o yo iba tras ellos, pero eran actividades que requerían 18 horas de atención plena, dormía poco; ahora pienso que mi perfil ayudaba en ello, me considero perseverante, no me gusta dejar nada inconcluso, soy un poco obsesiva, curiosa. Con el tiempo descubrí que no suelto las cosas sino hasta que las concluyo. Existimos personas con las competencias y habilidades para indagar, además de otras características necesarias que son afines a la investigación, la cual me apasiona y a la que, sin querer, me llevó el destino y ahora felizmente me dedico a ella.

En mi desarrollo profesional, quizá resaltaría mi retorno a la Ciudad de México para laborar en el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (Fonaes-Sedesol), donde la federación muestra el contraste del servicio público, sin duda en otro nivel, muy por encima del estatal; posteriormente, en 2001 regresé a Chiapas y tuve a cargo la Coordinación de Comunicación Social del gobierno y concluí mi labor ahí como contralora estatal en 2005.

En retrospectiva, mis experiencias profesionales me dejaron varias enseñanzas: el que desee escalar a altos niveles de poder debe poseer cualidades y rasgos de personalidad muy específicos, de lo contrario, el mismo sistema lo expulsará. Hay que saber que la misma puerta de entrada es la de salida. Entender eso me resultó sencillo a partir de 2005, año en que me integré en la ASF. Mi interés en superarme y lograr una plaza de nivel me llevó a profesionalizarme en la investigación y la entrevista forense, por ello hice el doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profundicé en el conocimiento de la auditoría forense.

Los conocimientos adquiridos en mi formación me permitieron llevar a cabo la fiscalización desde un enfoque distinto y novedoso; aportar a la práctica de las auditorías una metodología de investigación exhaustiva, apoyada con el uso de herramientas de cómputo forense para obtener la evidencia idónea en relación con ciertos actos que pueden ser constitutivos de delito; entender el caso, los hechos, para encauzar la investigación científica aplicada en las revisiones, todas por demás interesantes. Recuerdo la intervención que tuvimos en la auditoría a la Estela de Luz, a distintos programas sociales, otros de subsidios, adquisición de cámaras, chalecos para los municipios en aquellos fondos como el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), que tenía entre sus objetivos proveer de las herramientas necesarias a la policía, y, por supuesto, todos aquellos contratos adjudicados de manera directa e irregular para evadir las licitaciones. Ahí hay una respuesta al porqué: con tantos recursos federales asignados a los estados y municipios para fortalecer

a las policías estatales, no les otorgaban ni siquiera zapatos y uniformes, mucho menos una capacitación que los dignificara en la actividad que debían realizar.

Eso implicó, para quienes conformamos el equipo de auditoría forense, romper paradigmas, definir mejores estrategias para la investigación con la perspectiva de identificar los indicios y comprobar los hechos que nos aportan, con el fin de vincularlos para demostrar y acreditar cada acto y la trazabilidad de los recursos y las relaciones con las conductas para documentar los casos de corrupción. Asimismo, conocer y entender el conjunto de vínculos y complicidades como los factores que explican el avance de la impunidad.

Abrirnos espacios de respeto casi a codazos costó mucho, tanto al interior de la ASF como al exterior con los entes fiscalizados, y sí, ser mujer es una limitante, se tiene una idea equivocada de que el género es "controlable"; se nos acusa de traspasar "la línea" y toca enfrentar a quienes quieren "ubicarte", y al no lograrlo, simplemente les queda defenestrar. En un mundo donde la política es *de facto* dominada por machistas, he sufrido persecución política como respuesta vengativa, luego de haber revelado tropelías, desvíos y abusos. Esto culminó con mi expulsión de la ASF.

Como lo esbocé con anterioridad, los políticos tienden a justificar y racionalizar sus actos. Lo que anhelan es el poder. Sentir pertenencia, lealtades y asegurar un espacio a costa de lo que sea. Aprenden en su entorno, como los lobos, donde se muestran con el comportamiento esperado, sin recato alguno.

Las cosas se arreglan sin principios, haciendo y obedeciendo al grupo de pillos. Carecen de escrúpulos. Es parte del juego que permite entrar y ascender en la vida política. Cuando alzas la voz te vuelves incómoda, te vetan, se indignan, justifican su actuación, intentan manipular y someter. La traición es cotidiana. Desatan jaurías. En esas vueltas de la vida se aprende mucho de la condición humana, fácilmente corrompible, dispuesta a engañar para obtener un provecho.

En ese sentido, quisiera recordar la teoría del jurista alemán Claus Roxin, que aborda el caso del actuar delictivo: en hechos ocultos ha existido un aparato organizado del poder, encargado de trabajar sistemáticamente para llegar al objetivo previendo todos sus detalles: "El apartamiento del derecho respecto al aparato organizado de poder constituye un presupuesto necesario para el dominio del hecho de los hombres de atrás", de tal manera que la comisión de un delito no es únicamente cuestión de la organización, sino de cada uno de quienes la conforman; un comportamiento que ocultan los autores mediáticos, haciendo su parte de manera responsable, es decir, lo que se espera de ellos: la obediencia para cometer el delito y su alejamiento del deber de cuidado.

El sistema de Estado, como lo denomina Claus Roxin, tiene que trabajar delictivamente como un todo, si quiere que las órdenes de los hombres de atrás tengan la seguridad del éxito La pertenencia al clan implica lealtades, obediencia, sumisión, complicidades y encubrimiento. No existen los incentivos para los honestos y no hay consecuencias ni

sanciones a los corruptos. Así deciden conformar y vivir sus propias normas, encuentran una justificación moral a sus acciones.

Es entonces cuando el entorno político le hace un vacío y expulsa a quien no se conduce del modo esperado; por eso nadie se quiere enemistar con el jefe. Te dejan solo, te van aislando, te tachan. Se pagan favores, se encubren, se regocijan. El mensaje es claro: ese entorno enaltece la dinámica del "tú me ayudas, yo te ayudo", y bienvenido el abuso de poder.

Cuando toda la estructura de una organización percibe "si lo hace el de arriba, yo también lo puedo hacer", en el imaginario se cree que se obtiene permiso y se puede hacer. Si el entorno es deshonesto y no hay una introyección de valores, te vinculas y generas pertenencia a ese grupo. Esos son los bandos políticos o partidistas. Y comparten su misma narrativa, aunque la autopercepción los distorsiona y justifica.

La corrupción es de las personas, no es el Estado en sí, sino quienes conforman las instituciones, la toleran, la propician y la celebran. Es un reto a la ciudadanía y entre los distintos clanes. Aceptan comportamientos que saben que no son los correctos. Los perpetradores tienen como objetivo aprovechar cualquier ventaja que el sistema pueda ofrecerles para ocupar un espacio y apropiarse con fines de lucro personal y de grupo, son seres abusivos a los cuales no les importan los demás, carecen de mínima empatía o escrúpulos. Así, el sistema se abre para pagar favores que auspician la corrupción; a unos les cuesta más que a otros, pero de que están reciclándose, lo están.

Ser pillo es un arte

Antes de abundar en mi paso por la ASF y explicar algunos casos emblemáticos de corrupción y cómo los auditores los descubrimos, es muy importante tener claro que ser pillo es todo un arte.

El perfil del defraudador de cuello blanco, convertido en funcionario público, no es comparable con los carteristas del transporte público, que si ven descuidado al usuario le roban la cartera porque aprovechan la oportunidad. Los pillos y las pandillas gubernamentales hacen una planeación minuciosa, con la intención y consigna de "meter mano" a las arcas o generar grandes negocios ficticios que les generen dinero y beneficios en abundancia. Se vuelcan en cuerpo y alma en esas actividades delictivas y obtienen lo que buscan. Esa es la realidad que conocen y viven en todos los sentidos. Es un modo natural, desinhibido y ruin de actuar, y casi siempre se salen con la suya.

Ese *modus operandi* existe tanto en los gobiernos estatales como en los municipales; los candidatos abren puertas mostrando un falso carisma, para caer bien, y luego viene la lisonja: saber decir sí a todo, simular interés legítimo; servilismo para quedar bien.

Me tocó presenciar a un funcionario federal de la Procuraduría General de la República (PGR), de muy alto nivel, que se levantó presto a estacionar el auto de su superior. Claro que

detrás siempre hay un interés de que no se sepa y no se les note que son pillos. No cualquiera puede hacerlo, pues desarrollan grandes habilidades características de la política, aprenden a mentir a tal extremo que se creen sus mentiras y no distinguen qué es verdad.

En ese arte del engaño hay que saber guardar secretos, ser pieza clave, congraciarse, callar, ocultar, entender qué espera el "preciso" de la banda política. Los lisonjeros aprenden a estar atentos y leer las miradas; no se dan cuenta de que su adulador es un charlatán que solo busca manipularlos.

La mayoría de los funcionarios, apenas llega al cargo, quiere ver la estructura, organigrama, sueldos, carros, viáticos, beneficios, plazas altas, contratos y negocios. Ahí estriba la alta responsabilidad de quien nombra a quien no cuenta con el perfil y las competencias profesionales idóneas, lo que puede traer como consecuencia actos indebidos y desvío de recursos; ahí inicia el ejercicio indebido, porque a sabiendas de que no tenía la experiencia y conocimientos necesarios para el puesto, es nombrado. A ello se suma la corresponsabilidad por la falta de supervisión y vigilancia de quienes tendrían la obligación legal de hacerlo.

Así, estos grupos políticos se unen por intereses comunes y se alían con otras agrupaciones que buscan lo mismo. El aprendizaje se fomenta mediante el ejemplo.

No obstante, cada pillo según su nivel pretenderá una vida mejor, una pantalla más grande, otros zapatos de marca, relojes, buenas comidas, carros, viajes costosos. A veces se generan sentimientos de rencor social por la inequidad percibida. Otro rasgo importante es el apego a lo material para integrarse en un círculo social al que no se pertenece y que difícilmente se puede sostener. Además, carecen de remordimientos y una gran habilidad para no responsabilizarse de sus actos. Hay quienes necesitan sentirse visibles, y otros tienen complejos dignos de un estudio psicológico.

Crean necesidades apremiantes, racionalizan y justifican sus acciones, por ejemplo: envían a sus hijos a las mejores escuelas en el extranjero bajo la premisa de que el Estado no ha asumido la responsabilidad de procurar a todos una educación integral de primer nivel, o las becas solo se otorgan a los hijos de funcionarios; que no va a pasar nada, todos lo hacen, y así sucesivamente.

Otros justifican su deshonestidad con la urgencia de cubrir necesidades y expectativas más allá de su nivel de vida; esto está relacionado con frustraciones, complejos y pérdida de valores. Una dinámica de poder que da beneficios antes impensables a los corruptos.

Para este tipo de funcionarios la oportunidad de hacerse de grandes bienes y lujos se da en el tiempo de su mandato y su comportamiento lo hace bastante visible; entonces su estilo de vida se vuelve un incentivo para cometer tropelías.

Así ocurre otro círculo de corrupción; por ejemplo, con el diputado que pide dinero para proyectos o que se contrate a ciertos proveedores, o los que controlan los congresos y negocian auditorías a cambio de favores. Todo tiene que embonar.

En el ámbito político, no olvidemos la alta responsabilidad de los partidos en la elección de candidatos a cargos populares. En muchos casos los aspirantes son elegidos de tal manera que forzosamente devolverán el favor; la cadena de ilícitos que propicia la pillería en el otorgamiento de obra pública, de contratos de servicios ha llegado a tal límite que existe un gran número de autoridades municipales asesinadas en los últimos años, lo cual es impensable sin un conjunto de complicidades y permisividad. Hay entonces un empoderamiento distorsionado que muestra patrones de mentiras y engaños, comportamientos delictivos sin límite alguno para alcanzar sus fines por la necesidad de buscar satisfactores instantáneos y dada la baja tolerancia al fracaso. Rompen normas para pasar por encima de los derechos de otros. No hay lealtades ni lazos permanentes, prevalecen los propios intereses.

De esta forma, quienes tienen algo de escrúpulos o no se prestan para actos irregulares no entran al sistema, y difícilmente logran ascender o son expulsados.

En una ocasión visité la Unidad de Investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en materia de atención a denuncias para conocer qué hacían: poseían una vagoneta blanca cerrada con aparatos de escucha, supuestamente para atender denuncias ciudadanas, una libreta simulada con un micrófono para grabar conversaciones y un dispositivo móvil instalado. Me dieron pena ajena. Ese es su nivel de investigación, no son profesionales y no cuentan con las herramientas ni capacidades necesarias para llevar a cabo las indagatorias. ¿Quién autorizó hacer eso? Todos sabían de la existencia de ese método de espionaje. Desconozco si actualmente persiste esa área y sus vergonzosas instalaciones.

¿Por qué les importa la vida privada? ¿Para qué el espionaje? ¿Para chantajes, venganzas, morbo? La intimidad suele ser el punto débil de la mayoría de las personas. Espiar es repugnante, porque no importa en realidad la investigación seria, nada que ver con la labor profesional vinculada a la prevención de hechos de corrupción. Quienes lo practican crean un ciclo de mezquindad, pues con ello intentan derrumbar moralmente a cualquier sujeto que ha caído de su gracia. Indefendibles.

Utilizar información personal para amedrentar, para que alguien no abra la boca, para ejercer coacción, no solo indigna, es un instrumento de persecución política y personal, es un acoso donde difunden o filtran conversaciones con la finalidad de socavar la dignidad, sin que exista alguna institución que evite y sancione dichas actividades ilícitas.

En ocasiones se hace uso faccioso de las instituciones para elaborar toda una ofensiva de presión contra cualquier funcionario incómodo por desobedecer órdenes ilegales o por no someterse. Algunos pueden aguantar, pero hay quienes no lo soportan y terminan cediendo. Hay doble moral y resentimiento en mucho de esto.

Los corruptos se valen de las trampas que sean necesarias para alcanzar sus propósitos y mantienen la certeza de que no los van a descubrir porque así ha sido la historia; sus conductas deshonestas no serán reveladas ni castigadas; tienen derechos "adquiridos" debido al cúmulo de años de encubrimiento mutuo.

Un exfuncionario, del que omitiré el nombre, pagaba favores con viajes aéreos en primera clase, relojes caros, pago de escuelas en el extranjero a los hijos, automóviles de lujo o regalos varios en especie a la familia. Así caminan los negocios, si no, no hay acuerdos. Se lo exigían para que avanzaran sus asuntos.

Es bien sabido que los pillos reciben tales beneficios como un "pago de cuates". Les liquidan sus hipotecas y sus tarjetas de crédito, rentas de inmuebles o pago de colegiaturas en las mejores universidades del extranjero para los hijos y cualquier cosa que se les pueda ocurrir. ¿Y de dónde sale todo ese dinero? De partidas gubernamentales que no están sujetas a revisión con toda intención, vinculadas a las áreas de seguridad y procuración de justicia; obras y compras directas con sobreprecio, bienes y activos incautados, entre otros.

Vehículos decomisados son regularizados para luego darlos como obsequios o repartirlos entre ciertos funcionarios. Todo un *modus operandi* que requiere al menos dos personas para que ocurra. De esa manera los otros también se prestan a las corruptelas y muy pronto se acostumbran a ese estilo de vida, que luego les exigirá mayores ingresos para soportarlo.

Cuando ejercemos como funcionarios públicos —al margen de cualquier género— tenemos la obligación ética de decir "esto no debe ser así por tales razones", y argumentarlas. Si lo hacen o no, es su problema, pues no tenemos más responsabilidad que la que nos corresponde hasta el límite que marca la ley.

No son pocos los que piensan que hay que aprender a callarse, pero al menos yo no lo he hecho. Caí mal por eso. La vida profesional para las mujeres es más difícil, nos limitan porque en el fondo saben bien que el único medio para controlar es el uso del poder arbitrario y así lo ejercen. Espero que algún día cercano las mujeres podamos tener el espacio que merecemos, por competencias, profesionalismo, respeto y dignidad. Aunque, si soy honesta, lo veo muy lejano.

La estructura gubernamental se ha convertido en un modo de vida sexenal, vinculado al partido ganador en cada elección, sin que importe la experiencia, las competencias profesionales o el conocimiento especializado de los servidores públicos, cuyos cargos son los premios derivados de la campaña y, de esa manera, la obediencia y la lealtad son bien recompensadas. Por ello se da el fenómeno de brincar de un partido a otro, pues se sabe que es el único modo de acceso al poder y poco preocupa qué piensen los ciudadanos.

Los funcionarios siempre tendrán una respuesta en la boca. Su interés primordial es escalar a costa de lo que sea, más allá de su propia dignidad.

Por supuesto que en los niveles más altos del poder la corrupción alcanza un nivel notable; el sistema se encuentra diseñado para que los mejores puestos puedan hacer lo que les dé la gana sin sanción. Ese es otro detonador. Las instituciones están obligadas a velar por la legalidad; sin embargo, los altos mandos establecen condiciones y personal que propicien la ejecución de actos deshonestos: "Yo soy el que manda" o "¿Qué, me vas a auditar? No va a pasar nada", me dijo alguna vez un gran corrupto. Tenía razón. Nada pasó.

Esto me lleva a confirmar que en sus discursos pueden decir lo que quieran, aseverar que se combate la corrupción, pero al interior prosiguen los actos ilícitos, los controles internos son inexistentes. Por ejemplo, de qué sirven los perfiles creados en la Secretaría de la Función Pública y en diversas instituciones técnicas para quienes aspiran a la titularidad de los órganos internos de control (OIC), en los que, a pesar de establecerse los conocimientos y habilidades requeridos, contratan a cualquiera que es afín o recomendado, regularmente sin respetar los lineamientos.

Basta hacer un análisis actual de los nombramientos de contralores estatales, entidades de fiscalización estatal o la misma ASF para encontrar que la inexperiencia, el amiguismo, favoritismo político y la falta de preparación prevalecen. Si las instituciones que deben ser capaces de prevenir, investigar y sancionar, carecen de independencia, capacidades de investigación y de ética profesional, será imposible disuadir actos de corrupción.

De un órgano técnico autónomo se espera una institución fuerte, blindada ante injerencias políticas o partidistas, protegida de presiones políticas. Esas instituciones no existen, fueron cooptadas. ¿Cómo las protegemos de la mano interesada de los partidos o de quienes tienen la consigna específica de dinamitarlas para dar cabida a grupos políticos con intereses creados?

Si las cabezas con el mejor perfil y preparación estuvieran en los puestos acorde con sus conocimientos y competencias idóneas se podría impulsar en la estructura, de arriba abajo, una cultura organizacional fuerte integrada por personal con el conocimiento especializado y el apego a principios y normas. Habría una mayor responsabilidad institucional.

Para corromper se ofrecen cantidades de dinero exorbitantes; la mayoría se obnubilan ante las ofertas y no razonan que pueden estar expuestos, por ambiciosos. Usualmente prevalece la impunidad.

Nunca imaginaron a Emilio Lozoya Austin (exdirector general de Petróleos Mexicanos) o a Rosario Robles (extitular de la Secretaría de Desarrollo Social [Sedesol] y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [SEDATU]) enfrentando un proceso judicial.

Yo hablo de exigir, no de pedir, es una obligación que los funcionarios tienen: rendir cuentas. La ciudadanía se ha quedado en una suerte de teatro que pareciera ajeno, y en el que observamos cómo hay quienes se sirven con la cuchara grande.

Hasta ahora no hay órgano ni INAI alguno que logre —y creo que no ocurrirá en un largo plazo— que cada institución transparente y brinde la información de manera absoluta, clara y sencilla. Lo que sí ocurre es que se comparte mucha basura desinformativa y, por supuesto, se cubren unos con otros.

En esta cadena de corrupción los empresarios tienen su participación y lugar, al igual que los bancos o instituciones financieras. Muchos de ellos han sido cómplices durante años. Parece que nadie quiere problemas. Es la filosofía de "hoy por ti, mañana por mí". Y abundan las empresas fachadas, sin investigar, sin rendir cuentas de los recursos recibidos. Hay una simulación concertada.

Los grandes casos de saqueo son un buen ejemplo: ¿cómo se puede mover tanto dinero en efectivo? ¿Y los controles internos y el *compliance*? ¿Quién controla, autoriza o supervisa a las empresas de traslados de valores? ¿Cómo se contratan? ¿Cómo se han movido esas cifras estratosféricas? ¿Qué bancos y sucursales han sido los implicados? ¿Algún gerente o funcionario obtuvo beneficios por esconder y no revelar esas operaciones vulnerables? ¿Todo ese dinero pasa por los bancos o se va por el espacio sideral?

¿Cómo movieron los más de tres mil millones de pesos (mdp) en efectivo que se manejaron como parte de los más de trece mil mdp de la llamada Estafa Maestra? ¿Qué se ha hecho para controlar o regular a las transportadoras de valores? ¿Quién investigó los domicilios a donde supuestamente llevaron el efectivo? ¿Quién y cómo contrató esos servicios? ¿Quién responde por estas actividades vulnerables? Son las banderas rojas que nadie revisa. Nadie sabe y nadie supo. Han transcurrido más de cinco años desde que se tuvo conocimiento y la información del *modus operandi*, así como de los presuntos involucrados, sin que se haya profundizado de manera exhaustiva para conocer modo, lugar y circunstancia. No podía una tuerca del sistema corrupto dejar de aceitarse.

No conozco una sola institución donde exista coordinación entre los funcionarios responsables; son cotos de poder y dueños de la información. La resistencia forma parte inherente de la burocracia. Todos cuidan su parcela y no piensan en los cimientos de un gobierno, menos en fortalecer la lucha contra la corrupción. Se trata de una falta intencional.

Las instituciones responsables de inhibir y disuadir la corrupción mantienen una estrategia común: evitan producir inteligencia a partir de la información obtenida o estructurada; no brindan datos ni colaboración. No es un problema nuevo ni sexenal, es un tema estructural y de resistencia a la obediencia y al bien hacer.

Debemos cuestionar: ¿dónde se aplicaron los millones de dólares recibidos de los fondos internacionales en México a través de la Secretaría de Hacienda para la creación de bases de datos? ¿Se justifica la estructura y el sueldo de quienes laboran en el sistema anticorrupción? ¿Qué han hecho? ¿Qué hacen? ¿Dónde están los resultados? No hay nada.

Por el contrario, prevalecen las visiones distorsionadas del servicio público, donde grupos de poder con sus propios intereses en juego se confrontan entre sí; saben bien que son intocables y se mandan mensajes unos a otros tratando de generar caos.

Pero si desde las más altas esferas del poder no hay un verdadero compromiso y orden de combate real a la corrupción, es difícil prevenirla y castigarla; a ello se suma lo antes mencionado (además de pillos que aprovechan esos pleitos encarnizados).

El arte de observar

Investigar no es para cualquiera, aunque sus resultados benefician a toda la sociedad. Yo descubrí mi vocación reconociendo que me gustaba leer y estudiar, observar, hurgar en datos con los que trataba de agudizar mis habilidades, conocer con mayor profundidad y certeza los hechos, y para ello debía de indagar. Es muy interesante escuchar a las personas que tienen experiencia en esa materia, así que fui buscando este tipo de personajes para entenderlos y aprender.

En mi opinión, indagar es una forma de conocer la verdad relativa, es rebeldía ante la injusticia; así fui conformando mi experiencia como investigadora. No es lo mismo mirar que observar. Esto es, ir a analizar indicios, buscar hallazgos, generar inferencias… se asemeja al armado de un rompecabezas, aunque claro, hay que descartar pistas falsas. Se debe evitar el sesgo, discriminar la información, confrontar las hipótesis y continuar el proceso de descubrimiento hasta comprobar nuestra idea.

Investigar implica entender la condición humana, qué pasa por la mente del perpetrador; cómo llevó a cabo o instrumentó las acciones que lo condujeron a materializar la conducta irregular; los pensamientos se procesan y elaboran de manera distinta. Esto es todo un tema apasionante en el que interactúan la psicología y el derecho, donde el razonamiento y la argumentación lógico-jurídica son la base de una buena investigación. La prueba circunstancial, la serie de indicios y cada una de las evidencias habrán de razonarse.

Por ello resulta fundamental el juicio profesional del auditor/investigador, entendido como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, experiencia, objetividad y especialización que posee; todos esos elementos permiten generar hipótesis, teorías, construir la metodología y procedimientos aplicables al caso concreto. Conjunto de atributos para alcanzar el éxito de la investigación.

Poseer los atributos, las capacidades y habilidades de indagación y entrevista, así como las competencias necesarias no es fácil; requiere esfuerzo continuo y capacitación permanente. El carácter y temperamento, aunados a la fortaleza y la perseverancia, conforman algunas de las características indispensables de un profesional de la investigación.

El estudio permanente, la perseverancia, la disciplina, el autocontrol y la intuición informada pueden ayudarnos a alcanzar el conocimiento. A veces con solo ver a alguien por un instante

se sabe que hay algo que no está bien. Una pesquisa es estructurada, ordenada, dirigida a comprobar una hipótesis y recopilar la evidencia. Desarrollar la creatividad se vuelve parte de la vida cotidiana del auditor. También fortalecer las habilidades cognitivas, visualizar distintas maneras de procesar los datos y la información. Esquemas mentales que nos permitan observar y leer más allá de lo que hay detrás de un indicio. Generar escenarios integrales, observar, analizar y detectar inconsistencias; descubrir lo oculto, revisar y analizar los documentos y hechos de una manera distinta, contrastar y entender ¿para qué?, ¿por qué?, ¿quiénes?, y ¿qué se oculta? Todo fraude y acto deshonesto se intentará que permanezca oculto.

No se nace investigador, hay que tener gusto y vocación para desarrollar una serie de habilidades cognitivas. Se debe generar un hábito de lectura, buscar cosas distintas y abrir la mente a cualquier otra situación lógica que sea posible.

Así como los pillos tienen ciertos rasgos de personalidad, quienes investigamos debemos procurar en nuestra profesión ser carismáticos, escépticos, mesurados, constructivos, además de indagar, discutir, confrontar, analizar, conocer y aplicar las técnicas de investigación apropiadas, y tener creatividad para poder generar alternativas y escenarios.

Otras cualidades son la perseverancia y el sentido de oportunidad. No posponer, porque se puede perder un tiempo valioso. Buena memoria, atención y escucha atenta. Recrear probables escenarios basados en la cadena de indicios, inferencias y evidencia obtenida del caso concreto con el juicio profesional que conjunta en cada razonamiento el cúmulo de experiencia y conocimiento para conformar las posibles alternativas que encaminen el caso a conclusiones sólidas.

El planteamiento preliminar implica entender los hechos, generar las hipótesis, desarrollar la guía de auditoría a partir de las líneas de investigación, aplicar los procedimientos y técnicas apropiadas al caso concreto. Hay que pensar, actuar, articular en el entorno de la indagatoria para la vinculación de hechos y actores; generar prospectiva. Esto significa documentar de modo sistemático y ordenado. De ahí la importancia de ordenar y producir datos de inteligencia, estructurarlos, verificar su confiabilidad, su predictibilidad; entender hacia dónde nos lleva ese conjunto de información.

Insisto en que los servidores públicos tienen la obligación de rendir cuentas de sus actos. Las entrevistas forenses como herramienta de investigación ayudan en gran medida a obtener información sobre cada caso. Recuerdo en una ocasión a un funcionario muy altanero que llegó molesto a la cita —ya para entonces teníamos toda la información y los indicios del uso irregular de su cargo, al desviar recursos públicos a su propia empresa "fachada"—. Estaba muy altivo y soberbio, por lo que al mostrarle una parte de la evidencia, negó los hechos y simplemente se levantó y se fue. No necesitábamos más, contábamos con la trazabilidad del recurso. Manejar la entrevista y la evidencia es fundamental para confrontar a la persona que se sabe que es responsable, y más si es un pillo de siete suelas.

Durante la entrevista con otro funcionario, del cual ya teníamos documentado el desvío de recursos a las cuentas bancarias de su empresa, este se sintió sitiado y me interpeló agresivo echándose para adelante: "No me gusta ese tono", a lo que le respondí: "A mí no me gustan los rateros". Simple y sencillo. Pero ¿qué significaba "el tono" para él? Era un medio de intentar ganar la cancha. Las preguntas se le plantearon abiertamente: ¿por qué desvió el recurso? ¿Conoce usted a los accionistas de la empresa? ¿Cómo decidió contratar 100 millones de pesos con una empresa que no conocía? Es importante no dejarse intimidar, marcar distancia, hablar de una manera firme y clara con la información integral del caso.

Llevar a cabo una investigación efectiva requiere independencia mental y profesional, contar con las herramientas, los recursos humanos, financieros y materiales necesarios. De lo contrario, sin in dependencia presupuestal, ¿qué se puede hacer? Si no se cuenta con computadoras, internet, herramientas para análisis de datos, ¿cómo investigar? No hay ninguna razón para que la gente se vaya al campo sin viáticos; si no les alcanza para la alimentación y llegar a un hotel digno, se vuelven vulnerables a cualquier tentación de corrupción, por ejemplo, si alguien les ofrece cubrir el hospedaje. El auditor/investigador no tiene por qué pagar de su bolsillo. Esto puede sesgar o limitar la investigación.

Cuando los auditores iban a auditar a municipios les pedían que las autoridades locales les firmaran y sellaran que estuvieron ahí. Es increíble la situación en la que los colocan ante el ente que revisan, pues en ese momento está sometido y pierde su autoridad; significa que sus superiores desconfían. Es necesario cambiar todo un sistema viciado.

Inhibir y perseguir la corrupción necesita instituciones fortalecidas con personal competente, capaz de investigar y sancionar, con profesionales especializados que aseguren los mejores perfiles. Necesita un comportamiento congruente intelectual, moral y profesionalmente.

Afortunadamente, el periodismo de investigación nos ha dado a conocer casos relevantes de corrupción, aunque no pase nada más allá de una indignación momentánea. Fenómeno irracional.

El Estado podría hacer mucho con todo el aparato institucional, pero no creo que lo veamos en al menos una década. Hasta hoy, las instituciones vinculadas al Sistema Nacional Anticorrupción no mantienen estrategia alguna coordinada e integral para investigaciones por corrupción. No quieren hacerlo, por lo tanto, resultan ineficaces. Así las cosas, en México no se realizan investigaciones exhaustivas. La burocracia agobia y asfixia a las fiscalías.

En los estados el desasosiego es mayor. Los titulares de los OIC, nombrados por un gobernador al que nunca investigarán, al igual que las Entidades de Fiscalización Superior (EFS), mantienen un perfil bajo, incapaces de intentar revisar al gobierno para evitar cualquier represalia. En este sentido es posible que piensen que hacen su trabajo cuando se lo ordena un superior y le obedecen. El entramado de los nombramientos y las remociones

está diseñado para manipular nombramientos y muchos se esconden bajo una inmoralidad absoluta para fortalecer a un grupo y justificar su deshonestidad. No tenemos remedio.

2

El espíritu de la corrupción

En septiembre de 2005 inicié mi labor en la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Mis actividades consistían en supervisar la calidad de las auditorías que se realizaban a los gobiernos en estados y municipios, debido a la experiencia por mi encargo previo como contralora general del estado de Chiapas. Pasaron varios meses para que se concretara mi contratación por trámites internos, y justo cuando acababa de aceptar otro empleo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) me hablaron de la ASF para decirme que me presentara para firmar mi contrato e incorporarme.

En este nuevo entorno me propuse crecer profesionalmente, concluir mi maestría en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), realizar un doctorado y dedicarme a estudiar las distintas disciplinas forenses para entender su aplicación y obtener las certificaciones internacionales que permitieran mejorar mi actividad en la fiscalización gubernamental.

Me parece fundamental explicar que la ASF de la Cámara de Diputados es el órgano fiscalizador con autonomía técnica y de gestión, facultado por el artículo 79 constitucional, para revisar, en forma posterior, los ingresos, egresos, participaciones, fondos de gasto federalizado, deuda, así como la revisión de los recursos federales del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos, en los tres Poderes de la Unión. En este sentido, la ASF puede auditar prácticamente todos los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, sin perjuicio de la competencia de otras autoridades, y de los derechos de los usuarios del sistema financiero, salvo los que estrictamente corresponden al ámbito estatal o municipal, como son los ingresos propios, conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

En contraste, la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene un enfoque de control interno y el alcance es mucho menor; es decir, puede examinar de manera directa el uso de los recursos que ejercen las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo durante su ejercicio y operación; pero requiere de convenios de coordinación con las entidades, a través de las contralorías estatales y los órganos internos de control, para la revisión de recursos federales que el Ejecutivo transfiere a los estados mediante convenios, pues no tiene facultad de revisión directa conforme lo establece la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

En ese sentido, cabe destacar que por razones de fondo político no se han querido realizar modificaciones a la LCF que servirían para ordenar el gasto público y abonar en la lucha

contra la corrupción. Para entender esto hay que considerar que aproximadamente 5% son recursos propios que reciben las entidades federativas; 2% proviene de convenios suscritos entre la Federación y el estado —como los que firman con las universidades—, y 93% de los recursos restantes proviene de participaciones federales y los ocho fondos de gasto federalizado del Ramo 33, cuyo ejercicio regula la LCF.

Las Entidades de Fiscalización Superior de los Estados (EFSE), cuyos titulares son nombrados por los congresos locales (ficción), tienen limitaciones presupuestarias; en la práctica carecen de independencia y autonomía real para revisar a detalle el ejercicio *ex post* de los recursos en su cuenta pública correspondiente. Con toda la serie de maromas que tienen que hacer para "cuidar" a sus gobernadores y evitar indagar y revelar la corrupción, no existe un interés genuino en profesionalizar expertos en auditoría forense, mucho menos especializarlos en investigaciones. Las áreas creadas en entidades como Puebla o Nuevo León, por ejemplo, permiten entender perfecto los efectos de la simulación. Las EFSE están prácticamente cruzadas de brazos y en el fondo no quieren problemas que podrían revertirse y perder presupuesto y apoyos; nadie quiere ser perseguido ni visibilizado. La presión que se ejerce sobre ellas es singular, desde la ASF hasta los propios gobiernos locales. Claro, también cargan su propia historia.

En décadas de labor profesional no he conocido una sola entidad fiscalizadora cuyas revisiones a la cuenta pública del gobierno en curso hayan revelado corrupción o presentado alguna denuncia penal contra los funcionarios responsables. Pero sí al revés: gobiernos estatales entrantes que actuaron contra exauditores superiores estatales, quienes fueron a dar a prisión, y otros que relevaron de responsabilidad a sus gobernadores, grandes pillos que saquearon a la entidad. Basta echar un ojo a la Ciudad de México, cuyo titular anterior, eternizado por los siglos de los siglos, no mantenía un solo papel sobre su escritorio, pasó desapercibido y los resultados en materia de corrupción en obra pública, turismo, vivienda, y otras áreas, que se han hecho ahora públicos, hablan por sí mismos. Sin embargo, tampoco en esta nueva gestión se sabe nada sobre sus informes y observaciones. Es la misma historia de impunidad.

Tal como lo viven muchas profesionistas, durante mi paso por la ASF no faltó la misoginia y la discriminación selectiva, disfrazadas con distintos argumentos que me impidieron ascender. En 2007 fui designada como directora de área, donde se tuvo que hacer mucho trabajo para construir los criterios de actuación, normatividad y los lineamientos aplicables para el ámbito forense, los cuales se plasmarían, en 2010, en el Reglamento Interior de la ASF, con la creación de la Dirección General de Auditoría Forense (DGAF).

Redactamos nuestras facultades en el Reglamento Interno de la ASF, con un enfoque forense que establecía el uso de herramientas y tecnología informática, la entrevista forense, visita a proveedores, petición de información financiera y fiscal tanto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como al Servicio de Administración Tributaria (SAT) —imprescindible en la búsqueda y trazabilidad de los recursos—. Esos eran procedimientos

necesarios si queríamos generar resultados distintos a los acostumbrados, y que en un inicio causaron cierta sorna o burla, al punto de proponer al entonces auditor superior que los oficios dirigidos a los titulares para recabar la información que se requería para el ejercicio de nuestras atribuciones no fuera firmado por mí, en carácter de directora general, sino por el auditor especial de cumplimiento, porque además ya se había quejado el entonces titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA), finísimas personas que se sentían agraviadas. Del tamaño de sus tropelías debía ser el de su arrogancia.

Nuestra facultad para investigar, documentar y evidenciar hechos, actos y omisiones que implicaran irregularidades o conductas ilícitas de servidores públicos o terceros la ejercimos a cabalidad, a pesar de los intentos de obstaculización de los auditados, que iniciaban desde que requeríamos a los entes, a las distintas instancias de control y proveedores, diversa información preliminar, documentos, datos o informes de resultados para la planeación de nuestra actividad.

Se pasaban la voz de inmediato, alertaban a los proveedores involucrados, a los titulares, lo que revelaba claramente la protección mutua y el nivel de complicidad de la Función Pública con toda la estructura de poder cerrando filas para encubrirse, nunca delatarse y menos exponerse. Así, recuerdo algunos casos que hoy son emblema de corrupción: apenas habían llegado los oficios a la dependencia, ya estaban hablando con el auditor superior para quejarse, como aconteció con empresas supuestamente asesoras en la CFE, Pemex, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP), o en Quintana Roo y Puebla.

Así iniciamos, con pocas plazas, con profesionales íntegros y expertos en auditoría gubernamental e investigación forense, como la contadora María Guadalupe Velarde Gallegos y el contador Víctor Santiago Enríquez, y un equipo de trabajo igual de capaz que fue integrándose con los perfiles necesarios para conformar un equipo robusto de auditores forenses, a quienes capacitamos año con año con las mejores prácticas globales, y llegamos a conformar 45 especialistas entre estructura operativa y administrativa.

Todos los casos resultaban interesantes y novedosos, se comenzaba a construir una nueva época de fiscalización, a pesar de las miradas internas desafiantes y descalificadoras; ¿qué rubros, partidas, contratos, fideicomisos o programas indagar? ¿Qué indicios, evidencia, casos, denuncias o hallazgos relevantes debíamos fiscalizar? Ahí el juicio profesional del auditor se vuelve fundamental en la capacidad de discernimiento y elección, así como para generar hipótesis y trazar la metodología de investigación.

Recuerdo que inicialmente se plantearon revisiones vinculadas al robo de combustible (huachicol) y otras relevantes por su nivel de complejidad o probable naturaleza delictiva y opacidad; igual la partida para “gastos de investigación”, tanto en Seguridad Pública como en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), donde llamaba la atención, por

ejemplo, que si tenían 500 millones para gastos de investigación, ellos comprobaran exactamente los 500 millones; ¿cómo puede ser?, ¿por qué no 400 millones 993 mil con 75 centavos? Eso ya era un indicio, lo mismo que las respuestas y evasivas a la solicitud de información que se les requería; siempre argumentando cuestiones de seguridad, que la información era muy delicada, que no la podían dar a conocer, o que si se hacía pública habría personas en riesgo; la típica amenaza velada de que "si algo les pasa a los elementos va a ser responsabilidad de ustedes".

Cuántos recursos en el nombre de la secrecía se han dispendiado y desviado. Lo mismo sucede con los recursos que se otorgan a los partidos políticos y los que manejan en la Cámara de Diputados, un recibo simple firmado con la cantidad global, y la resistencia a rendir cuentas puntuales sobre su ejercicio y comprobación. Otro pacto no escrito que limita la rendición de cuentas. No ha pasado por la cabeza de partido político alguno resarcir y hacer las cosas correctas; saldrían de su burbuja. El discurso de honestidad es uno, y la realidad, otra.

Recuerdo, por ejemplo, que en la época en que estaban por aprobarse cambios legislativos importantes en materia de seguridad pública coincidí con un par de funcionarios de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes, con gran desfachatez, celebraban alegremente que llevarían a pasear a algunos diputados a Europa para comprar su voto de aprobación. Quienes buscan cometer fraude perciben una oportunidad para hacerlo y lo planean, al extremo de creer que pueden llevarlo a cabo y ocultarlo como algo merecido, normalizando su conducta. Más allá de las habilidades para cometer el fraude, cuentan con la posición de poder y la coerción que pueden ejercer.

Las sucursales bancarias que se encuentran en el recinto de San Lázaro tienen una operación sui géneris, es decir, fuera de toda normatividad a la que están obligados en materia antilavado y cumplimiento, según reveló un alto funcionario bancario; "así operamos", dijo. Esto sucedió en una entrevista cuando investigaba un desvío de recursos millonario, orquestado por diversas organizaciones sociales, llevado a cabo en efectivo, sin dar aviso a las autoridades; casualmente todas las cuentas fueron abiertas en esa sucursal.

Por cierto, ¿dónde andarán todas esas organizaciones y sus líderes que fueron beneficiados por sexenios con enormes subsidios? ¿Qué será de su vida? ¿En qué país vivirán? ¿En qué playa disfrutarán sus propiedades mal habidas? ¿Qué ha sido de los supuestos beneficiarios? No hemos vuelto a escuchar de esas organizaciones ni de sus líderes.

El cinismo y la mentira forman parte de las "virtudes políticas" como características propias de la personalidad del político, quien, sin mesura, orienta sus intereses hacia escenarios donde pueda acercarse con el fin de vincularse con las altas estructuras de poder, generar alianzas y complicidades para obtener beneficios mutuos de tal magnitud que aseguran el silencio y sumisión absoluta de esas redes. Estas alianzas explican la razón por

la cual los casos de corrupción no son sancionados y menos se conoce la ruta del dinero o se logra el resarcimiento de los desvíos. La impunidad e inacción permiten que ellos ganen.

Perseguir la corrupción precisa una convicción absoluta y un aparato de gobierno comprometido en su lucha. Esto no va a pasar porque la red de complicidades se asemeja a un gran sótano de cableado de un edificio inundado por el lodo, el cual no se puede limpiar de tanta mugre que hay, menos intentar comenzar a desenredarlos.

La curiosidad me ha llevado a observar las distintas redes y patrones de personas de interés y sus vínculos, y no existen las casualidades. En el país persisten las prácticas de antaño para otorgar cargos, puestos, adjudicaciones y simular compras con tal grado de desparpajo y con el mismo *modus operandi* que tuvo su mayor apogeo —y fue visibilizado— en el sexenio anterior; incluso se propician y conocen distintos esquemas fraudulentos, pero nada se gana con denunciar, dado los pactos y el nulo interés por investigar. Pareciera que la actividad delincuencial es de la misma horma, pero una gubernamental y la otra partidista, que ahora visibiliza más a ciertos personajes que se han dedicado por años a esta forma de vida, saltando de un partido a otro o a un puesto de elección cuasi permanente donde no sueltan la silla. Todo queda en la misma bolsa. La única verdad es su mentira. Ya no hay tiempo para indignarse.

Modus operandi

Los pillos no dejan de multiplicarse, son una suerte de fauna nociva que permanentemente evalúa sus "alcances y logros" para actualizarse, perfeccionar las formas y métodos de obtener prebendas, así como realizar jugosos negocios mediante el uso y abuso de sus influencias y poder. Enfrentarlos no es fácil por las limitaciones institucionales instauradas contra las que es casi imposible actuar. Hoy más que nunca existen pactos implícitos, y otros explícitos, encaminados a brindarse protección mutua, asegurar no ser investigados o fiscalizados y colocar a sus operadores en las entidades; reacomodos interesantes, donde se observa a los hijos de los políticos, conocidos por su largo diente, pelear los espacios donde podrán obtener beneficios negociados, arribar para cobrar y pagar favores, esto aunado a la ausencia de perfiles éticos y a la carencia de rendición de cuentas.

Pensar que el país mejorará en esta materia es una esperanza viva; quizá ocurra dentro de 15 años con las siguientes generaciones, si se propicia la ética y la especialización, pero las circunstancias actuales demuestran que la transformación en sí misma no traerá una mejoría notable en la actuación ni de los entes fiscalizadores ni de las fiscalías anticorrupción; es indiscutible que siempre habrá intereses mayores. ¿Pueden convivir éticamente los negocios y la política? La respuesta es no.

Los auditores forenses somos especialistas en indagar fraudes y otros actos vinculados a deshonestidad y corrupción, investigamos exhaustivamente, tratamos de reunir todas las partes del rompecabezas para dilucidar un caso. No resulta fácil encuadrar los resultados del hecho a la conducta, o a omisiones por posibles faltas administrativas o delictivas

atribuibles a un servidor público, persona física o moral; se requiere reconocer y recolectar los indicios, evidencias o pruebas que documenten las observaciones y los hallazgos.

En materia de auditoría forense no se investiga propiamente un delito, sino el conjunto de elementos y hechos derivados de la fiscalización que nos llevan a presumir su existencia y, por tanto, existe la obligación de presentar la denuncia de hechos que corresponda con los hallazgos y observaciones. La valoración holística de la información, el análisis objetivo y racional de indicios, testimonios, datos, hechos y demás elementos observados durante la aplicación de los procedimientos de auditoría que generen convicción desde la perspectiva y búsqueda de la verdad, en relación con los principios de actuación en el marco de la legalidad esperados en ejercicio y administración del recurso público, son el cúmulo que el auditor debe analizar, a efecto de conocer su relevancia y pertinencia dentro del objetivo de la revisión; verificar si ofrece información fiable y que se cuenta con la evidencia relevante, pertinente, suficiente y competente para determinar que existen los hechos que lleven a razonar cada observación y construir el informe de resultados con la debida argumentación técnica-legal.

Para evitar la rendición de cuentas, una práctica recurrente de los presidentes municipales y otros perpetradores es llevarse consigo los archivos documentales, así como la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos ejercidos, incluso han ocurrido incendios inexplicables en oficinas gubernamentales, de los cuales la autoridad investigadora nunca conoce el motivo. Y entonces, ¿cómo y con qué se revisa? El nuevo titular que los sustituye en el ámbito estatal, federal o municipal, al tomar el encargo suele embestir contra la administración anterior, acusando corrupción, amenazando con que se les perseguirá y encarcelará, el discurso de siempre que, sabemos, forma parte de la imagen pública que se intenta construir. Sin embargo, no ocurre nada más, y eso explica la razón por la que se convierten en comportamientos circulares.

En la SEDATU, en las áreas de oficialía mayor donde se operó la simulación de contrataciones y servicios, nada sucedió cuando la nueva administración se percató de la sustracción de gran parte de la información que incluye contratos, convenios, facturas, pagos y un conjunto de los expedientes que desaparecieron intencionalmente de los archivos, cuando la obligación inmediata del OIC y la SFP era exigir a los funcionarios salientes la entrega-recepción pormenorizada, como lo establece la normativa, más aún cuando estaban precedidos por sendas denuncias por actos de corrupción que eran del conocimiento público; de tal suerte que los pactos de impunidad prosiguieron, no se iniciaron los procedimientos administrativos en relación con las conductas que incluyen ocultamiento y sustracción de la información justificativa y comprobatoria, ejercicio indebido de atribuciones y falta del deber de cuidado de los servidores públicos. Este acto de debilidad gubernamental envía un mensaje claro: no pasa absolutamente nada.

Veamos la auditoría forense 1793_DS (que por ley es pública, como todos los informes de estas auditorías), en la cual la SEDATU transfirió recursos directamente a la Universidad

Politécnica de Quintana Roo, cuando debió ser a la Secretaría de Finanzas del estado.[1] Con toda intención no ocurrió así, precisamente para que la universidad no lo reportara en cuenta pública, tal como aconteció, y con ello propiciar su malversación. Entonces, si el recurso no aparece en cuenta pública y ninguna entidad fiscalizadora sabe que lo recibió, ¿a quién le rinde cuentas?, ¿quién puede fiscalizar lo que se desconoce que existe? Por trampas de este tipo que van evolucionando a la par de la creatividad de los corruptos, se considera que conforme se descubren diversos *modus operandi* se debe ir actualizando la legislación para incorporar normas necesarias, con el fin de prevenir hechos y conductas recurrentes para desviar o malversar los recursos públicos.

Urge una estrategia integral de coordinación auténtica entre las entidades y dependencias que permita implementar controles internos, disuadir y, en su caso, detectar si estos hechos siguen ocurriendo, cómo y en dónde.

Otro caso emblemático fue el de las revisiones a Tabasco, de 2007 a 2011, donde los recursos públicos de distintos programas se desviaron y fueron transferidos a cuentas concentradoras, para perderse entre centenas de supuestos pagos y transferencias estatales, todo menos a los programas a los que estaba destinado el dinero. Crearon un mecanismo para adicionar una norma y presupuestos de transferencia de gastos de seguridad pública, así podían enviarse dinero para su libre ejecución con justificantes que llamaban "canjes de vale", "órdenes de pago", generados por la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia o Administración y Finanzas del estado.

De esa manera salía el dinero, el tema es ¿a dónde? Lo que reveló la auditoría en ese entonces fue un esquema para movilizar el efectivo muy similar al de la Estafa Maestra, la clave estaba en el secretario de Finanzas y su vinculación con las empresas de valores que transportan los billetes. Ellos sabían a dónde lo llevaban y que una vez retirado del banco no se depositaba en ninguna cuenta ni se pagaba nada. Esto incluso permitió afectar recursos federales depositados en cuentas de ejercicios anteriores, que se apropiaron porque ya no eran auditables. Así desviaron millones de pesos destinados a educación, seguridad y salud, casi 8 000 millones de pesos retirados en efectivo.

Seguramente hubo otras decenas de transferencias con este mecanismo que iniciaba con contratos simulados que se generaban entre Pemex y varias instituciones educativas de Campeche y Tabasco con otros particulares, y que por más de 20 años desfalcaron al país; inadmisible, pero aún persiste. Encontrar el dinero requiere una indagación con la fuerza suficiente para derribar todas esas puertas que han estado cerradas durante sexenios; eso es, deja atrás el modelo que evade y justifica la inacción de las autoridades. El dinero público simplemente no puede desaparecer.

La corrupción modifica el pensamiento y otorga a los responsables una justificación para racionalizar sus actos, esto significa justificar su transgresión y reconstruir la realidad, de modo que replantean a su favor los actos deshonestos y alcanzan su "purificación". Esta es

una de las razones por las que cuando creemos haber llegado a límites inesperados de corrupción, los perpetradores continúan el mismo camino, modifican estrategias y cambian de camiseta, siempre convencidos de su objetivo.

Otro ejemplo de corrupción que permanece invisible es la adquisición histórica de los seguros en las diversas entidades, instituciones y gobiernos. Se llega al extremo de asegurar edificios públicos baldíos, inoperantes, vehículos inservibles o dados de baja. ¿Cuánto nos cuestan esos contratos de seguros? ¿Las condiciones y especificaciones técnicas son las idóneas y pertinentes en relación con las necesidades, justificación y el precio? ¿Qué ventajas y beneficios y en qué se diferencian? No se fiscaliza ni se revisa, menos aún con un enfoque transversal de desempeño y financiero. Tranzar se vuelve un arte. Qué sucedería si existiera una estrategia integral que proporcionara las mejores condiciones al Estado como poseedor de un enorme conjunto de inmuebles y otros activos, lo cual le permitiría negociar en las mejores condiciones. Este es todo un tema, más allá de los expedientes que muestren un proceso licitatorio "impecable".

En ese sentido, el *modus operandi* en contrataciones proclives a corrupción se ha ido diversificando con todo tipo de servicios o adquisiciones "volátiles" o "enterradas" justificadas, en rubros como instalaciones eléctricas-subterráneas, nodos y cableado de edificios, redes, internet y seguridad informática, servicios de investigación en dependencias de seguridad pública y procuración de justicia; también en relación con el sector salud, y centros de readaptación social o cárceles estatales, contratos en alimentos, perecederos, intangibles, uniformes, zapatos y, por supuesto, pagos disfrazados por servicios de comunicación social, spots, encuestas, elaboración de síntesis informativa, por lo cual cada dependencia paga millones de manera individual, al igual que el justificado monitoreo a medios y redes, estrategias de imagen, esquemas de *leasing*, consultorías en seguridad, revisión y elaboración de normativas, y mapas de riesgo. A eso se debe agregar el uso de documentos falsos. Es mucho dinero, mucha gente involucrada y mucha impunidad.

En 2017 un proveedor de gas que brindaba el servicio para hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) me reveló que para mantener ese contrato enviaba un buen sobre con el pago de soborno, mes con mes. "No me queda más, si no soy yo, será otro y pierdo el servicio". Todo es un cochinero.

Las pruebas de control de confianza, incluido el polígrafo, es otra área de riesgo. Cada dependencia o entidad contratante paga distintos costos por la adquisición y aplicación de estas baterías de pruebas, pero unos ni siquiera saben que son enviadas para su evaluación y resultados a los proveedores, lo que potencia un posible uso y manejo de información indebido, es decir, obtienen datos, nombres y resultados que por su naturaleza son sensibles y personales, por lo tanto, resulta inevitable cuestionarse ¿quiénes son los proveedores? ¿Con qué base legal se les envían datos de una naturaleza personalísima? ¿Cómo garantizan su manejo y tratamiento? ¿Por qué varía tanto el costo en relación con su fiabilidad?

¿Cuántas pruebas se aplican y cuántos aspirantes acaban contratados? ¿Sobre qué número de vacantes se aplican las pruebas? ¿Cuáles son las estadísticas y qué datos arrojan las mejores prácticas globales utilizadas para el ingreso de los mejores perfiles al servicio público, en áreas de seguridad nacional, en la Policía, la Oficina Federal de Investigación (FBI) o la Administración de Control de Drogas (DEA)?

La aplicación del polígrafo, que por cierto es poco confiable, se estableció en la ley y así aseguraron un gran negocio que se transmite "de generación en generación de titulares".

Así pues, implementar una metodología de control de confianza de última generación no resulta interesante. En otro rubro de corrupción, persiste lo que tiene que ver con el SAT; la devolución del impuesto sobre la renta (ISR) en municipios y dependencias, despachos constituidos con el mismo personal y exfuncionarios en un enorme y jugoso negocio. Imparable. Por ello, insisto en la necesidad de potenciar una serie de acciones distintas en las áreas de auditoría y revisiones, que es uno de los mayores retos ante el incremento de conductas deshonestas.

CompraNet, un elefante blanco

Mucho se habla de combatir la corrupción, pero en materia de auditoría y fiscalización no se avanza más allá de la retórica. Hasta ahora, el sistema electrónico de información pública gubernamental en materia de contrataciones, CompraNet, no se considera una herramienta de investigación útil o confiable porque contiene información parcial o incompleta y poco fiable en su calidad, de modo que carece de veracidad, no está actualizada y se convierte más bien en un dolor de cabeza, al no facilitar las búsquedas y los análisis relacionados con adquisiciones y adjudicaciones.

Esta situación es de antaño, incluso derivada de las distintas revisiones donde la ASF documentó un gran desvío de recursos debido a las contrataciones directas realizadas por la Sedesol y la SEDATU; desde 2014 la Dirección General de Auditoría Forense (DGAF) emitió en sus informes ciertas recomendaciones a los distintos secretarios de la Función Pública, en donde se manifestaba la obligación de registrar en CompraNet todas las adquisiciones y contrataciones que se hacían al amparo del artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), donde se establecía que no existe justificación para omitir o dejar de incorporar contratos de cualquier naturaleza, porque no van a creer que no los registraban.

Todos los encargados de la SFP, extrañamente, respondieron a la recomendación con la misma justificación, que en el acuerdo que establece las disposiciones que deben observarse para la utilización del CompraNet no se especificaba que tuvieran la obligación de integrar esa información: "Esta unidad de normatividad de contrataciones públicas carece de facultades para atender la recomendación", "en relación con que no se establecen los lineamientos para uso de CompraNet, así para la recepción, emisión y manejo de

tratamiento de la información, a través del mismo determine y justifique si los contratos que celebren las dependencias con las entidades deben estar publicados".

Concluyeron entonces que "no hay obligación de reportar o registrar en CompraNet los contratos de adquisiciones que se celebren entre dependencias en la administración federal o en las estatales, debido a que el artículo 1º dispone expresamente que quedan excluidos del ámbito de su aplicación los contratos que se celebren entre esas dependencias". Hágase su voluntad sobre la ley.

Esa patética y lamentable respuesta merece reflexionar sobre las complicidades en todos los niveles, independientemente del pobrísimo razonamiento y argumentación jurídica. Expresaron que "con la autonomía, derivada de la Constitución o de las asociaciones, no existe la obligación en términos del numeral 25 del acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deben observar para CompraNet". Esa permisividad contribuyó a que persistieran las conductas que propiciaron el desvío de millones de pesos. Sin reportar ni subir estas contrataciones al sistema, no se pueden conocer y obstaculizan la fiscalización. Se les olvidó priorizar los esfuerzos anticorrupción que tanto alardeaban.

Apegados a la legalidad, no bajamos la guardia al observar la reincidencia en las contrataciones que mostraban las graves irregularidades —en el mismo lugar y con la misma gente, como dice una canción—, por tanto se volvió a enfatizar la misma recomendación. En una ocasión le llamó a mi jefe —el contador Javier Pérez Saavedra— el entonces subsecretario de la Función Pública, Julián Olivas, ahora magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), para reclamarle con ínfulas de superioridad por qué me había atrevido a mandar ese oficio que tenían la obligación de responder, expresándoles su ilegal actuar en una interpretación armónica con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). No gustó mi respuesta. Igualmente, Virgilio Andrade y Arely Gómez hicieron caso omiso; misma recomendación, misma respuesta.

A mí no me concernía lo que dijeran, porque existe la obligación ética y legal de realizar la publicación, de ser transparentes, de investigar los hechos denunciados en su calidad de OIC del Ejecutivo. Entendía la resistencia, pues, como dice el dicho: "Eran guayabas del mismo árbol". Incluso habría que leer la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre CompraNet, en el sentido de que "las operaciones y actos jurídicos aludidos que se realicen con recursos públicos no se encuentran exentos de reportar y registrar de manera obligatoria, por lo que resulta imperiosa la necesidad de atender la recomendación que se realizó".

Obviamente no les interesaba hacerlo y no lo hicieron. Se sentían empoderados y no estaban equivocados. Fueron todos premiados y puedo decir, sin temor a equivocarme, que les ha ido mejor con el nuevo gobierno en relación con sus cargos y encomiendas. Veamos: el entonces subsecretario de la Función Pública, Eber Omar Betanzos Torres, quien antes cobró como subprocurador en la PGR con la misma Arely Gómez, no realizó las funciones y

actividades que por su nivel y cargo le correspondían en relación con las denuncias presentadas por la ASF, referentes a la Sedesol, la SEDATU y otras auditorías; al igual que su exjefa como titular de la PGR y la SFP; es decir, en su calidad de funcionarios públicos, no realizaron actos de investigación ni en la PGR ni en SFP, según está documentado con sus respuestas a la ASF.

Entonces, el premio obtenido para ella como contralora del Consejo de la Judicatura Federal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), imagínense nada más, y él, conforme a lo pactado, fue nombrado secretario técnico en la ASF. No existen las casualidades en la política. Así, mientras una exsecretaria era vinculada a proceso por ejercicio indebido de atribuciones, este par de servidores públicos eran premiados precisamente por las mismas conductas, con mayores prestaciones y sueldo, sin ninguna responsabilidad y felices de seguir cobrando.

Ambos fueron muy afortunados, si consideramos que pasaron de cargos de primer nivel en las áreas de la Función Pública y la PGR en el sexenio pasado, donde fueron cómplices y encubrieron hechos que fueron de su conocimiento, no actuaron en el ámbito de su competencia y no llevaron a cabo sus funciones, ahora, en lugar de ser procesados por el ejercicio indebido y otras faltas administrativas graves, pasaron a ocupar un puesto mucho mejor, con la placidez que da el sosiego de la protección y el manto de impunidad.

Déjenme decirles que este personaje infame y sometido, ya incrustado en la ASF, obtuvo ilegalmente información financiera y bancaria mía, la cual está protegida por las leyes respectivas; con total descaro presentó impresas decenas de estados de cuenta bancarios ante la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, solicitando el gran cobarde que dijeran que habían llegado mediante una denuncia anónima al Comité de Integridad de la ASF y que les serviría para continuar la investigación y persecución legal y política en mi contra, que se integraran a los expedientes fabricados que presentó la ASF, por órdenes del grupo en el poder que fue evidenciado por corrupción.

Esos actos delictivos fueron expresados y reconocidos en una reunión que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados a principios de 2020, presidida por el entonces diputado Mario Delgado; Sandino Luna, asesor en la Cámara; Mario Alberto Rodríguez Carrillo, diputado en su calidad de presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, y el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, ambos del partido Movimiento Ciudadano (MC), y ahí el titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la ASF, David Villanueva Lomelí, platicó “confidencialmente” que, al llegar esa información, le indicó a Eber Betanzos que no podía integrarla al no haberla requerido ellos, y el exsubprocurador de la PGR le respondió que entonces la escanearía y se la entregaría en cd con un oficio donde expresaría que había sido recibida por denuncia anónima en la ASF en el Comité de Integridad, según se consigna en evidencias y testimonios que forman parte de los expedientes fabricados en mi contra.

¡Háganme el favor! Pasaron por alto que a pesar de provenir de un gobierno marcado por la corrupción exagerada fueron cobijados en esta nueva administración, sin ser sometidos a los procedimientos de responsabilidades administrativas y penales que debieran haber iniciado, y en lugar de seguir la supuesta línea del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación con sus afirmaciones de combate a la corrupción, de nunca más permitir la fabricación de expedientes penales ni delitos, como los que me fueron fabricados con documentación apócrifa, en la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, por órdenes de David Colmenares, cuatro investigaciones administrativas, una de 2018, dos de 2019 y una más de 2020, que integraron con esa información financiera obtenida ilegalmente.

No quiero ni pensar en la serie de actos corruptos y negocios que pudieron efectuarse durante el paso de Betanzos en la SCJN al lado de Arely Gómez. En mi opinión, podría haber sido capaz de muchísimas cosas con tal de convertirse en magistrado anticorrupción, como le habían prometido. Imaginen la degradación y lo delicado para cualquier autoridad el hecho de que se use información financiera supuestamente anónima, dado que esta, como resultó en mi caso, generó una condición calumniosa, incluso delictiva por los supuestos integrantes del Comité de Integridad que asumieron haberla recibido. Da para abrir en la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FJR) una investigación en contra de quienes supuestamente la hicieron llegar, pues tiene el carácter de reservado, y es obvio que alguien tuvo que haberla extraído de un lugar oficial. Sé que fue el exprocurador fiscal en contubernio con esa pandilla, y eso es constitutivo de delito.

Se abren más y más líneas de investigación: ¿por qué la Procuraduría Fiscal o el SAT dieron esa información?, ¿a quién se la entregó? Esa persona receptora la entregó de forma anónima, oscura y burda para utilizarla en contra mía, lo cual es muy grave.

Esas finísimas personas, que escucharon la relatoría de un conjunto de hechos delictivos en curso, daban pena. El dato equivocado se combate con el acertado y debieron haber actuado conforme a derecho. En calidad de qué y por qué tenía impresa esa cantidad de estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito, en qué condiciones se recibieron, cuál fue la instrucción que le dio el auditor superior en ese lapso; una concatenación de hechos que hubieran permitido poner orden legal e iniciar los procesos consistentes con el señalamiento de hechos calumniosos en contra mía.

Se reservan el derecho a ser corruptos, se sienten orgullosos por sus circunstancias porque no les basta con su cinismo, sino que se suman a la intención de cometer actos criminales, en una clara expresión de violencia simbólica y de coacción. Qué condición tan miserable la de Betanzos Torres, que hasta buscó ser magistrado anticorrupción en esta administración morenista. Y toda esa bola de diputados escucharon y solaparon, porque cada uno tenía sus propios intereses y agenda política. Como David Villanueva, que aspira a ser gobernador de Puebla por ser yerno de Melquiades Morales —que, por cierto, podríamos revisar si hay fiscalización y auditorías a su hermano Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad

de Guadalajara—. O Carrillo, que negoció con los municipios los resultados de la fiscalización y buscó su candidatura a la presidencia municipal.

Mario Delgado seguramente negoció con Colmenares eliminar las observaciones irregulares documentadas en la auditoría DN18008 efectuada a la Cámara de Diputados,[2] derivado de la denuncia de Porfirio Muñoz Ledo, que abarcó las cuentas públicas 2015 a 2018, y que tocó cuatro meses de la gestión del nuevo gobierno, cuyo resultado número 34 determinó cerca de 40 millones de pesos desviados en el área de comunicación social conforme el Informe de Resultados de la Fiscalización, en el que los auditores determinaron pagos ficticios mediante cheques que cambiaban en efectivo y eran entregados a los mismos funcionarios, personas no localizadas, domicilios irregulares y otros. De esta observación no se presentaron ni las denuncias de hechos y se dieron de baja los pliegos de observaciones. Lo relevante para esa jauría era evitar confrontarse con la ASF; por lo tanto, fueron incapaces de ordenar una investigación por el conjunto de conductas desplegadas en mi contra. Es el pago que realizan jubilosos a cambio de perpetuarse en el puesto a cualquier precio. Con el silencio cómplice de los presentes acabó la reunión. Ver para creer.

Arely Gómez González sigue feliz y campante, con los intereses que le han acompañado gracias al hermano, pero la cadena de omisiones en su deber de cuidado merece sendos procedimientos, más aún respecto al lamentable papel de los titulares de los Órganos Internos de Control en la Sedesol y la SEDATU, que estaban bajo su encargo. Como procuradora general, tampoco tuvo a bien investigar las denuncias penales presentadas por desvíos de recursos.

La impudicia con la que indiscriminadamente saqueaban el erario no provocó en Arely mayor preocupación ni ocupación; las denuncias penales que se presentaron ante ella, DGJ/C1/2108/2015, DGJ/C1/2107/2015, DGJ/C1/2333/2015, DGJ/C1/2159/2015, DGJ/C1/2262/2015, DGJ/C1/2136/2015 —que son públicos—, como ejemplo, no caminaron, ni siquiera le interesaba disuadir actos delictivos, porque ella era aliada del grupo de poder.

Afortunada, a pesar de no ser partidaria de la transparencia ni de los controles para el manejo del recurso público, tal como muestra el oficio del 17 de abril de 2018, UCEGP/209/301/2018, firmado por el titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la SFP, Rafael Obregón, quien por instrucciones de ella manifestó a la ASF que como los contratos celebrados entre dependencias y entidades no están dentro del ámbito de aplicación de dos fracciones de dos artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y otros dos de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados, existe la imposibilidad jurídica de atender la recomendación de incorporar en CompraNet las contrataciones y adjudicaciones celebradas entre entes públicos; de emitir las disposiciones para el ejercicio, manejo y aplicación transparente del recurso en este rubro, e integrar la obligación de que estos contratos, convenios y sus respectivos anexos sean firmados de manera indelegable por el titular de cada ente

contratante, y cuenten con la autorización de la Función Pública.[3] Respuestas mediocres en su argumentación, pero a la altura de sus circunstancias.

Por supuesto, además de la secretaria Arely Gómez, estaban enterados la subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Ana Laura Arratia Pineda, que ahora ocupa el cargo de directora general en la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, y el mismo Eber Omar Betanzos Torres, quienes recibieron copia de ese oficio. Todos ellos sin asomo de preocupación. De haber actuado con la fuerza y autoridad que le otorgaban los dos cargos relevantes que ostentó en la administración peñista, al menos hubiera evitado que prosiguiera el saqueo y modus operandi denominado mediáticamente como la estafa maestra, sin contar con los montos millonarios de una serie de contratos simulados que fueron desviados del gasto corriente de la secretaría. Bajo su protección prosiguieron el saqueo y aumentaron los negocios, aprovechando el terremoto de septiembre de 2017.

Así las cosas, qué esperar de quienes han sido cómplices, encubridores de la corrupción y recordados como funcionarios grises, empecinados en obstaculizar la fiscalización y la rendición de cuentas desde instituciones como la Función Pública y la PGR. Todos los que encubrieron y prohijaron la corrupción de esos ayeres, hoy gozan de cabal salud, por lo que no sería de extrañar que continúen sirviendo a sus antiguos jefes y aliados. Actuar con ética, qué dilema.

En esa misma estructura del poder, todos quedaron bien colocados. Otro ejemplo es el caso de Javier Vargas Zempoaltecatl —bajo su encargo como director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial en la Secretaría de la Función Pública se extravió el expediente de la famosa Casa Blanca de Enrique Peña Nieto—, quien fue nombrado secretario de la Contraloría del gobierno del Estado de México de Alfredo Del Mazo. Miguel Ángel Vega García, quien era el titular del Órgano Interno de Control de la SEDATU y la Sedesol, no solo encubrió, sino que también bloqueó todas las auditorías y la fiscalización de la ASF. Tampoco dio seguimiento a las denuncias que presentaron los subsecretarios de la SEDATU cuando, con motivo de las revisiones, se enteraron de que había contratos con instituciones educativas, supuestamente firmados por ellos. Nada hizo para denunciarlo, ni a sus superiores ni ante las autoridades federales.

Recuerdo que una ocasión, durante una reunión de trabajo en la oficina del auditor, externé que si nos seguían poniendo obstáculos tendríamos que citar a la secretaria Rosario Robles, porque con la excusa del sismo de septiembre de 2017 en la SEDATU por ninguna vía recibían oficios. Ahí estaba el director jurídico de la ASF, Víctor Manuel Andrade, hermano de Virgilio Andrade, quien exoneró a Peña Nieto y a Videgaray antes de ir al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) como premio, en donde operó igual y hubo problemas. Entonces argumenté que habría que enviar la notificación a su superior, en este caso al presidente Peña Nieto, su jefe, para que fuera el conducto para que se presentara a rendir cuentas. Pegaron el grito.

Bastante incómodo por mis comentarios y tratando de evitar que se molestara a esos "señorones", como se refería a ellos, Andrade me pidió que le hiciera llegar los oficios; brincaba nervioso en la silla y dijo que él iba a notificarle al día siguiente: "Mándenme a mí el oficio y yo veo que lo reciban", aseguró. Cuando mandó a su personal, en las oficinas del jurídico de la SEDATU ni siquiera los recibieron y prácticamente les cerraron la puerta en la nariz. Incapaz y agachón. Pero no me informó nada, por lo que un par de días después le pregunté qué había pasado con las notificaciones porque nos urgía la información, y así me enteré.

Entonces se le ordenó notificar y pedir el apoyo del titular del Órgano Interno de Control de la SEDATU, Miguel Ángel Vega García, y qué creen: resulta que tampoco se los recibió, ni el oficio ni los anexos, y un segundo mando le respondió por instrucciones, según se lee en oficios y documentos: "Reitero el argumento de la imposibilidad jurídica y material para que se realicen las notificaciones solicitadas por usted. Me permito devolver el oficio y anexos que los acompañan, y hacer de su conocimiento el acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio".

Cómo nos carcajeamos de la superioridad moral que intentaba simular Andrade, cuando se sabía comparsa de la misma estructura. Imagínense la audacia y el nivel de los desplantes de quienes se sentían intocables y de forma equivocada pensaban que controlaban absolutamente todo. La realidad era otra, una excusa más fabricada como imposibilidad jurídica que el contralor avaló, a pesar de que la ley los coloca como auxiliares en el ejercicio de la fiscalización. Leyeron bien, el contralor responsable obligado a la legalidad, dependiente de Arely Gómez, les dio un palmo de narices, los encubrió y se puso del lado de ellos; agachón, el lastimero abogado nada hizo al respecto, su misión estaba cantada.

Después de todos estos actos ilegales fue premiado en la Contraloría del gobierno del estado de Veracruz, en el área de Rendición de Cuentas y Transparencia, y luego lo corrieron por supuestos actos de corrupción. ¿Pues qué esperaban?, ¿quién lo protegió y encubrió? Caen de pie y les va mejor. La corrupción paga bien. Detalles como estos hacen que no se pueda entender cuál es la ruta, la estrategia en la lucha contra los desvíos; cuál es el verdadero papel para pasar del discurso a los hechos, mientras los corruptos se reinventan para crear nuevos esquemas de fraude.

A propósito de Víctor Manuel Andrade, este personaje tiene casos por aclarar, según evidencia documental, y espero que la justicia lo alcance. Otro hecho poco conocido que deja ver su escaso tamaño moral es la responsabilidad por el abandono, falta de seguimiento y acción procesal a la que estaba obligado por sus funciones en las siguientes averiguaciones previas, determinadas como no ejercicio de la acción penal por la Fiscalía del estado de Veracruz, en junio de 2015:

NÚMERO DE AV. PREVIA EN PGR	NÚM DE AV. PREVIA EN EL ESTADO DE VERACRUZ	FECHA DE DETERMINACIÓN
PGR/UEDCSPCAJ/SPM-VI/370/2014	FESP/033/2015/III	01-06-2015
PGR/UEDCSPCAJ/SPM-VI/371/2014	FESP/034/2015/III	01-06-2015
PGR/UEDCSPCAJ/SPM-VI/372/2014	FESP/035/2015/III	01-06-2015
PGR/UEDCSPCAJ/SPM-VI/374/2014	FESP/036/2015/III	02-06-2015
PGR/UEDCSPCAJ/SPM-VI/375/2014	FESP/037/2015/III	02-06-2015
PGR/UEDCSPCAJ/SPM-VI/376/2014	FESP/038/2015/III	02-06-2015
PGR/UEDCSPCAJ/SPM-VI/377/2014	FESP/039/2015/III	03-06-2015
PGR/UEDCSPCAJ/SPM-VI/378/2014	FESP/040/2015/III	03-06-2015
PGR/UEDCSPCAJ/SPM-VI/379/2014	FESP/041/2015/III	03-06-2015
PGR/UEDCSPCAJ/SPM-VI/380/2014	FESP/042/2015/III	04-06-2015
PGR/UEDCSPCAJ/SPM-VI/383/2014	FESP/043/2015/III	04-06-2015
PGR/UEDCSPCAJ/SPM-VI/384/2014	FESP/044/2015/III	04-06-2015
PGR/UEDCSPCAJ/SPM-VI/385/2014	FESP/045/2015/III	05-06-2015

La Dirección General Jurídica, bajo su mando, presentó denuncias en contra de servidores públicos del estado de Veracruz por desvío de recursos y la simulación del reintegro a las cuentas destinadas para su manejo específico.

Las denuncias fueron radicadas inicialmente ante el Ministerio Público de la Federación, que se declaró incompetente por razón de ser materia estatal; claro, con toda intención, les pasó de noche. No se enteraron. Sin embargo, como es uno esclavo de lo que dice y dueño de lo que se calla, en los medios de comunicación Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz, comunicó que las indagatorias iniciadas contra servidores públicos de la entidad con motivo de las denuncias presentadas por la Auditoria Superior de la Federación se habían resuelto.

Se enteró por casualidad del asunto más importante para la ASF, dada la naturaleza de los desvíos millonarios y la intervención de finísimas personas que intentaron arreglar el tema. El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, responsable del seguimiento y atención a las denuncias penales, casualmente, estaba ajeno al tema como a todo lo demás, y no había llevado a cabo ninguna acción; le ordenaron entrevistarse con el fiscal del estado para conocer sobre el asunto, porque no tenía la menor idea de lo que había ocurrido (aunque nosotros sí, por supuesto).

Efectivamente, se habían recibido 13 denuncias procedentes del Ministerio Público de la Federación, cuyas indagatorias estaban resueltas; los documentos que motivaron el no ejercicio de la acción penal fueron minutas de trabajo entre el personal de la ASF con servidores públicos de Veracruz, y la constancia de solventación que les había otorgado el área auditora, con un escrito presentado por la Contraloría General de la entidad, en el que se señaló que no existía daño por haber sido liquidado.

Pero también resultó que algunas de las indagatorias se encontraban prescritas y que el Ministerio Público de la Federación había dictado los acuerdos de incompetencia por razón de la materia desde enero de 2015, léase bien, seis meses habían transcurrido en los que Víctor Andrade, en su calidad de titular de Asuntos Jurídicos de la ASF, abandonó los expedientes a su suerte, sin que se haya percatado de que ya no se encontraban físicamente en la PGR, ¿con qué finalidad? A los intereses que seguramente ha servido y muy bien le han redituado.

De haber hecho el seguimiento a las promociones presentadas por la ASF, se hubiera enterado de que esas indagatorias ya no estaban ahí. ¿Por qué le perdonaron algo tan deleznable? Quien tolera la corrupción también la organiza. Habrá que agradecer a Duarte sus declaraciones a la prensa, de no ser así, nada hubiese pasado, pues hay quienes son vendibles y comprables al mejor postor.

El envalentonamiento del corrupto depende del tamaño de protección que les brinda el círculo al que pertenecen. Por ejemplo, muchos de los que fueron víctimas pasivas y participaron en el *modus operandi* de la Estafa Maestra, sin saber que ese era el plan, no quieren hablar. Todos están bien parados en el gobierno, si digo lo que sé, son capaces de todo. El miedo los paraliza y con cierta razón. Los corruptos se encuentran laborando en muy buenos puestos en el gobierno actual, al mismo tiempo que muchos que confesaron lo que sabían se encuentran encarcelados o perseguidos; el mensaje es contradictorio, pero los hechos revelan complicidad al más alto nivel. ¿Quién diantres va a investigar, denunciar o revelar actos de corrupción? Nadie en su sano juicio, porque los incentivos operan en su contra.

Es complejo, si las personas supieran que están en un entorno de seguridad denunciarían y revelarían la otra parte de la historia que no es visible aún. Lo increíble es que, quienes hablan, son hostigados; en cambio ven el lugar que ocupan ahora muchos de los responsables de desvíos, en puestos de alto nivel en instituciones encargadas de investigar y sancionar; esta es una razón por la que optan por hacerse de la vista gorda. Por eso cuando das con alguno, no falta quien se eche a correr, literal.

Pasó en Radio y Televisión de Hidalgo: para hacer saber a los informantes que no debían hablar con nosotros los auditores, metieron a uno a la cárcel. Para entonces ya habíamos logrado algunos resultados importantes, y con las entrevistas conocimos una gran parte de la historia. Cómo ocurrieron los hechos es narrado por las personas que no forman parte de

la corrupción y que saben que pueden hacer lo correcto; el tema es cómo protegerlos de "la mano que mece la cuna", la que los despide, amenaza, amedrenta, encarcela o acaba con su presente y empaña su futuro.

Decir la verdad cuesta, y caro. Aun así, con todos los elementos aportados en las denuncias de hechos, los expedientes técnicos de auditoría y la calidad de las investigaciones que se realizaron, la evidencia y trazabilidad que da prueba del desvío del recurso, al día de hoy no sabemos que se haya ejercido acción penal alguna o que existan órdenes de aprehensión en contra de todos aquellos proveedores y empresas fachada, ni contra quienes articulaban las operaciones de estos cárteles de instituciones educativas y de comunicación. Cuando volví a buscar a muchos de los funcionarios, me dijeron que no querían hablar porque lo tenían prohibido y estaban amenazados con ir a la cárcel. Luego desaparecieron del mapa.

No se escuchó a algún gobernador de los estados donde involucraban a las instituciones en desvío de recursos mostrar un asomo de indignación o enojo. El silencio también habla. Así que la suma de indicios y resultados de las auditorías permite inferir que existió una voluntad rectora en un conjunto de autores, aunque no por sí mismos, que ejerció una presión motivadora sobre el o los ejecutores, con auxilio del poder superior de un aparato organizado a su disposición, lo cual pone de manifiesto que sin la intervención de la mano propia, surge el sujeto de atrás como factor impulsor y configurador de la voluntad y logra que ejecuten el hecho, de acuerdo con la teoría de Roxin.

Por ello es importante insistir en la patología de quienes deciden por voluntad propia dedicarse a realizar actos fraudulentos, que tienen como denominador común a personas susceptibles de manipulación con baja autoestima, altos niveles de frustración y deseos de sentir pertenencia a un grupo. Es muy frecuente la disfuncionalidad familiar y emocional, existen características inconscientes que los denotan, y no tiene que ver necesariamente con un nivel social bajo, muchas personas son ricas, pertenecen a élites sociales; otras son reclutadas, en muchas ocasiones a través de la necesidad o el miedo. Otros son delincuentes de cuello blanco metidos en la política o en instituciones financieras. Retan a la autoridad, sienten gratificación instantánea y perciben que nadie los va a pescar.

En este sentido, los corruptos cometen actos irregulares en el ejercicio de su responsabilidad, racionalizan su inmoralidad, asumiendo que la posición de confianza les permite desplegar conductas ilícitas. Racionalizar significa justificar. Cuando cometen una transgresión las personas tienden a reconstruir su pensamiento a su realidad convenientemente, buscan justificación a sus conductas para no plantear su propia desvergüenza.

Así han ocurrido muchos fraudes, y resulta que los círculos cercanos no se percatan, no estaban o no se enteraron cuando esto ocurría. En el entorno de la sociología criminal se asume que estos comportamientos ocurren porque se encuentra una oportunidad (falta de controles internos), la racionalización convertida en una serie de justificaciones que les

otorga permisividad, y la motivación que cada uno puede concebir, desde “me lo merezco, me lo merezco”, hasta la necesidad de querer salvar la vida de un ser querido y no contar con los recursos para lograrlo. Claro que detrás de todo esto está la impunidad, que se vuelve un escudo protector y los hace creerse intocables… y tal parece que sí lo son.

Una función de poder solapada otorga a los corruptos un nuevo rostro: el del dinero, un nivel social “respetable” y un estatus imaginario que les permite colarse en nuevos círculos, donde buscan y encuentran personajes de su misma calaña. Son los proyectos de saqueo los que los unen a robar con sus vidas privilegiadas, viajes y fotografías con la familia por el mundo, autos de lujo y relojes costosos.

Los funcionarios y políticos vinculados a actos de corrupción no exhiben una dificultad o rechazo a las normas sociales o a la ley, ni muestran remordimiento alguno por las acciones que han cometido. En cambio, sí hay un patrón consistente de mentiras y engaños, y una indiferencia hacia el dolor ajeno; solo les interesa la seguridad de ellos mismos y su círculo cercano. Observo su capacidad de integrarse cómodamente en ambientes sociales a los que no pertenecen con un desparpajo y disfrute absoluto, donde son recibidos y bien distinguidos, simplemente por el puesto que ostentan. Celebran sus resultados de abusos o tropelías y alardean de no ser atrapados.

Así empiezan muchas historias de quienes no pensaron en pasarse al lado oscuro, por ejemplo, un joven que tiene bajo su cargo el manejo de información sensible, que sin saber el uso inadecuado que se le puede dar por fuera, rápidamente es cooptado y le ofrecen el doble de lo que obtiene de salario —un incentivo perverso— a cambio de compartir esa información. Pareciera simple, pero esas bases de datos pueden incluir información sensible y financiera o contraseñas de empresas y bancos; con ello pueden llevarse a cabo falsificaciones, alteración de datos, robo de identidad, apropiación indebida de datos personales vinculados al teléfono, cuenta bancaria, beneficiarios, o creación de expedientes clonados, el problema es muy grave y deja ver lo que es capaz de hacer la corrupción para quebrar voluntades a cambio de dinero.

Se puede armar todo un rompecabezas con la vida de las personas, y se evidencia que en realidad no existe la protección de datos personales para los ciudadanos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sobrevive muerto, haciendo más pactos políticos que preocupado por llevar a cabo su trabajo de manera precisa, clara y sin ambages; ni siquiera lleva a cabo investigaciones exhaustivas en su materia para asegurar la integridad de los datos. Al frente están políticos recomendados que quieren cuidar su chamba más que otra cosa. En este sentido, el único espacio de esperanza a un futuro muy lejano son los niños que apenas inician su vida, para educarlos en un mundo formado en valores. Esos jóvenes son los que deben llegar a gobernar algún día; por el contrario, si a estas generaciones las forjamos según el tipo de políticos que hoy en su mayoría existen, el futuro luce triste.

Con la serie de actos corruptos y fraudulentos acumulados a lo largo de sexenios, la pregunta que ya tiene respuesta es: ¿qué estamos haciendo mal y cómo podemos mejorarlo? El efecto de la corrupción en las compras públicas ha paralizado los sectores de salud, obras y social, entre otros. Evitar que prosiga la pudrición gubernamental requiere la absoluta convicción para aplicar la ley y el derecho. Los servidores públicos ya no quieren tomar decisiones de compras ni por 10 mil pesos, ni firmar o comprometerse, aunado a la falta de incentivos.

La política de compras públicas ha propiciado contrataciones fuera de norma; el problema no debería ser mayor si la contratación pública se rigiera por los principios constitucionales y las leyes en la materia, pero la falta de ética encuentra los recovecos y pareciera entonces que a propósito intentan hacer parecer complejos y engorrosos los procesos que tutelan las compras públicas.

El día que veamos que los gobiernos y las empresas priorizan los esfuerzos anticorrupción y alcanzan la confianza de la sociedad —que seguramente no veremos en al menos 15 años— podríamos hablar de iniciar un cambio. El Sistema Nacional Anticorrupción es un mito que nos cuesta millones de pesos anuales. Recuerdo la opereta montada en mayo de 2017 para nombrar al secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con base, supuestamente, en las presentaciones y entrevistas en las que los miembros del Comité de Participación Ciudadana procedieron a "valorar los perfiles e idoneidad de los candidatos", con el fin de identificar de 11 preseleccionados a los tres que, a su juicio y de manera unánime, serían los mejores para enfrentar los retos del SNA.[4]

Para los ilusos que aún creen que ese tipo de concursos públicos para nombrar cargos son de verdad, conviene decir que es una actuación formidable la que tuvieron a bien ofrecernos los integrantes del SNA. Me permitió estudiar, analizar y constatar el grado de desfachatez que requiere una actuación característica tan singular como esa, pues resulta que sabían de antemano quién sería elegido días antes del supuesto evento donde los aspirantes en la terna presentarían sus proyectos de trabajo en un ejercicio público para, después de escucharlos, deliberar para elegir al idóneo. Vaya caradura.

Se impuso que Max Kaiser no quedaba, por un capricho de "me cae gordo y no lo soporto", y el apoyo iba directo a Ricardo Salgado Perillat, a quien se le había comunicado dos días antes. El único que se atrevió a levantar la voz detrás de bambalinas defendiendo a su candidato fue el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que argumentó que era ilegal, pero le echaron montón para asegurar el pacto de días antes. Al INAI le dijeron que su candidato no iba, que no era voto colegiado, y la señora Jacqueline Peschard, callada, ya tenía la línea que le habían dado a cambio de una oficina cómoda.

Así dominaron. Arely Gómez permitió el atropello al aceptar la imposición; no les preocupaba la ética ni el mejor perfil, sino quedar bien unos con otros. Sacrificaron a la que consideraba la mejor opción; ahora veamos qué ha hecho o en qué quedó el SNA, ¿cómo se

integró y quiénes laboran en la secretaría técnica? ¿Quiénes los eligieron? ¿Por qué no hicieron públicas las vacantes de esa gran estructura ineficiente? Ojalá un día cuenten la verdad quienes fueron testigos mudos de estos vergonzosos hechos, aunque sea como anécdota. Qué tiempos aquellos cuando no sabíamos lo felices que éramos. Contar con los conocimientos y aptitudes necesarios no sirve para nada en un país que funciona a base de pactos y acuerdos partidistas y políticos.

El arte del pillaje

Una evidencia relevante en los actos de pillaje puede encontrarse en la auditoría forense 1697-GB de la Cuenta Pública 2017 (que es pública), realizada por la pandilla que se apropió de la ASF, cuyo objetivo fue fiscalizar las autorizaciones de Servicios de Comunicación Social y Publicidad de la Administración Pública Federal al Amparo del Artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación, realizadas por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), correspondientes a diversos incrementos presupuestales solicitados por varias dependencias y entidades, así como para verificar la correcta aplicación de la normatividad, bajo un criterio de selección indubitable.[5]

Lo interesante es que, con una muestra de 5 419 millones de pesos, se omitió fiscalizar lo fundamental: el ejercicio total de los recursos, dada su naturaleza de alto riesgo y que fueron erogados en 31 dependencias y entidades con una serie inacabable de irregularidades. A pesar de ello, omitieron auditar el monto total por 7 298 millones de pesos; tampoco aplicaron los procedimientos forenses idóneos y pertinentes, a pesar del conjunto de indicios y "banderas rojas" conocidas: dependencias con un sinnúmero de denuncias penales y pliegos de observaciones como la SEDATU, que ejerció en este rubro 300 millones de pesos, Sedesol con 600 millones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con 275 millones.

Imaginen el conjunto de indicios que permitían desprender probables actos deshonestos y desvíos a partir de los resultados irregulares que precedían los resultados de la ASF y que eran un escándalo público. Optaron por blindar a la SEGOB y a todas estas. No se entendería de otra manera, ya que resulta inaceptable y absurdo, por decir lo menos, que las dependencias señaladas, observadas y denunciadas recurrentemente por actos de corrupción durante al menos siete años no fueran revisadas exhaustivamente; la supuesta auditoría forense se circunscribió a revisar las autorizaciones otorgadas por la SEGOB, en una injustificable muestra de encubrimiento y simulación por parte de la ASF.

De ahí la pertinencia de preguntar ¿cuál fue la justificación para que la SEGOB autorizara entre noviembre y diciembre de 2017 —como práctica proclive a corrupción de muchos años— soltar millones de pesos en recursos para subsidios y apoyos a fondo perdido? Casualmente, el año previo a las elecciones federales autorizó el gasto —por no decir dispendio— de esos 7 298 millones de pesos para comunicación social, a pesar de los graves problemas sociales o las necesidades imperiosas que se han vivido en el país, entre otros

temas relevantes. ¿Cuáles fueron las razones para que la ASF se abstuviera de realizar una revisión exhaustiva del ejercicio de los recursos, más aún cuando le preceden antecedentes y signos de corrupción alarmantes que acompañaron la historia de esas dependencias en el último sexenio, y quién supervisó y verificó los procedimientos y resultados de la auditoría?[6]

Hoy en día, a la luz de los acontecimientos, se entiende como un despropósito encaminado a la protección y el encubrimiento, dado que las verdaderas irregularidades no fueron reveladas, sin dejar de lado que entre los ejecutores del gasto aparece la autoridad federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde hasta el 14 de marzo de 2018, justo antes de ser nombrado, cobró David Colmenares.

En un breve análisis de los resultados de esa auditoría se permite apreciar que, como resultado de la fiscalización, se emitieron tres pliegos de observaciones a la SEGOB: el primero, de un monto de 2 764 083 717 pesos, por autorizar a nueve dependencias y entidades de la administración pública federal sus estrategias y programas anuales de comunicación social y de promoción y publicidad. Los escasos procedimientos aplicados durante la fiscalización que dieron lugar a la observación a la SEGOB no permiten sustentar el supuesto daño patrimonial, toda vez que del informe se desprende que los recursos fueron ejercidos por las nueve dependencias, en las cuales no se revisó el origen y la aplicación de ellos, y mucho menos los procesos de adjudicación y los supuestos entregables contratados en los entes ejecutores.

El segundo pliego de observaciones, con un monto de 13 056 800 pesos, se determinó por efectuar el pago de campañas en materia de comunicación social del ejercicio fiscal 2016, con recursos presupuestales fiscales del ejercicio 2017. Y el tercer pliego, de 48 900 millones de pesos, por el mismo concepto deslucido: pago de gastos de producción de las campañas en materia de Comunicación Social de la SEGOB, que no se difundieron a la población en el ejercicio 2017.

Esas dos observaciones no resultan procedentes en relación con los hechos que se imputan y la norma que invocan.[7] De risa, y casi puedo asegurar que los pliegos determinados ya se encuentran solventados. El tema es que la opacidad que prevalece en la ASF es cómplice y eslabón de más corrupción.

En la lectura de la normativa infringida se observa que no consideraron lo establecido en el artículo 119, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: “Que las obligaciones de pago que no puedan ser cubiertas por el ramo general correspondiente a adeudos de ejercicios fiscales anteriores, se cubrirán por los ramos con cargo a su presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso; para tales efectos, dicha responsabilidad no se condicionará a ampliaciones presupuestarias ni a la previa autorización de la secretaría”. Es decir que el sustento normativo de los pliegos es erróneo y sesgado, ya que la normativa sí permite a las dependencias de la administración

pública federal cubrir pagos con recursos presupuestales del año fiscal en curso por adeudos generados en el ejercicio inmediato anterior, como en este caso. Más allá de esta cadena de omisiones y disparates en ninguna parte del informe se lee el análisis y razonamiento que los llevó a determinar "que no se difundieron a la población en el ejercicio 2017".

La estafa caminera

Para comprobar que el escepticismo profesional nunca sobra, plantearé un caso práctico de "lo que pudo haber sido y no fue", me referiré a cómo debió realizarse una auditoría forense al ejercicio de una de las tantas dependencias que la ASF no revisó. Tenemos entonces la misma auditoría 1697, de la cual se desprende que la SCT gastó, por no decir malversó, para la difusión de la campaña "Infraestructura en Comunicaciones y Transportes apoya en la reconstrucción de los estados afectados por los fenómenos naturales" la cantidad de 275 millones de pesos, que intencionalmente no se fiscalizó en un grave acto de omisión.

De haber efectuado un análisis somero de la información solicitada a la SCT mediante el oficio AECF-1219/2018, del 25 de septiembre de 2018, tanto la directora general de auditoría forense como el auditor especial de cumplimiento financiero y el batallón de 13 auditores responsable de la revisión, al cúmulo de información relacionada con esta auditoría en cuenta pública 2017, se hubieran percatado de la gravedad de las irregularidades. Esta omisión en su deber de cuidado es inexcusable cuando aparecen recursos millonarios otorgados a dependencias como la SEDATU, Sedesol, Conagua o SAGARPA, mismas que fueron señaladas recurrentemente de simular el ejercicio de los recursos para luego desviarlos.

Los procedimientos forenses exhaustivos habrían llevado a documentar el conjunto de conductas y actos desplegados en las contrataciones, desde su etiología, es decir, indagar quién decidió y ordenó el ejercicio de ese recurso millonario en materia de comunicación social; de la primera lectura de la justificación para las adjudicaciones y contrataciones directas se denota o infiere que estaba fabulada o fabricada la supuesta estrategia de difusión que se lleva a cabo en un plazo de 30 días, del 23 de noviembre al 22 de diciembre de 2017, por ejemplo, o el análisis del ejercicio del recurso y los entregables.

El deber y cuidado profesional que debió prevalecer en esta fiscalización permite inferir que la Dirección General de Auditoría Forense (DGAF) y sus superiores fueron ausentes, omisos, y por lo tanto se presumen responsables, ya que intencionalmente se abstuvieron de revisar, verificar y analizar la información recabada y la entregada por los entes fiscalizados. No hicieron compulsas ni visitas a proveedores o la revisión de cuentas bancarias. Tampoco corroboraron, revisaron o validaron los entregables, ni conocieron la trazabilidad y el destino final de los recursos o aplicaron los procedimientos necesarios para un análisis de los costos, el impacto social y sus consecuencias en relación con la justificación presentada para llevar a cabo la contratación.

Detalles a simple vista: ¿quién ordenó aplicar esos recursos millonarios en fin de año, la fundamentación y motivación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ponderarlos por encima de otras necesidades y requerimientos presupuestales urgentes de otras dependencias, como Salud, y qué impacto tendría ese multimillonario ejercicio cuando la población se encuentra de fiesta y vacaciones? Sobre todo con otras tantas prioridades para atender programas sustantivos: exigirles la rendición de cuentas en razón de su encargo.

Por ejemplo, al leer entre los documentos y datos analizados en la justificación que permitió a la SCT soportar la cuantiosa erogación de 275 millones de pesos para la difusión de la campaña "Infraestructura en Comunicaciones y Transportes apoya en la reconstrucción de los estados afectados por los fenómenos naturales", encontré que esta fue "instruida por el Ejecutivo federal a las diferentes dependencias de gobierno, en virtud de haberse observado una contracción en la economía de México, conforme a cifras publicadas por el INEGI [Instituto Nacional de Estadística y Geografía], y se hace necesario coadyuvar en la recuperación económica. Por lo tanto, las acciones que se llevarán a cabo en la ejecución de la campaña objeto de la presente justificación, no es exclusiva de la SCT, es para todas las secretarías de Estado, donde se sumaron esfuerzos institucionales que permitan alcanzar los objetivos planeados por el presidente de la República (a manera de ejemplo se adjunta comunicado de Sectur)".

Eso resulta inaceptable, inaudito y predecible si observamos la forma sistemática durante el sexenio anterior en los funcionarios y los responsables de la SFP del Ejecutivo que se involucraron en actos poco éticos, sin aceptar el conjunto de acciones corruptas que se sucedían una a una ante su aprobación y encubrimiento.

Así que, a partir del ejercicio del recurso, y atendiendo a la justificación planteada, me surgieron varias preguntas. Por ejemplo: ¿la estrategia y el dispendio en comunicación social evitaron la contracción en la economía conforme a las cifras publicadas por el INEGI? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué dijo Hacienda? Y ¿cómo se recuperó la economía? ¿Quién decidió esa estrategia? ¿A dónde se fue el dinero de todas las secretarías en este esfuerzo institucional? O ¿quién es el dueño de esta otra estafa? Una tendencia y *modus operandi* que temerariamente desarrollaron —sin ningún escrúpulo desde Gobernación, en contubernio con la SHCP, durante 2017 y 2018, encubiertos por el manto de la corrupción de la ASF, bajo la égida de Colmenares.

¿Cuál es la razón para ejercer recursos millonarios en el último mes del año, con una clara falta de planeación y presupuestación? Esto es, digamos, el guardadito de siempre. Las mismas mañas y los mismos changos. De este modo, se entiende el desprecio por parte de una gran parte de la ciudadanía, ganado palmo a palmo y peso a peso robado.

La ASF también omitió analizar el supuesto en que basaron la adjudicación directa, el artículo 41 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos del Sector Público y el 72

fracción I de su reglamento, en relación con el objetivo de las campañas de comunicación y difusión. Así, pudo haberse dado a conocer la Estafa Caminera, a partir de la revisión de los llamados testigos de las inserciones que no se inspeccionaron y que no corresponden con la justificación ni con el gasto de la campaña.

También descubrir que el oficio de la Unidad Jurídica en el cual autoriza la estructura legal de 10 contratos de prestación de servicios, de fecha 15 de diciembre de 2017, es extemporáneo en relación con la vigencia de los contratos, del 23 de noviembre al 15 de diciembre de 2017. Hablamos de 7 298 millones de pesos destinados por la SEGOB, a finales de noviembre de 2017, para ejercerlos en rubros de comunicación social, y no hay que olvidar que los favores políticos se pagan y se cobran, pero no solo a costa del dinero sino de la vida de muchos mexicanos. El espíritu de la corrupción esfumó esa millonada en la cara de todos y llenó la bolsa de pocos.

Para que sigamos contando lo bueno, como rezaba el eslogan de esas infaustas campañas, se puede analizar la información que presentó la SCT (las facturas y el informe público de la auditoría) relativa al contrato y a las supuestas inserciones pagadas en *El Universal*, Compañía Periodística Nacional, S. A. de C. V., por 14 999 999 pesos con 85 centavos, donde aparecen oficios de la SCT como petición de cotización sin encabezados ni logos. Los documentos que soportan esta contratación presentan inconsistencias, los entregables se soportan con publicidad de la misma imagen insertada en *El Gráfico de Querétaro* y *El Gráfico de Toluca*. Puede observarse la misma publicación entre el 27 de noviembre y el 22 de diciembre de 2017, que extrañamente repiten dos y tres veces en un día, y en los mismos medios aparecen también inserciones de la SEDATU, Sedesol, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Educación Pública (SEP), SEGOB y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para de una vez erogar el gasto de todas las dependencias en el mismo periodo y publicaciones.

Son dignas de indagar, pues tampoco faltan las imágenes sin sentido en fechas distintas de los periódicos, algunas de ellas al lado de fotos de desnudos o nota roja, y de forma notoria pareciera que fueron montados para justificar el gasto conforme se desprende de los testigos que soportan el pago. Los expertos saben que una cosa es la información, otra los negocios, los favores, los círculos virtuosos y la comunicación, que es distinta.

Ha degenerado tanto el tema que llegó a la putrefacción, y no sé de cierto si la política fue la causa o la consecuencia, aunque sonrío pensando en su nivel de estupidez, pues a pesar de los millones desperdiciados, los medios no prestigian a las instituciones. En este sentido, me queda claro que los hombres y las mujeres del poder son quienes pueden envilecerlas o fortalecerlas. Qué pena por la ASF, pero más por el país. Estos documentos y muchos otros datos que plasmo pueden consultarse en el sitio www.lacasasucia.com.mx.

Otro ejemplo de la misma SCT es el pago a una empresa denominada Rilk Management, cuyo expediente contiene muestras de fotografías de bolsas de plástico de la calidad más

ínfima, casi del grosor de un papel de china, con la nota alusiva: "La infraestructura carretera se encuentra en pleno funcionamiento". Las supuestas notas de remisión tienen nombres de personas que se desconoce a quiénes representan, además: ¿dónde, cómo y por qué se entregan? En su mayoría son casi ilegibles, supuestamente distribuidas en cada una de las 32 entidades federativas, y 22 fotografías con el mismo contenido (notas de remisión y fotos) de paquetes de bolsas ubicadas en diferentes locales comerciales. ¿Cuáles, dónde, para qué? La información obtenida y los documentos soporte indican que supuestamente se distribuyeron tres millones 963 600 de esas bolsas, para un total de 8 808 kilogramos y un importe de tres millones 500 000 pesos.

Cada kilo de esa bolsa plástica tuvo un costo de 397 pesos con 36 centavos, además de que con la conversión se determina que cada kilo contiene 450 bolsas, lo cual también es excesivo en relación con la bolsa plástica entregada que tuve en las manos. Por ociosa indagué la cantidad de bolsas en un kilogramo de esta calidad y son 109, es decir que el costo unitario por kilogramo es de 26 pesos.

No obstante, se reitera que conforme al resumen del proveedor cada kilogramo de bolsa con 450 piezas tuvo un exagerado costo unitario de 397 pesos por kilo, y esto inevitablemente me recordó la auditoría 269 efectuada a la Sedesol para la Cruzada contra el Hambre, donde apareció el mismo *modus operandi*, sobrecostos, facturas infladas y, por supuesto, los servicios simulados: la distribución de nada. Se descubrió la adquisición y el supuesto reparto de seis millones de artículos en más de 300 municipios, que fue tan eficiente que se hizo en tres días.

Puede observarse también que el escrito dirigido a esta empresa por la directora de Relaciones Institucionales de la SCT, en el que solicita la cotización de los servicios, fechado el 7 de noviembre de 2017, carece de los requisitos formales elementales, así como de la descripción y detalle de los servicios solicitados. La firma es ilegible y no podría comprenderse cómo una empresa presenta una propuesta de servicios sin contar con la información, descripción y características de lo que le requieren: el costo unitario, tiempo y plazo de entrega, nada. Pero eso sí, tiene el costo de la supuesta campaña por tres millones y medio de pesos. En la investigación de mercado aparecen otras empresas, con un costo unitario de 44 080 pesos, sin referencia alguna de lo que están ofertando.

Al igual que en contratos diversos y no relacionados a este tema, con el oficio de su Unidad Jurídica, por ejemplo, donde autoriza la estructura legal de 10 contratos de prestación de servicios con fecha del 15 de diciembre de 2017, que es extemporáneo en relación con la vigencia de los contratos que iban del 23 de noviembre al 15 de diciembre de 2017. Y las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) demuestran que la SCT además pagó el monto total por tres millones y medio de pesos al proveedor, según la factura número 137 del 13 de diciembre de 2017, antes de la conclusión de los servicios.

La auditoría forense implica un enfoque científico, con el fin de comprobar mediante la aplicación de procedimientos exhaustivos la hipótesis de trabajo y consolidar la teoría aportando datos, pruebas, evidencia o indicios con un razonamiento lógico jurídico que la demuestre, o bien refutarla si los datos obtenidos no se adecuan a la hipótesis. Esta es la investigación que se requiere en los actos que puedan implicar corrupción o fraude. No una revisión parcial, sesgada o a modo.

Déjenme plantear un dato lastimoso: con este dinero desviado —de esta sola dependencia— se hubieran podido construir 2 291 casas con un costo de 120 000 pesos cada una para los damnificados del sismo que perdieron su vivienda, y que hasta la fecha siguen sin casa, o haberles dado a quienes requerían reparaciones el monto de 15 000 pesos por vivienda, y hubiera servido para reparar 18 333 casas, todo con ese dinero que decidieron destinar a gastos de comunicación social en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Ahora imagínense el total de más de 7 000 millones de pesos asignados a estas desvergüenzas políticas, ¡qué no hubieran podido hacer con tantos damnificados, enfermos, hospitales, albergues!, en fin… Aprovecho para recordarles, según información pública, testimonios recogidos de la carpeta de investigación, la UIF y la propia Robles, el departamento ubicado en Tenysson 223, en Polanco, fue una de las propiedades donde vivía y despachaba la exsecretaria Robles, y que la propiedad estaba a nombre del exsecretario de la SCT, bajo cuya administración presuntamente desviaron estos recursos. Yo de mal pensada me preguntaría por qué vivía ella ahí, y también en Reforma 222; a lo mejor con un poco más de tiempo verificaría la fecha de adquisición de la propiedad, y la fecha del dispendio de estos recursos de comunicación social. Reza el refrán que los secretos y las mentiras tienen las patas cortas. Todo eso le pasó de noche a la ASF.

Otro dato nos aporta indicios de presunto encubrimiento y omisión de la ASF. Resulta que por hechos presuntamente constitutivos de delitos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Gerardo Ruiz Esparza ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FJR, en donde aparecen algunas de las mismas empresas que no fueron sujetas a fiscalización, lo que dio lugar a que fuera iniciada la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-CDMX/0000002/2020.[18]

Al igual que los ciudadanos, quienes investigamos estamos inermes para defendernos de la corrupción, entendida como un conjunto organizado de individuos en el poder, que mediante actos ilegales se benefician a sí mismos o al grupo al que pertenecen, es decir, se apropian o desvían recursos públicos y activos; otorgan permisos, contratos y concesiones irregulares; cometen actos de naturaleza delictiva, negocian la justicia, de ahí que la credibilidad en las instituciones sea casi inexistente.

La mezquindad y la confianza de esos grupos de poder es ilimitada, debido a que las sanciones por corrupción nunca alcanzan a los perpetradores y mucho menos se recuperan

los fondos robados, razón por la que las mejores prácticas globales establecen que la prevención y disuasión se convierten en los medios de acción más viables, situación que en la vida práctica no se aplica.

Se cuidan, encubren y reparten el botín en actos pactados que les permiten generar lazos indestructibles, y al mismo tiempo que les dotan de un empoderamiento tal que se permiten actuar con total libertad y llegan incluso a desplantes tales como amedrentar o intimidar a quienes nos dedicamos a la investigación o a quienes tuvieron el valor y se atrevieron a denunciar. La corrupción y la falta de apego a la legalidad se ha vuelto abierta y descarada.

En mi caso particular, sin el mínimo asomo de vergüenza, me injuriaron e hicieron imputaciones que no pudieron probar y comenzaron en mi contra una serie de afirmaciones, acusaciones infundadas en medios periodísticos, espectaculares pagados, bots y creación de falsos perfiles en redes sociales, lo que me llevó a presentar una demanda por daño moral en el Poder Judicial de la Ciudad de México, aun cuando es sabida la corrupción galopante que impera en esa institución desde hace más de 30 años, por lo que es imposible que se gane una demanda por daño moral en el ámbito político, como aconteció en mi caso, y se sabe que es difícil pelear contra el poder, cuando es parte del mismo corazón de la corrupción. Eran jueces y magistrados nombrados y sometidos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el presidente allanado, y a pesar de que intentaron defenestrarme sin ninguna evidencia, no esperaban mi reacción; vale la pena invertir tiempo y fuerza para mostrar la verdadera cara de los delincuentes políticos que van por la vida con una careta de cuasi decencia.

No importó color ni partido, el travestismo político aliado para el mismo fin pasó por alto la serie de actos emprendidos en contra mía y del equipo que tuvimos a cargo las auditorías en la SEDATU, SAGARPA y Sedesol, porque se trataba de intimidarnos y difamarnos. Los mismos desacreditados moral y políticamente, Deambulando por todas las instituciones o incrustados *ad infinitum* en una curul, convirtiéndose a conveniencia en "aliados" entre sí, para tributar pleitesía al jefe de la banda en turno. Se trataba de adular a la figura de poder brindándole, como en tiempos ancestrales, sacrificios, monedas y obediencia en agradecimiento y para honrar su enlodada palabra.

En una especie de ostentación, el entonces director general de Recursos Humanos Sergio Iván Reyna de la Madrid, uno de los funcionarios que se asociaron para fabricar y falsificar documentos públicos en mi expediente laboral, donde se determinó, con fecha 8 de junio de 2018, mi baja por supuesto abandono de empleo, instruyó por la red telefónica de la ASF a los directores que había que "difamarme y desprestigiarme", según testimonios de los colaboradores que se sustentan como indiciaria a partir de los hechos que se precipitaron. Y seguían todos en la campaña en mi contra.

De tal forma que en octubre de 2018 surgió *Contra Réplica*, que recién estrenado me dedicó una primera plana con información sobre mi persona, carente de sustento y veracidad: "Se autocontrata por 40 mdp exjefa de ASF", donde afirmaban que yo había sido cesada por conflicto de intereses y por realizar auditorías a diversas entidades de gobierno. Yo creo que Colmenares Páramo utilizó información absolutamente falsa con una cadena de infundios con toda la intención de causar daño en mi prestigio profesional, pues desde junio la pandilla recién nombrada en la ASF había iniciado una campaña en mi contra.

Para mi sorpresa vi entre las plumas que ahí escriben a Heladio Ramírez Pineda, hijo del exgobernador de Oaxaca, que trabaja desde 2018 como director jurídico en la ASF, a cargo de las denuncias penales, cuyo hermano Luis Antonio Ramírez Pineda fue titular del ISSSTE y luego con los saqueos y denuncias de esa entidad fue premiado como director general de Bancomext y Nafin, que por cierto trabajó con Rogelio Margarito Colmenares Páramo, hermano del auditor superior.[9]

Así la especialización y meritocracia en la administración pública. Recordemos que antes lo había insertado en Segalmex con un buen sueldo, y con el consiguiente escándalo de corrupción lo protegieron y salió. Habría que revisar qué tantas auditorías se llevaron a cabo al ISSSTE, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y a la Fiscalía General durante estos años.[10]

Pero sorprendentemente para mí, que estaba entonces elaborando mi petición de réplica en este medio, pensando que era ético, también apareció como socio del mentado pasquín el flamante Héctor Serrano Cortés, diputado y colaborador de Miguel Ángel Mancera en el gobierno de la Ciudad de México. Pero aparte de infames, burdos y deplorables al prestarse a publicar hechos falsos sin haber verificado la fuente, menos conmigo, como lo establece el código periodístico, la foto del personaje supuestamente diputado que presentaron en las ocho columnas de su primera plana, firmada por un tal Luciano Franco y con la plana en el interior, no correspondía a la persona, se equivocaron de foto, caray.

Esto independientemente de que hayan publicado información financiera obtenida de modo ilegal, lo cual es un delito, pero bueno, quién diantres les iba a decir algo, si estaban gozosos aquellos a quienes evidenciamos de que prevaleciera el descrédito, al costo que fuera. Las infamias prosiguieron y, por supuesto, hasta hoy sigo esperando mi derecho de réplica requerido por escrito el mismo día de la publicación. Seguramente debo esperar, el sueño de los corruptos.

Lo mismo ocurrió el 27 de septiembre de ese mismo año, con la publicación de la misma nota y foto en un espectacular, léase bien, un espectacular pagado, con mi imagen, en calles de esta Ciudad de México con la leyenda: "¿Quién audita a la auditora?". Es inverosímil y constituye un acto delictivo. Lo hizo el medio electrónico llamado Revolución Tres Punto Cero y a pesar de haber entregado la solicitud de réplica, jamás se atendió, no respondieron llamadas ni correos electrónicos para informar quién había contratado y cómo había pagado

los espectaculares.[11] No entiendo con qué cara hablan de moralidad. Y lo más lamentable es que en este país simplemente no pasa nada.

Me quedé reflexionando quién abre un nuevo periódico cuando se están cerrando tantos medios de prensa, pues ya no es el negocio que solía ser, y entonces qué hay atrás. Bueno, en el conjunto de mapas y documentos que soportan lo que afirmo en este libro, podremos encontrar respuestas más allá de lo que nos imaginamos.

Estas campañas de difamación pagadas llegaron junto con decenas de bots en Twitter y redes sociales. También fabricaron videos simulando que eran de *Milenio*, *Reforma* o *Aristegui Noticias*. Una campaña de intimidación donde participaron seudoperiodistas que intentaron callarme y amedrentarme con amenazas y falsificación de documentos, y atrás está "la mano de quien le mece la cuna", es decir, la de Colmenares. Por eso tantos se sintieron envalentonados para generar una campaña burda, vergonzosa y notoria; pagada, claro está, con dinero público. El tiempo ha puesto a cada quien en su lugar, aunque permitir y propiciar el uso faccioso de una institución como la ASF por parte de Colmenares y los partidos políticos que lo apoyaron, no lo hubiera pensado ni en sus peores tiempos, menos con niveles tan bajos, pues el país requiere una entidad técnicamente solvente y con independencia política.

Todo lo anterior viene a colación para entender la podredumbre de algunos de esos nacientes "medios", cómo sobreviven y por qué.

Como en los viejos tiempos de dinosaurios jurásicos, aprovechan y pagan para mandar mensajes a través de "columnistas". Así se acostumbraron a manejar el recurso en esas áreas, y de eso han vivido decenas de seudoperiodistas, en un entramado de redes de interés y protección política sobre la que volveremos más adelante.

La indisposición a reconocer su responsabilidad colectiva por parte de todos los actores políticos permite ver que estas acciones delictivas seguirán ocurriendo en el ámbito gubernamental con un grave efecto corruptor. Parafraseando a Michel Foucault, me queda claro que el poder no está instalado en un espacio en particular, sino que es el conjunto de relaciones de quienes tienen tantos intereses, y no están dispuestos a ceder sus privilegios.

La historia de represalias que sufrimos en la dirección por parte de esos mezquinos es infinita, fuimos perseguidos, estigmatizados, reprimidos, violentados sin que ninguna autoridad interviniera para evitar la destrucción del laboratorio forense, de papeles y expedientes de auditoría. Pero como nada es para siempre, hoy prevalece el descrédito de todos esos acomodaticios.

Y lo demuestro con otro caso emblemático de la ineficiente fiscalización que expone la inoperancia, ineficiencia y desconocimiento de la ASF. Además de los cuatro años de fiscalización perdidos, se deriva un análisis al informe de la auditoría forense 266 DS,

realizado a la Secretaría de Cultura en la Cuenta Pública 2019, donde se señalaron 27 pliegos de observaciones por 1 707 millones de pesos.[12]

Analicemos tan solo la observación más significativa que representa 43% del monto total advertido por 727 millones de pesos, derivada de pagos por bienes y servicios recibidos por dicha secretaría en 2018, con cargo al presupuesto de 2019. De hecho, el pliego de observaciones 2019-0-48100-23-0266-06-001 menciona que

se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública federal por un monto de 727 millones 867 mil 206 pesos, por haberse pagado con recursos públicos federales aprobados para el ejercicio fiscal 2019, erogaciones de ejercicios anteriores, sin contar con la autorización correspondiente en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019; además de no haber proporcionado la documentación justificativa y comprobatoria que acredite que los bienes y servicios fueron recibidos a Satisfacción; en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM): Art. 126 y 132; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 54 y del clasificador por objeto del gasto.

¿Qué relación tiene el artículo 132 de la CPEUM con la observación? O ¿en qué artículo del Presupuesto de Egresos de la Federación se establece la obligación de obtener la autorización a la que alude? De nueva cuenta se omitió considerar lo establecido en el artículo 119, segundo párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dice: “Las obligaciones de pago que no puedan ser cubiertas por el ramo general correspondiente a adeudos de ejercicios fiscales anteriores se cubrirán por los ramos con cargo a su presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso; para tales efectos, dicha responsabilidad no se condicionará a ampliaciones presupuestarias ni a la previa autorización de la secretaría”.

Es decir, el sustento normativo de los pliegos es erróneo y sesgado, ya que la normativa antes citada sí permite a las dependencias de la administración pública federal cubrir pagos con recursos presupuestales del año fiscal en curso por adeudos generados en el ejercicio inmediato anterior, como era el caso.

De nuevo se puede observar el descuido y la falta de la debida diligencia en un acto intencional, que omite la aplicación de procedimientos forenses, con el fin de fiscalizar exhaustivamente y de forma pormenorizada la información proporcionada por la Secretaría de Cultura que describen los auditores en las páginas 14 y 15 del propio informe. Lo relevante de esta situación que se repite en las auditorías forenses es que se carece del análisis de información y documentación, como son los registros contables (pólizas) y la documentación que los soporta: CLC, contratos, CFDI, solicitudes de pago, o los pagos efectuados con recursos del ejercicio fiscal 2019 a los pasivos 2018, entre otros.

No obstante, en el informe y en la observación señalada se acusa a la secretaría de “no haber proporcionado la documentación justificativa y comprobatoria que acredite que los

bienes y servicios fueron recibidos a Satisfacción por un importe en total de 727 millones 867 mil pesos". ¿Qué les hacía falta a estos auditores? ¿Quién los supervisó y quién audita a la propia auditoría?, parafraseando aquel espectacular pagado por esta pandilla.

Contaban con toda la información para poder desarrollar una de las mejores revisiones donde se pudiera seguir la ruta del dinero, el flujo de pagos, la trazabilidad de los recursos, así como los proveedores y entregables pagados con esa cantidad de dinero. Más aún, si el ejercicio correspondía a 2018 y en los antecedentes de la revisión se estableció que se identificaron "diversas irregularidades que de manera reiterada han sido cometidas por servidores públicos adscritos a la Secretaría de Cultura, en las que se han observado instrumentos jurídicos irregulares con motivo de adjudicaciones directas con proveedores, sin que cumplan con los supuestos legales correspondientes". Habráse visto. Tiempo de pillos.

La opereta maestra

Durante cinco años consecutivos, en la Auditoría Superior de la Federación observamos irregularidades que vinculaban a funcionarios de primer nivel, primero en la Sedesol y luego en la SEDATU, sin dejar de lado otro esquema de defraudación operado entre servidores públicos de la SAGARPA.

A pesar de esos hallazgos y las denuncias de hechos presentadas año con año, este *modus operandi* fue recurrente hasta 2018, gracias al conjunto de complicidades y encubrimientos desde la más alta estructura de poder en los órganos responsables de prevenir, disuadir, fiscalizar y de investigar estas conductas ilegales. Los recursos fluían con mayor prisa para apurar el ejercicio de estas operaciones, en las cuales se estableció como práctica reiterada confeccionar adjudicaciones, convenios y contratos con universidades públicas, institutos de educación superior, dependencias y entidades de gobiernos estatales, sin contar las contrataciones simuladas para requerimientos "creados" al interior de la SEDATU, aprovechando diversas coyunturas, como el sismo de septiembre de 2017.

El temblor fue la excusa perfecta donde hallaron un nicho maravilloso para llevar a cabo distintas contrataciones y otros actos ilegales, una oportunidad conjuntada con los incentivos para supuestos arreglos y acondicionamiento de sus edificios y todo lo que cupiera en el saco sexenal para adquisiciones, consultorías, servicios, asesorías, estudios técnicos al amparo de los artículos 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4° de su reglamento, que no fueron sujetos de revisión, indagatoria o pesquisa alguna ni por el OIC, la UIF, la PGR y menos por la SFP; para ser precisa, sus titulares estaban lejos de querer prevenir la corrupción; como ya lo dije, cayeron de pie en este nuevo sexenio, despachando con desfachatez y orondamente.

Unos están en los OICs en la Función Pública, otros en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal, en la ASF y, qué

paradoja, amparados por el manto sexenal que les otorga el espíritu de la corrupción y la impunidad.

Este esquema de facturación con proveedores "ficticios" creados *ex profeso* para la simulación de operaciones permitió evidenciar a empresas que facturaban una presunta prestación de bienes o servicios con la entidad gubernamental contratante que, a través de una red estructurada de poder, en contubernio con estas alianzas criminales, contrató y pagó cantidades ignominiosas de recursos públicos a cambio de supuestos bienes y servicios recibidos "de conformidad". Es decir, la factura cumple con todos los requisitos legales, pero avala una operación inexistente o simulada.

El cuantioso cúmulo de irregularidades fue denunciado de manera directa en diversas ocasiones —y reiteradamente— ante cada titular del SAT, de la PGR y la UIF, y cada vez que los cambiaban aparecía una nueva esperanza de que llegara alguien decente, pero uno tras otro hicieron nada y, por cierto, como los buenos políticos caían de pie, en un efecto carrusel interesante, asegurándose de cubrir unos a otros en las siguientes etapas de tal modo que hasta hoy no se conoce de intervención alguna en el ámbito de su competencia. Las complicidades fueron inacabables e inatacables.

¿Cómo iba a investigar Virgilio Andrade?, por ejemplo, quien según una demanda de pensión alimenticia y reportes periodísticos colocó a su entonces pareja en una plaza en la Sedesol que no solo no le correspondía, sino que ni laboraba. Es el entorno propicio para el intercambio de favores y prebendas con las condiciones creadas hacia entornos floridos de corrupción. En este sentido, sería interesante conocer cuáles fueron las actuaciones y las investigaciones realizadas en este contexto, columna vertical de la corrupción y constante en el servicio público. No en vano cada sociedad construye aquello que le va a generar su sufrimiento, tal como nos recuerda el filósofo Michel Foucault.

Los resultados obtenidos documentaron esquemas de simulación fraudulenta creados con la intención de efectuar contrataciones directas de servicios y adquisiciones con diversos proveedores, elegidos por los mismos funcionarios que guardan características similares, es decir, emitieron facturas que amparan operaciones inexistentes y mantienen una asociación de vínculos entre sí para la triangulación de operaciones, con el fin de dispersar los recursos públicos obtenidos en un esquema de lavado de dinero.

Varias de esas empresas fueron declaradas inexistentes, aunque persisten otras vinculadas en las operaciones, y en la mayoría de los resultados de las auditorías forenses pudimos determinar que emitieron comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, comercializar o entregar los bienes que facturaron.

Esa cadena de contrataciones se efectuó con personas morales o físicas inexistentes, irregulares, no localizadas o con actividades muy distintas a las supuestamente contratadas, con operaciones inusuales o atípicas que fueron documentadas con la aplicación de

procedimientos forenses a partir del análisis de los contratos o convenios, atendiendo el origen y la aplicación del recurso con la trazabilidad plasmada en mapas de vínculos. Asimismo, con la red de funcionarios y proveedores ficticios, información y datos que demuestran de manera fehaciente la recurrencia en las actividades que dieron lugar a la simulación de operaciones y el desvío del recurso.

El primer convenio con las características conocidas fue firmado por Rosario Robles, en calidad de secretaria de la Sedesol, con Jaime Valls Esponda como rector en la Universidad Autónoma de Chiapas; un personaje cercano al poder en variados entramados, cuyo eternizado papel al frente como secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana (ANUIES) ha sido cuestionado por el sometimiento al que intentó obligar a varios de los rectores.

Llama bastante la atención la ausencia de la ANUIES por muchos años ante el conjunto de alertas, banderas rojas y serios indicadores de corrupción, mediante el uso de diversas instituciones de educación superior que anualmente se prestaban para el desvío de recursos. Es muy cuestionable y permite hacer inferencias a partir de su silencio y uso del privilegio que se le otorga para distintas prebendas. También es curioso que al interior de la ANUIES su voz solo se escucha para alabar y gastar los peculios que obtiene, y, por cierto, cuando José Antonio Meade fue secretario de Hacienda, según informes de auditoría, documentos públicos y el reporte de asignaciones y transferencias de recursos públicos, consiguió generosos recursos adicionales de los cuales no solo no se han rendido cuentas a cabalidad sino que los ejerció con discrecionalidad en viajes por el mundo, supuestamente para la firma de convenios, de los que no se ha difundido ningún beneficio.

Muchos de los integrantes de esa asociación aseguraron que era parte del entramado, y al ser el primer convenio firmado con el que se consumó la Estafa Maestra, podríamos preguntarnos por qué las indagaciones de la FJR no alcanzan a investigar este asunto. La suma de indicios, testimonios y hallazgos derivados de la fiscalización permiten presumir que hay indulgencias, premios, pagos y compra de prebendas. Cercano al grupo que impulsaba estas actividades delincuenciales desde una oficina de la Presidencia de la República, son alianzas encaminadas a enriquecerse al amparo del crimen y de la delincuencia organizada desde el poder mismo.

Enloquecieron al ver tanto y tan fácil, aunque este tipo de fraudes era común desde Pemex y la CFE con universidades en Campeche y Tabasco años atrás, cuando pudimos constatar que no importa qué tan rico eres, pues eso no basta para continuar llenando los sacos de paga. Estaban realmente blindados y todos ellos encaramados en un cinismo característico que les otorgó el sentirse poderosos e intocables. Más adelante abordaremos a Jaime Valls Esponda que también resultó casualmente cercano a Colmenares, y era el promotor, por no decir su cabildero o publirrelacionista, ocupado de invitar a cenas por sus rumbos de Santa Fe a diversos funcionarios y gobernadores para “venderles al que será el próximo auditor”. Así que a partir de estos años se puede deducir la serie de alianzas, negocios, pactos y

grandes complicidades. De qué otra manera se pueden entender las inusuales reuniones privadas que iniciaron en febrero de 2018, cuando uno se sentaba con políticos, asegurando espacios de entendimiento con quien sería el "próximo auditor superior". Después del nombramiento, para agradarle Jaime Valls se dedicó a organizar reuniones insulsas, como le gustan a él; imagino lo que nos ha costado al país, con el pretexto y el esquema retrógrado, aprendido de sus "maestros".

La ASF observó que este esquema de contrataciones de la Sedesol prosiguió tal cual, en la SEDATU, con universidades públicas y otras entidades estatales, cuando se encontraban al frente los mismos funcionarios, quienes solamente cambiaron de estructura en la secretaría en agosto de 2015. Fue de tal magnitud su desfachatez y descuido, que utilizaron el formato exacto de los mismos contratos y convenios fabricados y adjudicados en la Sedesol en la SEDATU, con esa inadvertencia y la prisa firmaron con cláusulas de la secretaría anterior. Algún funcionario que llegó con Meade platicó que se llevaron hasta los escritorios del despacho de Robles, y que le dejaron al estrenado secretario lo "más jodido", que las relaciones con ella no eran buenas porque llamaba ordenando a todos los secretarios, a todos. Pobres almas o almas pobres.

En este contexto, muchas de las universidades y entes públicos siguieron siendo utilizados como medio de contratación para el manejo y la triangulación de los recursos federales al aprovechar de manera ilícita el artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual establece que los contratos que celebren las dependencias con las entidades o entre entidades y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la administración pública federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa no estarán dentro de la aplicación de esa ley.

Sin embargo, no acataron la parte *in fine* que establece que "no obstante, dichos actos quedarán sujetos a dicho ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización".

Ese *modus operandi* les abrió la posibilidad de asignar de manera directa y en contubernio distintos convenios y contratos para simular la prestación de servicios con proveedores ficticios, no localizados o inexistentes. Así que también descubrimos vínculos y nexos entre empresas que comparten domicilios, apoderados y representantes legales, entre otros, o que se encuentran sancionados por el SAT conforme al artículo 69B del Código Fiscal de la Federación.

Veamos el caso de la auditoría forense 269 de la Cuenta Pública 2013, donde está involucrada la Sedesol con la Universidad de Morelos, en un contrato por 697 767 630 pesos. Bajo el principio de que este contrato lo ocultaron desde nuestra petición de información, era obvio que si esconden es por algo y porque hay más. Ese fue un indicador significativo y

bandera roja para ampliar nuestras muestras y comenzar a revisar con mayor profundidad; entendimos pronto el porqué del ocultamiento, de hecho, esta puerta cerrada permitió derribar muchas más que traían otras cosas detrás.

Para empezar, se trataba de un convenio de colaboración "sin número" para el "aprovisionamiento y distribución de equipo y material de apoyo para la operación de promotores, asesoría especializada en materia de comunicación y difusión social, estrategia de integración para las líneas rectoras y sistemas de administración y seguimiento de programas sociales".

Con este nombre tan rimbombante nos dimos a la tarea de buscar el hilo conductor. Determinamos que la comisión para la universidad fue de casi 35 millones de pesos, el acuerdo lo firmó el entonces rector, Alejandro Vera Jiménez, y para llevar a cabo el encargo "subcontrató" a cinco proveedores, aunque algunos reportaran giros distintos a los bienes a adquirir, no presentaron evidencias de lo realizado, las fechas de los entregables y convenios no coincidían, aparecían inconsistencias en los domicilios, tres de los proveedores estaban relacionados entre sí, dos eran hermanos.

El Grupo Comercializador Conclave recibió más de 207 millones para adquirir "equipo y material de apoyo para la operación de promotores de la ruta sin hambre", pero no pudo ser ubicada y su apoderado legal, Rodolfo David Dávila Córdova, tampoco. Lo curioso es que su hermano Roberto Javier Dávila Córdova, el administrador único, escrutador, accionista y representante legal de Prodasa, la otra empresa que se benefició con poco más de 188 millones para comprar "equipo y material de apoyo para la operación de promotores de la ruta sin hambre", tampoco apareció.

La fórmula de hermanos empresarios se repitió con Dumago Systems Solution, que recibió, por "asesoría especializada en materia de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con Sedesol", poco más de 33 millones de pesos. En ese caso el administrador único, accionista y representante legal de la compañía era hermano del también administrador único, accionista y representante legal de Advanced Computer Knowledge, empresa vinculada con otra serie de contratos por los cuales recibió 39 millones 834 000 pesos por "servicios para redes nutricionales", cuyas actividades reportadas ante el SAT no tienen nada que ver con los servicios declarados. Los recursos pagados a esta empresa proceden también de un convenio celebrado entre la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Sedesol.

Otro de los proveedores y empresa fachada que cobró en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor) alrededor de 230 millones es Evyena Servicios, S. A. de C. V., por una "estrategia de integración de información de los requerimientos y líneas rectoras"; aparece que en un solo día fue contratada, entregó los servicios solicitados y le pagaron. Burdos y abusivos. Sin embargo, parte de los entregables fueron iguales a los presentados por Dumago Systems Solution, empresa subcontratada también por la UAEM para los

servicios de redes nutricionales. Evyena nunca fue localizada en los tres domicilios fiscales reportados al SAT y transfirió 169 millones a una tercera empresa, Consolidación de Servicios y Sistemas Administrativos, misma que a su vez transfirió 160 millones a Esger, Servicios y Construcciones, S. A. de C. V. El quinto proveedor fachada de UAEMor es Meve Soluciones, que recibió 32 millones de pesos, de los cuales le envía a Esger 29.2 millones; así terminaron 416 millones de pesos en los bolsillos de los defraudadores de Esger, empresa fachada totalmente ajena.

En la Cuenta Pública 2014, en la auditoría 1665 practicada a la Sedesol, encontramos que se suscribió nuevamente convenio de coordinación con la UAEMor para "proporcionar el servicio integral de orientación, apoyo, organización y evaluación de actividades encaminadas a fortalecer la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social" (fondo 3 del ramo 33) por 324.6 millones de pesos, y con la finalidad de conocer la aplicación de los recursos, en la auditoría 269 a la universidad, se constató que subcontrató a dos empresas por 305.1 millones de pesos, para supuestamente atender lo solicitado.

La primera con la compañía Consolidación de Servicios y Sistemas Administrativos, S. A de C. V., por 158.7 millones de pesos, la cual a su vez transfirió 139.0 millones de pesos a una tercera empresa, Comercializadora Integral Villaregia, S. A. de C. V., y esta envió de nuevo a la cuenta de Esger, Servicios y Construcciones, S. A de C. V., 137.9 millones de pesos. La segunda con Factibilidad Empresarial de México, S. A. de C. V., por 146.4 millones de pesos, la cual a su vez transfirió a la multicitada empresa Esger, Servicios y Construcciones, S. A. de C. V., el importe de 137.9 millones de pesos, por lo que el total recibido por Esger a través de estos dos proveedores fue de 275.8 millones de pesos. Esger, Servicios y Construcciones, S. A. de C. V., es una empresa fachada, totalmente ajena a los servicios solicitados por la Sedesol, ya que su actividad preponderante reportada al SAT es la de "administración y supervisión de construcción de naves y plantas industriales y supervisión de construcción de inmuebles comerciales".

Otros acuerdos de coordinación, por ejemplo, el 411/DGRM/001/DAC/279/13 y el DASNOP/SAC/001/2013, los firmó el director de recursos financieros y apoderado legal de la UAEM, que a su vez subcontrató a supuestos proveedores para realizar los trabajos relacionados con la implementación y puesta en marcha de "ventanillas y pruebas de supervivencia para la incorporación de beneficiarios". La empresa Servicios Administrativos Zulma recibió poco más de 21 millones de pesos para "monitoreo"; por supuesto, tampoco fue localizable. Esta maquinación devela que no se realizaron los servicios convenidos y presentaron una credencial de elector apócrifa para abrir una cuenta bancaria.

A su vez subcontrató y transfirió casi tres millones a IT Guardian Auditing & Consulting Services, y luego envió casi dos millones más a Servicios Profesionales Antal, cuyo representante legal, Hugo del Pozo, era también director de recursos financieros y apoderado legal de la universidad, a quien recuerdo cuando llegó a la oficina para llevar a cabo una entrevista en relación con las adquisiciones que había efectuado y, francamente,

mostraba una insolencia que se desinfló cuando le demostramos que conocíamos su empresa y el traspaso de recursos que se había autoefectuado. No regresó.

Hubo otro contrato más pequeño para Asesorías Nacionales Expanders, por 378 160 pesos, empresa no localizable, y un quinto contrato por casi 40 millones para servicio de redes nutricionales a Advanced Computer Knowledge, donde resultó que el administrador único, accionista y representante legal es uno de los hermanos vinculados con la referida y beneficiada Dumago Systems Solution, que aparecen en los distintos mapas de redes de vínculos de empresas subcontratadas y flujo de recursos federales que anexamos en el informe de fiscalización correspondiente.

En resumen, del total de recursos entregados por la Sedesol a la UAEMor, en los ejercicios fiscales 2013 y 2014, fue a parar a las arcas de la empresa Esger, Servicios y Construcciones, S. A. de C. V. la nada despreciable cantidad de 692.1 millones de pesos, sin haber tenido una relación contractual.

Ante la presunción de la existencia de actos y omisiones que pudieran implicar diversas irregularidades y conductas ilícitas, la Dirección General de Auditoría Forense requirió información a los supuestos proveedores. Unos la negaron, otros se ocultaron, muchos otros se ampararon, y casualmente las respuestas de toda esa serie de proveedores era no similar, sino exactamente igual; es decir, el oficio de respuesta que nos enviaban presentaba el mismo contenido, solo se modificaba el logo.

Ahí aparecen distintas manos que mecieron y mecen las cunas, por ejemplo, un tal Mauro Rosas, que salta dentro de esa madriguera y en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), refugio de grupos vinculados al PRI, donde operaban al amparo de este mismo esquema de simulación contratos y adjudicaciones directas a modo y muy singulares. Existen personajes vinculados al círculo del poder que han lucrado por más de 40 años, simulando negocios en las entidades y dependencias federales y estatales, con servicios de elaboración de “libros blancos”, “entregas-recepción”, “auditorías patito”, con precios estratosféricos que abarcan el soborno o, el cochupo, la tajada, como quieran llamarle, y que se paga con dinero público, solo para arrumbar cajas en la humedad de una bodega. Trabajos inservibles e innecesarios.

Para sorpresa de este señor que apareció en calidad de defensor en varias de las actuaciones legales por las observaciones determinadas en el INAP, la UAEM, la UAEMor, la SEDATU y Sedesol, quien por cierto acuña como defensa legal que eran “alianzas estratégicas“ (término que hasta hoy se sigue utilizando para solventación de observaciones en los negocios-engañifa, armados por ese grupo en el poder y vinculados al partido rojo), varios de los funcionarios involucrados en la gran estafa que decidieron colaborar en las indagatorias ante la Fiscalía General lo señalaron en sus declaraciones como uno de los Principales operadores externos para aportar sus testimonios en sendas carpetas de investigación.

Por ejemplo, declararon que Rosas citaba a subsecretarios en la calle de Horacio 1840, piso 4, para dar concretamente indicaciones sobre cómo debían operar con la Auditoría Superior de la Federación, qué decir a los auditores cuando los citáramos en las entrevistas o cuando les requiriéramos los entregables. De igual manera "confeccionaba" para todos los proveedores las mismas respuestas a nuestras peticiones de información, solo cambiaba el logo de la empresa a que correspondía la respuesta.

Como nunca aparecieron los responsables de los almacenes en la Sedesol para dar cuenta del ingreso de los bienes a las bodegas, siempre de vacaciones o con permiso, entre las instrucciones debían negar todo, reiterar que todos los entregables fueron recibidos a Satisfacción, no mencionar bajo ningún supuesto a los funcionarios que sirvieron de enlace para instruirles sobre quiénes serían los proveedores y los montos por facturar y pagar. Ahí mismo recogían los entregables "fabricados", y no deja de llamar la atención que el fallo de la licitación de Prodasa estuviera firmado por el director general de proyectos especiales, Wistano Orozco García, por cierto, cercano conocido de Mauro Rosas, con quien apareció también en eventos posteriores en otras universidades y en institutos en Morelos. Ah, negocios.

Un día de agosto o septiembre de 2019, cuando acababa de suceder la detención de Rosario Robles, me encontró en un restaurante al salir por mi auto y se acercó junto con su acompañante para decirme: "Doctora, Mauro Rosas, ¿se acuerda usted de mí? ¿Cómo ha estado?". Le dije: "Qué bueno que nos encontramos, ahora con lo sucedido me gustaría que actuaras con ética y dijeras todo lo que sabes, que es mucho. Es justo que lo hagas"; por supuesto que soltó su risa nerviosa, sin verme de frente; nunca.

En el proceso al exsubsecretario de Ordenamiento de la SEDATU, a quien le falsificaron en la propia oficialía mayor su firma en uno de los contratos, él también aparecía en la auditoría llevando los mismos oficios de respuesta de tres o cuatro universidades distintas en relación con todos los temas. ¿Cómo le pagaban? ¿De dónde salía el recurso? ¿Por qué esa persona llevaba los oficios de respuesta de todas las entidades y proveedores observados? ¿Cómo se podían conocer entre todos, el de Quintana Roo con el de la UAEM, UAEMor, Sonora, y todos los proveedores relacionados? La mismísima respuesta: solo cambiaba el logo, pero era el mismo formato y contenido en el oficio, y qué digo de las firmas, imagínense. Pues era el mismo operador, esa es la respuesta. Es alguien que tendría que ser llamado a cuentas, pues mientras me decía "yo soy su amigo, cuente conmigo", a otros funcionarios con prepotencia les decía que no iban a poder con él y que nos iba a "partir la madre".

Mauro mantuvo sus vínculos en Morelos aún tras la huida del exrector por su presunta responsabilidad en el desvío de casi 240 millones de pesos en la Estafa Maestra, e incluso participó en al menos una reunión, el lunes 23 de abril de 2018, con el nuevo rector, Gustavo Urquiza, y con otro de los involucrados en la estafa de la UAEMor, el encargado de proyectos especiales de la institución, José Wistano Orozco García, que luego fue

subsecretario de Educación con el gobernador Graco Ramírez, quien públicamente apoyaba a Colmenares.

Todo esto puede constatarse en la agenda del propio rector[13] y hasta el inicio de la pandemia podía encontrarse a Mauro Rosas en ese refugio del Priismo conocido como INAP, integrante en la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas (no es ironía). En el consejo directivo de esa misma asociación también participa David Villanueva Lomelí, responsable de la vigilancia de la ASF, cuyo cinismo le permite desplazarse entre el mundo de la Cámara y la ASF sin el menor decoro político; ya abundaré más adelante sobre su peculiar perfil y la falta y omisión de deber en su encargo.

Entre abril y mayo de 2018 traté de obtener información del *modus operandi* apelando a alguien cercano a Javier Sicilia, amigo del exrector de la UAEMor, para poder entender quiénes estuvieron involucrados. Pero no, nada. No hubo respuesta. También resulta interesante hallar que operaban como franquicias para cooptar a los titulares, había un responsable por entidad y zona, Tabasco, Chiapas, Tlaxcala, Hidalgo, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, Veracruz, Estado de México y Morelos.

¿Qué pasaba por la cabeza de muchos de los rectores y funcionarios involucrados que se sintieron "honrados" de ser elegidos para esa misión?, ¿fueron presionados de alguna manera por sus superiores para realizar estas acciones y pagos? Confesaron que ellos tenían claros los actos inusuales, pero no se imaginaron que llega rían a tanto, y que cuando comenzamos a "apretarles" en requerir informes sobre las circunstancias de las contrataciones, enlaces, productos, instrucciones y las actividades que realizaban con los proveedores, acabaron confesando que no realizaron actividad alguna más que atender las indicaciones o instrucciones de realizar pagos a proveedores, que les daba por correo o teléfono Claudia Morones, quien también los citaba en la Ciudad de México en las oficinas ubicadas en la colonia Anzures.

Hay varios testimonios sobre Morones, sin embargo, las investigaciones que debiera realizar la fiscalía no han tenido resultados en más de cinco años y esto me ha llevado a asumir que no se actuará en contra de los responsables del saqueo de erario. Tal cual.

Algo que les agradezco es que, en un acto ético y voluntario, aportaron elementos y datos significativos donde identifican, describen y reconocen a Morones además como una persona abusiva, déspota, arbitraria, y la recuerdan en esa "casa" clandestina donde fueron citados. Describen la entrada, recepción y la planta alta que alcanzaron a ver con personal trabajando. Con guardaespaldas en la parte de arriba que vigilaban la calle, y en la antesala confluían rectores y funcionarios de distintas universidades y dependencias, y también recuerdan que todos ellos se manifestaban preocupados por la fiscalización, por la develación de la red y asociación de vínculos descubiertos por la DGAF, a partir de la situación generalizada de las dependencias, en su calidad de contratantes que se negaban a entregar información; contrariamente, estas se manifestaron satisfechas con los servicios

prestados. No obstante, y en razón de ello, se iniciaron los procedimientos de multa correspondientes, pero lo que resalta es el contubernio y encubrimiento por parte de las dependencias para no exigir atención a los requerimientos de la autoridad fiscalizadora.

Los símbolos ayudan a retener y asociar imágenes con significados que racionalizamos, sumado a un adoctrinamiento para justificar o reafirmar la pertenencia o identidad y proyectarnos en aquello que buscamos y anhelamos en nuestra vida, aunque no nos corresponda; podemos ver que la corrupción política incentiva perversa mente a solapar y obtener beneficios envueltos en promesas y sueños, propiciados por bribones y rufianes de tiempo completo.

Hay datos concretos que permiten afirmar que existió un armado intragubernamental ex profeso para el uso faccioso de las instituciones: la serie de hechos notoriamente inducidos desde la opacidad del Estado mexicano, el ocultamiento de información, la intervención a fin de evitar y obstaculizar la fiscalización, la intención de sesgar las auditorías y los intentos infructuosos para desviar las investigaciones, los emisarios enviados para que le "bajáramos" a las revisiones, desde la mención de Aurelio Nuño como un medio de intimidación, o los intentos infructuosos por avalar el cumplimiento de los servicios. No hay modo de lograr que saquen sus pezuñas del presupuesto.

Debo decir, sin lugar a duda, que quienes integramos la Dirección General de Auditoría Forense fuimos los precursores en México de este tipo de revisiones a partir de metodología aplicada, ya que provocamos una investigación a la que dimos forma, respaldados en distintas fuentes de prueba para que la Fiscalía estuviera en posibilidad de judicializar la carpeta de investigación. Esperábamos que en la etapa de indagación complementaria se revelara la maquinación deliberada para el ocultamiento de los recursos, que se conociera la trazabilidad y vínculos de los proveedores fabricados, y que a partir de las investigaciones se conociera la estrategia deliberada de ocultamiento y obstaculización.

Eso era lo mínimo esperado, logramos en meses documentar cada año de las "estafas". Sin embargo, han transcurrido nueve años y no se conoce nada adicional derivado de las indagatorias que realiza la fiscalía general, salvo una declaración apenas hecha en diciembre 2022 del exdirector de la Televisora de Hermosillo, donde involucra a Morones, situación que había negado con anterioridad. Pero no veo a la autoridad investigadora indagando todas las afirmaciones y declaraciones que hizo.

No sería justo que las sanciones queden en aquellos que siguieron órdenes para no comprometer su trabajo, el personal operativo; se trata de documentar la verdad de lo que realmente ocurrió a partir de una concertación jerarquizada de la más alta estructura del poder. El daño, los indicios, los resultados de la fiscalización, los elementos de prueba, cada uno de quienes cometieron actos irregulares debe dar cuenta de sus actuaciones. Si no hay devolución de los recursos y la reparación del daño, realmente no hay justicia.

Es obligación del Estado inhibir, prevenir, investigar y sancionar la corrupción; sin avances notorios estamos como estábamos hace años en relación con las indagatorias, y cada día que transcurre se dificulta más el descubrimiento de los indicios y hechos de fraude y alta corrupción. En este sentido, la tolerancia a cualquier acto criminal también es un modo de corrupción, pasiva o activa. Las instituciones dejaron de ser respetables y confiables, ya que desde su cúpula articularon, encubrieron y propiciaron esquemas vinculados a delincuencia organizada y corrupción. Negligencia política y ausencia del Estado de derecho que llevó sin pudor a una degeneración en el ejercicio del poder.

Cabe mencionar que durante el desarrollo de las auditorías forenses y las actividades posteriores de seguimiento persistió el ocultamiento permanente por parte de varios de los actores involucrados en esta opereta maestra; funcionarios, servidores públicos, terceros, emisarios y proveedores a modo, todos encargados y coludidos en la elaboración de los documentos y entregables, cumpliendo cada uno con la función que les asignaron en esta cadena de corrupción.

En todos estos años dedicados al servicio público jamás vi una corrupción tan candente, generada desde el corazón de las propias instituciones que sirvieron por décadas al país, que parecían honorables y se corrompieron. No me pasó por la cabeza ni imaginé que se generaría al interior y a partir de las mismas instituciones. Ahora muchas no tienen esqueleto en donde sostenerse. Han sido derribadas desde dentro y parece que su valor esencial se sostiene en la arrogancia y el poderío que se autorreconocen, y otorgan permisividad para hacer todo aquello que les reditúe un beneficio y lucro personal o tribal.

La lucha más cruenta en las auditorías es obtener la información fidedigna y en tiempo. Lo digo porque alguna vez comentaba con un colega de Alemania el número de entidades fiscalizadoras y el total aproximado del personal que los integra. No podía dar crédito. Asumir que se requiere en nuestro país toda esa estructura para cuidar y revisar el buen gobierno permite inferir que no existe eficiencia ni eficacia en el desempeño gubernamental, pero algo más, vivimos con la desconfianza absoluta, sabedores de que existe permanentemente la intención de violar las normas que prometimos velar. Pues bien, a pesar del Sistema Nacional de Fiscalización, no hay colaboración ni coordinación entre las mismas; es decir, el encubrimiento aquí también aplica. En México, cuando hablamos de *informar*, los sujetos obligados asumen que no lleva implícito el concepto de *verdad*.

A todas luces esto se convirtió en un obstáculo que impide aclarar y entregar datos, documentos o cualquier otra información que pudiera aportar elementos para transparentar los procesos de las adquisiciones, contrataciones o de cualquier asignación de servicios. Por ejemplo, en el caso de la Estafa Maestra persistió por seis años la negativa reiterada a brindar información sobre las adjudicaciones y los proveedores. Sin sorpresas, tampoco iniciaron procesos o requirieron, aunque sea para “tapar el ojo al macho”, la devolución del recurso desviado. No obstante, las reiteraciones de la ASF, prosiguió el ocultamiento deliberado de información, el acceso a los servidores públicos involucrados en

la operación, negativas para atender entrevistas con los auditores; todo lo que pudieran inventarse para ganar tiempo en el transcurso de la revisión.

Al percatarnos del conjunto de acciones encaminadas para obstaculizar la fiscalización, se les requirió a los titulares ordenar y asegurar las acciones pertinentes para atender los requerimientos de información de la ASF, y, en su caso, presentar las denuncias de hechos que permitieran inhibir y perseguir esas actividades ilícitas. Sin embargo, en reuniones diversas se externó nuestra preocupación por la maquinación de las contrataciones fraudulentas y se requirieron acciones conducentes para la recuperación del dinero desviado ante un crecimiento exponencial de actos irregulares, a conducirse con apego a los Principios constitucionales, pero nada sucedió.

No se modificaron las conductas, sino que se intensificaron las contrataciones y el ocultamiento como respuesta a la ASF, por lo que se iniciaron procedimientos administrativos y se presentaron denuncias de hechos correspondientes. Un poco bravos, insistían con la misma respuesta en el sentido de que todo era legal, y que se daban por satisfechos por los servicios recibidos.

Estas contrataciones, conocidas como Estafa Maestra, mantienen como característica común que se realizaron en dos dependencias bajo la gestión de la misma titular y aparecen involucrados o vinculados como responsables de las operaciones y las contrataciones los mismos funcionarios, a pesar de que la ASF hizo de su conocimiento personal esta situación, y se externó la preocupación por los resultados que corroboran el desvío intencional de los recursos púbicos asignados a los programas sociales en diversos contratos generados a modo, ante la ausencia de acciones por parte de la SHCP, la PGR, la UIF, la SFP, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y, por supuesto, la complicidad del sistema financiero.

Pensar que estos son casos aislados de corrupción sería como un mecanismo de negación, ya que desde años antes se hacían grandes negocios con las empresas fachada, los factureros, la simulación de servicios y compras en las entidades estatales; qué decir de Pemex y la CFE, donde se lavaba mucho dinero con estos *modus operandi*.

En Tabasco, universidades y tecnológicos escondieron decenas de esos convenios, pero nos faltó tiempo para aplicar distintos procedimientos de auditoría, pues teníamos limitaciones para abarcar ese universo y nivel de pillaje que había que atender. Los convenios los asignaban a hurtadillas. No se publicaban, era toda una trama de opacidad y complicidades. Luego, los de la Universidad Autónoma del Carmen se pusieron sospechosamente agresivos con lo de la auditoría forense; era de esperarse, tenían muchísimos contratos con Pemex. Ni idea tenemos del número de contrataciones o adjudicaciones, ni la suma millonaria desviada ahí.

Por ejemplo, en Quintana Roo la SEDATU depositaba directamente a la Universidad Politécnica, pasando por toda la normativa que regula el ejercicio de los recursos federales;

encontraron cómo brincar todos los obstáculos y pasar desapercibidos. Así que nos imaginamos a esos servidores públicos llenos de paga y disfrutando por años, décadas y hasta generaciones el fruto de la corrupción.

Hay formas de mentir, engañar, decir o esconder parte de la verdad, y en cada una de estas tramas criminales estratificadas solo puede estar quien tiene un gran poder para ejercer los recursos, generar o desplegar las diversas acciones que permiten llevar a cabo fraudes de gran magnitud y, por supuesto, garantizar y asegurar que todos cumplan y todos ganen. Se trata de no romper la cadena de corrupción y preservarla a costa del repudio público; todos los integrantes se protegen en un grupo blindado que arma la estrategia y otorga a cada uno su rol y actividad. Los eligen para asegurar el nivel adecuado de lealtades, y muchos ni siquiera tienen un lapsus para preguntarse si lo que hacen es ilícito. Se sienten arropados, reconocidos como miembros del grupo en una condición especial que los transforma.

La red de la Estafa Maestra incluye por lo menos a 11 dependencias y más de 20 institutos y entidades públicas que fueron fiscalizadas, sin considerar aquellas que obstaculizaron o donde no llevaron a cabo la fiscalización superior y otras tantas que dejaron fuera del alcance. De las revisadas tenemos a la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, la Universidad Politécnica de Quintana Roo, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Popular de la Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, el Instituto Técnico Superior de Comalcalco y el Instituto Tecnológico Superior de Centla, la Universidad de Huatusco, el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, la Universidad Tecnológica de Salamanca, la Universidad Tecnológica de Tabasco, la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Tecnológica de Campeche y de Tulancingo, la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, entre otros que se pueden ver en el mapa de fiscalización de la página 108.

En la trama aparecen más de 186 empresas fachada y hay una mezcla de la misma calaña de inmoralidad que comparten los involucrados estimulados con factores externos que permiten que la corrupción sea prolija. Incluso, de acuerdo con las entrevistas forenses que realizamos a varios de los contratados, les dijeron que no iba a pasar nada, que Morones había laborado en la ASF y ya sabía lo "mal" que hacían las auditorías, que se arreglaría todo, que ya estaba todo armado dentro y que tenían el nexo con el jurídico para solventar todo.

Les hicieron creer eso, y si tenían algún arreglo dentro, no pudieron operarlo porque todo el grupo auditor de la DGAF nos encargamos de defender cada observación ante cualquier intento de demeritarla por la unidad de asuntos jurídicos, así que el pleito interior y las quejas de Andrade crecieron a tal magnitud que nos pidieron que no se tratara con él, sino con un subordinado, el licenciado José Rafael Minor, quien era el asesor de Andrade y que, casualmente, renunció para irse de titular al Registro Agrario Nacional, en la SEDATU; qué impresionante cuando nos enteramos por casualidad, porque todo fue en la opacidad. Claramente entendimos el soborno bajo el agua: el funcionario cuyo único mérito era haber

sido maestro de Andrade en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y lo tenía de asesor se había ido a trabajar al "lado oscuro", en un claro conflicto de interés. No tenían límites.

Mientras se iba revelando y acomodando el rompecabezas de corrupción, el auditor inservible, ávido de resaltar su cumplimiento de promesas y la pertenencia a la alta jerarquía de poder que lo ensilló en la ASF, expresaba: "Cuando se lanza un globote sobre desvíos millonarios del gasto público, como el de Rosario Robles, la prensa se va con eso, porque le gusta la sangre".[14]

Cierto que, si en una estructura burocrática dicen que es una orden de "arriba", que todo está arreglado y que solo hay que firmar y obedecer, puede interpretarse hasta como un sutil método de coacción que incluye la amenaza más o menos velada de perder el empleo. Aun así, y esto es regla de oro, si los funcionarios saben que es algo ilícito, ¿por qué se prestan? Tampoco usan a cualquiera… Para pelear, hay que dedicar tiempo, y así lo hicimos defendiendo cada uno de los resultados y observaciones determinadas. Cuidemos nuestras acciones que el prestigio viene solo.

Cuando revisábamos a Pemex me sugirieron buscar a David Alberto Rojas Pérez, venezolano especialista en ingeniería petrolera, vinculado con Carlos Morales Gil, director de Pemex Exploración y Producción (PEP) de 2004 a 2014, quien la dejó para irse a PetroBal, en un abierto conflicto de interés, días antes de que Oceanografía, uno de los mayores contratistas de la petrolera, fuera inhabilitada por la SFP y multada por Pemex por no haber pagado la fianza de nueve contratos correspondientes a la renta de 14 plataformas marinas, pero justo antes se firmaron contratos millonarios a través de universidades y con institutos tecnológicos de Tabasco y Campeche, que llegaron a facturar hasta 1 800 millones de pesos anuales.

No obstante, lo inusual de los objetos y montos de esos contratos y adjudicaciones de servicios volátiles, no se supo durante todos esos años que los auditores internos, externos, la SFP, su corporativo o junta de gobierno hubiesen hecho alguna observación o recomendación. No nos dio tiempo de indagar sobre eso y ahí están, pero desafortunadamente no hay quien tenga interés en hacerlo.

Por eso los funcionarios de la Universidad del Carmen y otros institutos de educación superior hicieron hasta lo imposible para no ser revisados por la DGAF, y creo que sabían que estábamos ya cerca del *modus operandi* que usaban, algunos con doble contabilidad, sin reportarla en cuenta pública, pues les depositaban directo, sin entrar a finanzas del estado, y de este modo no se reflejaba.

Esa gran trampa la aplicaban en varios entes y mediante el análisis de información nos percatamos de que la SEDATU le había depositado directamente a la Universidad Politécnica de Quintana Roo 100 millones de pesos. No lo hubiéramos podido descubrir de otra forma, porque si la entidad no los revela en cuenta pública no hay modo ni posibilidad de saber

que recibió un recurso, y menos si es ilícito. De igual manera puede haber dinero que les dio Hacienda en cuentas que no están registradas en la secretaría. ¿Cómo se revisan?

A partir de esa y otras trampas para evitar registrar los egresos en cuenta pública hicieron todas las artimañas posibles, lo que incluyó mandar a las instituciones personeros para indicarles los vínculos y los proveedores que atenderían en esta cadena de corrupción para dispersar el dinero que pagarían por los supuestos servicios. Nunca pensaron que se les pescaría.

Cabe recordar que *Aristegui Noticias* dio a conocer un reportaje de investigación que se llamó "Operación Entregables", y entiendo que hasta la fecha la Fiscalía no ha efectuado alguna indagación al respecto: ¿quién es el propietario?, o si se rentó, ¿a quiénes y cómo? Los testimonios de los vecinos, quienes participaron y acudieron ahí, cómo se realizaban los pagos, en fin, hay tantas preguntas que no creo que vayamos a conocer las respuestas.

No parece haber interés en conocer toda la estructura que operó, y es para desesperarse porque quienes realizamos las auditorías conocemos los testimonios de varios que participaron y otros que estaban al tanto de estas actuaciones ilegales, y aseguran que ahí es donde operaba la gente de la SEDATU, citaban a las personas, fabricaban documentos oficiales y daban las instrucciones. Con esa serie de indicios algo se pudo haber hecho, pero nada.

Existe un oficio de un funcionario que estaba en la Sedesol, donde aparece el nombre de Alejandro Hinojosa como otro de los operadores del grupo de proveedores vinculados a la estafa, con un domicilio más en Polanco, y justamente en la zona donde se hicieron entregas millonarias en efectivo, a través de empresas de traslados de valores, las cuales tampoco han sido llamadas para ser investigadas y conocer desde la contratación y hasta el destino final de los recursos entregados por orden y cuenta. Nosotros fuimos a tocar las puertas y lo que no se pudo obtener fueron los registros de la propiedad, que es otro tema toral de la corrupción: el registro público es una zona negra entre opacidad, encubrimiento y coyotaje. Pero a la Fiscalía sin duda se los darían.

En la revisión aparecieron varias casas y departamentos en la zona de Polanco, uno en Newton esquina con Lope de Vega y otro en la calle de Tennyson. ¿Cuánto dinero manejaron para pagar y comprar en esas zonas departamentos y casas de lujo? Debía haber vínculos, ¿por qué no han investigado entonces con un enfoque holístico y más bien parecen selectivas las actuaciones hechas hasta hoy? Esto es, seguir la ruta del dinero y el manejo de cantidades millonarias en efectivo, que a nadie le interesa revisar.

Veamos un caso posterior a la conclusión de las revisiones realizadas al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Radio y Televisión de Hidalgo, Televisora de Hermosillo y la Universidad Politécnica de Quintana Roo de la Cuenta Pública 2016, en las que del análisis del flujo del dinero fue posible determinar que los proveedores supuestamente contratados por estos organismos depositaron directo a las cuentas

bancarias de Cometra Servicios Integrales, S. A. de C. V., Servicio Pan Americano de Protección, S. A. de C. V., y Transportes Blindados Tameme, S. A. de C. V.; y descubrimos la ruta del dinero con otro *modus operandi* donde los mismos "proveedores" depositaron recursos a empresas sin ninguna relación contractual con los auditados, mismas que a su vez depositaron cheques a las tres empresas transportadoras de recursos: Cometra Servicios Integrales, S. A. de C. V., Servicio Pan Americano de Protección, S. A. de C. V., y Transportes Blindados Tameme, S. A. de C. V. con la instrucción para que lo convirtieran en efectivo y lo entregaran a diversos domicilios ubicados en la Ciudad de México, Cancún y Tabasco.

El monto total de los recursos entregados en efectivo fue de aproximadamente 492 millones de pesos, de los cuales Cometra Servicios Integrales, S. A. de C. V, entregó 135 millones, Servicio Pan Americano de Protección, S. A. de C. V., 100 millones, y Transportes Blindados Tameme, S. A. de C. V., 257 millones. Ahí quedaron los papeles de trabajo en los expedientes de la auditoría con los datos y nombres para continuar la auditoría forense, y es importante precisar que el personal auditor que practicaba las revisiones no concluyó con el análisis de las cuentas bancarias de los proveedores ni de otras empresas a las cuales les transfirieron parte de los recursos obtenidos para constatar la totalidad de los recursos depositados a las empresas transportadoras de valores, toda vez que con la llegada de la nueva administración a la ASF comenzó el hostigamiento y acoso laboral, cuando cerraron los cubículos con sellos, intervinieron las computadoras, saquearon los expedientes de esta auditoría, por ejemplo, misma que intencionalmente no continuaron; hubo coacción con guardias de seguridad, y actas administrativas, todas estas acciones por órdenes directas del auditor superior. Ya nos veían cerca de descubrir quién y cómo recibía y dispersaba los millones de efectivo, cantidad que se queda corta en relación con los procedimientos que debieron aplicar para constatar el monto total pulverizado.

En este sentido, si las autoridades quisieran llegar al fondo tendrían que investigar la cadena de pagos y proveedores, recabar datos y testimonios de cada uno de los operadores, tanto en las instituciones como en las dependencias involucradas; pero se requieren dos cosas Primordiales: ganas y exhaustividad. Es necesario precisar que estas omisiones y obstáculos para que las investigaciones en torno a la Estafa Maestra avanzaran no son nuevas, y por irónico que parezca comenzaron al interior de la propia ASF. Desde ahora conviene recordar que el titular de unidad jurídica hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar presentar denuncias y para dejar prescribir y abandonar muchos de los procedimientos resarcitorios y penales. A las denuncias presentadas, simplemente dejaba de darles seguimiento, como el ejemplo que ya abordamos del caso Veracruz en un capítulo anterior. Esto es tan evidente, que apenas en 2021 y 2022 presentaron las denuncias derivadas de las auditorías forenses que realizamos en la DGAF ¡en 2016 y 2017!

Hubo casos como un convenio de la SEDATU con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC) de la Cuenta Pública 2016, que tenía irregularidades por 168 388 millones de pesos, repetía mecanismos fraudulentos y presentaba entregables aparentando que

fueron realizados por el mismo ITSC; a pesar de que en algunos casos se documentó que dichos entregables coinciden con servicios pactados y pagados a otras instituciones educativas, se falsificó la firma del director general de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU, Enrique González Tiburcio, quien denunció esta falsificación tanto a Rosario Robles como al Órgano Interno de Control y a las autoridades.

La opinión jurídica de Víctor Andrade para que esta denuncia contra el ITSC no procediera, fue que "la documentación se había entregado en copia simple", que resultó el mismo argumento que utilizó para negar la revisión en otro convenio de la SEDATU, uno con la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, también de la Cuenta Pública 2016, con irregularidades por un monto de 106 838 millones pesos, y el mismo *modus operandi* de contratar a terceros para poder cumplir con el objeto del convenio SEDATU/DGAEG-UAIM/33901.06/2016, y entregables que en algunos casos coinciden con "servicios pactados y pagados a otras instituciones educativas durante el mismo periodo, o con trabajos financiados por instituciones internacionales".

En vez de observar un patrón consistente en por lo menos dos instituciones educativas que debía dar pauta para realizar investigaciones más exhaustivas y perfeccionarse jurídicamente para hacer las denuncias correspondientes, el ínclito envió como respuesta a mi petición una reveladora consideración final: "Sin prejuzgar acerca de la legitimación de la personalidad de quien presentó la denuncia, se resalta que la denunciante presentó escrito en su calidad de directora general de Auditoría Forense, quien practicó auditoría y detectó los mismos hechos irregulares que denuncia, en tanto que el artículo 59 de la LFRCF establece que 'cualquier persona podrá presentar denuncias, de lo cual puede colegirse que dicho término se refiere a ciudadanos'". Imagínense ustedes el alcance estúpido de esa determinación "jurídica" con la cual negaba en complacencia con el recién estrenado como ASF la posibilidad de confirmar las operaciones fraudulentas. Ambos encubridores y cómplices, por decir lo menos.

En el caso de Comalcalco, por ejemplo, con la presión que comenzó a ejercerse a raíz de sus conductas irregulares, se vieron obligados a realizar la auditoría, por desgracia el exrector que colaboró en las investigaciones estuvo encarcelado en Tabasco supuestamente relacionado con esta estafa, a pesar de que durante la fiscalización declaró que él no sabía que era un fraude, así que nos contó toda la historia y aportó elementos importantes para los resultados obtenidos.

Sin embargo, el rector que le antecedió tenía una larga lista de contratos efectuados con Pemex y la Sedesol y fue quien, al entregarle el cargo, le indicó que eran convenios ya autorizados y "hay que firmar acá"; pensaba que así se hacían las cosas. Cuando se dio cuenta, porque había algo que no le gustó, dijo que ya no iba a firmar y a final de cuentas es él quien sufrió las consecuencias jurídicas, mientras los que operaron, procuraron y contrataron siguen libres y felices. Es difícil de entender, ¿dónde están todos los recto res y

proveedores señalados en las auditorías forenses y denuncias que le entraron al negocio? Por qué él sí, y los demás no.

De ahí que las personas que saben algo tengan miedo de hablar, ven signos claros de que nadie las protegerá y que siguen las consignas a modo. ¿Quién querría ser testigo colaborador cuando ve a todos los pillos sueltos y en su pueblo como si nada pasara? ¿Cómo convencerlos de decir qué sucedió, y asegurarles que no les va a pasar nada?

Hubo otros que se salvaron de ser víctimas, como un exrector que me buscó y explicó que lo fueron a ver cuándo le faltaban tres o cuatro millones de pesos para el pago de su nómina, ya que la mayoría de las instituciones educativas del país está sobrepasada por las negociaciones que han hecho con todo tipo de representantes sindicales, y me dijo que necesitaba dinero para completar la nómina de un diciembre. Entonces lo fueron a ver de la SEDATU y le ofrecieron el esquema como algo que iba a beneficiar a la universidad, y entonces sintió que se le abrían las oportunidades para obtener recursos adicionales y resolver su urgencia de pago de nómina. Pero entonces, iniciando los trámites se dio cuenta de que como universidad no podía facturar servicios, les avisó y nunca más lo volvieron a buscar. “De la que te salvaste”, le dije.

En cambio, otros rectores, por ejemplo, el de la Universidad Politécnica del Golfo de México, también en Tabasco, al que extrañamente no le hallaron nada, se pudo llevar 20 millones de pesos limpios. ¿Dónde está? ¿Quién es? Nadie lo tiene en el radar; y como ese hay otros tantos, pues saben que no va a pasar nada. Es más, de las escasas denuncias que presentó la Fiscalía, ¿por qué no actúan contra los responsables directos que están claramente señalados y con la evidencia indiciaria y directa de sus conductas y omisiones? Siguen al parecer intocables y esto tiene que ver con relaciones, dinero y poder, ya que atrás de su desfachatez hay una reputación incalificable y una corrupción política sistémica relacionada con la oquedad de los discursos. En parte por eso ninguno de los involucrados ha mostrado remordimiento. Algunos que no estaban inmiscuidos o que fueron utilizados sí se arrepienten, pero temen cooperar.

Otra anécdota que permite ver el entramado de corrupción aconteció en septiembre de 2017, cuando hicimos una petición de información a la SEDATU sobre las revisiones programadas, y la respuesta firmada por el enlace de Rosario Robles expresó que “con motivo del sismo había daños en algunos edificios por lo que no iban a ver, recibir o darnos ninguna información, dada la imposibilidad”. Y así pasó septiembre, octubre y noviembre. Para ese momento las diferencias con Andrade en la Auditoría Superior de la Federación habían aumentado por la obstaculización permanente a nuestro trabajo, la clara omisión en sus funciones al grado de la negativa a presentar las denuncias y convencer al entonces auditor para modificar el reglamento y darnos facultades a todos los directores generales para presentar las denuncias de hechos. Quería, como hasta hoy, no tener responsabilidades, pero sí un buen sueldo y una gran estructura que era inoperante.

Otro indicio al respecto fue que en la Sedesol y la SEDATU se contrataron servicios con la empresa Six Sigma Networks México. Según una investigación publicada en el semanario *Proceso* (25 de julio de 2018),[15] esta empresa obtuvo contratos por 19 mil millones de pesos de 2012 a 2018, y de 35 contratos, 19 fueron por asignación directa. En el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), en 2015 se otorgó contratos a una empresa mexiquense que se llama Conglomerado Industrial de Suministros Biro, S. A. de C. V., con asignaciones directas. La apoderada era una licenciada en gastronomía, y también le dieron contratos a Informática Integral Empresarial, y a APP Juer. Todas ellas estaban de alguna manera vinculadas con temas de software, y casualmente ningún miembro de los Órganos Internos de Control asistió a estos fallos.

Al año siguiente, APP Juer obtuvo más beneficios a pesar de no poseer documentación soporte que demostrara la relación de especialista en el tema. En el contrato millonario de Six Sigma el expediente carece de información; ni siquiera un comparativo, un estudio de mercado o el proceso de licitación. En este caso nadie sabe tampoco cómo lo invitaron y llegó ahí APP Juer, únicamente aparece la empresa que es beneficiada. Se constituyó en 2013, y cualquiera se preguntaría cómo recibe un contrato millonario alguien que acaba de formarse legalmente si existen empresas nacionales e internacionales reconocidas en esas áreas técnicas.

El contrato los ubica con oficinas en Insurgentes Sur 1032, piso 4, pero resulta que en ese mismo domicilio está situada la empresa Desarrollo de Tecnologías Avanzadas del Centro, que también estaba en esa invitación a tres personas. Entonces, ¿cómo es posible que dos de los invitados para esa licitación tengan el mismo domicilio y representante? Porque además compartían los mismos nombres de empleados y uno incluso había trabajado en Bansefi.

Tan solo ellos recibieron cerca de 145 millones de pesos por tres años de servicios, con 16 personas trabajando en el proyecto, y cada año efectuaban convenios modificatorios, bandera roja de que algo no está bien: las simulaciones a todo lo que daban con trabajos que no se podían comprobar; ausencia absoluta del OIC, fabricaciones, engaño, manipulación. El tema sigue siendo el mismo, pues Bansefi fue por años caja chica de grandes negocios, ahí nombraban a titulares a los que querían consentir. Por ejemplo, veamos el perfil de quienes ocuparon ese cargo en los últimos años: antes de Virgilio Andrade estuvo María Fernanda Casanueva de Diego, nombrada por José Antonio Meade en octubre de 2016, que después se fue como oficial mayor a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Luis Videgaray. Su antecesora fue la Priista mexiquense Alejandra del Moral, y arrancando el sexenio peñista estuvo Jorge Estefan Chidiac, que otorga el contrato por asignación directa, y en Puebla había sido titular de Desarrollo Social con Mario Marín y secretario de la Contraloría con Manuel Bartlett. De los sueldos y prestaciones ni hablar, son de los mejores en el sector hacendario.

Al amparo del mismo esquema y *modus operandi* de la Estafa Maestra hay un contrato con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), por adjudicación directa, del 12 de enero de 2015 al 31 de enero de 2017, prorrogado por un año más, para actualización tecnológica, operación y mantenimiento; vinculados a simulación de servicios. Acababa de llegar Virgilio Andrade como director general a Bansefi. Casualmente también le solicitaron una cotización para la asignación directa de un contrato al Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, y de nuevo aparece como ganador APP Juer, que además ya prestaba servicios a la UANL, por 421 780 millones de pesos con el mismo concepto de proyectos tecnológicos.

Ese es solo un contrato, pero hay muchos más. ¿Con base en qué y cómo determinó Bansefi este costo o cifra millonaria para la contratación? Existe un sinnúmero de banderas rojas pasadas por alto, desde que debió ser una licitación nacional, y no hay ningún elemento que permita justificar el monto. Así se las gastaban.

Bansefi estaba programado para ser revisado cuando llegó Colmenares. ¿Qué sucedió y qué revisaron o dejaron de revisar por el pago de cinco mil millones de pesos en contratos para desarrollo de tecnologías y servicios? No se sabe.[16] Al menos tres veces por año cambian su programa de auditorías, y eso revela que no hay una planeación técnica seria y que existen componendas, incapacidad, ineficiencia y negociaciones.

Secretarios de Hacienda iban y venían y no hicieron absolutamente nada para evitarlo. Creo que por eso los mandaban ahí, pues en Bansefi no existían documentos soporte de revisión de los servicios ni órdenes de trabajo, algún entregable o la cadena de acciones que debe realizarse en cualquier actividad que implique servicios.

Además, la facturación de enero de 2015 a diciembre de 2018 no tenía el soporte documental requerido, y esto amparaba una suma adicional de 360 millones de pesos. ¿Cómo pudieron haber pagado esa cantidad sin ningún soporte? Todas estas acciones empezaron desde 2015, coinciden con la entrada de Jorge Estefan Chidiac y en una línea de tiempo le siguen Del Moral, Casanova de Diego y Virgilio Andrade. Fue un *outsourcing* de servicios de apoyo a los sistemas del banco, y esta investigación para deslindar alguna responsabilidad tampoco se realizó. Era un área de oportunidad para hacer una buena revisión porque en todos esos proveedores seguramente había deficiencias en los contratos, entregables, facturas vencidas, subcontratación, o pagos a cuentas de terceros que no estaban vinculados.

Esos conceptos de contratación son bastante relevantes, dado que son hallazgos que tienen que ver con sistemas de software o de tecnología de información con un valor de alrededor de 690 millones de dólares, y no hay ninguna información clara que permitiera seguir la trazabilidad de los servicios prestados.

Este tipo de instituciones financieras deberían ser dirigidas por profesionales éticos con la experiencia financiera, bancaria, de economía o derecho, pero ¿por qué siempre políticos o diputados? Son gratificaciones o concesiones a los cuates en una de las entidades mejor

pagadas. Quizá por eso la revisión y seguimiento a Bansefi sigue en la nada. Se ejercieron millones, los Órganos Internos de Control y la Secretaría de la Función Pública siempre ausentes porque los dejan hacer, y la consigna es "no se metan ni revisen".

De hecho hubo más irregularidades. Algunas fueron denunciadas ante la FJR en 2019 y ante la CNBV, que investigó al banco por la dispersión de recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) a los damnificados por el sismo de septiembre de 2017 en Oaxaca, al parecer también relacionada con la simulación de un censo de damnificados hecho por la SEDATU, el cual incluía abrir miles de cuentas de débito y un padrón de proveedores discrecionalmente seleccionada. Apenas en diciembre de 2022 este caso se perdió ante el quinto tribunal unitario penal de la Ciudad de México, que ratificó no vincular a proceso a los imputados porque la fiscalía no pudo acreditar los delitos, y lo más penoso, por una errónea clasificación del delito por parte de la fiscalía general. Hablamos de que los hechos sucedieron en 2015 y apenas en abril de 2022, siete años después, se formuló la imputación contra los ocho exfuncionarios señalados. Yo no creo en las coincidencias ni en los errores en casos de esta naturaleza.

Lo mismo ocurrió con los contratos que supuestamente hicieron Ramón Sosamontes, de la SEDATU, y algunas áreas de comunicación de las entidades de los estados. Si se quiere hacer *spots*, videos y promocionales, hay que reunirse con ellos para ver las características elementales del producto que se requiere, qué mensaje, a quiénes va dirigido, qué quieren difundir y un sinnúmero de entrevistas para tener claro lo que se requiere y asegurar la calidad. Mismo esquema y *modus operandi*. Claro, sin dejar de lado que existía un área a nivel Presidencia dedicado a realizar la producción y elaborar diversos *spots* para el Ejecutivo federal. En este sentido, es triste saber que la justicia ha sido muy selectiva.

Ahora bien, en octubre de 2018 la ASF presentó una denuncia de hechos en relación con la auditoría forense 196-DS, denominada Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios, la cual se efectuaría a partir del 3 de mayo de 2017 en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM), para hacer el padrón y manuales de gestión de programas de la SEDATU, y presuntamente no se llevaron a cabo los servicios, pero sí recibieron recursos que luego entregaron a cuentas de proveedores y distintos funcionarios en 2016 y forman parte de las irregularidades observadas.

Esta revisión fue iniciada bajo nuestra gestión y retomada después de mi salida por el grupo entrante. La denuncia fue presentada por Heladio Ramírez Pineda, director general jurídico, quien concluyó que:

Se determinó que los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) realizaron un pago por la cantidad de 185 839 480 pesos con 56 centavos, a favor de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM) al celebrar el primer

Convenio Específico número SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016, sin asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, debido a que la UPFIM no contaba con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato, razón por la cual, la referida institución educativa, subcontrató más de 49% permitido por la legislación aplicable, aunado a lo anterior, la UPFIM no acreditó que las empresas contratadas denominadas Contabilidad y Soluciones INNER SA DE CV y Asesores Contables Administrativos VICMA SA de CV, hayan realizado los trabajos objeto del convenio específico de referencia, quedando en evidencia el desvío de recursos públicos federales a terceras personas y/o empresas ajenas al cumplimiento de la encomienda, lo que ocasionó un daño a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 185 839 480 pesos con 56 centavos.

En noviembre de 2022 vino el primer golpe al corazón de este caso emblemático de corrupción, cuando el juez de control federal del Reclusorio Norte absolvió al exrector de la UPFIM de Hidalgo del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades y dictó la primera sentencia absolutoria al concluir que "no existe delito en una contratación acusada de indebida por 185 839 480 pesos con 56 centavos para desarrollar un software para el Centro Ciudad de las Mujeres en Tlapa, Guerrero, y que es un asunto que debe ser sancionado por la vía administrativa y no penal". Señaló el juzgador que lo indebido radicaba en que la UPFIM subcontrató 97.91% del monto total del contrato, y que esa infracción no podía ser sancionada por la vía penal.

Fíjense nada más en lo lamentable de la impericia y el desdén de los funcionarios de la ASF, quienes, con el pobre desarrollo del contenido de la denuncia y la conclusión que ahí determinaron, abrieron la puerta para perder el caso; debieran ser considerados responsables de ejercicio indebido y negligencia en sus funciones, ya que entender los hechos y el caso les hubiera evitado hacer lo de siempre, penosamente realizar un *copypaste* del dictamen de auditoría; pero esa no es su chamba, su trabajo es construir la denuncia a partir de los hechos y presentar un caso robusto; sin embargo, la pereza y lo que por lo regular han hecho para no afectar a ninguno de los "cuates" es abandonar las denuncias a su suerte y eso se puede apreciar simplemente en la revisión de la denuncia y en el propio expediente técnico.

La conclusión que soporta la denuncia de hechos careció de una argumentación y vinculación de hechos concatenados entre sí que pudieran demostrar la trazabilidad de los recursos y la participación de cada uno de los servidores públicos; tampoco realizan el análisis integral con el conjunto de indicios que, apreciados en el contexto del cúmulo de datos de prueba, permitieran conocer modo, tiempo y circunstancia de los hechos.

Estos errores jurídicos, tanto del titular de la unidad de asuntos jurídicos como de su inferior jerárquico, son imperdonables e inaceptables, omitieron la revisión y supervisión de la denuncia, así como el impulso procesal apropiado con el fin de asegurar que la fiscalía general llevara a cabo todos las actuaciones y actos de investigación que permitieran

plantear la teoría del caso idónea y pertinente, misma que se debió construir desde la ASF con una denuncia de hechos impecable.

Simplemente leyendo sus conclusiones y sin aportar mayores datos obtenidos a partir de sus pesquisas queda claro que estaba destinada a dejarla perder. Estos supuestos errores se miden por su significado. Pareciera que tales acciones giraron en torno a un propósito común de encubrir y cerrar investigaciones, expedientes, procedimientos, responsabilidades, para perder los casos.

Con el mapa de vínculos como anexo y apoyo visual que permite entender el contexto, así como al visualizar la trazabilidad de los recursos, desde su origen hasta su aplicación, pasando por todas las rutas que pudieran determinarse con otros actos como evasión fiscal, vinculación de proveedores y representantes legales, pagos inusuales a servidores públicos de áreas sensibles en un proyecto en una comunidad alejada y con un perfil informático, aunado a la prueba circunstancial obtenida y los testimonios proporcionados por distintas partes, se hubiera construido un caso robusto.

Copiar y pegar los datos contenidos en los dictámenes de auditoría ha sido la política de siempre en la Unidad de Asuntos Jurídicos. No existe un auténtico interés de lealtad y de servicio, pero sí de servir al grupo de poder al que pertenecen.

De la lectura al informe de fiscalización de esta auditoría se advierte con claridad el conjunto de acciones desplegadas para simular servicios y desviar el recurso en un esquema que incluyó empresas fachada, pagos a diversos funcionarios públicos activos durante la vigencia del contrato de la PGR, Aduanas, la SEDATU, Migración, Transportes Aéreos, por decir algunos; estas banderas rojas muestran áreas estratégicas con funcionarios de alto nivel que podrían estar operando este esquema dados los antecedentes de las revisiones anteriores.

¿Por qué y cómo se involucraron tales servidores públicos con esas empresas? ¿A qué hora iban a Tlapa a realizar las actividades y cuáles eran? ¿Quiénes los contrataron? ¿Cómo les pagaban? ¿Estaban dados de alta en el IMSS? Bueno, un cúmulo de preguntas que podrían haber clarificado el caso, así como impulsar actos de investigación por parte de la Fiscalía, a partir de los datos e indicios recabados; pero no, se aventaron una carpeta de investigación sin contenido forense y al final, por los resultados, no se pudo hacer la conexión con los testimonios que contenían contradicciones entre las partes.

Una parte interesante para rescatar es la declaración del propio exrector Juan de Dios Nochebuena Hernández, quien en su testimonio rendido ante el juez expresó que “nunca conoció ni se reunió con funcionarios de la SEDATU para suscribir dicho convenio, sino que la secretaría se lo mandó firmado a su oficina en Hidalgo”. Que nunca se reunió con los exfuncionarios Enrique González Tiburcio ni Armando Saldaña Flores para suscribir el convenio específico.

Si no conoció nunca a funcionario alguno de la SEDATU, las indagaciones debieron partir a la etiología del caso: ¿cómo inició el contacto? ¿Quién y cómo lo buscó? ¿Quién era el vínculo? Y ¿cómo se dieron cada uno de los pasos estructurados que integran una contratación de esa naturaleza? Desmenuzar cada uno de los distintos momentos: ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿cómo se dieron las pláticas?, un sinnúmero de líneas de investigación; es decir, pulverizar cada paso del proceso de contratación y hasta la ejecución, la búsqueda de proveedores, contrastar los testimonios, la falta de entero de los impuestos del SAT, descripción de la adquisición y características de los servicios, ¿quiénes intervinieron?, ¿cómo se transportaban?; todos los pasos hasta la supuesta entrega de bienes. De haberse efectuado, seguramente los resultados podrían haber sido distintos al intentar unir las piezas del rompecabezas.

En concordancia con las declaraciones del exrector y pese a su denuncia, González Tiburcio fue sometido a un proceso judicial por falsedad de declaración, aunque denunció que no solo no era su firma, sino que en la oficialía mayor se había dispuesto y pagado de recursos públicos al amparo de ese convenio. A decir suyo, la estrategia que utilizaron fue la de robar y protegerse. De ahí que los recursos no pasaran directamente por su oficina, la falsificación de su firma y la de un subordinado en junio de 2017; era una forma de "embarrarlo" en el problema por la animadversión que Zebadúa González le tenía. En parte por razones de índole personal, y en parte por la dinámica de trabajo que utilizaba Robles, quien generaba competencia entre los funcionarios picándoles el amor propio.

De las declaraciones ante la fiscalía general, uno de los funcionarios que se encuentra en prisión, de apellido Orozco, reconoció haber firmado tres contratos y que le habían falsificado cuatro; otro más de apellido Torres, conforme la causa 383/2018, declaró que le habían falsificado 13 firmas en contratos vinculados a la Ciudad de las Mujeres en Tlapa de Comonfort. Esta serie de testimoniales que forman parte de la prueba circunstancial no han tenido mayores líneas de investigación conocidas y eso inhibe a quienes quisieran declarar o aportar mayores datos. Simplemente no pasa nada. La negligencia, impericia y falta de cuidado profesional, aunado al desconocimiento, permitió que el caso se perdiera. Sin datos, una denuncia por corrupción emanada de un órgano fiscalizar no se considera más que una opinión. Vergonzoso.

Hay una historia, publicada en donde dos exservidores públicos se libraron de las denuncias ante la Fiscalía de Baja California, donde el Ministerio Público dio "carpetazo" a tres de ocho querellas penales por "falta de elementos probatorios", según la autoridad investigadora local. Ambos exfuncionarios no aclararon con precisión dónde está el dinero de los programas etiquetados para obras prioritarias en colonias marginales, estación de bomberos, alumbrado público, tuberías de agua, armamento para policías, patrullas, aulas escolares y áreas deportivas y recreativas.

Conforme aparece en la carpeta de investigación FED/BC/ENS/000490/2019, del 18 de abril de 2018, la Fiscalía decidió no ejercer la acción penal con el argumento de que el director

general del Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Heladio Elías Ramírez Pineda, no interpuso querella respecto a los hechos que integran la carpeta.[17]

Otra denuncia más reciente, también contra él, es la UEC/IA/056/2022, presentada el 24 de noviembre de 2022, por hechos presuntamente irregulares en donde la denunciante describe actos por demás deleznables y de una gran bajeza; esperemos a ver si hay avance, aunque desde ahora preveo que no será así y que la UEC intentará desviarla al ámbito laboral. Son tan predecibles como desprestigiados.

Y con todo esto me pregunto: ¿qué hará David Villanueva Lomelí en su calidad de titular de la UEC? ¿A qué se dedicará cotidianamente? Por lo regular no se le encuentra, y además, para acudir a dejar cualquier correspondencia debe avisarse, ya que no permiten libremente la entrada a la Cámara de Diputados —el edificio del pueblo—, menos a su oficina, y en su función como responsable de evaluar el desempeño de la ASF y vigilar que sus integrantes cumplan con las disposiciones legales aplicables ha dejado mucho que desear buscando su reelección y su posterior incorporación al gobierno de Puebla. Ya va para cinco años cobrando toda la camarilla con un presupuesto anual millonario gastado en sueldos, viáticos y comisiones banales; deben estar ocupadísimos, porque en el ejercicio fiscal 2021 únicamente llevaron a cabo en la ASF ocho acciones de revisión (seis auditorías, una evaluación técnica y una revisión de seguimiento) y para 2022 el mismo número de revisiones (seis auditorías, una evaluación técnica y una revisión de seguimiento). Reprobado por mucho.

Háganme el favor, porque no puedo anotar la palabra que pasó por mi mente. El trabajo toral, significativo y de alto riesgo en la ASF se centra en la planeación y ejecución de auditorías; en los resultados donde se presumen faltas administrativas graves y que deben enviarse al área de investigación; en la atención a seguimientos y solventaciones, los procedimientos resarcitorios, así como en el inicio de procedimientos administrativos que han sido denunciados por corrupción al haber dejado intencionalmente perder varios casos por desvíos millonarios, al notificar el inicio del procedimiento uno o dos días después de prescrito el plazo legal; en todos estos caminos que ya conocemos opera el efecto corruptor.

Sin olvidar el grave rezago en la atención de la información que se envía por parte de los entes fiscalizados para su análisis y solventación respectiva o el pronunciamiento de no solventación; revisión a los resultados de las auditorías a la obra pública y otros ca sos de corrupción emblemáticos corrupción. Sin embargo, las denuncias de hechos y los seguimientos que debieran supervisarse de manera puntual por parte de la Comisión de Vigilancia se han dejado de lado por pactos convenidos; igual sucede con la falta de revisión de las cerca de 1 300 auditorías que realiza la ASF, qué pereza, (mejor de una vez que revise la caja chica para pasajes diarios).

Sin embargo, la actividad programada de la evaluación técnica se integra por cuatro auditorías, en las que se evaluará el proceso de fiscalización que efectuó la ASF en

cumplimiento con las atribuciones establecidas en el marco jurídico y normativo, aplicable a su programa de trabajo realizado para atender sus funciones, y menos de los resultados, que por su naturaleza deberían ser públicos. De las investigaciones, procedimientos, casos públicos y el cúmulo de denuncias públicas y otras hechas de su conocimiento en las diversas reuniones con diputados, nada ha hecho.

Creo que los funcionarios en la Sedesol y la SEDATU tenían una idea preconcebida y equivocada de la ASF, pensaban que era como la Secretaría de la Función Pública, sometida a sus intereses y que podían hacer lo que les diera la gana en relación con nuestras peticiones; como lo hacen con los sumisos. Sospecho que nos subestimaron; debieron pensar que no se llegaría al fondo del asunto, dado el control que ejercían sobre las dependencias que tenían las funciones de investigar y sancionar.

Esa arrogancia los ha llevado hasta donde están ahora, y cuento todo esto porque en alguna ocasión me inquirieron: "¿Vas a revisar a Peña Nieto? Quiero verlo, y a ver qué dice Nuño". Implícitamente me dieron a entender que en la oficina presidencial ordenaban y que Nuño conocía todo acerca de estos contratos, que estaba al tanto o atrás de esto. Además de que ejerció más de dos mil millones de pesos en comunicación social cuando estuvo en la Secretaría de Educación Pública, o tenía una dirección compartida con Luis Videgaray para recibir notificaciones ante el IMPI, en el mismo inmueble donde estaba registrado el domicilio fiscal de algunas subsidiarias del Grupo Mac Multimedia, que recibió más de 29 mil millones de pesos de beneficios de comunicación social y publicidad gubernamental, pero ni al nuevo gobierno o a la ASF les interesa investigar a ese caballero.

Cuando informamos los resultados a Rosario Robles en una reunión en la ASF con el titular, de modo arrogante, por no decir altanero, dijo que ella estaba muy contenta con las universidades, que recibía los entregables y seguía trabajando para combatir la pobreza, cosa que no comprendíamos. Supongo que se creyó aquello del "no te preocupes, Rosario", le encontró una justificación con su propia narrativa y un desplante de moralidad. Se notaba que cuando ella estaba todos se achicaban y buscaban que los sacara del embrollo en el que los había metido; eran incapaces de responderle, pues son parte de lo mismo y han obtenido el puesto por sus intereses y afinidades comunes.

Ese sometimiento sin duda contribuía a pensar que nos podría ningunear a quienes estábamos ahí, pero le salimos respondones y con evidencia en la mano. Ya solo me invitaron a otra reunión, porque para sus parámetros mi actitud debía ser amable y cortés, y en cambio me describían como "agresiva", a lo que yo llamaría directa y sin ambages; pero era el modo de discriminar a una mujer profesional por decir lo que es, hacer las cosas distintas, tener una visión integral y romper paradigmas.

Para la siguiente reunión habíamos avanzado en nuestras investigaciones, documentamos la ruta del dinero que habían desviado, todo lo que habíamos averiguado de los proveedores, y no pudo argumentar nada más que el mismo rollo aprendido. Los resultados

nos llevaron a lo que ya todos conocemos. Cuando la cambian intempestivamente a la SEDATU, en agosto de 2015, los contratos vigentes de la Sedesol con todas las universidades y entidades de comunicación social casualmente empiezan a modificar las fechas de terminación, adelantándolas para adecuarlas a las fechas de su salida. Si eran contratos vigentes ¿por qué tendrían que cambiar la fecha de término? La que salía era ella, pero la institución seguía.

Al llegar Meade como secretario, realmente pensamos que algo bueno iba a ocurrir, pero no fue así. primero, para que derivado de la entrega de la secretaría conociera las observaciones y denuncias que existían y pudiera querellarse en su calidad de víctima, nada sucedió. Tampoco al interior con las facultades como titular, realizar las investigaciones correspondientes y darle vista al OIC, pedir a los rectores una reunión, ver qué habían hecho, entablar procesos contra quienes fueran responsables de haber otorgado contratos y desviado los recursos en esas condiciones. Incluso en su momento circuló el comentario de que en la oficina de Robles no le habían dejado ni los muebles, lo cual no deja de ser interesante, pues insinúa cuál era su estado de fuerza real. Ahí me saltó su amistad con Jaime Valls, quien también participó en las firmas de convenios y se prestó a esa serie de *modus operandi*. Eso puede dar una pista del nivel de involucramiento, y por supuesto lo convierte en partícipe de los convenios que firmó tanto en la UNACH como en su encargo en la ANUIES.

En cuanto a los hechos, existe un oficio de un funcionario que estaba en la Sedesol, Luis Vives, con copia a José Antonio Meade, donde dice que tras una búsqueda exhaustiva en los archivos no se encontraron ni se identificaron elementos distintos a los aportados por la ASF. Eso quiere decir que no entregó nada, puesto que Vives fue quien nos proporcionó a nosotros 16 anexos para decir que con eso se validaban las contrataciones y contratos. En ese momento, el mismo Vives dijo que al equipo de Meade nada más le habían entregado un documento sin firma en el que dijeron que estaban haciendo las conciliaciones y gestiones necesarias ante la UAEM para evitar que esto sucediera.

Cuando sentían que José Antonio Meade, entonces candidato presidencial, estaba por perder la contienda, se echó a andar la trama encabezada por diputados del PRI en colusión con integrantes de la Comisión de Vigilancia —que contaré un poco más adelante—, para exigir que la ASF lo relevara de responsabilidad en todo ese entramado de la mediática Estafa Maestra; ¡qué inerme la ASF en ese trance para defenderse adecuadamente de la corrupción en el poder! Como les falló, optaron por buscar un candidato a modo para convertirlo en el nuevo auditor de la Federación.

Antes de regresar sobre esta y otras intrigas para bloquear y descarrilar nuestras investigaciones, es importante decir que me parece que la fiscalía general ha dejado mucho que desear en relación con los actos de investigación que debiera realizar hacia todos los involucrados, más aún, se han perdido ya algunos casos, lo cual permite inferir que la impunidad se placea consensuada.

Dentro de este proceso aparece toda una red articulada con operadores intocables —a querer o no—, la cual manda el mensaje de que siguen siendo fuertes, protegidos y que no les preocupa. Tienen el qué y el cómo. Y qué decir de las instituciones y universidades que "acordaron" no revisarse por la ASF; afortunados defraudadores unidos a grupos políticos que ni siquiera están señalados y se quedaron con millones. ¿Dónde está ese dinero y los operadores, llámense proveedores funcionarios y otros involucrados externos, y el jefe supremo? ¿Cuándo investigará y citará la FJR a comparecer en un verdadero ejercicio de entrevista forense a aquellos involucrados en cada uno de los eslabones que permitió el cuantioso desvío de recursos de la Sedesol y SEDATU, y a quienes incluso han tenido un papel más relevante?

Qué decir de la violencia emocional y simbólica de la cual fuimos víctimas el personal auditor que laboraba en la DGAF por investigar y revelar estos hechos trascendentes que incidieron en las elecciones y en el colectivo, como el hartazgo ciudadano por tanta corrupción, y que nos confronta con una realidad inocultable: la barbarie a cambio de un puesto en una competencia política por servir a los amos, violencia silenciosa que no se había visto en este nivel de persecución, con el silencio ominoso de quienes pudieron y debieron levantar la voz, y la ley para poner un alto a esas atrocidades. Sin embargo, fueron cómplices del derrumbamiento desde adentro de una institución reconocida que lo fue hasta la llegada de esta pandilla de operadores en una clara acción destructora con intimidación brutal y ofensIVA contra mi persona, que abordaremos en el siguiente capítulo.

3

La jauría

Del entramado existente en las relaciones y decisiones políticas que mueve dinero y poder, se revelan distintos grupos con sus propios mandamientos y ordenamientos, que resguardan secretos relacionados con los numerosos pactos y protecciones explícitos o implícitos del poder político y económico.

No cualquiera puede llegar a esos niveles sin tener las características patológicas que el cargo requiere; la capacidad y mérito profesional son lo de menos. Así son las grandes y patéticas "historias de amores, desamores y patadas en traseros partidistas", sus rencores, revanchas, servilismo y ambición. Los mayores pecados capitales reflejados en su ejercicio y cotidiano devenir político: soberbia, envidia, codicia, ira, gula y pereza, donde la oportunidad se abre en momentos inesperados y unos serán sustituidos por otros para saldar cuentas pendientes.

Así las cosas, la Estafa Maestra abrió muchos ojos y puso sobre el escenario a numerosos actores, productores y comediantes de esta obra maestra, que es apenas una muestra de los títeres-políticos hambreados que planearon y ejecutaron de manera perversa, fría y ventajosa una estrategia con un sinfín de procedimientos enmarañados e ilícitos, para

obtener recursos públicos millonarios mediante un descomunal saqueo portando la corona de la indecencia del sexenio más corrupto conocido en México, del que salieron invictos y millonarios unos, y otros integrantes de esa jauría obtuvieron cargos, posiciones, prebendas, favores, mientras otros disfrutan su victoria monetaria, política y de poder.

La sucesión

Acudí a registrarme al proceso para la designación del auditor superior de la Federación para el periodo 2018-2025 (por una serie de indicios supe que no se reelegiría el auditor y decidí inscribirme al proceso), le llamé a Juan Manuel Portal a finales de noviembre de 2017 para compartirle mi decisión, mientras él permanecía en espera de "una señal" sobre la determinación del que aún cobraba como presidente de México para reelegirlo. "Como veo que no te has inscrito y en dos días vence el plazo, quiero visibilizarme y que al menos sirva para que se conozcan los resultados de auditoría derivados de la Dirección General de Auditoría Forense (DGAF); en caso de que te den buenas noticias, por supuesto declinaría mi participación", le dije.

Coincidí en la oficina de registro con otros aspirantes colegas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como Fernando Cervantes y Arturo Orci; fuimos únicamente dos mujeres inscritas en el proceso de un total de 41 registrados, y en los 15 finalistas resultó la "triste novedad" de que no aparecimos ninguna de las dos.

Además de la diversión y lo anecdótico que mandata esta simulación del proceso, decidí participar sabiendo que en el fondo era equiparable al cuento de las mil y una estafas maestras, porque las reglas "políticas" no escritas indican que hay que acudir con la venia de un "mecenas", mirada sumisa, cabeza caída y sonrisa lisonjera para buscar a cada uno de los finísimos diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF, y suplicarles, en una pasarela absurda, que nos reciban y entrevisten para rogar por su voto, como si de verdad tuvieran el decoro, la valentía, el conocimiento técnico y la ética profesional para tomar la mejor decisión al levantar el dedo votador y emitir sus preguntas y opiniones especializadas durante la comparecencia de los aspirantes; no vaya a pensarse ni por un minuto que son dependientes y lacayos de su coordinador y "líder". Sería ingenuo pensar que no es así.

Fue un gran aprendizaje que me hizo constatar la precaria condición humana que pareciera característica obligatoria en perfiles legislativos. Supe que durante sexenios han venido operando los mismos ritos vergonzosos, huecos e indignos, con absoluta falta de ética y profesionalismo, aunado al sometimiento misógino partidista, sin importar su nivel cultural o de educación. Las negociaciones en los nombramientos se basan en promesas insulsas, la mentira, la exaltación de las figuras y acuerdos cupulares por encima de la legalidad. Aquí no juega el conocimiento ni la trayectoria o el mérito profesional.

No estoy descubriendo el hilo negro. Sabemos cómo son a modo estos "concursos aparentes". Las redes de relaciones organizadas en complicidad y control de los partidos son capaces de acordar lo impensable. Esta es una de las razones del porqué algunas instituciones han perecido o se encuentran en fatal agonía. No existen, ni existirán, controles preventivos o disuasivos capaces de luchar contra la podredumbre de un sistema orgulloso de adoptar y aplicar los mecanismos de corrupción aprendidos y practicados durante años. Y sucedió: eligieron al peor auditor, el idóneo a la altura de quienes lo nombraron. Puedo ahora juzgar su actuación porque conocí sus motivaciones más profundas.

La llegada del oaxaqueño David Colmenares Páramo a la ASF y su peculiar nombramiento no fue casualidad; "amor con amor se paga". Del ahora auditor Colmenares, por ejemplo, hay testimonios de los auditores y directores generales sobre su "no gestión", de junio 2012 a octubre de 2013, quienes aseguraron que "no recibían instrucciones ni directrices sobre el trabajo de fiscalización; nunca estaba, llegaba tarde, muy tarde, vivía en supuestos desayunos y comidas, no tenía la menor idea de fiscalizar, menos de la existencia de normas, procesos, lineamientos internos y sistemas informáticos en la ASF, ni siquiera entendía cuál era su función para reportar avances en el Consejo de Dirección", le gustaba hacer ofrecimientos "de servicio" a sus congéneres partidistas.

Del programa anual de auditoría, ni idea tuvo ni tiene ahora mismo. Sus "compromisos" eran tan frecuentes que asistía menos de 50% del horario laborable, eran desayunos, luego comidas; incluyendo sus viajes a Oaxaca, razón por la cual los jueves, regular mente alrededor de la 1:00 p. m., se iba para regresar los lunes o martes por la tarde, normalmente a mediodía; por eso siempre trataba de indagar qué compromisos tenía el entonces auditor esos días. Las ocasiones que era llamado a la oficina del entonces titular normalmente no sabía ni podía contestar ningún cuestionamiento sobre el avance de los trabajos, ya que, aun cuando hubiese sido informado, veía los asuntos sin interés, nada sabía del fondo, y su solución era pedir tarjetas informativas. No pocas veces varios funcionarios tuvieron acuerdo con él, mientras él veía un partido de futbol.

Repentinamente, la Auditoría Especial del Gasto Federalizado se llenó de sus alumnos, a algunos los llevó para prestar su servicio social y después fueron contratados, todos por honorarios. Era tal su predilección por sus estudiantes que con frecuencia pasaban horas platicando con él; mientras los directores generales hacían antesala o los regresaban a sus oficinas para luego avisarles a qué hora podían pasar a acuerdo.

Como era de esperarse, en 2013 fue despedido y nadie preguntaba la razón, era obvio. No obstante, tiempo después, aunque ya tarde, el exauditor habló lo que debió documentar y expresar desde su integración en la lista de los aspirantes a la ASF para informar abiertamente la verdad: "No trabajaba, no hacía bien las auditorías, era lento y no les daba seguimiento a las cosas. Se la pasaba en su celular, no atendía las reuniones ni el consejo de dirección, siempre llegaba tarde o no estaba cuando se le requería; nunca sabía nada, iba sucio y desaliñado, se la pasaba en actividades, tratando de negociar las auditorías".

Recuerdo haberle dicho al entonces auditor Portal que la línea iba dirigida hacia Colmenares, que ese sería el sustituto. No lo creyó y desdeñó mi afirmación; quizá confiaba más en la boca y promesas de tanto rufián conocido, pues agitando en la mano una tarjeta informativa me dijo que no lo sería y que ya les había informado a sus dos enviados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Enrique Peña Nieto qué clase de funcionario había sido el tipo, ignorante y haragán; les dijo todo lo que necesitaban saber sobre su comportamiento inaudito.

En esa transición hubo escarceos y diferendos entre los partidos con el tema de la reelección, por eso resultaba importante haber permanecido con la decisión inicial de ocho años atrás, cuando expresaba que no se reelegiría precisamente para no generar ningún compromiso y tener independencia absoluta para llevar con objetividad y dignidad su encargo. Sin embargo, el poder modifica a las personas, y a pesar de esos discursos se dejó llevar por el canto de la sirena y hasta el último momento tuvo la esperanza de que lo apoyarían para otro periodo. El linchamiento era en abonos.

Hasta el último minuto le estuvieron jugando la cabeza mensajeros como César Camacho o Alfredo del Mazo, que llegaban en helicóptero a la auditoría, al estilo de Emilio Lozoya. Parecía, creo, que Camacho le ponía con gusto el pie encima al entonces auditor, quien no entendió que la traición venía desde las entrañas del Estado. “Yo voy a exigirle al partido que seas tú”, le dijo Josefina Vázquez Mota, “ya lo acordamos con Anaya y Marko; hasta Santiago Creel está de acuerdo”. Los mecanismos puestos en marcha, pero desarticular una red donde fluían todos los intereses y nexos. ¡Todo sea por la gobernabilidad, señores! La de ellos, por supuesto. Todos abonaban al caos y a la incertidumbre, y cómo no, si se jugaba lo más importante: la rendición de cuentas pasada, presente y futura. Miles de millones saqueados y la evasión de responsabilidades administrativas y penales.

Cuando se enteró por Vázquez Mota que al día siguiente se publicaba la convocatoria y no habría reelección, pero con la promesa del pan de seguir buscándola, le daba el último aliento, y Juan Manuel Portal dejaba hasta el último domingo como límite para su registro y entrega de documentación, si las circunstancias le iban a ser convenientes. Esperaba como señal que le llamara el mismísimo presidente Enrique Peña Nieto, era al único que le confiaría, y que, si no era reelegido, entonces que fuera Aristóteles Núñez. Háganme el favor.

Qué desesperación y sentimientos le generaría, que había preferido a un extraño perteneciente a la estructura de poder corrupta, que permitió el saqueo y fue omiso en su actuación el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en relación con las denuncias presentadas por la ASF con motivo de las empresas y esquemas fraudulentos descubiertos durante la fiscalización: centenas de proveedores ficticios, empresas fachada. Ahí le dio la estocada final a la ASF.

Cómo lo tuqueaban con que “tú eres el mejor, a ti te queremos ahí, no hay mejor perfil”; el inconveniente, más bien digo, “la proglema”, es que “usted tiene un problema con Rosario

Robles". Así se la cantaron al final de tanta tortura y promesa innecesaria. "El problema no lo tengo yo, lo tiene ella, respondería Portal; busquen cómo solucionar eso porque ese es problema de ustedes. Yo no la mandé robar". Ahí saltaba el prieto del arroz, como se dice coloquialmente, seguido esto por una interpelación encubierta, digamos; una insinuación sobre la independencia de los auditores. Claramente se referían a mí, andaba muy suelta, decían, aludiendo que ese era el problema, solamente que no acababan de entender que la línea es que no había línea sobre los auditores en la ASF. Tan claro como los resultados que se obtuvieron durante ocho años.

Para mí, con todo lo sabido, esa falta de definición ya implicaba una decisión clara de no apoyarlo, entonces para qué aferrarse al poder, y más, depender y deber favores a grupos tan mezquinos. Pero seguían cotorreándolo con mensajes como los de Luis Maldonado: "Ya hablé con los naranjas y con los amarillos" para sacar los acuerdos, pero todos estaban del lado que mascara la iguana: no quedarían mal con sus patrones ni con sus propios intereses. De manera descarada y con descuido absoluto en las formas; absolutamente carentes, todos ellos, de solvencia moral.

La respuesta a su suplicio fue que, si quería inscribirse, tendría la misma oportunidad que los demás aspirantes. Aún con la esperanza, él también —en corto— llevó a cabo su visita de las siete casas (o cazos) para buscar su reelección: César Camacho, Ricardo Anaya, Marko Cortés, Francisco Rojas, Josefina Vázquez Mota, Jesús Zambrano y Francisco Martínez Neri. El mensaje de consuelo final que le dio Marko era que si se lograba la decisión de que fuera el ungido, le llamaría por teléfono con el mensaje de "disfruta, diviértete", para que entonces se presentara su registro y documentos. Qué manera tan sucia de regodearse y vengarse con tanto encono guardado, y por otra parte mantenerlo en vilo; pero hay quienes se niegan a ver al elefante en el interior de su sala, como dicen. Y así le sucedió. Todo era un cochinero, realmente.

Pero ocurrió la ruptura, no hubo decisión para su reelección, y a mediados de diciembre acudió a Francisco Rojas, cuando estaba caliente la elección de la terna, para enviar un mensaje: "Puedes transmitir a quienes tomarán la decisión que sería nefasto permitir que David Colmenares llegue a la ASF; yo lo corrí por inepto, por desconocimiento de su responsabilidad y desconectado en todas las reuniones del Consejo Directivo, donde solo jugaba con sus aplicaciones [...], podría abundar sobre su pobre actuación, pero igual sucedió con su paso por el TFJA [Tribunal Federal de Justicia Administrativa]".

Cuando apareció Colmenares en la terna final, el "te lo dije" sobraba. No cabe duda de que omitir es un modo de mentir. En aquel momento ya se había puesto en marcha toda la caravana para aceitar el camino de las indulgencias al que entreveían, sería ganador en la elección. El exauditor jugó mal, porque, aunque en 2009 en su discurso inicial dijo que no se reelegiría precisamente para evitar convertirse en servil y pedidor de un grupo político para lograr su beneplácito, perdió el rumbo. Sí quería, sí lo buscó, y cuando Luis Maldonado y César Camacho le indicaron que no hubo consenso, su intención entonces fue reventar el

proceso con la idea de colocarse él o a un cercano en la nueva convocatoria para septiembre de 2018. Creyó que, si caía la terna, él tendría oportunidad de maniobrar en otra negociación con el nuevo alineamiento electoral.

El mismo día transmitió a Ricardo Anaya su gran preocupación por el riesgo de que Colmenares quedara al frente de la ASF, revelándole que a su breve paso por ella se dedicó a hacer relaciones políticas, que dejó un enorme rezago en la atención de los asuntos, corroboró que sesgó sus acciones para beneficiar a ciertos gobiernos del PRI, y que él personalmente le había pedido su renuncia. Lo que no contó es que cuando lo corrió se le puso al brinco y le contestó: "Voy a hablar con Peña Nieto porque no me voy a ir".

Le sugerí que se levantara un acta administrativa de todos estos hechos, pero tampoco quiso. ¿Y por qué lo corrió? Porque "David Colmenares nunca ha hecho auditorías, cuando estuve en la ASF yo personalmente lo corrí porque no trabajaba". El exauditor reconoció que él mismo lo contrató por la impresión de que sabía mucho, pero no era auditor; una manera disfrazada de no decir que por incompetente.

Qué días habrá pasado, y que muina digo yo, pues imagino a los supuestos intermediarios y mensajeros, los "quedabién" oportunistas, todos haciéndole llegar mensajes diarios, aunque algunos incluso se contraponían: "cené con el presidente", "ahí seguimos, contador", "espérenos". César Camacho, amabilísimo, convenciéndolo de que confiara en ellos y se inscribiera sin reelección directa, que se apegara al procedimiento.

Era más que claro que si hubieran decidido reelegirlo, la Comisión de Vigilancia habría emitido el acuerdo para la reelección, pero cuando se conoció que saldría la convocatoria para la elección abierta resultaron todavía más evidentes tanto su estrategia como su complicidad. Marko Cortés igual, queriendo convencerlo de inscribirse; nadie se pone en el lugar de quien corre el riesgo, ninguno podría asegurar la reelección, y había un 30% en contra. Demasiado tarde en su intentona por salvar a la institución. La abyección total, o como le atribuyen decir a Amenemhat I: "Ponte en guardia contra todos tus subordinados [...] no confíes en ningún hermano, no conozcas a ningún amigo, no hagas confidencias".

Luego apareció el mensajero de Miguel Ángel Osorio Chong, el exoficial mayor de la Secretaría de Gobernación Jorge Márquez, por cierto señalado como uno de los presuntos operadores en la denominada Estafa Maestra entre la SEDATU y universidades politécnicas, entre ellas la de Tlaxcala (información que me confiaron dos exrectores con la total reserva por el temor que les infundieron), así como en la red de desvíos que se dio a través de la compra de aviones, helicópteros y patrullas a sobreprecios y la simulación en la adquisición de estas aeronaves, y le refirió al exauditor: "Tengo un mensaje muy importante de mi jefe", y le comunicó de parte del entonces secretario que quería que supiera que ya estaba avalado el acuerdo de reelección.

¡Qué políticos siempre tan mentirosos! ¡La estrategia que había echado a andar el grupo élite político que se sentía muy agraviado por el tema Robles incluía burlarse en su cara

elegantemente, por si acaso, pues seleccionaban cuidadosamente cada uno de los dardos y pasos que los llevarían a saciar su venganza!

La primera votación de diciembre para nombrar al auditor no alcanzó el consenso de votos de los partidos a ningún candidato, y las negociaciones políticas permitieron a los representantes partidistas preguntar —sin tapujos— a quienes integraban la terna qué les ofrecían a cambio de su voto. Uno de los aspirantes, Orcí, respondió: "Ofrezco imparcialidad y objetividad", a lo que refutaron: "Eso no es suficiente, Colmenares ofrece mucho más". Así los jaloneos y las mezquindades tras bambalinas de los coordinadores y representantes ungidos de los partidos políticos. El PRI apoyaba a Arturo Orcí, auditor especial de gasto federalizado con experiencia en fiscalización y ocho años antes había sido Oficial Mayor en la Sedesol.

Mientras eso ocurría, Ricardo Anaya decidió convertirse en candidato a presidente de la República por parte de la coalición Por México al Frente (Partido Acción Nacional [pan]-Partido de la Revolución Democrática [PRD]-Movimiento Ciudadano). Pensó que podía hacer pedazos a Peña Nieto y dejó la presidencia del pan. Comenzó su discurso "combativo" donde se le fue encima al presidente, y fue cuando el pan rompió los acuerdos tomados con el PRI para el nombramiento del auditor. Entonces se cayó la segunda votación, donde se había alcanzado el consenso previo a la decisión de Anaya, inició el pleito y jaloneo interno entre fracciones y se decidió posponer la elección del auditor en un nuevo proceso. Todo se quedaba al aire.

Era lo que ellos buscaban y lo ha cumplido cabalmente. Acordaron entonces que la siguiente legislatura sería la que nombrara al auditor. Todos ganaban en ese *impasse*.

Así fue como perdió Arturo Orcí, el candidato del PRI. Sin esos votos no se alcanzaba la votación requerida, y atorado el proceso se hubiera esperado como estaba proyectado, hasta la nueva legislatura, en septiembre 2018, y ya despachaba como encargado de la ASF por mandato de ley, mi entonces jefe, el contador Javier Pérez Saavedra, auditor especial de cumplimiento financiero.

En lento ejercicio se fueron eliminando aspirantes, surgían jaloneos, componendas, y todo se complicaba porque los perfiles de los candidatos no convencían a los otros partidos; seguramente a causa de que las redes de relaciones organizadas en el poder bajo múltiples formas y compromisos no tenían la seguridad de que pudieran "servirles" como lo deseaban. Las negociaciones no alcanzaban mayoría, a pesar de que el PRI la ostentaba en el Congreso, pues se requieren las tres cuartas partes de votos de los diputados para este nombramiento y ahí es donde el grupo de diputados del pan movió la balanza.

No deja uno de sorprenderse. Ese es el nivel de instituciones partidistas que cobijan a este tipo de gente y por ello son corresponsables y parte del mismo problema. Doble moral. No entiendo por qué andan llorando cuando tienen la cola larga y puerca. Los vínculos de complicidades explican lo que aconteció entonces en la ASF a partir de la llegada de

Colmenares. Imaginen este tipo de gente sintiéndose tan agraviada y "castigando" a quien se atrevió a retarles. El espíritu de la impunidad.

Regresemos a esos días iniciales de marzo de 2018 donde, a pesar de que la Comisión de Vigilancia y los coordinadores parlamentarios habían acordado desde diciembre que la elección del auditor superior sería hasta después del proceso electoral, el PRI decidió intempestivamente llevar a votación el nombramiento los primeros días de ese mes.

Sucedió después de que, encabezados por el tesorero de José Antonio Meade, los diputados Luis Maldonado, Jorge Estefan Chidiac, Ruth Tiscareño y Edgar Romo García (este último coordinador del PRI en la Cámara y quien, por cierto, según información periodística, en tan solo 74 días al frente en San Lázaro gastó por concepto de "servicios personales" 8 351 000 pesos) intentaron coaccionar al auditor encargado y obtener una carta de "indulgencia". Fui testigo y existen datos de esa reunión.

Por ello se presentaron con el auditor especial de cumplimiento financiero, Javier Pérez Saavedra, encargado de la ASF, para exigir un pronunciamiento exonerando al candidato Meade y que les expidiera un documento oficial en el que dijera que no aparecía involucrado ni existían observaciones que lo vincularan en la Estafa Maestra, petición que les negó, pues era un órgano técnico sin injerencia con ningún grupo político y no era el papel de la ASF elaborar ese tipo de "cartas", que no otorgaba indulgencias y menos ceder bajo presión, por decir lo menos. Salieron de su oficina y ahí mismo, en ese instante cruzando la puerta después de esa reunión, se decidió el destino de la ASF y determinaron que había que nombrar a un nuevo auditor. Se sintieron ahogados y la Estafa Maestra los hundía a paso acelerado.

Para ellos era importantísimo ese "salvoconducto", y ante tal negativa se echaron a andar el aparato organizado del poder para impulsar al candidato de la terna que fácilmente sirviera a sus intereses y nombrar al auditor de inmediato para construir una estructura de funcionarios fungible para intercambiar a quienes no están dispuestos a cometer un acto ilegal, por ello, como menciona Claus Roxin, difícilmente se puede concebir la existencia de una organización privada en la que varios de sus integrantes estén dispuestos a obedecer colectivamente una orden fraudulenta.

En el artículo "Respuestas de Meade", publicado en el periódico *Excelsior* el 25 de abril de 2018, bajo la pluma del periodista David Páramo, se describió una entrevista realizada al candidato José Antonio Meade, y a pregunta expresa ahí saltó la famosa carta que querían que le diéramos con aquella solicitud, lo cual es un indicio de la primera moneda de cambio con Colmenares.[18] Que no vengan con que son y han sido decentes y democráticos.

Meade respondió: "Te contesto uno por uno y te reviro con un tercero. En el caso del primero, la Auditoría Superior de la Federación me expidió un oficio en el que explica, de manera contundente que durante mi gestión no tuve ningún pendiente y la Función Pública dice que, con cargo a las auditorías que realizamos, se sus pendieron a 460 funcionarios.

Ahí queda claro que a mi paso por Sedesol no se me puede imputar inacción u omisión". Esa declaración expresa es una prueba determinante de las razones del nombramiento basado en simples intereses políticos; ¿quién firmó ese oficio y con qué facultades? Tenemos el derecho a conocerlo, imaginen al que aún pervive ahí, que ni tardo ni perezoso la expidió tal cual se la ordenaron elaborar; esta es una de las respuestas a por qué ciertos personajes continúan en la ASF.

Qué fácil es llegar a estos cargos para "servir". Nosotros los funcionarios que estuvimos hasta mayo de 2018 no elaboramos el oficio, entonces ¿quién se lo dio? Seguramente el recién estrenado auditor. Del mismo grupo que se tapa y encubre entre sí, porque finalmente todos ellos estaban operando para el mismo hombre. Pensaron que iba a ganar, por eso actuaron desesperados. Galoparon a rienda suelta, y no importaban los medios para lograr su fin.

Un indicio que se sumaba a la cadena de sucesos que iban entretejiendo las cúpulas de poder surgió en marzo de 2018. Después de la visita del finísimo grupo de diputados a la ASF fuimos a Villahermosa con el contador Víctor Santiago, director de auditoría forense "B", para la atención y seguimiento de varias auditorías por resultados relevantes derivados de la fiscalización en 2017, vinculados a la SEDATU con algunos institutos educativos en Tabasco. Tuve la oportunidad de conversar con el entonces gobernador Arturo Núñez y despedirme, ya que pronto concluiría su periodo de gobierno, y en una muy amena e interesante charla, entre otras cosas me comentó que no tardaban en nombrar al auditor superior, ya que acababa de estar con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien le había confirmado que iba Colmenares. Ese mismo día, en un programa nocturno con Joaquín López-Dóriga informaron que se iba a nombrar al nuevo auditor. Me hizo clic. Se corroboraba que todo estaba ya dispuesto y arreglado, como se dice coloquialmente. Y pensé: así son los pactos de impunidad desde el más alto nivel de la estructura del poder, armando todo el tinglado para obtener la famosa "carta salvoconducto" a su candidato presidencial.

Es más, ya operaba a la vieja usanza Jaime Valls, titular de la ANUIES, asociación que agrupa a las instituciones educativas superiores públicas del país, como las que casualmente se vieron involucradas en la Estafa Maestra, a través de invitaciones a quienes consideraba personas de interés a un departamento de Bosques de las Lomas para cenar con quien anunciaba "sería el próximo auditor superior del país". Nada fue coincidencia, como lo veremos más adelante. Me imaginé pidiendo el apoyo en la vieja lógica del típico: "Estoy sentado con el que auditará y podemos arreglar que…". Incluso mucho se ha publicado y dicho en relación con que se venden las indulgencias a instituciones educativas y gobiernos estatales o municipales. De este modo, el espíritu de la corrupción se normaliza. Vil tráfico de influencias.

En esta comedia, cada actor desarrolló su papel de reparto: embaucadores, oportunistas, traidores, trepadores, saltimbanquis, cortesanos, acomodaticios, pillazos, intocables,

travestis de la política, moralistas, opacos y los que iban arribando a servirse. No se trató de elegir al mejor, sino al que ofreció todo a cambio, y miren que lo ha cumplido. No es alguien con poder, ni pertenece al grupo, tan solo es a quien podrían utilizar. Examinar a estos personajes por su génesis ayudaría a recordar y entender su historia y su patética actuación. La serie de responsabilidades por actos y conductas deshonestas se iba estratificando.

La otra visita de las siete casas

Antes de la primera votación la entonces diputada Rocío Nahle le dijo a uno de los candidatos de la terna: "Yo ya me comprometí con Colmenares"; a otro lo citó y dejó esperando por horas, para luego no recibirlo. Valdría un poco de pudor, porque detrás de cada acto y decisión conocemos ahora cuáles son sus motivaciones profundas.

La escasa formación ética de quienes avalan a un impresentable como el extitular de OIC en Sedesol, como premio por haber liberado de responsabilidad por los desvíos a los actores de esa trama política y porque les sirve a las alianzas para dominar al abyecto, nos habla de los pactos políticos. No importó la traición a los principios éticos y la entrega de una institución que fue confiable y respetada por la ciudadanía, por casi 17 años, a una pandilla de mafiosos.

Es innegable que son un roto para otros descosidos, y bajo esos pactos existen más intereses, compromisos, y un tejido eficaz de alianzas que garantizan continuidad en los negocios políticos. Sin duda, hay materia prima. Modos de mentir y de pecar de omisión. ¿Se podría colocar en una vitrina el convenio que firmó la Auditoría Superior de la Federación, en junio de 2020, para revisar preventivamente la refinería Dos Bocas? El comunicado "Firman Convenio para la fiscalización superior preventiva en la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas" dice lo siguiente:

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Energía (SENER) y representantes de la Filial de Pemex Transformación Industrial, PTI-Infraestructura de Desarrollo SA de CV, firmaron un convenio para que la ASF revise de manera adelantada en el ámbito de su competencia, conforme con las disposiciones jurídicas aplicables en lo concerniente al proyecto denominado Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.

La suscripción de este convenio fortalece el carácter preventivo de la fiscalización superior, dicha participación se realizará con independencia de que la ASF seguirá ejerciendo la totalidad de sus propias facultades establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en las demás leyes aplicables, respecto al ejercicio de la revisión de las cuentas públicas correspondientes.

Los participantes de este acuerdo reconocen la necesidad de que un proyecto de estas dimensiones debe ser fiscalizado oportunamente y asegurar que se lleve a cabo con legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.

Con acciones como esta, la Secretaría de Energía, la filial de Pemex Transformación Industrial y la Auditoría Superior de la Federación, refrendan su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas.

¡Qué cosas! Se perdieron las formas y la vergüenza, pues la ASF no tiene facultades de revisión preventiva. ¿Revisiones adelantadas a qué?, ¿al ejercicio? El título IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece que se podrá realizar la fiscalización del ejercicio fiscal en curso, o de ejercicios anteriores, si se presentan denuncias que presuman el manejo, aplicación, custodia irregular o desvío de recursos públicos.

Entonces la pregunta es: ¿existen en esta obra pública actos de corrupción o desvíos denunciados que faculten a la ASF en los términos señalados? Igual les jugó la cabeza al Senado de República y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando emitieron sendos comunicados exactamente sobre el mismo tema: "la revisión en tiempo real". Léase, por ejemplo, la nota de *El Universal* del 23 de octubre de 2018: "ASF auditará en tiempo real al Congreso, SCJN y Judicatura"; ahí aparecieron en la foto Luis Carlos Ugalde y Mauricio Merino. Es una pena el nivel de ignorancia. O leamos la nota de Marcos Mares, publicada en *El Economista* el 3 de octubre de 2018. Claro, la boca es del incompetente David Colmenares:

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) que encabeza David Colmenares está por realizar sendas auditorías al Congreso de la Unión, es decir, a las cámaras de Diputados y Senadores, y al Poder Judicial de la Federación. Por primera vez, ambos poderes de la Unión (Legislativo y Judicial) serán revisados a fondo por un tercero, la Auditoría Superior de la Federación, y lo hará, en tiempo real. Es decir, el resultado podrá conocerse prácticamente de inmediato. No será como las revisiones tradicionales que venía realizando la Auditoría Superior de la Federación. Hasta ahora, las revisiones ocurrían desfasadas en el tiempo.

Los presidentes de la SCJN, Luis María Aguilar, y de las cámaras de Diputados y Senadores, Ricardo Monreal y Porfirio Muñoz Ledo, respectivamente, solicitaron la revisión de la Auditoría Superior de la Federación. Colmenares Páramo se convertirá en el primer titular de la ASF que revise a los dos poderes de la Unión, integralmente [*más falso que un testigo*].

En ese sentido se registra un momento histórico tanto para la ASF, porque cuenta con las facultades para hacer esa revisión, como para las cámaras de Diputados y Senadores, en pleno tránsito de una administración a otra y el cambio del partido político en el poder. Sin duda, se trata de un acto de transparencia de la SCJN y del Congreso.

Los presidentes de las cámaras solicitaron que la ASF revise el acto de entrega recepción y consecuentemente el órgano de fiscalización revisará el contexto, es decir el tiempo que considere necesario hacia atrás. Para el titular de la ASF, se trata de un reto muy importante si se considera que ha expresado públicamente su compromiso para entregar resultados. Con la revisión a profundidad de los dos poderes de la Unión por parte de la ASF, se escribirá

el primer capítulo de una nueva era en materia de transparencia en México. Por lo pronto la Corte y el Congreso estarán bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación.

¿Bajo qué fundamento legal firmó ese convenio y realizó la mencionada fiscalización y el proceso de entrega-recepción? Caray, el principio de la *ilegalidad* perdurará mientras exista la ignorancia de mano de los partidos y los políticos en decisiones trascendentales, y no nos espante entonces que el porcentaje de corrupción sea proporcional a su actuación. De miedo, porque no tiene la menor idea de su responsabilidad. ¿Cuáles resultados? Los informes de la fiscalización hablan por sí mismos, o más bien callan por sí mismos. Como ejemplo, en los resultados de la ASF presentados en junio de 2021, de 98 auditorías realizadas a las entidades federativas por un total de 171 mil millones de pesos, los montos finales observados fueron por solo 15 millones de pesos. Como lo leen: 0.000087719% del monto total auditado, y aún puede ser sujeto de solventación. La ignominia.

Así se pagan y otorgan favores y prebendas. Así están sus resultados, y son equiparables a sus declaraciones del 16 de marzo de 2018, donde "admitió que hubo retraso en su nombramiento [...] o que se anuncien grandes observaciones y al final es un globito que se va desinflando". Y orgulloso de su ignorancia, declaró que "el enfoque preventivo es la principal función de la auditoría".

Los secretos políticos ya no lo son tanto, y cuando se conocen siempre aparecen relacionados con pactos de impunidad o protecciones, pagos de prebendas y un sinfín de traiciones, en aras de alcanzar el poder político y obtener sumisión y financiamiento de los poderes económicos. Servirse de un cargo público para el enriquecimiento personal ya no resulta inmoral, criminal o despreciable; se normalizan los acuerdos, y este nombramiento fue una clara ejemplificación de la intromisión partidista en ámbitos estrictamente técnicos y profesionales. Conocemos los resultados, y merecen el repudio general.

Sobre mis entrevistas con varias de las diputadas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano (MC) que obviamente ya tenían la orden y línea para Colmenares, recuerdo que pidieron mi opinión, obviamente para comunicárselo a él. Les platiqué lo que conocí de su paso por la ASF y las razones por las cuales lo corrieron. También noté que dirigían la vista a sus escritorios, donde tenían información supuestamente "en mi contra", fabricada y dirigida, que les había proporcionado el mismo cínico que acusaba un presunto conflicto de intereses, sin voltearse a ver a sí mismo. Y las diputadas, con la emoción y ceguera que otorga la sumisión ante el poder en un sistema misógino, no revisaron o al menos no se percataron ni mencionaron que en su media cuartilla de currículum el tal Colmenares manifestaba haberse dedicado la mayor parte de su vida en el gobierno a ser consultor en entidades y municipios.

Además, en el sitio web donde aparecía su domicilio fiscal en el mismo de la Fundación Ayú, de la que aparecen también los "Heladios Ramírez", que por cierto los dos hijos de este exgobernador cobran en la ASF, tanto Heladio como Narcedalia Ramírez Pineda, ambos con

nivel de director general, y luego ese sitio web desapareció misteriosamente, tras un artículo de Humberto Musacchio publicado en *Excélsior* titulado "El colmo de Colmenares", donde expresaba lo curioso de que David Colmenares Páramo sí había incurrido en conflicto de intereses, pues en su página de internet aparecía como director general de la empresa Colmenares Páramo y Asociados, que ofrecía "un servicio especializado en la calidad económica y la fiscalización, desarrollo, consultorías especializadas en diversos temas, destacándose la coordinación fiscal y la auditoría gubernamental dirigida al fortalecimiento de las unidades y/o secretarías de haciendas [*sic*] estatales y municipales".

Tal menú de servicios sería plausible si no fuera porque en la misma página se exhibía como empresario y figuraba también, desde 2016, como titular de la Unidad de Coordinación Regional y Relaciones Institucionales en la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. Se descubrió que "venturosamente" comparte el mismo domicilio de las oficinas de Heladio Ramírez, el exgobernador de Oaxaca, cuyo hijo, como afirmé, le dio empleo como director general jurídico en la ASF, sobre quien pesa también una denuncia por presunto acoso sexual presentada ante la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados desde enero de 2022, con el número UEC/IA/001/2022, y lastimosamente a más de un año de los actos inaceptables que se describen en relación con su conducta no ha ocurrido nada en la investigación, me narra una de las afectadas que les piden llevar un dictamen psicológico. Se ve que esta autoridad investigadora no entiende ni de investigación, ni de ética y menos de la responsabilidad en que puede acusarse su falta de exhaustividad y atingencia.

Las jóvenes abogadas que narran la vileza con las que han sido acosadas, denigradas y humilladas se sienten impotentes ante tanta bajeza y encubrimiento, cuando la actuación de la autoridad en estos casos debía ser inmediata, pero bueno, qué se puede esperar de esta misma caterva. Ese grave y claro conflicto de intereses pasó desapercibido para los 377 diputados que obedientes levantaron el dedo para convertirlo en el auditor de la Federación.

Pagar y pagar cuotas políticas. Estos símbolos ayudan a adoctrinar o reafirmar lealtades, falsas creencias y hasta proyectar aquello que anhelamos. Me llamó la atención que fueran las diputadas integrantes de la Comisión de Vigilancia las que dieron la cara para lavársela al otro. Ningún diputado, ni el cobardón, se envalentonó para confrontarme. Deplorable la actuación de ellas. Qué caras duras, manipuladores afables que encuentran quien les obedezca. Ni siquiera por asomo reflexionaron que el impresentable seguía cobrando, hasta un día antes de ser elegido, si no es que renunció después, en un ente dependiente de la Secretaría de Hacienda.

Por supuesto, nadie puso en entredicho sus notorios vínculos partidistas. Había prometido de todo, cargos, altos puestos, nueva estructura y espacios bien pagados; asesorías, negociar, lo que fuera por el reino tan anhelado. Por eso no importó su presente, y menos su pasado servil, ni al PRI, ni a Morena, MC, pan, Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

y PRD, porque ya les había ofrecido lo que sus oídos querían escuchar, y les cumplió de inmediato. No cabe duda de que las entrevistas fueron ilustrativas, en ellas se hizo evidente la conducta y encomienda de cada uno, los intereses, negociaciones y acomodos que llevan a cabo, donde lo que menos importa es el mejor perfil para la institución y cumplir con las reglas del proceso. Es como su minuto de gloria. Tan de flojera, no quieren estudiar al candidato ni sus documentos o sus resultados profesionales; hasta las preguntas elaboradas pidieron a Colmenares y se las dio, las mismas que públicamente volvieron a preguntar al estilo de un "corre, ve y dile".

Conflicto de interés y tráfico de influencias

Afirmar que hay casos aislados de corrupción es una forma de encubrir la verdad. Isaac Rojkind, de octubre de 2015 a marzo de 2018, ocupó la posición de secretario técnico de la Comisión de Vigilancia de la ASF, y participó activamente en el proceso de selección del auditor superior, desde donde impulsó la candidatura de quien resultó ganador.

Según testimonios, él pedía abiertamente a los posibles candidatos que, en caso de ser nombrados auditor especial, deberían crearle una auditoría especial de seguimiento, y que ya tenía pensada la estructura. De dos de los aspirantes que participaron uno le dijo que "claro", que lo vería; el otro me confió que le dijo: "Déjame primero llegar". Se le cumplió su deseo cuando eligieron al nuevo auditor a modo.

Lo primero que hicieron fue modificar el reglamento para crear esa área. Llamaba la atención a quienes estábamos acostumbrados a un ambiente serio y profesional, pues a partir de su llegada el clima organizacional sufrió un cambio brutal; este sujeto, en una conducta ilegal, irregular y presuntamente delictiva, llegó a dar órdenes a todos los niveles que lo veían como poderoso. El otro haragán fue nombrado un jueves y llegó a la oficina hasta el martes, estaba en el besamanos. Válgame, la Cosa Nostra.

Seguía cobrando como secretario técnico de la Comisión de Vigilancia, y al mismo tiempo lo presentaron como el brazo ejecutor del auditor, sin facultades ni atribuciones y sin cargo alguno. Pero le obedecían con la cabeza bajita, queriendo salvar el pescuezo, menos un par de roñosos, que éramos mi jefe y yo. Pensaba que quien acostumbra a corromper, lo corrompe todo, y me preparaba con mi equipo de trabajo para un golpe bajo porque la calaña de ese grupo era bastante visible.

No quiero dejar de mencionar que, por primera vez en un proceso de ese nivel, se dio participación a varias organizaciones civiles que se hacen presentes supuestamente para convertirse en el ojo ciudadano y de alguna manera observar el proceso. No lo dicen, pero realmente esperan espacios políticos significativos. Me pareció muy interesante observar su interés personal y de grupo, así como su silencio después del escándalo que se originó con el allanamiento y persecución política iniciada en mi contra y la intimidación que padecieron la mayoría de los auditores que conformaban la DGAF en la ASF. Pues cómo no, si de

inmediato piden favores y colocan a sus familiares y amigos. Pactos a cambio de no levantar la voz y dar su apoyo total.

¿Cómo es posible que ninguna de esas asociaciones que tanto lucharon para estar presentes durante el proceso de selección haya podido elaborar un perfil completo, justificado técnica y legalmente, de quienes consideraban viables a partir de las entrevistas y análisis de los antecedentes y su historial público, o de quienes poseían el perfil apropiado y estarían vinculados por conflicto de intereses a partidos, negocios y otros sesgos? Tanto exigieron participar para no presentar ningún documento valioso a la sociedad; al menos, más que estar de mirones o utilizar la información de las ponencias, hubieran informado a partir de sus análisis para prevenir lo que después aconteció.

Esos grupos forman parte de algunos de los partidos o están vinculados a ellos. La probidad, el conocimiento técnico y la honestidad eran lo de menos, los requisitos esenciales los cubría. Tráfico de influencias, cohecho, intimidación, ejercicio abusivo, falta de valores, fabricación de evidencia, conflicto de intereses. Un ejemplo claro del conjunto de conductas, habilidades y características necesarias para el perfil *ad hoc* de su nivel. A la postre, la reflexión es que el mejor candidato es el que menos oposición tenga; no es realmente el mejor perfil técnico lo que interesa, y esto aplica para todos.

ANUIES, una mancha

A su titular secretario general, Jaime Valls Esponda, lo conocí en Chiapas. Fue presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez de enero de 2008 a diciembre de 2010, y posteriormente lo nombraron rector de la Universidad Autónoma de Chiapas hasta 2014. Lo relevante a mencionar debe ser que su padre, el difunto Sergio Valls, Priista de toda la vida, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tuvo colaboradores y allegados políticos señalados y procesados por cuestiones de corrupción.

Cabe señalar que al dejar la UNACH fue nombrado titular de la organización nacional que agrupa a instituciones educativas, la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior). De hecho, Jaime se declaró amigo de José Antonio Meade, y esto fue reafirmado en varias publicaciones y fotografías públicas, donde se presumía viajando con él durante la campaña presidencial, y alguna vez encontré a ambas familias vacacionando en la selva Lacandona. Por eso lo apoyó vigorosamente, incluso organizó distintos eventos proselitistas disfrazados en varias universidades y otras instituciones públicas educativas, abiertamente desbordado apoyo en redes durante la campaña, recalcándose como amigo del entonces candidato que resultaría abrumadoramente perdedor.

Aprendió rápido las habilidades del padre, lo que permite entender el tipo de relaciones y oportunismo político en esos niveles, la cadena de vínculos creados al cobijo del papá, al igual que sus hermanos y primos, que están colocados en puestos inusualmente muy buenos, y algunos pensarán en intercambio de favores. Se sentía empoderado en esos años

dada su cercanía con el poder; menospreciaba y ordenaba a los rectores qué hacer, incluso me confiaron que a algunos les "torcía la mano"; son voces que prefieren el anonimato para evitar represalias de la ahora mano ejecutora en la ASF, donde les aconseja "comprarse un seguro con el auditor"; lo cual yo entendería que es algo así como blindarse de las auditorías. Entendí entonces el porqué de la pasarela "vendiendo" al futuro auditor, como en los viejos tiempos, arreglando asuntos de antemano. No se puede explicar de otra manera la serie de acontecimientos que se sucedieron a partir de marzo de 2018, que por sí mismos ahora revelan la dimensión de la revancha y el oportunismo político.

Claro, todos los hijos y gran parte de los familiares directos del difunto ministro Valls han tenido una suerte incalificable: nombrados con excelentes cargos y encargos en el sector público, en puestos clave, en la PGR en el extranjero, o en grandes contribuyentes vinculados al SAT, donde se resuelven o generan juicios fiscales y luego, del otro lado, en el TFJA, donde se sustancian y resuelven los procedimientos administrativos iniciados en aquellas instancias. No hay casualidades, no aceptan cualquier cargo, sino que sin duda los eligen cuidadosamente para tener margen de maniobra.

Al festejo de los 70 años del ministro Valls, celebrado en Chiapas, asistieron entre otros invitados Carlos Salinas, exgobernadores como Javier Duarte, de Veracruz, y Roberto Borge, de Quintana Roo, también ministros de la Corte, secretarios de Estado, senadores, diputados, el dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps, y dignatarios de la Iglesia. Muy contento y festejado el cumpleañero, rodeado de sus hijos y almas gemelas, entre carcajadas e inmensos abrazos, y uno se preguntaría, ¿cuál era la relación de "amistad" que unía a ese clan con personajes de lo más perversos? Encarnados todos en un sistema naturalizado de prebendas, favores y complacencias mutuas.

El hijo del ministro, Sergio Valls Esponda, ha sido magistrado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del mismo estado; lugar donde, por cierto, también fue coordinador jurídico de la Secretaría del Medio Ambiente, aunque antes estuvo en Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y como delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Morelos.

Maricarmen Valls Esponda, la hermana, fue diputada del pan, de marzo de 2010 a agosto de 2012, casualmente en sustitución de Roberto Gil Zuarth, casada con Carlos Alberto Lezama Fernández del Campo, entonces secretario técnico de la Mesa Directiva en el Senado de la República por el mismo partido político, quien es padre de Marco Antonio Lezama Moo, entonces subprocurador regional de justicia zona centro en Xalapa, Veracruz. Todo conecta. Las coincidencias se producen intencionalmente.[19]

El otro hijo, Guillermo Valls Esponda, ha sido titular del OIC del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la PGR y después

agregado legal para Europa. Nadita. De ahí pasó al SAT como administrador general de Servicios al Contribuyente, áreas en verdad envidiables para cualquiera, donde se puede servir y servirse; caray, más si tenemos esos niveles de contactos y redes afectivas. En abril de 2016 lo nombraron magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), en un claro conflicto de interés, pero no podemos ni por asomo pensar en "tráfico de influencias" en estos nombramientos; por favor, sobre todo la fortuna de ser nombrado en un descuido imperdonable de la Cuarta Transformación (4T), como presidente del TFJFA hasta 2025. Son las imbricaciones y entretejos del poder que han favorecido, privilegiado y enriquecido a familias a costa de su servicio a la jerarquía del poder político y empresarial. Me he entretenido mucho mapeando esta red de vínculos y me quedo muy, muy corta. Es solo una pequeñísima muestra que permite razonar y comprender muchos temas de negocios y política que se entrelazan.

No pude menos que recordar cuando Valls intentó ser candidato a gobernador de Chiapas en el sexenio de Felipe Calderón y llegó un día a la Casa de Gobierno, acompañado de José Antonio Meade y Salvador Vega Casillas, entonces titular de la SFP, para pedirle al gobernador Juan Sabines que fuera nombrado candidato para gobernador del estado y a cambio le "ofrecían" cuidarle las espaldas. Me pregunto: ¿qué tenían que hacer metidos en esos temas dos secretarios de Estado? Así las cosas, Jaime quería un apoyo de 20 millones de pesos para su campaña, con lo que no contaba es con que en un acto público al que acudió en la Plaza de Toros de Tuxtla Gutiérrez fue abucheado a todo lo que da; era evidente que no era querido y que reprobaban su gestión como presidente municipal, las encuestas no le otorgaban ni un punto; así que aunado a su falta de carisma y nulos resultados en su gestión, a pesar de los intentos de los enviados del pan y la insistencia de unas figuras del PRD, se quedó con la muina.

Su premio de consolación fue la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Veamos un conjunto de indicios y vínculos significativo: Valls organizó el primer magno evento para la firma de colaboración de la Sedesol, a cargo de Rosario Robles, con el primer convenio de colaboración que ahora sabemos fue de la tipología de la Estafa Maestra, a través de la UNACH, con el objetivo de crear comités comunitarios para identificar prioridades de la pobreza. El exencargado de la delegación de la Sedesol en Chiapas, Ezequiel S. Orduña Morga, fue condenado a cinco meses con 29 días de prisión y el pago de 99 días de multa, equivalentes a 6 759 pesos, con lo cual se convirtió en el primer sentenciado de la Estafa Maestra por ejercicio indebido de funciones por el pago de 28 721 300 pesos para la UNACH, sin haber verificado la existencia y acreditación de los servicios convenidos; siempre hay un chivo expiatorio.

Luego, como director general de la ANUIES, apoyaría a Alejandro Ortiz Monasterio y le pediría a los rectores: "Atiende a Ortiz, es para apoyar al presidente", mientras Nuño llegaba a eventos a confirmarles: "Él nos está ayudando con aquellos temas del presidente". Así se entiende la razón por la cual al término de su encargo como rector lo nombraran titular en

la asociación que agrupa a todos los rectores de institutos tecnológicos, politécnicos, universidades autónomas y demás instituciones superiores. Recuerden, no hay coincidencias en la política.

Pues bien, ¿qué medidas preventivas y correctivas fueron implementadas por la ANUIES para evitar y señalar los hechos irregulares que sucedían? Ninguna y, por supuesto, mucho menos pusieron el tema sobre la mesa de la opinión pública porque sabía la cola tan larga que había dejado crecer. Más bien era cómo evitar los reclamos de los rectores inconformes y pedirles rendir cuentas, ya que incipientemente empezaba a enturbiar su muy cómodo encargo. Actuaba naturalmente como si nada ocurriera en el corazón de las instituciones educativas. Paro nada expresaba preocupación sobre los hallazgos y la serie de irregularidades derivados de la fiscalización, donde se documentó un enorme desvío de recursos. Imaginaba yo este escenario: están saqueando la casa y ¿no te sorprende o mencionas algo al respecto? ¿Cómo interpretar que Valls firma muy orgulloso su propio convenio con Rosario Robles? ¿Y su círculo político cercano con Aurelio Nuño, Emilio Lozoya, Emilio Zebadúa, José Antonio Meade?

Consiguió desaparecer del radar en las investigaciones a pesar de que cuando fue rector se pagaron convenios y "compromisos", que se registraron en CompraNet. De este modo, los pagos realizados por la Sedesol para esos convenios del año 2013 ascendieron a 431 034 000 pesos y 334 827 pesos con 59 centavos, respectivamente. Una cuenta por liquidar certificada (CLC) por 68 840 900 pesos, en 2014, y 63 493 900 pesos en 2015. Qué cara dura de unos y otros; son indescriptibles y repulsivas sus conductas, inadmisibles en el entorno de pobreza que priva en el país y del decoro que se esperaría de un funcionario de ese nivel.

Poco antes de salir de la ASF estaba en ciernes una auditoría forense a la ANUIES, que había recibido generosos fondos federales adicionales a su presupuesto, otorgados por el entonces secretario de Hacienda; claro, no había recursos para las universidades que protestaban por sus recortes y mantenían necesidades urgentes, pero sí lo hubo a tan desdorada asociación con nula rendición de cuentas al interior, menos al exterior. Inferí varias razones por las que se habían recibido sendas denuncias, las cuales daban indicios y datos por supuestos manejos irregulares y relataban que los recursos se dilapidaban en viajes internacionales, la mayor parte a Europa, con la justificación de firma de convenios que no tenían ni seguimiento ni resultados, no llevaban a nada y ocultaban —blindaban— la documentación justificativa y comprobatoria. Cada peso recibido del gobierno en una institución, por su naturaleza, se convierte en recurso público, auditable y verificable.

Al día de hoy es imposible saber en qué y cómo gastó la ANUIES no solo los recursos públicos que aportaron las universidades, sino los recursos extraordinarios otorgados por su amigo, entonces secretario de Hacienda. Por eso el miedo de los pocos que intentaban levantar la voz ante las arbitrariedades de que eran objeto por parte de él. A nadie le rindió cuentas, y se ha especializado en vender a los altos funcionarios vidrio molido por oro. Otra organización politizada que acabó bastante echada a perder.

Qué indignación, ya que además indujo y sometió a las instituciones educativas a realizar actividades fuera de sus objetivos, lo que implicaba gastos que tenían que afrontar, y una serie de pagos a la ANUIES por concepto de capacitaciones "sugeridas" o una supuesta certificación que se inventó para avalar ante la UIF. Con la astucia y el atrevimiento que le caracteriza, se acomodó inmediatamente en la actual administración gubernamental, se disfrazó de demócrata y se acercó a la UIF para negociar y promover la certificación antilavado, un jugoso negocio que les generaría grandes ingresos. ¡Qué agallas!, comentan sorprendidos varios rectores, mira nada más quién va ahora a certificar en materia antilavado. ¿Qué esperamos en el futuro cercano? ¿Acaso la creación de una secta del día siete para purificar almas? No es difícil entender cómo se infiltraron en el gobierno actual este nivel de personajes. Salieron buenos todos para los negocios.

Tanto a Valls como al candidato JAM a "Pepe Toño" González Anaya les urgía que se nombrara a Colmenares, con quien les une la misma especie y naturaleza; independientemente de que antes habían coincidido en la SHCP, Valls como subordinado de David y luego en la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Colmenares haciendo negocios con él como consultor externo. Las hordas se fortalecen y el mensaje era fulminante: ¿cómo se nos ocurría a los profanos auditores forenses atrevernos a revisar sus cuentas y tratar de evidenciar el vínculo siniestro entre funcionarios de la alta esfera del poder y las instituciones educativas que habían sido "invitadas" unas, y forzadas otras, a colaborar y participar en la gran simulación de lo que se convertiría en el esquema para desvío de recursos públicos más impúdico conocido de los últimos años? Auditar los recursos públicos de la asociación que maneja las universidades del país les resultó imperdonable, aunado a la "afectación" a los negocios que se realizaban utilizando instituciones educativas y otros organismos estatales. No lo permitirían. Iban por todo.

Veamos las actividades relevantes y prioritarias que presurosos realizaron Jaime Valls con David Colmenares, dentro del esquema acostumbrado a placearse para, seguramente, afianzar acuerdos y negociaciones para el buen entendimiento en temas de probable auditoría. En mayo de 2018, por ejemplo, la firma de convenio de colaboración con el objetivo de colocar la formación del capital humano como una de las prioridades de las zonas económicas especiales (ZEE) y sus áreas de influencia para impulsar el desarrollo regional en México, entre la ANUIES y la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales —organismo donde, el mismo día que fue nombrado en marzo de 2018, renunciaba Colmenares para treparse a cobrar y acabar con la ASF—, entidad que por cierto desapareció de inmediato el actual gobierno, por inservible, onerosa e ineficiente.

El convenio estableció un compromiso de más de 40 universidades para formar dicho capital humano, a través de una "triple hélice" (sinergia entre académicos, gobierno y empresas) y así impulsar los empleos de calidad en las ZEE de Lázaro Cárdenas-La Unión, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Puerto Progreso, Campeche, Tabasco y Coatzacoalcos. Asistieron como

testigos de honor el gobernador de Tabasco y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Arturo Núñez Jiménez, y David Colmenares Páramo.

Me hicieron recordar los conceptos y rimbombantes objetivos de los convenios que se firmaban por la SEDATU y la Sedesol; qué gran similitud guardan. Sería bueno saber qué avance habrán tenido las "triples hélices", ya que el resultado no se encuentra publicado en ningún lado. O el evento del 7 de octubre de 2018 en la LI reunión ordinaria del Consejo de Universidades Publicas e Instituciones Afines (CUPIA), la cual se desarrolló en la Universidad Autónoma de Nuevo León, encabezada por el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, y el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Rodolfo Tuirán Gutiérrez. El orden del día contempló la participación del auditor de la ASF. ¿En qué acabaría, qué objetivos se alcanzaron y cuáles beneficios?

También el 7 de mayo de 2019, en el denominado "Diálogo con rectores de las universidades públicas para mejorar los resultados de los procesos de fiscalización", con la finalidad de intercambiar experiencias en el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y la presencia del subsecretario de Educación Superior de la SEP, de la directora general de Educación Superior Universitaria de la SEP y, por supuesto, el grandilocuente auditor de la Federación, donde el titular de la ANUIES subrayó que el diálogo y la comunicación permanente entre todos los involucrados en los procesos de fiscalización fortalecen la cultura de la prevención, la transparencia y rendición de cuentas. Qué gran descubrimiento.

El 22 de agosto de 2019, en la "entrega del reconocimiento al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, por su liderazgo como promotor de la universidad pública, su amplia defensa de las prerrogativas y responsabilidades que entraña la autonomía universitaria, así como por su excelente gestión al frente de la máxima casa de estudios", ante los rectores de las universidades públicas estatales y titulares de las instituciones miembros de los consejos regionales, Jaime Valls Esponda admitió que el rango constitucional de la autonomía universitaria es un reconocimiento a la necesidad de que la educación superior, investigación científica y difusión de la cultura se lleven a cabo respetando los principios de libertad de cátedra y de libre examen; claro, estuvo presente el auditor. Pobres rectores, tener que dedicarles tiempo a esos shows tan gastados. A mí me da la impresión de que fue una gira de promoción con venta de indulgencias y blindaje a las instituciones y gobiernos.

Ah, pero sobre el tema de las personas relacionadas con la Estafa Maestra, Valls Esponda opinó que se debía sancionar, pero no a las universidades que habían respondido favorablemente a los señalamientos de la ASF: "Los desvíos son públicos porque la ASF había hecho estas observaciones mediante documentos que están en las redes sociales y en la página de internet de la auditoría. Las universidades autónomas y no autónomas que han sido señaladas han tenido la posibilidad de solventar las observaciones y muchas se han ido solventando", manifestó. "Que se sancione a las personas que se tenga

que sancionar, pero no a las instituciones, que son instituciones de prestigio, que han trabajado a lo largo de muchos años y prestan servicios: si algunos están mal llevados, al cabo y son señalados por las autoridades, que se actúe conforme a la ley", indicó. ¡Qué declaraciones tan reveladoras! Los que conocemos las observaciones no entendemos cómo pudieron solventar las observaciones determinadas por servicios simulados. No había otra manera que no fuera ilegal, con los pagos por favores concedidos.

También en 2019, después de inaugurar el segundo foro de profesionalización y servicio profesional de carrera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México —porque está hasta los huesos en negocios de "capacitación"—, Valls fue cuestionado sobre el juicio contra la exsecretaria de Desarrollo Social, del cual explicó que es legal la firma de convenios con entidades públicas o secretarías de Estado para la prestación de servicios, además de ser una de las estrategias que llevan a cabo las universidades para gestionar recursos propios.

"Las que han firmado convenios, han actuado dentro del marco de la ley, porque la ley lo permite. Una de las funciones importantes de las universidades es gestionar recursos adicionales y lo hacen a través de la prestación de servicios. Cuando hay temas que son fuera de la ley se hacen las observaciones e investigaciones pertinentes", dijo, repitiendo como loro las mismas palabras que en su momento argumentó Robles, su defensa, y el propio Colmenares. Bien domesticados y entrenados.

Algunos de esos acuerdos son más reveladores, como el convenio de coordinación 2015-2017 que firmó la ANUIES con la Secretaría de la Función Pública, en el que participó el subsecretario de Auditoría Pública para la Administración Descentralizada en Chiapas, Fernando Ribé Varela, que luego se convirtió en presidente del Comité de Contratación de Obra Pública en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Chiapas. Desde 2015 ya fungía como director general administrativo y apoderado legal de la ANUIES.

Qué nivel de servilismo y pérdida de tiempo, ojalá informen a los ciudadanos de los resultados obtenidos en cada uno de estos convenios. Por favor, un clamor colectivo, que le exijan los rectores rendir cuentas de cada peso federal y estatal recibido, tanto de aportaciones como de presupuesto más los guardaditos que generosamente le asignaban. O los poco más de dos millones de pesos contratados entre los años 2011 y 2014 con 12 instituciones, que incluyen a la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el Colegio de la Frontera Sur, o la misma PGR, que quedaron registrados en CompraNet, y las transferencias por ramo vía Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), todos sin fiscalización, que entre 2014 y 2018 sumaron un total de 730 millones, 788 459 pesos tan solo en educación pública y salud. Increíble los montos manejados en total opacidad por contratos obtenidos por tráfico de influencias.

Cabe señalar que este tipo de beneficios no ha mermado con el cambio de gobierno y la llegada de la autodenominada 4T, sino que parecen aumentar, dada la influencia que ejerce este personaje para decidir o no la fiscalización a las universidades y otros gobiernos y entidades estatales. Quién resiste la tentación a no ser auditado, quién lo diría, ahora en un gobierno que lucha contra la corrupción es donde mejor y más se han acomodado y placeado. Tan es así que en la convocatoria de la SEP para el proceso de admisión al servicio docente en educación media superior 2020-2021 se estableció "un candado" para los interesados en participar: la constancia de acreditación del curso-taller de "Exploración de habilidades para la docencia en media superior", impartido exclusivamente por la ANUIES, con el cobro de una cuota de 1 250 pesos como requisito obligatorio. Asemeja el derecho de piso, disfrazado. El 18 de febrero de 2023 concluyó Jaime Valls su función como secretario general de la ANUIES y de inmediato intentó la búsqueda de un consulado o embajada; en eso anda y capaz que hasta en la ASF se incrusta. Para qué son los amigos, pues.

Recordé mis clases de Psicología, donde aprendí que no se puede entender el comportamiento humano solo por el individuo, el entorno desempeña un papel fundamental. Qué elemento absorbe al otro, el poder o el dinero, de otra manera cómo entendemos que los ricos roben. La frase "tiene más labia que jeta" habla coloquialmente de la comunicación de algunas personas, las medias verdades, medias mentiras o completas, son esperadas en esta fauna; hablar para dar una buena apariencia, esta moralidad se aprende en casa y en nuestro entorno.

Prosigo el relato. Su bonanza llegó junto con Colmenares, y desde los primeros días Jaime Valls Esponda se apareció con un primo hermano suyo llamado Jorge Emanuel Pedrero Esponda, que fue nombrado desde mayo de 2018 titular del Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS) en la ASF, con un sueldo mensual de 147 968 pesos con 26 centavos. Este a su vez colocó en posiciones relevantes a sus parientes políticos y a personas sin perfil para los cargos. Así, aparecen en nómina Lenny de Regules Bárcena, en la subdirección de Control e Informes; la dirección de Desarrollo, desde octubre de 2020, está a cargo de Hugo Tulio Félix Clímaco, quien entre otras cosas fue representante del gobierno de Oaxaca en la Ciudad de México, de noviembre de 2013 a noviembre de 2016, y también director general de Coordinación Regional de la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales de la Secretaría de Hacienda entre enero y agosto de 2017, nombrado por Colmenares. Por cierto, entre febrero y agosto de 2019, fue el "suertudo" subsecretario de Control y Auditoría en el gobierno de Puebla, señalado en una denuncia presentada en la Contraloría del estado como presunto involucrado en la contratación de presuntas empresas fachada oaxaqueñas.

Entonces entendí la furiosa llegada de un malagradecido y envidioso primo de Valls, Jorge Emanuel Pedrero Esponda, quien con una ira desenfrenada y sin contar con las facultades ni atribuciones se dio a la tarea de intimidar y amedrentar a becarios y personal operativo de la DGAF para pedirles implicarme en actos "fabricados" por él en actas, en

complicidad con otro funcionario sin principios ni ética, pero empinado al poderoso, el dócil y sumiso Jorge Cristian Santiago García, coaccionando al personal para someterlo, amena zar y lograr que testificaran falsamente contra mí y varios compañeros más, a cambio de ofrecerles una plaza y protección.

¿A cuántos jóvenes becarios y de servicio social corrompió? A varios, pero quienes permanecieron ajenos y prefirieron retirarse lograron grabarlo y fotografiarlo; evidencias que fueron presentadas ante la autoridad administrativa y penal, indignados por cómo un ser tan despreciable se prestó a corromperse y les echó a perder su presente y, ¿por qué no?, su futuro en muchos casos. Este ser envilecido, con tanta suerte que lo contrataron en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el área de Auditoría Interna —la impunidad paga bien—, fue cómplice y brazo ejecutor en el allanamiento a la Dirección General de Auditoría Forense cuando finalmente se desquició y no pudo contener la locura y la insania, al igual que quien cobra como auditor. A continuación, presento relatos que fueron grabados como evidencia de los hechos acontecidos y el nivel de actos de orden criminal y administrativo:

Testimonio 1: El pasado viernes 15 de junio de 2018, aproximadamente a las 9:30 a.m., llegaron a las oficinas del piso 10 de la Dirección General de Auditoría Forense el recién nombrado director general del ICADEFIS, Jorge Emmanuel Pedrero Esponda, y su secretario técnico, Juan Antonio Gerardo Ramírez Huerta [quien por cierto es sobrino de Mauricio Merino; ahora entendemos el porqué de su silencio ominoso], quienes, sin dar ninguna explicación, se llevaron a cerca de 50 jóvenes becarios y de servicio social que colaboran en esa DGAF al piso 7, a la sala de junta de las oficinas de Pedrero Esponda, donde los encerraron para decirles a todos que iba a haber cosas muy buenas para ellos; les pidieron hablar en contra de la exdirectora de Auditoría Forense y les manifestaron también que los directores de área se iban por ser malos, y haber cometido muchas irregularidades.

Les dijeron que debían ratificar en contra de ellos o modificar sus declaraciones; muchos de los jóvenes se sintieron amedrentados; aseguraron que les hablaban con mucho nerviosismo, y luego los subieron al piso 12, donde se encontraban las oficinas del auditor superior y el área de Auditoría Interna. También estuvo presente un señor llamado Jorge Cristian Santiago García que insistía en ofrecerles beneficios laborales a cambio de que declararan en contra de la doctora Muna Buchahin, insistiendo mucho en que si alguien quería hablar de una asociación para que dijeran que se hacían cosas, que quién la conocía.

Separaron a unos de otros del grupo y a los demás los enviaron a su casa, les dijeron que si estaban a gusto se queden en el área y si no, ellos se comprometen a que se reubiquen en el ICADEFIS. Esas amenazas y hostigamiento generaron estados de crisis en algunos de ellos, al incitarlos a denunciar en contra de sus jefes y los azuzaban; manifestaron que sintieron como cuando se llevaron a los 43 de Ayotzinapa.

La que se presentó el 30 de mayo como directora general, Ivonne Henestrosa, no aparecía, y prefirieron dejar de llegar a la oficina porque temían por su trabajo, o que intentaran obligarlos a mentir. Lo más grave de todo es que las personas que llegaron por ellos no solo no tienen facultades de ninguna índole, sino que son sometidos de Colmenares y su actividad debería ser la capacitación. Así de graves las cosas. Y el área a la deriva, ya que, por el nivel de hostigamiento, presencia policial y la intromisión a la dirección, los directores de área decidieron renunciar.

Testimonio 2: El sábado 2 de junio de 2018 acudí a las oficinas de la ASF para integrar los papeles de trabajo al expediente de una auditoría, a efecto de tener todo listo en el acta de entrega recepción de la DGAF, conforme nos lo solicitó la entonces directora general. Alrededor de las 9:15 de la mañana intenté ingresar al estacionamiento, cuando el jefe de vigilancia me negó el acceso informando que yo estaba adscrita a la Dirección General de Auditoría Forense y que había instrucciones superiores de no permitir el acceso a ninguna persona que perteneciera a esa dirección, por lo cual, en ese momento, vía telefónica, informé a mi jefe inmediato y procedí a retirarme.

Posteriormente, el lunes 4 de junio de 2018, a las 7:30 horas, intenté nuevamente ingresar al estacionamiento de la ASF para iniciar mis actividades laborales, pero una persona con uniforme de policía nuevamente me negó el acceso a mi lugar asignado, y me informó que como yo era personal de la DGAF no tenía permitido el acceso. Entonces ingresé por el acceso de peatones a las oficinas y subí al piso 10 donde yo laboraba; en la recepción me detuvo un policía que me informó que no podíamos pasar, que el acceso a las instalaciones de la Dirección General de Auditoría Forense estaba cerrado y que tenía colocado sellos, lo cual se alcanzaba a ver a través de los cristales desde donde estaba la recepción. Había dos [sellos] en la recepción y otros dos en cada uno de los extremos del pasillo; además dos elementos custodiando la puerta, que se observaba tenía los sellos para que no se violara el ingreso al área; también había dos policías más en el pasillo del acceso a las escaleras de emergencia, uno en el acceso que daba a las oficinas de la dirección general y de los directores de área.

Nunca antes había visto el impacto y la intimidación que causaban con su agresividad al personal, tratando de imponer terror, y más al personal joven, al que amenazaban y maltrataban con mayor saña, por lo cual pregunté al policía por qué la razón de tanta vigilancia, a lo cual me informó que estaba cerrado desde el viernes en la noche, después de que salieran las últimas personas, refiriéndose a los dos directores de área, la contadora María Guadalupe Velarde Gallego y el contador Víctor Santiago Enríquez, entonces directora de Auditoría Forense A y director de Auditoría Forense B, respectivamente; además me comentó que la instrucción que habían recibido es que cuando llegáramos todos nos concentrarían en la recepción del piso, y que posteriormente el director de Recursos Humanos y el director de Auditoría y Control de la Gestión nos explicarían de qué se trataba el asunto.

Conforme fue acercándose la hora de iniciar el horario laboral nos fuimos concentrando todos en la recepción del piso 10; entre personal de estructura, becarios y prestadores de servicio social, éramos alrededor de 40 personas. Aproximadamente a las 10:30 a.m. proseguía la incertidumbre y el maltrato a todo el grupo, cuando nos informaron que bajáramos al auditorio de la ASF a una reunión, que nos iban a explicar por qué no estaba permitido el acceso a nuestros lugares de trabajo en las oficinas de la Dirección General de Auditoría Forense. Bajamos todo el grupo forense, esperamos alrededor de 30 minutos más, cuando ingresaron al auditorio Jorge Cristian Santiago García, director de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión "C" [CASG], y Sergio Reyna de Recursos Humanos, amenazantes y prepotentes. Nos informaron que habían cerrado las instalaciones de la Dirección General de Auditoría Forense debido a que encontraron diversas irregularidades cometidas por la exdirectora, refiriéndose a la doctora Buchahin, debido a que tenía varias denuncias en su contra que la involucraban, que estaban haciendo las investigaciones correspondientes, y que terminando la reunión debíamos regresar a nuestros lugares de trabajo, que no debíamos tocar para nada las computadoras, y mucho menos aquellas que tenían un post it, que nos iban a dar a llenar un cuestionario y que posteriormente el personal de la CASG nos levantaría un acta administrativa a todos.

Por lo menos yo observé que eran alrededor de ocho las personas que estaban levantando las actas. Después de hacerlo nos teníamos que retirar y se nos dijo que las actividades laborales se reanudarían al día siguiente. La situación era tremenda, arbitraria, amenazante y desgastante porque no nos podíamos mover de nuestros lugares y si teníamos que ir al baño íbamos custodiados por policías que nos cuidaban todo el camino, mientras hacíamos nuestras necesidades fisiológicas y nuestro regreso a los lugares de trabajo.

Al trasladarnos a nuestros lugares las puertas de acceso al área estaban cerradas y tenían etiquetas de arriba hasta abajo, no se puede decir que estaban selladas, porque carecían de sellos. Jorge Cristian Santiago García no solo daba órdenes, sino que era testigo y promotor del trato indigno que recibimos, tratando de amedrentarnos, muchos estaban muy asustados sin comprender qué sucedía, cuando el jueves 30 apenas la doctora Buchahin nos había presentado por la tarde a la nueva titular, Ivonne Henestrosa, quien no solo había hablado magnífico de nuestro desempeño, sino que cayó en una serie de elogios desmedidos; por eso no entendíamos dónde estaba ella, que no aparecía a explicarnos. En presencia de los policías, Cristian rompió las etiquetas y procedimos a instalarnos en nuestros escritorios; nos obligaron a esperar hasta llenar el cuestionario y que nos levantaran el acta.

Al día siguiente, 5 de junio de 2018, el piso seguía resguardado con muchos policías, nuevamente tenían cerrado y la puerta tenía etiquetas que nos impedían el acceso, por lo que se solicitó a vigilancia el apoyo con el director de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión el acceso a las oficinas de la Dirección General. Comenzaba una era de terror, amedrentamiento e intimidación en pleno atentado a nuestros derechos más elementales

y nuestra dignidad. A partir de ese día, al terminar nuestro horario laboral, en la puerta de salida del estacionamiento el personal de vigilancia nos hacía abrir la cajuela, abrían todas las puertas de los vehículos únicamente al personal de la DGAF; con una lámpara revisaban que no nos lleváramos expedientes, discos con información, en la guantera, en todos los lugares posibles donde se pudiera esconder información; parecíamos reos, era vejatorio y protestamos sin respuesta; con el personal de las otras áreas el trato era normal.

Los días 5 y 6 de junio por la mañana se presentó en el área donde trabajaban los becarios y los de servicio social Jorge Emanuel Pedrero Esponda, director general del Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior [ICADEFIS], acompañado de Jorge Cristian Santiago García, director de Auditoría Interna y Evaluación de la Gestión y otras personas de la CASG, dándole instrucciones a gritos a los jóvenes para que los acompañaran, que tenían información importante que comentarles, y que todos tenían que hablar porque de lo contrario se convertían en cómplices y podrían sufrir represalias.

Como corderitos se los llevaban espantados y atemorizados, sorprendidos y paralizados con la incapacidad que tiene la juventud, ingenua ante actos tan deleznables de poder. A partir de ese momento éramos continuamente acosados y vigilados en todos los actos que realizábamos en el trabajo, cuando salíamos a comer y para ir al baño, no podíamos movernos del escritorio, debíamos ir acompañados de un policía al baño. Era indignante.

Como mi escritorio estaba en la entrada a las instalaciones de la DGAF, se podía ver a todos los que ingresaban y salían, era desgastante ver el acoso laboral al que eran sometidos por parte del personal de la CASG y en especial del repulsivo Cristian, que inició una ofensiva agresiva contra el personal experto responsable del laboratorio forense, sin facultades legales y contraviniendo todo ordenamiento con relación al resguardo de la evidencia y cadena de custodia.

No solamente los mantenía afuera de la oficina de pie, levantando actas y tratando de intimidarlos, sino que rompió la seguridad informática al escudriñar en sus escritorios, en sus computadoras y en todos los equipos informáticos del laboratorio forense, donde se procesaban las evidencias digitales derivadas de las auditorías. Su sometimiento absoluto al servicio de la ilegalidad es una denuncia que hacemos. Contamos con la evidencia fotográfica y documental de cada una de sus actuaciones.

También me tocó presenciar la forma por demás indigna que utilizó para cesar al personal, uno a uno en un ambiente de terror generado. Intempestivamente al mediodía llegó el desvergonzado y repulsivo Cristian, acompañado por algunos de sus jefes de departamento, para tener testigos, y con tan pocas agallas, por decirlo suave, custodiado por policías de la ASF, para exigir a los elegidos que sacaran sus cosas personales y que los acompañaran a la salida. Asemejaba un campo de concentración en espera diaria de conocer por quién vendrían para cesarlo. Posteriormente, y después de todo el acoso laboral y desgaste físico y emocional, opté por presentar mi renuncia, al igual que muchos.

Testimonio 3: Por medio del presente le informo sobre los hechos ocurridos en mi estancia en la ASF durante el cambio de gestión. El día 23 de junio de 2018, justo cuando llegaron los de seguridad a cesar de una manera arbitraria y muy intimidatoria a un compañero, llegó Jorge Cristian Santiago García por mí, dijo que me llevaría a levantar un acta administrativa por una denuncia en la dirección general, nunca me enseñó dicha denuncia y solo me amedrentaba.

Al llegar a su oficina me puso a la vista una balanza de pagos de la asociación que intentaban desprestigiar, sin pensar que había obtenido de un modo ilícito un documento financiero confidencial que no le pertenecía, y el cual no tendría por qué haberlo tenido en sus manos, y mucho menos amenazarme con él.

Comenzó a interrogarme, preguntó si yo llevaba la contabilidad de la asociación donde estaban usted y el auditor Portal, le dije que yo llevaba varias contabilidades de personas físicas y morales y que me pagaban por ello; que no se contraponía con mis actividades en lo absoluto. Posteriormente me dijo que si no me interesaba hablar con Gerardo Lozano Dubernard y con Ivonne Henestrosa, dije que sí. Me llevó a la oficina de Gerardo. Llegando Cristian me recalcó que los ayudara y cooperara para que me fuera bien. Al ingresar nos saludamos y Gerardo me insistió que le ayudara, que usted no lo dejaba trabajar y que le ayudara a darle un "chingadazo", que me convenía permanecer en la institución. De todo esto tengo la evidencia grabada.

Como yo insistí en solo decir la verdad, comenzó una serie de acosos. Se dudaba en cada momento de mi palabra, se me intimidaba con que llegaban anónimos en mi contra. Hasta que, finalmente, llegando el mes de junio de 2019, Ivonne Henestrosa me dijo el jueves 14 de junio que, si no presentaba mi renuncia ese día, me cesaría al día siguiente. Por lo que la presenté.

El nivel de inmoralidad de esos personajes no tenía límite. Mientras todo esto ocurría y se hacían públicos los atropellos y la cacería a funcionarios y personal auditor, podríamos preguntar: ¿dónde carajos estaba el titular de la Unidad de Evaluación y Control, Alejandro Romero Gudiño, y los infelices diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia? Ellos estaban obligados a atender las denuncias y realizar una investigación de los hechos ante la persecución y la dolorosa indefensión del personal responsable de haber realizado las auditorías forenses que llevaron a revelar uno de los mayores escándalos de corrupción en México.

Romero siguió órdenes precisas y así fue nombrado titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la SHCP con Carlos Urzúa al frente. Posteriormente lo sacaron del OIC, a mediados de 2021, pero supo congraciarse con el poder en curso cayó de pie en el SAT. Otro funcionario que por sus "servicios" fue retribuido con un muy buen cargo por Raquel Buenrostro, de quien quiero pensar que desconocía su historia, de otra manera qué modo de premiar las conductas infractoras. Veamos extractos de una nota publicada en *La*

Jornada el 30 de abril de 2011, en la página 12, que revela de cuerpo entero la figura de este personaje:[20] "PRI y Verdes imponen a Romero Gudiño como titular de la UEC", "Cuestiona el PRD la labor del funcionario en Pasta de Conchos", "El nombramiento agrega sesgo partidista a la revisión del gasto público".

Los grupos parlamentarios del PRI y el Partido Verde se encargaron de partidizar la revisión y vigilancia del gasto público, al imponer como titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), de la Auditoría Superior de la Federación, a Alejandro Romero Gudiño, quien durante el gobierno de Vicente Fox fungió como director general de Inspección Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y se negó a responsabilizar a la Minera México de la explosión que provocó la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, a pesar de su cuestionable pasado como servidor público. La UEC constituye el único instrumento de control que tiene la Cámara de Diputados sobre la actuación de la Auditoría Superior de la Federación, y es la garante de que todos, incluido el ente fiscalizador, estén sujetos al principio de rendición de cuentas. Por ello es de suma importancia que el nuevo titular de la UEC cuente con un perfil de especialización en el ramo de evaluación de la fiscalización superior, las finanzas públicas, normatividad y marco legal de la fiscalización y el análisis sectorial de la economía, entre otros. Que cuente con un perfil técnico, neutral y de objetividad, evitando que sus evaluaciones y posturas sean sesgadas. Nos parece preocupante que sobre una de las propuestas esté el velo de duda en cuanto a las responsabilidades por los hechos lamentables de Pasta de Conchos.

Alejandro Romero Gudiño fue impulsado con obstinación por la fracción tricolor. Su desempeño en gobiernos fue reprochado al estar asociado con uno de los sucesos ominosos: la tragedia en Pasta de Conchos. El seguimiento gubernamental corrió a manos de Romero Gudiño, quien se desempeñaba como director general de Inspección Federal del Trabajo. Su labor consistía en revisar la seguridad y condiciones generales de trabajo de los mineros y en julio de 2007 se deslindó de sancionar a la empresa Minera México como responsable de la explosión provocada por un elevado almacenamiento de gas. Para deslindarse, solicitó al Foro Consultivo Científico y Tecnológico un dictamen para evaluar la situación física en que se encontraba la mina. Del resultado de esa evaluación dependería la búsqueda de los cuerpos. El foro concluyó que el rescate era improcedente. Romero Gudiño había prestado con anterioridad sus servicios al Foro Consultivo.

Pero miren nada más, ahora agarró mejor hueso que en los tiempos de su gremio Priista; pero aparte, su tiempo "lo alarga y le rinde maravillosamente" porque ha escrito alrededor de ocho libros más gruesos que un ladrillo, es miembro del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), donde fungió como consejero de 2017-2020, junto con estos rimbombantes personajes: Julián Alfonso Olivas Ugalde, exsubsecretario de la Función Pública con Peña Nieto, que nada hizo para detener tanta corrupción o impulsar los procedimientos de investigación y auditoría a la SEDATU y la Sedesol. Tampoco aceptó transparentar Compranet.

Todos aquellos personajes caradura que han sido omisos en su deber de cuidado tienen mejores encargos de lo que habían imaginado, y en un gobierno al que no solo intentaron boicotear, sino contra el que actuaron para privilegiar a la estructura de poder que generó, propició y encubrió la corrupción gubernamental. Sin duda alguna cada uno de estos depredadores, que se convirtieron en símbolo de la traición, en su momento deberán dar cuenta de su manera de actuar. Si no hay reparación del daño no hay justicia. Hartos estamos de normalizar la impunidad.

¿Cuándo se justifica mentir?

Vale la pena conocer un poco más a fondo la red de relaciones y negocios de Jaime Valls y su primo hermano Jorge Emanuel Pedrero Esponda —parentesco consanguíneo por dos hermanas, la madre de Jaime y la de Jorge Emanuel—, y su relación con el ineficiente y desaseado auditor superior, pues sus actividades público-privadas se articulan de tal modo que lo difícil es no suponer que de menos existen muy serios conflictos de intereses, faltas administrativas graves y conductas que podrían encuadrar en posibles actos criminales.

A quien se desempeñó como su chofer en la ASF, Pedrero lo empleaba para atender el reparto de cerveza para sus negocios. Existe el testimonio y un correo donde lo informa él mismo. Y vean nada más, posee el registro de cuatro marcas de cerveza artesanal (Bonampak, Yaxchilan, Tzotzil y La Mocte), el cual comparte con su hermano Fabián Emanuel, cuya carrera, por cierto, también ha estado vinculada al sector público y hace recordar la ingratitud y transformación al lado oscuro, porque a este joven Fabián le di oportunidad en 2001, recién egresado de la carrera, de colaborar conmigo en la Contraloría General del estado de Chiapas y pintaba para ser buen elemento; lástima que se echara a perder.

Se le colocó en una dirección en el Seguro Popular, de abril a julio de 2009; como coordinador regional en la Secretaría del Campo, una labor de supervisión de noviembre de 2009 a febrero de 2011, subsecretario de Auditoría Pública en la SFP estatal, de febrero de 2008 a marzo de 2009, y tan rápido subió que llegó a convertirse en delegado de la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Chiapas, de octubre de 2013 a diciembre de 2015, en la supervisión y coordinación de atención a usuarios de servicios financieros. Qué cosas, evidente conflicto de interés y riesgosas redes de relaciones. Reafirmo además que no agarran cualquier hueso, se colocan estratégicamente en cargos donde se operan grandes montos, mentes y multas, como se puede observar en el mapa de vínculos disponible en www.lacasasucia.com.mx.

Pero regresemos a este personajillo, Jorge Emanuel, quien antes de entrar a la ASF estuvo a cargo de la solventación de observaciones en la Auditoría Superior de Chiapas, de marzo de 2004 a octubre de 2007, y luego, de noviembre de 2008 a abril de 2017, fue administrador regional en el mismo estado para el Consejo de la Judicatura Federal, donde fue sujeto al procedimiento de responsabilidad administrativa CPJF/PA/008/2019, por firmar los cheques

0033315 y 0033300, el 21 de diciembre de 2016, sin notar (ojo) que no se habían suscrito los contratos ni entregado los bienes objeto de los mismos.

Cómo entender que alguien de su nivel jerárquico de administrador regional en Tuxtla Gutiérrez, con más de ocho años en el Poder Judicial, en esas fechas de vacaciones de fin de año, sin que existiera la documentación justificativa y comprobatoria, emita a "proveedores" los cheques sin cerciorarse de que no existían contratos. Luego, que las fechas de contratos presentados son posteriores a las de los cheques y que los bienes no se habían entregado por parte de los proveedores, ni recibido en el Consejo de la Judicatura.

Así lo revela la resolución administrativa CPJF/PA/00812019, donde lo más irrisorio fue la sanción impuesta consistente en una amonestación pública. Sí, leyeron bien, pero adivinen ¿quién resolvió esa sanción? Nada menos que Arely Gómez González, la exprocuradora General de la República y exsecretaria de la Función Pública con Enrique Peña Nieto, misma que fue omisa en investigar las denuncias presentadas por la ASF en los casos de la SEDATU y la Sedesol. Pero gracias a Televisa sigue respirando y cobrando en los mejores puestos en el gobierno. Recordemos a su otro empleado, Eber Betanzos, acomodaticio y servil, nombrado secretario técnico en la ASF por acuerdos pactados, que ha incurrido en actos graves y delicados, como ya abordamos en el capítulo anterior. Coincido con las voces de la mayoría, en un Estado de derecho no deberían estar orondamente premiados, sino que deberían estar inhabilitados o en la cárcel, no gozando del manto protector de la impunidad. Aleccionadora su jerarquía de valores. Persisten el tráfico de influencias y los cotos de poder. En este nuevo gobierno les va mucho mejor a los encubridores y cómplices del pasado.

Pero sigamos, que "gallina que come huevo, aunque le quemen el pico", como reza un refrán. En su encargo como titular del ICADEFIS, el mismísimo Jorge Emanuel Pedrero Esponda firmó el 13 de septiembre de 2019 el contrato ASF-UGA-DAJ-ICADEFIS-074/2019, relacionado con la prestación del servicio integral para la impartición de cursos y donde existe un claro conflicto de interés, aunado a un presunto ejercicio indebido del servicio público. Por un lado, el contrato fue firmado con la Fundación Educación Superior Empresa (FESE), la cual comparte domicilios tanto con el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), como con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Es decir, firmó el contrato millonario con su primo hermano, el titular-secretario general. No solo eso, Jaime Valls aparece, desde octubre de 2015, como presidente de la Asamblea General de la propia FESE, y el director general de esta última es Alfredo Martínez de la Torre, quien además de ser designado por Valls Esponda como enlace para el desarrollo de actividades con la Secretaría de Hacienda mediante el convenio de seguimiento de diciembre de 2016 con la ANUIES, fue director del Centro Universidad-Empresa de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Por otro lado, en el referido contrato que su primo hermano, Jorge Emanuel, firmó con la FESE, también aparece beneficiado otro de sus asociados, que es Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C. Su administrador único es César Gabriel Canavati Nasta, el cual, de 2014 a 2017, recibió vía CLC (cuentas por liquidar) un total de 22 millones 978 419 pesos con 98 centavos. Y de 2011 a 2020 esta empresa obtuvo contratos con 23 instituciones de gobierno, cuyo monto total alcanzó los 64 444 561 pesos y, otra vez, 98 centavos.

Es decir, duplicó sus ingresos y reafirmó que en el gobierno de la denominada 4T persisten los actos de corrupción, a pesar del llamado presidencial a combatirla, porque a nadie más se le notan las ganas de hacerlo. Y aquí tenemos el ejemplo. Qué bonita familia, y qué tal se placea la impunidad del brazo de los intereses de estos cínicos que se prestaron a intentar proteger los intereses oscuros, y por tanto se inventaron acusarme y obligaron al personal a declarar en contra mía; exactamente por esto que ellos sí hacen, y muy mal, por cierto.

Al mes de enero de 2023 se había reformado por tercera vez el Reglamento Interior de la ASF para dar paso a la creación de nuevas estructuras y más espacios para los cuates. Esta última aumenta en la plantilla dos plazas de director general y 15 de directores de área, y por supuesto movimientos en las plazas de alto rango, y seguramente lo veremos incrustar otros "compañeritos" para seguir con el control político sobre solventaciones, auditorías, investigaciones, procedimientos administrativos de sus entrañables amigos pluripartidistas y acabar de limpiar la casa sucia.

Puede verse en la red de relaciones que se revelan en este libro qué cantidad de infamias han cometido, avalados por la estructura de poder que los ha prohijado por décadas y generaciones para acomodarse. Hay grandes negocios y diversos intereses de por medio y estas son las acciones que han lastimado el presente y el futuro de la justicia y la rendición de cuentas.

Este relato es sumamente revelador y habla de las familias políticas que prevalecen aún en las altas esferas de poder. Cuando pensamos que no hay peores, resurgen los mismos. No importa el nivel de escándalo, ineptitud o corrupción interna o externa, dado que se consideran irremplazables con todo y su manifiesto desprecio a la ley.

Lo relevante para ellos se convierte en el reparto de los puestos públicos más altos con base en su autoimpuesto criterio de lealtad. Así son los resultados de los nombramientos que se han hecho por sexenios en la mayoría de las instituciones, tienen la excusa perfecta porque mientras no exista un contrapeso real a la mano de los partidos políticos en las grandes decisiones y nombramientos, el porcentaje esperado de corrupción será proporcional a su actuación.

4

La casa sucia

Siempre supe que nadar a contracorriente tendría consecuencias. En febrero de 2018, les comenté a los directores de Auditoría Forense que debíamos estar listos para dejar todo en orden, pues se vislumbraba que colocarían al auditor a modo y conocíamos la historia que le precedía; era tanto el trabajo desempeñado por años, documentando actos de corrupción con visos de protección y encubrimiento, que invariablemente sentían impotencia y frustración ante la posibilidad de que ocurriera.

Cuando me enteré de que iban a nombrarlo intempestivamente con la finalidad de tomar el control de la institución me entrevisté con Olga Sánchez Cordero, quien sería nombrada secretaria de Gobernación. En algún momento ella había hecho una declaración relacionada con la fiscalización, que era inexacta, y quise saludarla y exponerle las funciones y facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y ponerla al tanto de lo que estaba ocurriendo al interior del proceso, lo que había sucedido con la exigencia de los diputados Priistas y los resultados publicados derivados de las auditorías forenses. No fui a pedirle nada.

Me recibió en su oficina y le externé que sería gravísimo que se apoyara a quien, por sus antecedentes y vínculos con el grupo en el poder, intentaría encubrir la red de corrupción y echar abajo las denuncias presentadas. Me dijo que eso jamás lo iban a permitir y que estarían muy atentos al asunto, una cuestión de importancia con la política nacional. Me agradeció la visita y me manifestó, sin yo pedírselo, que velaría por la permanencia del equipo auditor forense porque los resultados eran muy trascendentes y teníamos que seguir en la ASF.

Su papel político era importante para el futuro de la fiscalización superior en un momento en que la institución se encontraba en alto riesgo de ser cooptada, dado el conjunto de sucesos que acontecían. Posteriormente, cuando inició la irrupción brutal en contra de la institución intenté buscarla de nuevo. No volví a saber de ella. Lo entendí al poco tiempo, cuando David Colmenares Páramo presentó un libro junto con la hija de ella, la magistrada Paula García Villegas Sánchez Cordero.[21] Esa pandilla empezaba a tejer vínculos. Prebendas baratas a cambio de silencio cómplice. La realidad es que hacen pactos eternos de impunidad y es una de las razones por las que nos tocó enfrentar una brutal violencia estructural y política en una asimetría en desventaja con el poder de las instituciones que los protegieron.

Habían iniciado una campaña de agresiones, difamación y persecución política en mi contra, al tiempo que allanaban las oficinas para saquear información, evidencia y expedientes que ahí se resguardaban, acciones ilegales que por supuesto urgían la intervención inmediata de quienes se arrobaron la propiedad de la institución; creo firmemente que Sánchez

Cordero pudo haber hecho mucho cuando se ganaron las elecciones, pues ya estaba cantado que ella sería la secretaria, y de alguna manera con su fracción parlamentaria actuar con responsabilidad política. La violencia política que viven las mujeres es porque el sistema lo permite. Una intervención suya hubiera sido muy valiosa para detener las arbitrariedades que fueron sucediendo a finales de 2018 y todo 2019.

Al sistema no le interesaba lo que pudiera ocurrir con la ASF. Olga demostró su pequeñez y la historia que le antecedía como garante de la legalidad quedó en el olvido. Su intervención hubiera sido un mensaje acorde al nuevo gobierno, en un contexto de integridad para pedir una investigación y la atención inmediata; pudo hacer mucho por la institución, evitar el cúmulo de arbitrariedades y su final destrucción. Eso inhibió a muchos de denunciar lo que ocurría. Expresaron no sentir ningún apoyo y no estaban equivocados en su percepción. Al sistema le interesa prevalecer, como en los viejos tiempos. Nada ha cambiado en ese sentido.

Los acontecimientos a partir del proceso de elección del auditor trascienden más allá de lo imaginado. Así el cobijo y la participación de la más alta jerarquía del poder comenzaron su labor desaseada con el encubrimiento y el impulso de actos corruptos. La historia del país nos ha mostrado que no hay institución que aguante el peso de la putrefacción política, finalmente son frágiles y vulnerables ante un embate asimétrico del poder. La ASF era respetada, considerada sólida, técnica y especializada; pensábamos que estaba blindada ante cualquier injerencia política, pero no fue así, dinamitaron desde adentro un referente internacional en materia de fiscalización.

Los sucesos ocurrieron a partir del nombramiento del auditor superior Colmenares, el jueves 15 de marzo de 2018, aunque llegó a la oficina hasta el martes 20, pues lo primero para él fue hacer su visita de las siete casas para sellar pactos. Cobró su sueldo en la Secretaría de Hacienda, área del Poder Ejecutivo, hasta un día antes, el 14 de marzo, y al siguiente día fue dado de alta en la ASF. De entrada, ya era claro el sesgo político y conflicto de interés. En su hojita de vida de media cuartilla se aprecia que salió de la licenciatura en Economía y no volvió a estudiar nada. Encontró su *modus vivendi* cobijado por el exgobernador Heladio Ramírez, quien lo nombró secretario de Finanzas y luego se vincularon indisolublemente. A partir de ahí parece que descubrió la mina de oro para vender proyectos a los gobiernos, buscó trabajar siempre en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para estar en cercanía con las finanzas de las entidades federativas, ofreciendo recursos en visitas a gobernadores, que ha sido su lado débil de vida.

Lo recuerdo muy bien en Chiapas. Llegó a una reunión acompañando al entonces gobernador José Murat, y claro, se quedó a "venderse" como si de verdad tuviera conocimiento y "contactos" para apoyar a la hacienda pública de las entidades, y como "consultor" para vincularse con los municipios y entidades por servicios supuestamente de temas financieros; recordemos que formaba parte del grupo de Isaac Gamboa, asesinado

extrañamente hace un par de años y ligado a la Operación Zafiro De su trabajo ni idea tenía ni tiene, pero le gusta sentirse y sentarse cerca de los gobernadores.

Antes de la elección del auditor, cuando todavía no se ponían de acuerdo los coordinadores de los partidos políticos y la moneda estaba en el aire, previo a la decisión del Partido Acción Nacional (pan) por Ricardo Anaya, se reunieron los tres integrantes de la terna final: Arturo Orcí, David Colmenares y Ángel Trinidad, convocados por este último, en el restaurante de un hotel frente a la Alameda Central, en la Ciudad de México, para llegar a un acuerdo de civilidad —en caso de que cualquiera de ellos ganara— y comprometerse en su permanencia en la ASF, y en el caso de David, ofrecerle una auditoría especial, a lo que él respondió: "Yo ya estuve ahí y no me interesa, a mí denme contratos, denme negocios". No les sorprendió su respuesta tajante.

Fue tan "intempestivo" su nombramiento que los que iban a formar parte de sus "negocios" tenían mucha prisa en apoderarse de los mejores puestos al integrarse como funcionarios en los nuevos tiempos de fiscalización, y como este funcionario no tiene palabra y lo sabían, ya nombrado, al poco tiempo mandó llamar al auditor de gasto federalizado, Arturo Orcí, quien había sido el candidato más fuerte en el proceso, sacrificado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) debido a intereses "superiores", y le dijo que tenía compromisos con los diputados y le pidió su renuncia inmediata. Pues cómo no, si entre los cambios al reglamento interior que realizó de manera exprés estuvo que en su ausencia quien lo supliría sería el auditor especial de gasto federalizado. Era urgente colocar a su ficha.

En el nombramiento de Colmenares jugó un papel relevante José Antonio González Anaya, que sustituyó a José Antonio Meade como secretario de Hacienda, de noviembre de 2017 al 30 de noviembre de 2018; previamente director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) —instituciones que han sido señaladas recurrentemente por actos irregulares en compras, colusión con proveedores, compras infladas de medicamentos y servicios, contratos por servicios simulados, entre otros—. Ahí se tiene una serie de indicios interesante. Fue jefe directo de Colmenares, que laboraba, o cobraba más bien, como jefe de unidad en la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas, cargo en el que permaneció casualmente el mismo periodo que Meade en la SHCP; por cierto, ente que desaparecieron en el actual gobierno por ineficiente. Era un elefante blanco para los cuates.

Tenemos que pasó de trabajar del Poder Ejecutivo, de un día a otro, a convertirse en el fiscalizador de todo el país, incluida la secretaría más importante, y donde trabajaba con su grupo político. Previo a su elección, después del agandalle que intentaron en la ASF para exigir "una carta de liberación".

En la semana previa a la elección, a inicios de marzo de 2018, se llevaba a cabo una reunión de trabajo encabezada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto con algunos de sus

colaboradores y líderes del PRI, entre ellos Manlio Fabio Beltrones; ahí, Peña le dijo a Manlio: "Estarás contento, ya vamos a nombrar a tu amigo Colmenares como auditor superior", a lo que él le respondió: "No es mi amigo, pero sé cómo se maneja expresándolo", entonces se volteó Peña y señaló a Pepe Toño, como le llaman sus amigos al titular de la SHCP, que ahí se encontraba presente, y le contestó: "Pepe Toño me lo ha recomendado muy ampliamente", y pues cómo no, si era su subordinado, el perfil idóneo que aseguraba lealtad y obediencia absoluta, aunque en corto cuestionarían: ¿quién irá entonces a trabajar en la ASF?

Conocían, seguramente, el nivel de ineptitud y de ineficiencia del futuro auditor. Las formas dejaron de interesarles, el sujeto era el indicado para sus fines, ya que les garantizaba la impunidad anhelada y prometía cobrar, a nombre de ellos, las "facturas por las afrentas acumuladas"; así empezaba a escribirse la carta de instrucciones de lo que tendría que hacer de manera inmediata al llegar a "limpiar" la ASF; incluía, por supuesto, blindar a la SHCP en la fiscalización, situación que aconteció, y así no se conocería, por ejemplo, que el avión que se utilizaba en la SHCP hacía viajes especiales para apoyar la campaña, con el tal Pepe Toño y uno o dos funcionarios más; o el fideicomiso creado en noviembre de 2017 para que inusualmente todos los municipios, entidades, gobiernos municipales y el federal devolvieran ahí los remanentes que mantenían de años anteriores sin tener atribuciones para ellos, pues de los fondos de años atrás en materia de gasto federalizado el grupo de poder —al que le debe los puestos y emolumentos suyos y de su familia— aseguraba su protección inmediata, así como limpiar los expedientes de resarcimiento o por responsabilidad administrativa, ya que ahí estaba el segundo operador, hermano de Virgilio, Víctor Andrade, quien por eso no fue movido de la titularidad de la Unidad de Asuntos Jurídicos.

Ese jueves, mientras "juramentaba" lo que ha incumplido desde el primer momento de su llegada, guardar y hacer guardar la Constitución, apenas salió de la Cámara de Diputados fue presuroso para agradecer y ponerse a las órdenes del candidato José Antonio Meade y a su jefe Pepe Toño, quien por cierto es concuño de Carlos Salinas de Gortari, y al coordinador de asesoría política, José Ramón Martel, para hacerles extensivo su "invaluable apoyo" por el nombramiento que había soñado desde 2015.

Colmenares se alió hasta con el diablo y comprometió la autonomía de la ASF. Fue a ponerse a las órdenes, libreta en mano para anotar y recoger la larga lista de encargos, favores y encomiendas... ¿qué más se puede pedir?, pensaron seguramente más de dos, al ver su patética genuflexión. Era el besamanos al que estaba acostumbrado en su vida profesional; mientras tanto lo esperábamos en las instalaciones de la auditoría, que era lo que menos le interesaba, pues se presentó cinco días después.

Comentaría un par de extitulares de finanzas estatales, uno de ellos de Nayarit, que a pesar de lo que expresó del auditor, ahora este permanece ejecutando las acciones ilegales en la Dirección General de Finanzas de la ASF, privilegiando actos y pagos irregulares. "Es un

peligro que llegue, es un cuate al que le encanta que le invites a comer y que vive pidiéndote viáticos", externó sobre el aún titular de finanzas de la ASF. Por cierto, Colmenares quedó a deber en su último encargo como jefe de unidad un monto por viáticos observado por el Órgano Interno de Control (OIC), pero bueno, seguramente como ya era auditor, o alguien lo puso de su bolsa o sigue sin devolver el recurso. El envilecimiento de los partidos y los funcionarios coludidos rindió el fruto esperado.

Retornemos al punto. Al aparecerse en la ASF lo primero que Colmenares hizo fue exigir el pago de su bono —fuera de toda norma—, comportamiento tal cual lo han descrito. Llegó a la auditoría con la consigna de parar y arreglar "los asuntos delicados", y tan es así que sus primeras actividades fueron diversas reuniones, comer o cenar con Rosario Robles; para ocultarlo, desconectaron a partir de junio de 2018 las cámaras de vigilancia en la Dirección General de Auditoría Forense (DGAF) y en zonas estratégicas, con la orden a las áreas de seguridad de guardar sigilo en relación con esas visitas y que no quedaran registrados los encuentros, ni los datos del vehículo, ni la extracción de cajas y expedientes con documentos. El grupo político que lo encumbró, ilusoriamente tenía la seguridad de ganar las elecciones para echar de sus cargos a todos los que les estorbábamos y así solventar "los globitos", frase acuñada por ambos personajes: Robles y Colmenares, para intentar desvirtuar los hallazgos y observaciones.

El clima organizacional de la institución cambió completamente, olía a podredumbre, había parálisis en las áreas auditoras y administrativas, todos se encontraban a la expectativa de que se convocara al Consejo de Dirección para conocer su plan de trabajo, y que se enterara de los asuntos de fiscalización que se encontraban en marcha; no solo no convocó, a mi salida en mayo no había efectuado una sola reunión del Consejo. Una vergüenza absoluta, y ya sabemos que modificó el reglamento para eliminar este órgano de control y gobernanza. Todo lo que obstaculizara la opacidad había que eliminarlo. Tampoco mostró interés alguno en los trabajos y resultados de la ASF, salvo a inicios de abril, casualmente en los asuntos relacionados con las observaciones a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA), en esta última particularmente por denuncias de hechos en una universidad ligada a Zacatecas, seguramente por intereses políticos de alguno de sus aliados.

Con su arribo a la institución, comenzaron a finales de marzo los despidos rudos e ilegales en la Auditoría Especial de Gasto Federalizado, de la que había sido echado por no trabajar, disfrutaba vociferando en los pasillos los nombres de quienes correría; tenía mucha prisa por "enterrar su pasado" ahí, por eso una de las primeras acciones fue deshacerse de los directores generales de ese entonces que conocían su patético trabajo, gente clave que ocupaba primeros niveles, sobre todo llegó a cobrar *vendettas* a varios compañeros, como si fueran responsables de su propia ineficiencia. Esas acciones tenían como finalidad adicional infundir terror laboral entre el personal operativo, tenía modos de líder

delincuencial de la más baja estirpe; generó un ambiente hostil y de incertidumbre, sobre todo entre los auditores y personal de autoridad, quienes evitaban incluso hablar con colegas "señalados" para no ser despedidos.

En su caso, a sabiendas de que su nombramiento era inmerecido en estricto sentido de la idoneidad del perfil técnico ético y la legalidad del proceso, creó su propia "ficción", de tal modo que racionalizó y generó una percepción distorsionada de la realidad, al creer que resultó ganador por méritos profesionales; ese autoengaño implicó también su bandera de legitimación. "Yo les gané, yo les gané", les escupía en la cara a quienes fueron sus contrincantes en la terna en cada ocasión que se presentaba, y afirmaba en toda reunión que él tenía "el rompecabezas para quitar y poner piezas a su antojo". Pobre tipo y pobres de aquellos que tuvieron la tolerancia y el tiempo para escuchar sus dislates.

El tema es de fondo. Una cosa es que haya sido nombrado auditor superior y otra distinta que eso legitime las acciones ilegales de quienes están obligados a cumplir y vigilar el respeto a la Carta Magna. Pensar que el número de votos, ordenados a las bancadas, le concede atribuciones para hacer lo que le venga en gana en la ASF, da una idea de su mediocridad.

Con ese pensamiento se entiende el modo denigrante con que le pidió la renuncia a Javier Pérez Saavedra, entonces auditor especial de Cumplimiento Financiero: "Necesito tu plaza porque tengo un compromiso"; acordaron que la renuncia sería con fecha 31 de mayo de ese año. Una tarde, mientras Javier se encontraba comiendo, recibió una llamada urgente de que se presentara con el auditor, sin ningún tema, simplemente pedían que fuera de inmediato. Por supuesto que algo tramaban; no habíamos visto en la ASF esa falta de respeto hacia un funcionario, con una insistencia abusiva para que dejara de comer y acudiera de inmediato. No acudió.

Lo que temíamos sucedió. Al otro día por la mañana llegaron a su oficina Arturo Peña Zazueta y Sergio Iván Reyna de la Madrid, a quienes por cierto Javier había ratificado en su encargo y al último lo había nombrado director general de Recursos Humanos; un par de funcionarios actuando en la ilegalidad. Esas traiciones y deslealtades hablan de su vileza. Acudieron ambos por instrucciones de Colmenares a amenazar a Javier: "La decisión es que te vayas hoy y ahorita [era media mañana], que firmes la renuncia, y te aconsejo que no te lances al vacío", le expresó con rudeza el miserable de Peña; si no aceptaba renunciar había la orden de negarle el acceso.

Ese fue el acto intimidatorio, amenazador e ilegal más despreciable de una larga cadena de ceses y amagos que iniciaron con la llegada de esos rufianes, llegada protegida y aplaudida por los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia, bajo el mando del difunto Maldonado que ahí le cobraba la negativa de haber expedido aquella "carta salvoconducto", que luego le fue otorgada al candidato Meade y, como intermediario, Jaime Valls. Para eso son los amigos, ¿no? El primer "cese" disfrazado sucedió a unos días de su llegada, con el

contador público Eduardo Gurza Curiel, quien había sido nombrado por Pérez Saavedra como titular de la Unidad de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión de la ASF (AIEG) desde enero de 2018, pero con efectos a partir del 16 de marzo de 2018, toda vez que se conocía formalmente que el proceso de elección para auditor se había pospuesto para después de las elecciones, y la ASF tenía que operar con los mejores expertos auditores en fiscalización.

Tenemos entonces que recién llegado Colmenares al cargo mandó llamar a Gurza y le dijo: "Tú no me has hecho nada, incluso te pensaba invitar aquí a trabajar conmigo, pero como te nombraron sin esperar a que yo llegara…". Gurza intentó explicar sin éxito, porque nunca entendió, que nadie esperaba que hubiera habido nombramiento de auditor, y que la decisión se había tomado desde enero, pero que la persona que ocupaba ese cargo había tomado vacaciones y que por eso él se incorporó hasta el 16 de marzo. David le respondió: "No. Lo hicieron a propósito y además traigo muchos compromisos con Movimiento Ciudadano y con el PRI; bueno con el pan ya no, con estos no tanto; necesito tu plaza con fecha 30 de abril". Luego, a la media hora le llamó y le pidió que le enviara la renuncia de una vez. "Necesito plazas para acomodar a la gente que me ayudó a llegar a esto, tengo que afrontarlo, tú sabes cómo es esto".

Comenzaba el pago de prebendas y, por tanto, la cadena de ceses en un claro conjunto de actos intimidatorios y violentos que vulneraron la dignidad de las personas y de la institución.

Merece un análisis profundo que a partir de la llegada de esa pandilla y los recomendados, allegados, exdiputados salientes, hermanos, tíos, hijos de funcionarios y miembros de los distintos partidos que se aliaron para la designación del auditor, independientemente del conflicto de interés y tráfico de influencias, se puso en evidencia la actitud vandálica de quien se sabía protegido del poder; normalizando con ello la violencia desplegada con rencor e ira acumulada por años, resultante en este sistema de colusión y encumbramiento. Es ahí donde comenzó a ejecutar las instrucciones recibidas en un contexto de ineptitud, disfunción, agresión y sumisión, pagando los favores que ofreció, sin el menor oficio político y bajo el hilo conductor que lo mueve a actuar como títere.

El siguiente sería el auditor especial de Desempeño, actual secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino. Colmenares se apareció en su oficina intempestivamente para pedirle que fuera su "asesor"; con el aplomo que caracteriza a Salcedo, le dijo —palabras más, palabras menos—: "Conmigo no tienes que fingir o venir a tratar de engañarme". Salcedo es un lobo político que observaba y sabía perfecto lo que pasaba al interior de la dependencia. Conociendo la naturaleza del titular y de la gente que arribaba con él, abrió un cajón de su escritorio, donde guardaba su documento de renuncia y se lo plantó en la cara.

Nadie, con el mínimo de recato y moral, estaba dispuesto a tolerar sus bajezas, desatinos y mezquindades, salvo los que, como él, carecen de decoro y honor. No se imaginaría que después sería el operador en la Secretaría de la Función Pública (SFP) y enlace con la ASF. Por supuesto, mi caso es ejemplo claro de la misión y encargo que le habían conferido. Como una turba, llegaban ávidos a ocupar los puestos, querían ver el organigrama, adelantar los bonos que no les correspondían, apropiarse de vehículos y gasolina. Fueron convertidos en adoctrinados cómplices en cada uno de los actos ilegales que llevaron a cabo, todos con su máscara de identidad partidista y una percepción —errónea— de que ganarían las elecciones, lo que les envalentonaba para enviar un mensaje a quienes responsabilizaban de su caída de reputación y de las encuestas de su candidato a la Presidencia, muy por debajo de lo esperado. Nos preguntábamos en qué momento se convocaría al Consejo de Dirección de la ASF, que debía sesionar mes con mes para poner en claro la serie de irregularidades que estaban aconteciendo. Para mayo de 2018 no había sido convocado.

Era la corrupción política en su máxima expresión, en un intento —auspiciado por bribones— para obtener beneficios con la posibilidad de "solventar y arreglar" una serie de observaciones e irregularidades detectadas en los estados, las dependencias y entidades durante el sexenio; claro, querían asegurar el control y la manipulación de la fiscalización a futuro. Quién diría que ganaría la presidencia Andrés Manuel López Obrador y que invitaría a trabajar en su gabinete a los expertos de auditoría que habían sido despedidos de la ASF. Colmenares ni se imaginaba que todos los funcionarios maltratados y corridos se incorporarían a la Función Pública y que tendría que sentarse con ellos para ver los temas de fiscalización. Afortunadamente la rueda gira para todos.

La embestida

En la DGAF estábamos preparados para dejar el cargo desde febrero, cuando corroboré lo que tramaban. No podíamos trabajar con gente así. Al menos, hasta mi salida en mayo de ese año, las unidades auditoras continuábamos con nuestras actividades, atendiendo las acciones que nos correspondían; seguíamos fiscalizando normalmente, hasta el 15 de mayo de 2018, fecha en que el auditor superior despidió al contador Pérez Saavedra. Supimos que su prisa era por la insistencia del ilustre personaje que sería nombrado en su lugar. No podía esperar su avidez de poder.

Mientras tanto, las auditorías relevantes a la SEDATU, programadas desde marzo por hallazgos de desvío de recursos y corrupción, no avanzaban en la gestión, porque cada vez se producían más obstáculos en espera de las autorizaciones que conforme a la norma deben generarse para revisar periodos anteriores por denuncia. Durante la fiscalización de la cuenta pública anterior, habíamos descubierto desvíos de recursos millonarios a instituciones educativas, de 2016 y años anteriores, por lo que solicitamos la dictaminación, conforme lo mandata el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la propia ley de fiscalización, ya que la reforma incluyó este candado para limitar nuestra independencia y autonomía de gestión en la programación de las revisiones; antes de la nueva legislación no

se requería ese famoso dictamen o autorización para búsqueda de datos financieros del auditor superior. Habían transcurrido dos meses de espera en la gestión y teníamos un notorio retraso en la ejecución programada, el tiempo apremiaba y por supuesto el jurídico no hacía nada, dejó incluso de tomar las llamadas al entonces auditor especial de Cumplimiento. Estaban cooptando la fiscalización.

Entonces llegó el flamantísimo Gerardo Lozano Dubernard, nombrado en sustitución del contador Pérez Saavedra; debieron ver sus ínfulas de humildad, le costaba trabajo entender qué hacíamos en la auditoría forense y también le costaba contenerse en mostrar su verdadera personalidad. Desafortunadamente no me tocó elegir con quién trabajar. Sabíamos que el tiempo estaba contado y queríamos dejar lo más avanzadas nuestras investigaciones.

La primera impresión que quiso darme —pienso que menospreció mi inteligencia— fue un alarde de felicitaciones por mi trabajo, dijo que íbamos a hacer un gran equipo y que, por supuesto, yo seguiría colaborando. No estábamos acostumbrados a ese tipo de lisonjería hipócrita, siempre he pensado en la reciprocidad en el trato profesional; agradecí y traté de explicar con manzanas lo que no podía entender a pesar de mis múltiples intentos. Cuando le pedí su intervención ante la obstaculización de los dictámenes de auditoría, agachaba "el pico"; tuve que insistir muchas veces. Cuando se vio cercado, le habló con tanto miedo y reverencia a Andrade, que su actuación era realmente penosa; aquel lo ignoraba. Decía yo que para mí hubiera estado bueno, pero cada uno escoge sus propias cadenas, y así permaneció limitado y menospreciado hasta el final de sus días como auditor, porque lo fueron haciendo a un lado, se referían a él de manera muy despectiva y estaba estrictamente prohibido invitarlo a reuniones, ya que el auditor no lo toleraba; en la primera oportunidad se deshizo de él y de todo el equipo de ineptos que lo acompañaron a cobrar durante su paso denigrante en la institución.

Transcurrieron casi dos meses de mis peticiones y no se aprobaban; finalmente informaron mediante sendos dictámenes que no se habían autorizado las auditorías. Era la señal que estábamos esperando para confirmar lo que sabíamos desde el inicio: el encubrimiento de la corrupción y la obstaculización a la fiscalización. Por fortuna yo solo tuve una convocatoria para explicarle al que cobra como auditor los hallazgos de años anteriores, porque indicó que cenaría con Rosario Robles ese día, y mostré la elaboración de los mapas de vínculos, que por cierto dejaron de hacerse en la DGAF a partir de su llegada; ni siquiera tenía el valor de mirarme a la cara. Otro más que no entendía de qué se le hablaba, pero no dejaba de presumir, muy orgulloso, que ese día cenaría con ella y que no podíamos presentar denuncia alguna hasta que no transcurriera el tiempo de solventación. Yo sonreí. Sabía hacia dónde iba, creo que nos subestimó y mucho. Afortunadamente no volví a verlo. Así transcurrió el tiempo en que fue despidiendo a varios de los mandos medios y superiores de distintas áreas. Nosotros siempre atentos a cualquier eventualidad.

Al tomar posesión del cargo de auditor en marzo, con él hizo su aparición Isaac Rojkind Orleansky, quien en ese momento, y hasta julio de 2018, fungió como secretario técnico de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados; de inmediato dio a conocer que era cuestión de tiempo para que tomara posesión de la auditoría especial de seguimiento en la ASF, y que estaba elaborando el reglamento interior, para lo cual empezaría a planear lo necesario para su llegada; lo que no veía en su ceguera virtual, en su ambición de poder, era su conflicto de interés y otras conductas potencialmente deshonestas, como ejercicio indebido, tráfico de influencias y las que le sumen, ya que mientras seguía cobrando cuantiosamente como secretario técnico de la Comisión de Vigilancia estaba metiendo mano en lo que esa misma comisión debía autorizar, el reglamento interior de la ASF para crear dos estructuras de alto nivel, la auditoría especial expresamente para él y otra estructura similar para la diputada Claudia Sofía Corichi García, secretaria de la comisión, ambos participantes activos en el proceso de selección.

Rojkind trabajó en la Sedesol como director general de Opciones Productivas y Vivienda. En 2014 entró a la ASF como director general de Control y Seguimiento de Acciones Promovidas, donde le dieron las gracias precisamente por su ineficacia, falta de resultados y sesgo en ejercicio de su actividad. Se fue bastante enconado, al igual que Colmenares, por sus respectivos despidos. El entonces secretario técnico de la Comisión de Vigilancia participó activamente en el nombramiento del auditor, se frotaba las manos, presto para cobrar viejas rencillas acumuladas por su salida de la ASF en las mismas circunstancias que a Colmenares años antes.

Y así, acostumbrado al manejo desaseado en la Cámara, se presentó desde el primer día junto con el auditor, tomando el control y ejerciendo una autoridad en franco ejercicio ilegal de funciones, ya que al no contar con nombramiento oficial en la institución, dobleteaba ingresos; pero más allá de eso comenzó a controlar la estructura organizacional para hacer los cambios a modo que habían acordado con Colmenares y Maldonado, hacer y deshacer, pues aseguró que ya tenía “una estrategia para la entrega de expedientes de seguimiento de todas las áreas auditoras”.

Se rendían ante sus órdenes el titular de Jurídico y Lozano, recién nombrado auditor especial. Daban pena ajena en las reuniones, viéndolo con ojos caídos, atendiendo sus instrucciones absolutamente ilegales; trabajando el reglamento interior a su propio beneficio y ejecutando todo tipo de funciones instruidas por Colmenares, mientras ejecutaban la “limpia” de los altos mandos, para que, con el reglamento autorizado se incorporara como auditor especial de Seguimiento, Informes e Investigación (AESII), donde se adjudicó las funciones de decidir qué se investigaba y qué se solventaba, sin la intervención ni revisión de ningún cuerpo colegiado ni las áreas auditoras.

En virtud de que él ya conocía a muchos de los auditores que habían laborado en la extinta Dirección General de Seguimiento, donde estuvo a cargo, empezó a solicitar información confidencial relacionada con la fiscalización, a ejercer dominio sobre recursos, tanto

materiales, como humanos y financieros; aun sin tener cargo alguno y sin fundamento jurídico en contraposición a las normas aplicables, comenzó a llamar al personal auditor sin previo acuerdo de los directores generales, sus jefes inmediatos, quienes se mantenían a la expectativa, sin tener el conocimiento de cómo se llevarían a cabo las acciones, qué pasaría, y si podrían disponer de su personal, que en ese momento estaba asignado en auditorías; los hacían regresar de sus comisiones, entorpecían y detenían su trabajo.

Desde el primer momento quedó claro el estilo de ilegalidad que se impondría en la ASF. Así, totalmente desconcertados, los mandos medios tuvieron que atender instrucciones de una persona de la que no entendían razones y carecía de nombramiento, pero con el temor a ser despedidos, dados los hechos que acontecían, y el terror laboral desatado, hubo alguien que inmediatamente dejó el trabajo y actividades que tenía a su cargo como director de área en la Dirección General del Gasto Federalizado "C" para ponerse a las órdenes. En su momento fue premiado con una dirección general en la estructura creada *ex profeso* para "atender seguimientos y realizar las investigaciones", concentración que implica un alto riesgo de corrupción; luego fue despedido junto con Isaac, aunque lo dejaron cobrando sin trabajar más de tres meses, total, quién revisaría a los "aviadores".

A continuación se dieron instrucciones a todas las áreas auditoras de preparar los expedientes de seguimiento, desatendiendo las normas y los lineamientos internos en relación con la integración de estos; los querían desordenados, que se quitaran separadores y grapas, agregando algunas notas porque iban a ser escaneados, para lo cual se "contrataría" a una empresa con escáner de gran velocidad. Ya tenían el primer negocio arreglado, miles y miles de hojas que no requerían escanearse; no se había hecho en los 17 años de existencia de la ASF y no se requería. Tenían visto un sistema informático para consultas de los expedientes por esa vía, muy extraño e inusual todo, pero los negocios son negocios. Para ese entonces diversas personas ajenas a la institución, pero cercanas a él, ya se presentaban en las instalaciones que les fueron acondicionadas en el piso 12 y hostigaban a las áreas auditoras para que se las arreglaran para preparar la entrega de expedientes de seguimiento, y con menos personal realizar el trabajo de fiscalización.

El auditor superior comenzó a convocarnos a reuniones donde pedía información sobre auditorías, particularmente las relevantes, de la SAGARPA-Zacatecas, la Sedesol y la SEDATU, por supuesto que nosotros no le dimos nada, era por completo ilegal y estaba tendiente a obtener información estrictamente confidencial; externaba una serie de insensateces que mostraban su desconocimiento absoluto de la fiscalización y del seguimiento puntual a las observaciones, pero su objetivo era muy claro para nosotros; quería tener en sus manos la solventación de irregularidades.

En ese sentido, en la reunión que tuvimos le manifesté que no tenía sentido gastar en ese equipo para digitalizar, que se revisaban los documentos originales y que cuánto personal requeriría, por ejemplo, en el caso de una sola observación donde había 70 cajas de documentos; estupideces de tal grado que muchas acciones le prescribieron y esa área se

convirtió en un cuello de botella, cuando antes de su llegada todas esas actividades eran realizadas por las propias áreas auditoras; déjense de la inoperancia, ineficiencia y corrupción galopante que se inició, hacía perder el tiempo a los auditores para que les explicaran cada caso, y al país esa estructura le ha costado una millonada; aparte de su ignorancia, era latente y visible su irascibilidad. Sabía por mis respuestas del desprecio al abuso de poder que intentaba realizar.

Había logrado su objetivo, quitar de las manos de las unidades auditoras la facultad de solventar sus observaciones y, por supuesto, controlar el inicio de investigaciones, con el fin de evitar la intromisión de cualquier área auditora o supeditado a opiniones técnicas de los ejecutores. No había modo alguno de enterarse de qué solventaba. La opacidad era absoluta.

Hay datos y documentos públicos que revelan que Rojkind era socio propietario de Empresarial Consultores SC, ubicada en Paseo de la Reforma 243, piso 18, a la que le fueron otorgados contratos por servicios de capacitación para la coordinación de servicios educativos de Colima, del 7 de noviembre de 2019, por 5 296 560 pesos. Otro, por 4 883 136 pesos por servicios legales de contabilidad y auditoría para la Secretaría de Planeación y Finanzas de Colima, del 1º de octubre de 2019, y uno más para la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas de Jalisco por 21 millones 692 000 pesos, por una contratación del servicio de seguimiento operativo 2018 y evaluación de respuestas técnicas de fiscalización 2015-2017, firmado el 16 de abril de 2018, esto es cuando ya operaba en la ASF.

No solo eso, los anteriores tuvieron lugar cuando laboraba en la Comisión de Vigilancia y tenía acceso a personal auditor en gasto federalizado; habría que revisar qué tantos contratos y convenios se hicieron durante ese tiempo en Puebla y Veracruz, entre los más recurrentes durante sus encargos, además de ofrecer auditorías en estados como Sonora y Tlaxcala. Pareciera que por la mañana los "Penélopes tejían observaciones y por las noches las destejían", así empezaban a redituar los sueldos millonarios, las prestaciones y, aunado a ello, la serie de negocios que proliferaban donde podía asegurarse la solventación de las observaciones vía despachos. Había que blindarse con el auditor, repetían los funcionarios gubernamentales.

El descuido absoluto y la falta de cuidado en su labor provocó que no se hicieran las respuestas a los entes fiscalizados denominadas "Pronunciamientos de no solventación", lo cual generó que se perdieran numerosas acciones de resarcimiento, administrativas, pliegos de observaciones o denuncias, en su caso. Un director general le mandó en oficio una serie de observaciones pendientes, diciéndole que no se había pronunciado en varios casos, que ya no se podrían hacer las observaciones; por respuesta obtuvo un iracundo: "¿Qué a ti nunca se te pasó hacer oficios de pronunciamiento?". Lo mejor es que algún día ya no estará esa pandilla y podremos conocer todas las irregularidades que se cometieron y la cantidad de resarcitorios y solventaciones que se negociaron.

Los primeros meses fueron terribles para los entes auditados, no se revisaban sus documentos, nadie les daba información, no se cumplía con la atención a las solventaciones y, por supuesto, la ignorancia del proceso de seguimiento era notoria, en ese invento que generaron para justificar un área innecesaria; todo estaba fallando para guardar y resguardar la información, hasta que rebasados por prescripciones y exigencia de atención, no estaban ya en condiciones de recibir la documentación en físico para escanearla. Ahí comenzó a terminar el negocio de la escaneada. Y entonces cambiaron las indicaciones, solo se recibirían los expedientes en físico. Estoy segura de que debió recordar la reunión, tres años antes, donde se lo dije en la cara.

Total, la fiscalización era lo que menos importaba. Estaban desquiciados y ávidos de poder, dinero y negocios, como hienas hambrientas de venganza. El flamante titular de la Unidad Jurídica de la ASF, responsable de velar por la legalidad institucional, era también un subordinado más acatando instrucciones ilegales. La entidad fiscalizadora, técnicamente solvente y políticamente independiente, comenzaba su desmoronamiento ético, abriendo las puertas a la inmoralidad pública. Ni lástima se podía sentir por ellos. Su nombramiento como auditor especial fue del 16 de julio de 2018 al 30 de abril de 2021, cuando lo echaron.

El caso de su colega Claudia Sofía Corichi García es muy burdo. Del 29 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2018 fue diputada secretaria de la Comisión de Vigilancia de la ASF, y tuvo a cargo el proceso de selección para elegir al Auditor Superior, de quien el mismo auditor reveló públicamente —ya nombrado— que era alguien muy querida y que había sido su alumna: “Claudia me habla de usted, pero a veces hasta me regaña”, lo que confirma y demuestra un claro conflicto de interés, ya que debieron revelar esta situación durante el proceso de selección, y ella abstenerse de participar en la selección y entrevistas. Se entiende por conflicto cuando el servidor público tiene intereses personales que pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales; y aquí se demostró un ocultamiento intencional de sus relaciones personales y afectivas.

No sorprendió que lo primero que hizo Colmenares al llegar a la ASF fue crear toda una estructura expresamente para ella, la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales, que nada tiene que ver con las actividades de fiscalización, de la que es titular desde el 16 de noviembre de 2018, y cumplir con los ofrecimientos de crear la estructura prometida para quienes intervinieron en el proceso para beneficiarlo. Esto forma parte de su naturaleza, ocurrencias perversas para quedar bien y comprar conciencias y silencios, una muestra de que una amistad que no se refleja en la nómina no es amistad.

Se contaminaron y sesgaron intencionalmente las decisiones durante el proceso de selección. Qué decir del tráfico de influencias en su gestión para ser colocada en la estructura en la ASF, donde ella intervino y de la cual ha tenido beneficios personales: viajes por comisiones, sueldos, gasolina, viáticos que le producen un beneficio económico, aunado a que llevó a sus colaboradores y choferes, independientemente de otras posibles conductas de tipo penal y administrativo que pudieran configurarse. Pero a quién le importaría

investigar y sancionar estas conductas. Al igual que Isaac, se sentían dueños de la institución; unos días después de la elección se reunió con Robles, asistía a reuniones internas de avance y otras externas a la ASF, en calidad de nada, porque no formaba parte de la estructura, pero participaba y ordenaba; pidió a diversos entes que le organizaran eventos para presentar su libro sobre corrupción. La ASF parecía fiesta de la primavera, premiando a quienes eran considerados aliados, como el exauditor de la Ciudad de México Salvador Vega, seguramente por no haber observado un solo acto de corrupción durante más de 10 años, o al exauditor Arturo González de Aragón, para granjearse su afecto, eso sí, en las entidades federativas para generarles el gasto a ellos y pasear a gusto.

En las reuniones de fiscalización se abordan los casos relevantes, es decir, se enteraba de lo que la ley mandata de reserva total hasta la entrega del informe; opinaba, dotada de autoridad y poder. Pero la ignorancia en materia de fiscalización, seguimiento y auditoría llevó a pensar que la institución era una extensión de las oficinas de los diputados; se creían dueños absolutos por mandato de las fracciones parlamentarias.

Las actividades mutuas de Corichi y Colmenares incluyeron la develación, en el salón del consejo de la ASF, de placa y retratos de los diputados expresidentes de la Comisión de Vigilancia (qué nivel de lambisconería); mandaron a la bodega los cuadros de los exauditores superiores. Qué gasto tan innecesario y cuántos recursos costó el capricho para tanta zalamería con sendas fotos de las diputadas que intervinieron y apoyaron el ungimiento, colgadas orgullosas de su brazo. Triste papel que se autoimpusieron. Ojalá algún día se coloquen por encima del machismo político; su prestigio y reivindicación vale más que su curul. Obedientes eligieron a quien carecía del mínimo mérito profesional, en comparación con cualquier otro candidato.

Fue un tsunami de reclamos cuando me entrevisté con ellas durante el proceso; que si había pedido una de ellas, de San Luis Potosí, la revisión de un fondo de siete millones de pesos; otra que pidió una auditoría por un ejercicio de tres millones de pesos, que no lo habíamos hecho. Parecía más bien un cobro de facturas, pues no sé qué les hacía pensar que por ser diputados pueden ordenar a una dependencia, con autonomía de gestión, qué auditar. Pueden sugerir, denunciar, pero quien decide, o más bien decidía en los tiempos de integridad en la auditoría, era el Consejo de Dirección, con una metodología y planeación basadas en riesgos, lo cual permitía formular un programa de auditorías claro, apartidista y transparente, con una serie de controles y mecanismos internos que evitaban la manipulación y evitaban la discrecionalidad. No obstante, desaparecieron ese consejo. Otro ejemplo más de cómo aseguró su nombramiento con base en el elogio, la adulación, el compadrazgo, la mentira, los pactos y las promesas, y alcanzó para comprometerse a deshacer el equipo de la DGAF.

La estocada

No se puede trabajar con quien no genera respeto profesional, admiración, ni comparte valores. Sucedió entonces que el miércoles 23 de mayo de 2018, aproximadamente a la una de la tarde, me marcó por la red interna la secretaria del auditor superior para indicarme que el auditor especial de Cumplimiento, Gerardo Lozano, me quería ver a la 1:30 p. m. Mi intuición y la serie de hechos que antecedieron a esos días en que manifestaba mi desaprobación para entregar sin control la información, las carpetas de seguimiento de las observaciones relevantes o me inconformaba por acciones que contravenían a los procedimientos, o no aceptaba de ninguna manera otorgar expedientes o mapas sin la debida cadena de custodia, protesté cuando nos negaron realizar las auditorías programadas a la SEDATU a pesar de la contundencia de los desvíos, me dieron a entender que al fin se habían animado a pedirme la salida.

Informé a mis directores: "Voy a subir al piso 11, creo que me van a pedir la renuncia, hay que estar listos para la entrega", aunque por supuesto que desde marzo lo estábamos. Y así sucedió, entré y observé a Lozano encorvado, acobardado y nervioso. Inició haciéndome un reconocimiento verbal de que yo era la mejor auditora forense… bla, bla, bla, un gran ejemplo y que reconocía mi gran trabajo y una larga y aburrida letanía. Yo, impaciente como soy, esperaba que apurara el verdadero mensaje, y entonces me hizo saber que por instrucciones del auditor superior me solicitaba mi renuncia, que estaba realmente impresionado de las auditorías y los hallazgos que habíamos realizado, que no sabía la razón, pero que Colmenares acababa de llamarle y había decidido separarme del cargo que estaba desempeñando como directora general de Auditoría Forense (DGAF), con efecto al 31 de mayo de 2018.

Le dije que lo menos que podía hacer el auditor era decírmelo personalmente y expresar las razones; me respondió que se encontraba fuera en un evento de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS) y que regresaba en dos días. Insistí en que requería saber la razón de esa decisión y sobre todo que me preocupaban las auditorías que no se habían autorizado, que seguramente les resultaba incómoda mi reiterada petición sobre el tema, además de la reticencia de ellos para solicitar la información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que todas las peticiones de información relevante estaban detenidas, y que parecía que más bien la urgencia de mi separación era para obstaculizar la fiscalización, que quería hablar con él y que me preocupaba mi integridad y, por supuesto, la de mi equipo.

Pedí que me informara en cuanto tuviera fecha y hora para que me recibiera el auditor y que mientras tanto comenzaría mi proceso de entrega-recepción; para ello necesitaba que enviara él por correo la petición al área de Auditoría Interna para iniciar los trámites diversos. "Lo lamento en verdad", decía.

Yo tenía desde meses antes unas vacaciones autorizadas y programadas del 1º al 8 de junio, para asistir a un congreso de argumentación, y días de vacaciones pendientes de usar, así que pasó por mi cabeza decirle que renunciaría con fecha 15 de junio, dado que tenía ese periodo autorizado, pero honestamente no deseaba permanecer un día más, y decidí que no lo haría.

Dejé en claro los trabajos y las acciones pendientes derivadas de la fiscalización. Estábamos a nada de obtener la información financiera y otros datos para conocer la red estructurada que operaba la colocación del dinero en efectivo mediante el traslado de valores; ni hablar, me dije: "Algún día tendrán que salir a la luz las investigaciones", como sucedió el 11 de septiembre de ese mismo año, en una investigación realizada y publicada en el periódico *Reforma*, que al menos arrojaba datos, nombres y domicilios, y a la que al día de hoy ni la ASF ni el auditor especial de Cumplimiento Financiero de la ASF (AECF) dieron atención ni seguimiento; omisiones y acciones graves que debieran tener consecuencias serias de índole administrativa y penal.

Comencé con el equipo auditor a integrar debidamente la documentación para la entrega-recepción pormenorizada, con toda la información y asuntos pendientes del área. Transcurrieron los días y hasta el 28 de mayo me llamó Lozano para informarme que ya había hablado con el auditor y que prefería no hablarlo por teléfono, que en cuanto pudiera fuera a su oficina. "Espero que me tengas buenas noticias", le expresé; lo que tramaban era tan obvio que no daba lugar a dudas. Un auditor siempre debe estar atento a cualquier indicio y preparado para cualquier eventualidad. El tono y su cadencia de voz mostraba más de lo que se imagina. En conclusión, no me dijo nada relevante, entre tartamudeo y falta de coordinación en sus ideas, dijo que no había respuesta a mis peticiones.

Entonces pensé dejar por escrito al auditor lo que quería plantearle cara a cara y dejar claro su responsabilidad institucional en la obstaculización de las auditorías y las peticiones de información bancaria y fiscal, porque mi instinto auditor me decía que al irme me acusarían de omisión o fabricarían cualquier tipo de acusaciones. Conocía perfecto el nivel de su calaña; la que no conocía tan negra, sino hasta unos días después, era la de Lozano.

Al día siguiente, el 29 de mayo, el subdirector de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión, responsable de las entregas-recepción, me remitió en correo electrónico el proyecto de mi acta de ese proceso, con los formatos de los anexos, carátulas y reconocimientos de firmas, para ser requisitados por quienes intervendrían en mi entrega. En ese momento, mediante la red interna, me comuniqué con Lozano para que me indicara el nombre de la persona que me sustituiría para incluirla en el acta y entregarle todos los asuntos pendientes. Le dije: "No entiendo eso de andar escondiendo el dato, y mejor así, con mucho gusto le explico todo con tiempo suficiente", y estuvo de acuerdo conmigo. Al siguiente día me invitó a comer en un restaurant ubicado en Boulevard de la Luz para presentarme a Ivonne Henestrosa Matus, designada para sustituirme en el cargo, al tiempo que me informó nuevamente que no había podido hablar con Colmenares.

Comimos los tres y muy cordialmente hablamos de los asuntos genéricos del área y hasta de la vida familiar; parecía una buena mujer, hasta que mostró su verdadera naturaleza, lo cual no me sorprendió, dado que venía de ser la responsable de finanzas del candidato del PRI en Oaxaca al Senado de la República; he ahí su meritocracia para ocupar el cargo y "garantizar" objetividad e independencia en las auditorías forenses.

Al término de la comida, Lozano me pidió amablemente que presentara a Henestrosa como la nueva titular, de una vez llegando a la oficina, para que comenzara a platicar con los directores y conocer al equipo de trabajo, ya que él prefería no estar. A las 18:00 horas del 30 de mayo convoqué a todo el personal en la sala de juntas de la DGAF (directores de área, subdirectores, jefes de departamento, coordinadores de auditoría y auditores, así como personal de servicio social y becarios), aproximadamente 80 personas, con la finalidad de presentarla; en ese acto, frente a todos —hay fotografías y video—, me hizo un gran reconocimiento profesional, y al equipo, por la labor que desempeñé; hubo aplausos, agradecimientos, abrazos, destacó en su discurso el entusiasmo y admiración al trabajo realizado.

Mi labor había concluido. Dispuso ella entonces quedarse con los dos directores de área para enterarse adecuadamente respecto del programa de trabajo, el avance que se tenía a la fecha y la situación que guardaba el seguimiento de las auditorías anteriores a 2017; ella solicitó un resumen de las acciones que se encontraban pendientes a esa fecha. Feliz, yo ya me iba, y antes de retirarme ese mismo día, a las 18:19 horas, le envié a Colmenares el escrito que había elaborado con copia a Lozano, a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y al titular de la Unidad de Evaluación y Control de la misma, Alejandro Romero Gudiño (nombrado titular del OIC de la SHCP, en pago de prebenda, luego en una administración general en el SAT cuando debía estar en procedimiento administrativo por omisiones en su actuación para investigar las denuncias y el allanamiento ilegal) por medio del cual le solicité que me informara las causas de mi separación del cargo y dejé en claro la situación por la responsabilidad por las auditorías forenses que se negó a autorizar. Le marqué a Lozano para informarle y despedirme, pero ya no le interesaba responderme, ya le habría comunicado Henestrosa la decencia con la que la tratamos y cómo fue bien recibida; si a él no le interesaba despedirse con cortesía institucional, menos a mí, así que habiendo entregado físicamente el área y cumplido con la presentación y la información actualizada, me retiré. (Después me enteré de que el documento que dejé desquició a la estructura de la ASF y propiciaría la serie de actos ofensivos, criminales e intimidatorios que se iniciaron en contra mía, de las personas y las instalaciones, que dieron pie a vulnerar la integridad de los sistemas y expedientes de fiscalización, así como a la apropiación ilegal de evidencia resguardada al romper la cadena de custodia).

El mismo día, aproximadamente a las 7:10 p. m., creo que cuando le metieron una muy buena zarandeada, Gerardo Lozano me llamó al celular; al reportarme a su llamada, notoriamente nervioso, me dijo: "Muy linda Muna, ya me dijo Ivonne de todo el

espaldarazo". "Así fue", respondí. "Por cierto, te busqué para despedirme y entregarte en mano un oficio que mandé", agregué; con voz entrecortada y temblorosa me dijo que estaba con el asesor del auditor, que me pedía que quitara del documento "que por instrucciones de él", que era un favor que me pedía. Respondí que yo no tenía por qué asumir la responsabilidad, y él trastabillaba nervioso, insistía que era un favor que él me pedía y en el último párrafo debería poner que la renuncia era al 1º de junio de 2018. Señalé que así era, al 31 de mayo. Ni siquiera sabía ni podía leerla.

"Tírale si quieres al Jurídico", "está bien", me dijo; "yo estoy de acuerdo". Pobre y lastimero hombre, no tenía la fuerza ni el nivel para intentar hablar más fuerte, simulaba y se contenía; me agradeció nuevamente y me dijo que contaba con su amistad. Qué desubicado estaba y está. Por supuesto que en ninguna circunstancia cambiaría yo una sola letra del documento que había hecho llegar. Suscribo cada una de las palabras ahí plasmadas.

Por supuesto que no hice ninguna modificación. Si su padre viviera, seguramente se avergonzaría de sus actos, tanto que lo alardea. Se convirtió en un títere más de ese clan, en el que nunca fue aceptado, sino más bien repelido. La naturaleza y la ruindad hu mana. Me buscó al siguiente día —seguramente para que entregara el documento modificado— y no respondí. Colmenares, fuera de sí, gritaba a sus funcionarios serviles que me había salido de control, "hay que embarrarla", que "había sido muy estúpido Dubernard en el manejo", "no está la renuncia"; le llamó fuertemente la atención a la secretaria, le dijo que no debió recibir ningún documento de mi parte, e instruyó a toda la estructura de la ASF a no recibir ningún escrito de mi autoría ni de mi personal. Ahí comenzó el golpe de poder autoritario e intimidatorio.

Ellos generaron su propio escándalo. Colmenares dio al personal la orden de comenzar con la fabricación de evidencias en mi contra: "Busquen por donde puedan". Los dos personajes más grises: el menor, Víctor Andrade, y el entonces secretario técnico, desbordados, sin saber qué hacer para contener y atender al titular. A la distancia me sigo riendo, quién diantres les mandó a enloquecer. Simplemente era recibir el ofício y adiós. Pero seguramente se vinieron abajo las acciones que pensaban iniciar en mi contra y eso los desestructuró.

Entonces inició la fabricación de supuestos delitos para desacreditarme. Posteriormente, esos mismos funcionarios grises, emisarios de Colmenares, le entregaron a Lozano en su domicilio, la noche del domingo 3 de junio, el pronunciamiento elaborado por el auditor superior, dirigido al medio *Aristegui Noticias*; "instruido" en lo que tenía que decir en la estrategia contra mí. Temblaba Lozano, no quería asistir al noticiero, pero ya formaba parte de esa pandilla y tenía que ponerse a la altura de las circunstancias exigidas, tendría que echarse la culpa. *Loser* o perdedor acomplejado puede considerarse alguien que compite para todos los cargos habidos y por haber en áreas de rendición de cuentas, sin ganar ninguno. No podía dejar ir la única oportunidad de seguir en el cargo, y con el lazo al cuello, expresaría un exauditor refiriéndose a su patético papel. Así pues, se subieron a un ring que

ellos crearon el lunes 4 de junio, donde apareció el tipo en *Aristegui Noticias* con el comunicado en mano y repitió como loro entrenado que la petición de renuncia fue responsabilidad de él y que el auditor superior no tuvo injerencia en el tema, afirmando que todo fue con motivo de un conflicto de intereses y una denuncia que supuestamente recibió, por lo que había solicitado una investigación a la Auditoría Interna a la UEC. "Qué huevos tan azules", dicen en mi tierra, en franca contradicción a lo que él mismo respondía ante los cuestionamientos de esa extraordinaria entrevistadora que lo confrontó con sus propias mentiras.

Lozano expresó que no tenía conocimiento de la intervención y el allanamiento a la DGAF y al laboratorio forense,[22] ocurrido precisamente ese fin de semana —sábado 2 y domingo 3 de junio—, ordenado por el auditor Colmenares. Fueron actos de orden criminal, como nunca en la historia de alguna institución en México, dirigidos por el entonces funcionario público Carlos Enríquez Gorgonio, quien laboraba en ese momento en la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales en la SHCP, y renunció hasta el 30 de junio de 2018, y el 1º de julio de 2018 estaba siendo contratado en la ASF, hechos que por su naturaleza implican faltas graves y presuntos delitos. El mensaje del golpe intimidador de poder había sido enviado.

Ese mismo día Lozano emitió un escrito dirigido a la opinión pública; sorpresivamente agregó dos situaciones más a mi atribuida conducta: la primera, un supuesto trato grosero y prepotente que yo daba al personal, y la segunda, tolerancia a un acosador sexual. Hechos que, hasta hoy, cinco años después, seguramente por el nivel de complejidad, no han acabado de investigar, *ad ignominium*.

Imaginen la inventiva de esa "cuna de cerebros", que se dieron a la tarea de fabricar evidencia y expedientes administrativos y laborales en mi contra para integrar seis supuestas investigaciones *fast track*. De manera irresponsable y desesperada, Gerardo Lozano, desde su cuenta de Twitter en la que se ostentaba como servidor público de la ASF, retuiteó comentarios de personas y organizaciones afines, que por cierto ingresaron de inmediato a trabajar con él, en los cuales se aseguraba la existencia de un conflicto de interés; no obstante, no existía tal, pero sí una fabulación, reflejo de acciones que ellos sí han hecho, intentando dañar mi imagen.

En ese momento arrancó una agresiva, ofensiva, difamatoria, ordenada contra mí, en prensa escrita, medios electrónicos, redes sociales y hasta en espectaculares; aseveraban que mi separación del cargo fue para indagar conflicto de interés y corrupción; a veces variaban, como declaró posteriormente Colmenares con Joaquín López-Dóriga, cuando dijo que fue por reestructura laboral, generando diversas versiones que contrastaban entre sí, tratando de contener la opinión y reacción negativa suscitada en varios sectores de la población en contra de ellos, intentando desviar la atención a que era un asunto exclusivamente laboral. Si hubiera sido un asunto eminentemente laboral, ¿eso les autoriza a poner

espectaculares en la Ciudad de México con mi imagen para intentar defenestrarme? Eso fue persecución, no un simple asunto laboral.

Su manejo de crisis, por el cual pagaron casi un millón de pesos de recursos públicos, no pudo contener las barbaridades sin sustento que indistintamente publicaban, declaraban, escribían, incluidos los comunicados emitidos por la ASF. Lozano y Henestrosa, incapaces e incapacitados para tomar el timón de la DGAF, permitieron y fueron cómplices de la serie de atrocidades que sucedieron desde el 1º de junio de 2018.

La violencia política en mi contra fue acompañada de hostigamiento y persecución laboral a los auditores de la Dirección General Forense; en mi caso inició con la orden de indagar en las agendas sobre quiénes llegaban a verme, esculcar cada papel de viáticos; "búsquenle hasta que le encuentren", ladraban las órdenes; hicieron de todo, de lo más denigrante y mezquino, hasta una serie de actos delictivos. Cooptaron al personal becario y de servicio social, les ofrecían plazas a cambio de prestarse a declarar y a firmar lo que les pusieran enfrente. Era una jauría de hienas. Decían los mentecatos: "Estuvo bastante sueltecita todo el tiempo, así que persíganla". Qué patéticos. Barata les salió la venta de su dignidad; de qué tamaño sería.

Comencé una batalla para obtener copia de mi expediente laboral y mi hoja de baja para realizar mis trámites personales; la instrucción a todos los niveles de la ASF era, en ninguna circunstancia, recibir documentos, llamadas o personas; así o más ilegalidad. El terror laboral había iniciado con crueldad y violencia en el área forense. Había policías hasta en los baños, humillaciones, amenazas, esculcamientos, intimidaciones; llegaban como en los campos de concentración intempestivamente con ocho o 10 policías y cuatro o seis abogados, funcionarios del área de Auditoría Interna, todos en bola a gritar y a exigir renuncias o ceses. Admiro y reconozco a quienes tuvieron el temple de mandarlos al carajo.

Tuve que iniciar una demanda para obtener mi expediente laboral. Ahí fue cuando me percaté de las acciones fraudulentas que habían realizado en mi contra, que incluían la fabricación de evidencia, elaboración y uso de documentos públicos falsos, falsedad de declaraciones ante la autoridad, entre otras conductas, que son del orden delictivo que implican.

Así, en mi expediente personal aparecen integrados los siguientes documentos fabricados: un escrito del 5 de junio de 2018, suscrito por el contador Gerardo Lozano Dubernard, dirigido al licenciado Arturo Peña Zazueta, titular de la Unidad General de Administración de la ASF, donde hace de su conocimiento que yo, desde el 30 de mayo de 2018, sin mediar autorización o causa justificada alguna, abandoné mis labores al retirarme de las instalaciones, y hasta el 5 de junio de 2018 no me había reintegrado a mis actividades, y solicitaba que se procediera en mi contra, toda vez que dejé de presentarme a laborar los días 31 de mayo, 1º y 4 de junio de 2018, incurriendo en el abandono injustificado como directora general de Auditoría Forense.

Ese escrito carece de número de oficio y datos oficiales de encabezado de la AECF, indispensable y obligatorio para cualquier trámite, pero fue recibido en la Unidad General de Administración, el mismo 5 de junio, a las 10:30 horas, y despachado —con agilidad inusitada— a las 11:15 a.m., a la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH). Iniciaba la fabricación de evidencia y de expedientes con la asociación de los servidores públicos coludidos, con la finalidad de causarme un daño moral y laboral intencional.

El mismo día, 5 de junio, el director general de Recursos Humanos, Sergio Iván Reyna de la Madrid (que se prestó al despido de Pérez Saavedra y a cargo de todos los ceses en la DGAF), solicitó a la directora de Administración de Personal, Liliana Hernández Jiménez, que informara si en mi expediente de personal se contaba con un documento que justificara mi inasistencia a laborar del 31 de mayo al 5 de junio del año en curso. El oficio fue recibido el mismo día, a las 11:35 a.m., es decir, 20 minutos después. Y con una rapidez increíble y eficiencia inusitada, el mismo 5 de junio le respondió a Reyna que no existía documento que justificara mis inasistencias. Ese oficio fue recibido en la DGRH el mismo día, a las 12:15 p. m., es decir, 40 minutos después de que Liliana Hernández recibiera la petición.

Con oficio UGA/DGRH/410/2018, del multicitado 5 de junio de 2018, el eficientísimo y desleal Sergio Reyna solicitó a la Dirección de Apoyo Jurídico de la Unidad General de Administración la emisión del dictamen de baja de la contadora Muna Dora Buchahin Abulhosn, ya que "sin mediar autorización o causa justificada alguna, el día 30 de mayo del año en curso abandoné mis labores". Este oficio fue recibido el mismo día a las 13:00 horas, es decir, 45 minutos después, y con una audaz rapidez la licenciada Laura Alicia Sosa Romo, subdirectora de Apoyo Jurídico, remitió a Recursos Humanos el oficio UGA/DAJ/292/2017, que contiene el dictamen de mi baja.

Resumiendo, del análisis al proceso de fabricación de evidencia y uso de documentos públicos fabricados con información intencionalmente falsa, se aprecia que ese oficio fue recibido por la DGRH el mismo 5 de junio a las 2:00 p. m., es decir, una hora después tuvieron listo el dictamen de baja. Otro indicio revelador es que el número de este no corresponde a la numeración utilizada por la Dirección de Apoyo Jurídico del año 2018, una serie de graves e inusuales inconsistencias derivadas de la fabricación de documentos.

La confección de documentos incluyó en su contenido aseveraciones y hechos notoriamente falsos, que dan lugar a diversos delitos, comenzando por falsedad en declaraciones por parte de cada uno de los intervinientes en esta simulación de actos jurídicos y la fabulación de hechos que no ocurrieron, como se puede concluir en un análisis integral del conjunto de elementos de prueba: documentos, testimoniales, entrevistas, fotografías, videos, audios y grabaciones. Lo mejor de este análisis forense documental es que el pro ceso de mi supuesta baja por abandono se llevó a cabo en tan solo dos horas con 45 minutos, computado desde el escrito inicial tan falso como el mismo Lozano, que emitió en calidad de AECF.

Los hechos relatados y el análisis documental revelan que fueron fabricados con dolo y mala fe para perjudicarme, aunado a las constancias que se exhibieron; no queda duda del uso faccioso de las instituciones, de un acoso político, administrativo y fiscal que se inició en mi contra, propiciado y ordenado por el patiño del grupo en el poder, y se revela una serie de conductas y acciones desplegadas para causarme un daño grave.

La suma lógica de datos, confrontación de documentos, inferencias y evidencias muestra indicios claros de la persecución contra mí. Qué inmundicia de funcionarios y qué escasos de materia gris, tanto ellos como quienes colaboraron para su ungimiento. Lo peor es la ingratitud y, no sé cómo decirlo de manera apropiada, la bajeza más grande de un individuo. Ese tal Sergio Iván y Peña Zazueta, a los que apoyó el auditor Pérez Saavedra, a quien casi sacaron arrastrando de la ASF. Qué miseria humana.

Esta narrativa revela claramente la ofensiva brutal e ilegal de quien encabeza una de las instituciones obligadas a velar por la legalidad. Las conductas encuadran claramente en responsabilidades administrativas graves, y algunas de ellas en tipos penales: negligencia, ocultamiento de la información, mala fe, dolo, intencionalidad de causar un daño, fabricación de documentos, falsedad en declaraciones, dilación, incumplimiento del deber de cuidado, simulación de actos jurídicos, difamación, difusión de hechos falsos, uso indebido de atribuciones, apología del delito y todos los que resulten. Hechos por los cuales, desde el 27 de mayo de 2021, presenté ante la Unidad de Evaluación y Control y la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados la denuncia correspondiente por presuntas faltas administrativas, y otras que pudieran desprenderse de índole penal.

Casi dos años después no hay avances en las investigaciones; la autoridad investigadora forma parte de la misma estructura política y ha sido omisa en la investigación, por lo que presenté un amparo para que me den vista de mi expediente,[23] pero habrá una responsabilidad penal que impulsaré por esa omisión y las consecuencias que ha ocasionado. Aquí inicia una etapa en la que habrá que impulsar y sentar precedente de las omisiones y conductas, y las subsecuentes responsabilidades penales y administrativas. Tiempo me falta.

Por el allanamiento, en su momento solicité la intervención de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, pues, como manifestó el exauditor Javier Pérez Saavedra, la intervención de la oficina "no tiene precedentes".[24] La campaña sucia para desprestigiarme y el invento del abandono de mi empleo provocó que las bajezas se multiplicaran.

Después de enviarme una amenaza de utilizar a la Procuraduría Fiscal en mi contra, a través del flamante Carlos Urzúa —otro desleal y malagradecido, casualmente—, por oficio firmado por David Pérez Silva, administrador de Planeación y Programación de la Auditoría Fiscal Federal en el SAT, de manera irregular, solicitó a la CNBV toda mi información bancaria comprendida de 2004 a 2012, y de la Procuraduría Fiscal Josué Miguel Contreras Saldívar,

director general de Delitos Fiscales, formuló otro requerimiento del periodo 2014 a 2018. Esta historia merece un punto y seguido.

En su proceso de racionalización, estos transgresores no rompen las reglas, crean las suyas, van construyendo sus redes de complicidades y se van intercalando entre ellos, no están alojados en un espacio en particular, sino que es un conjunto de relaciones que no atiende a la moral pública, tiene su propio código amoral que construyen en la lógica del ejercicio del poder y la pertenencia al grupo de poder, con lo que naturalizan sus actos de corrupción frente a los otros. Pensar que el mayor castigo es el desprestigio resulta risible, realmente a ellos poco les interesa y los ciudadanos tenemos memoria corta. En el contexto del momento van construyendo la lógica de sus chivos expiatorios, donde cualquier tipo de personalidad cabe, los buenos y los malos que nunca se imaginaron estar, que normalizan a la corrupción y el *statu quo*.

5

La historia de corrupción

Con los sucesos ocurridos a partir del 4 de junio de 2018, cuando echaron a andar su plan para imputarme hechos y actos falsos, generando una campaña en medios y redes sociales, mientras proseguía el allanamiento a las instalaciones de la Dirección General de Auditoría Forense (DGAF), robo, alteración y sustracción de la información resguardada en sistemas y en documentos físicos, comenzaba la fabricación de un escenario tendiente a desprestigiarme, con la difusión de hechos falsos e inexactos; actuaron como gallinas descabezadas.

Por un lado, intimidaban al personal, lo amenazaban si no firmaba documentos acusatorios en mi contra; al mismo tiempo, afirmaban también a los medios de comunicación que se trataba de un tema laboral, que harían una reestructuración de personal; eran innumerables y diversas las razones que inventaban para esconder sus acciones.

Alejandro Romero Gudiño fungía como titular de la Unidad de Evaluación y Control cuando realizaron el allanamiento a la dirección y el laboratorio forense, también cuando ocurrieron las amenazas y persecución en mi contra, y el hostigamiento a varios auditores. A pesar de las denuncias que presenté, no solamente no actuó conforme a sus facultades y obligaciones, sino que se alió con David Colmenares Páramo para fabricar investigaciones con documentación apócrifa, alterando fechas y sellos, a fin de poderles dar una "entrada legal" acorde a la serie de pifias y enredos en que se convirtieron las acusaciones contra mí.

Es preocupante la falta a los principios constitucionales que deben imperar en la actuación de los servidores públicos. Con el nivel de amenazas que existían y la peculiar situación de violencia al interior de la DGAF, que puso en riesgo las auditorías forenses que se llevaban a cabo, al contaminar y apropiarse de evidencia existente, aunado al conjunto de denuncias recibidas por varios servidores públicos y diversos actores en medios nacionales que fueron

del conocimiento público, la autoridad investigadora debió iniciar inmediatamente la investigación a efecto de conocer los hechos y deslindar responsabilidades. Bueno, era mucho esperar de un perfil tan patético como el de Alejandro Romero, sometido al recién ungido por el grupo político al que le debe los sueldos de toda su vida.

Le ordenaron revisar toda la información existente sobre mí, cajas enteras, para "arreglar" denuncias que tendrían que fabricarse, recibirlas con sello y una fecha anterior a mi salida —22 de mayo 2018—, para poder justificar que sí habían "recibido" denuncias anónimas. Patéticos; la pandilla le instruyó a mandar un "grupo auditor de confianza" para tratar de "hallarme" algo irregular. Qué ignorante y servil servidor público, ¿qué iba a encontrar?, si mi labor era eminentemente auditora, nada que tuviera que ver con contrataciones, adjudicaciones, compras, y en las que, por cierto, la Unidad de Evaluación y Control (UEC) sí participaba y al mismo tiempo auditaba el gasto de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

A pesar de que se le dio vista y se pidió su intervención, se prestó en ese juego perverso de encubrir y fabricar actos irregulares en mi contra; hoy goza de cabal salud cobrando en un muy buen puesto como administrador general del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En su diminuto pensamiento, no se le ocurrió más que pedir información de todas mis comisiones y gastos, y estaban a medio pasillo todas las cajas con esos documentos; mandó a un grupo de la UEC para revisar documentos de 13 años de trabajo mío. Esa es la más baja condición "humana" que habita en el interior de esos funcionarios. Gran aprendizaje. Otro abusivo, misógino, desleal y vasallo del poder en turno.

Su obligación en su calidad de titular de la UEC era iniciar oficiosamente una investigación, a partir de la serie de actos, hechos y graves sucesos que le fueron denunciados y de los cuales tuvo conocimiento pleno y fueron escándalo público nacional e internacional, por su naturaleza y su significado; sin embargo, era mucho pedir de este incompetente y ramplón funcionario, que como premio a su solidaridad con la pandilla fue nombrado titular del Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para saltar en junio de 2021 al SAT como director general en una administración desconcentrada de recaudación de la Ciudad de México.

Ese tipo de personajes engañan de una manera magistral a personas de buena fe. ¿Habrá contado con "orgullo" lo que ocurrió en la ASF el rol que eligió del lado de la corrupción? La deslealtad y traición de un personajillo de este nivel puede esperarse en cualquier momento; cómplice en la fabricación de documentos incriminatorios para abrir sendos expedientes de investigación en mi contra.

¿Cómo puede alguien con esa pobreza de resultados y que la UEC conocía las auditorías y las observaciones pendientes de comprobar de Hacienda, de pronto llegar a ese OIC? Se equivocó Irma Eréndira Sandoval, otra funcionaria que se sometió y tuvo sus consecuencias.

Tanto tiempo libre generan los cargos que les regalan, que les da por escribir libros y libros más huecos que ellos. Uno se pregunta a qué hora trabajarán, y la respuesta se halla en su pobre historia de vida profesional; forma parte del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y vive presentando sus libros con cada personaje deleznable, pero que, para su modo de verlo, lo percibe como su Dios seguramente.

Me tomé la libertad de hacer un mapa de esas actividades a las que regresaré más tarde, para identificar un tema en común que une a ese y al siguiente titular de la UEC, David Villanueva, y a la otra pobre funcionaria Inés Henestrosa, que sacó su lado oscuro. Algo en común tienen, además de la ineficiencia y desvergüenza, ya lo veremos con sus historias. El incentivo de ellos es que el fraude y la corrupción son tolerados, secundados y celebrados por las instituciones y autoridades que tendrían la encomienda de actuar, lo que les garantiza un premio a su sumisión.

La UEC tiene en sus facultades recibir, tramitar y resolver las solicitudes relacionadas con servidores públicos de la ASF, vigilar que estos se conduzcan en términos de lo dispuesto por la ley y demás disposiciones legales aplicables; recibir quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de sus obligaciones, iniciar investigaciones y presentar denuncias ante la autoridad competente, en caso de detectar conductas presumiblemente constitutivas de delito, imputables a los servidores públicos de la ASF y la autoridad investigadora de la UEC para indagar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas, en términos de los artículos 91 y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

No se percibe un escenario político y de legalidad que permita avanzar para denunciar faltas de los servidores públicos, derivado de los deberes que la Constitución y la ley les impone, pues en esta serie de hechos que nos ocupa se actualiza una serie de omisiones y acciones de gran calado cometidas en mi contra y de los servidores públicos que integraban la DGAF.

Cuando en septiembre de 2018 me invitó Santiago Nieto a unirme al equipo forense en un área estratégica en su futura encomienda en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), subió una foto a Twitter[25] y la "madriguera" se alebrestó, preveían el nivel de competencia y resultados que podríamos tener conjuntamente lo cual podría develar la red completa de corrupción que fue encubierta por el anterior gobierno.

Se apanicaron y habló Colmenares de inmediato con su "amigo", el entonces secretario de Hacienda Carlos Urzúa, y le pidió que en ninguna circunstancia permitiera que nos contrataran en la UIF. A través del encargado de Comunicación Social, Urzúa le ordenó a Santiago Nieto que no me empleara a mí ni a nadie del equipo y me mandó el mensaje de que retirara la demanda por daño moral que había presentado, porque si no, me iban a perseguir con la Procuraduría Fiscal. ¡Qué vulgares todos los funcionarios que se prestaron a estos deleznables actos!

Que Urzúa se prestara a ello también es corrupción, así es como se pagan favores —el intercambio de prebendas sería mutuo—, tan solo hay que revisar las observaciones en la cuenta pública de los años 2019 y 2020 de la gestión de Urzúa y sacar conclusiones del sinnúmero de adquisiciones y compras directas que operaron o la extinción de fideicomisos. Esas son las bazofias del poder de un funcionario hipócrita que después de su "renuncia" al cargo deseó aparecer como "honorable", cuando es despreciable prestarse a ese tipo de cosas. Estaban realmente desesperados, enloquecidos, ideando y enviándome amenazas en redes, con fabricación de videos, llamadas intimidatorias a mi familia y amigos. No tenían límites.

No retiré la demanda. Entonces cumplieron sus amenazas, ya que además de proseguir la campaña sucia para desprestigiarme y el invento del abandono de empleo, llegó una nueva embestida mediante el uso faccioso del SAT y la Procuraduría Fiscal; por la evidencia que se desprende de los hechos, asumo que fue como represalia por las investigaciones efectuadas en mi carácter de directora general de Auditoría Forense.

Es parte de su modo de vida corruptor; así aparecieron carpetas de investigación en mi contra como represalia a mi desobediencia. Esa estructura corrupta de poder tiene en común la misma deformación mental intentando "ponerme en mi lugar" por haberme atrevido a investigar su corrupción. Me convertí en perseguida y difamada por haber investigado y revelado tal nivel de redes corrupción. Recordé que la V de victoria también es la V de vuelta.

Mi decisión de proseguir con la demanda dio lugar a una serie de actos ilegales, amparados en la cadena de complicidades de la camarilla en el poder, lo que permitió que, entre otros hechos, fabricaran denuncias penales y administrativas en contra mía, como la número FED/UEAF/UEAF-CDMX0000026/2020, presentada el 20 de mayo de 2020 en la Fiscalía de Delitos Fiscales.

No puedo dejar de pensar en la cantidad de trabajo que debía tener la Procuraduría Fiscal en esas fechas, con centenas de funcionarios denunciados, empresas fachada, proveedores vinculados a grandes investigaciones; el caso Odebrecht, para indagar y perseguir a los cientos de defraudadores, por ejemplo, entre otros, los de la la Estafa Maestra, y que en ese año pandémico fuera yo su prioridad número 26 —Emilio Lozoya fue la seis—, lo cual da indicios suficientes para inferir la persecución intencional de que he sido objeto durante cinco años sin auditoría fiscal previa por parte del SAT.

Es increíble que la Procuraduría Fiscal se dedique a realizar este "tipo inusual" de investigaciones oficiosas por encima de los *outsourcing*, líderes sindicales, estafadores y huachicoleros y todo tipo de depredadores fiscales. Se puede entender, dado que el funcionario Walter Lamberto García Trejo, quien fue asistente por más de 20 años de Gerardo Lozano, de acuerdo con su declaración patrimonial,[26] es uno de los socios en diversos despachos privados, sociedades inmobiliarias y sociedades anónimas promotoras

de inversión (SAPI) en los que se litigan temas fiscales, como el de Lozano Dubernard y Asociados, S. C., en donde aparece como socio fundador desde 2004 y hasta 2018; es decir, luego de casi toda su vida al servicio de Lozano, saltó a laborar como asesor en la Procuraduría Fiscal. De su declaración también se desprende que su actividad profesional fue desde el sector privado, dedicado a actividades vinculadas al ámbito fiscal y administrativo; quien, por cierto, cuando se enteró de la demanda presentada por mí en contra de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero (AECF) por daño moral, dijo (muy molesto) a finales de noviembre de 2018 a varios de los auditores de la DGAF que se iba a trabajar a la Procuraduría Fiscal por invitación de "su amigo Carlos" y que desde ahí se iba "a chingar a su exjefa".

Qué palabras amenazadoras de quien a todas luces se ha dedicado en el ámbito privado, precisamente a defender a los clientes en contra de la Procuraduría Fiscal; así que, para cerrar el círculo del negocio, lo colocaron con un nivel de director general adjunto en el cargo de coordinador de consulta y entidades paraestatales del procurador fiscal, precisamente a partir de 2019. Casualmente, desde su llegada en enero comenzaron a solicitar oficiosamente ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mis documentos financieros y bancarios, sin mediar ninguna auditoría fiscal.

Así las venganzas personales y el uso indiscriminado de las instituciones como acicate, en el marco de la ilegalidad; sin duda no fue fiscalizada esa entidad por la ASF.

Afortunadamente los dos socios del despacho y de varias inmobiliarias ya fueron despedidos, "funcionarios" a quienes corrieron, dadas las numerosas denuncias por todas las tranzas descubiertas y encubiertas desde su cargo. Celebraban su "fiesta" de resentimientos, ofensas y odio. Se respiraba el olor fétido de cizaña, resentimiento y venganza. Así es como los que investigamos y denunciamos hechos de corrupción pasamos a convertirnos en perseguidos y denunciados en este gobierno democrático.

La actividad fiscalizadora requiere guardar debida distancia con el poder, no someterse ni ofrecerse cual lacayos, la independencia y ética profesional son atributos imprescindibles. Distancia, respeto y ley. Sentirse cercanos al poder es una de las debilidades de los incompetentes; esa ha sido la mayor obsesión en estos funcionarios públicos, en su corta y nauseabunda vida pública, rindiendo pleitesías.

Mientras tanto, en Palacio Nacional me entrevistaba con Julio Sherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia, quien me manifestó con total apertura su apoyo y que en ninguna circunstancia permitirían tales atropellos; acordamos también coadyuvar con la Fiscalía General de la República (FJR) en las denuncias presentadas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA), que dieron lugar a la integración de las carpetas de investigación retomadas después del abandono de quienes tenían la obligación de indagar los hechos.

Fue muy claro y empático: “No vamos a permitir en este gobierno que te persigan, yo voy personalmente a atender ese tema. Te lo garantizo. No toleraremos la corrupción y en cualquier situación que te sientas en peligro, inmediatamente me llamas”. En ese entonces me había buscado el gobernador Miguel Barbosa, de Puebla, para pedirme colaboración en las investigaciones que debían realizarse por la corrupción rampante que antecedió a su gobierno, algo increíble, millones de pesos desviados, fideicomisos a modo, compra de terrenos de la manera más corrupta; desvíos en empresas fachada desde la propia Contraloría del estado.

En verdad requería el gobierno, y pienso que ahora aún más, funcionarios con capacidad, *expertise* y ética para poder enderezar todo lo que apenas asomaba la punta del iceberg. Yo le comentaba a Sherer: ¿cómo es que nos están pidiendo, tanto de la FJR como de Puebla, el apoyo a los “investigados” de la ASF para construir los casos? Desde entonces y durante estos años ha seguido presente y le agradezco su afecto e intervención.

Así, cumpliendo el compromiso asumido con la 4T, nos dedicamos a apoyar a este gobierno sin ninguna remuneración, con el grupo de auditores que fue despedido, para explicar en la fiscalía el *modus operandi* y ratificar los dictámenes técnicos, esperando armar casos sólidos en torno a nuestras investigaciones. Quiero aclarar que esto lo hicimos a pesar de que ese trabajo es responsabilidad de quien me sustituyó y de los que cobran en el área jurídica de la ASF, pero que no tienen ni la menor idea de lo denunciado.

De igual manera participé en el juicio político encausado contra Rosario Robles por la comisión instructora de la Cámara de Diputados, a petición de Pablo Gómez, quien se había comprometido a atender mis denuncias por el hostigamiento en mi contra, que incluso reiteré al final de mi comparecencia, donde externé mi preocupación por las represalias por parte del auditor superior y sus compinches.

Debo decir que me extraña que no solo incumplieron su palabra, sino que pareciera que acabando esa encomienda lo demás no les interesaba. Esa no es la verdadera izquierda. También platiqué con Sherer acerca de la mezquindad de la Fiscalía General y la ingratitud y falta de compromiso de Pablo Gómez.

El 19 de junio de 2019 me entrevisté con el secretario particular de Alejandro Gertz Manero para denunciar la persecución política y judicial, todos los hechos de orden criminal en mi contra y el allanamiento de la DGAF; hay testimonios de quienes sufrieron esa intimidación injusta y dirigida para causar daño intencional mediante la fabricación de pruebas, el uso de documentos públicos apócrifos, ejercicio indebido y abuso de poder. Le entregué la evidencia de la creación de expedientes apócrifos y los testimonios de quienes fueron coaccionados e intimidados que demuestran la intencionalidad de causarme un daño, con actos inducidos, como lo demuestra el conjunto de indicios y documentos que le dejé.

Denuncié no solo su ruindad humana, sino conductas vinculadas a faltas graves y delitos de corrupción en su carácter de servidores públicos, que llevaron a cabo actos criminales; le

entregué un expediente con una tarjeta informativa, donde le presenté los datos, lugares, fotos, documentos, testimonios y el mapa que muestra las acciones ilegales desplegadas hasta ese momento por ese grupo de poder, la ofensiva indiscriminada en medios impresos y electrónicos que incluyeron la colocación de espectaculares y un intento de coacción con actos de violencia política y emocional con el uso faccioso de las instituciones.

También le manifesté la importancia de revisar las denuncias presentadas en nuestro tiempo y la red de empresas fachada resultantes de las investigaciones. No le quedaba claro el motivo de esas conductas sin aparente razón. Eso podría entenderse al desenmascarar las redes de poder con negocios millonarios al margen de la legalidad y con las manos y los pies, por decirlo elegantemente, sumergidos en el erario. Escuchó atentamente mi relato y la información que le iba proporcionando con cada aseveración acompañada de su respectiva evidencia; con los mapas y vínculos que muestran las acciones en redes sociales y la fabricación de supuestos videos atribuidos a *Reforma*, *Milenio* y *Aristegui Noticias*. Pésimo manejo de crisis del burdo auditor, peor que su actuación, así estaría.

Pues bien, lo que me llevo como venganza por el trabajo de indagación forense en la ASF, hoy, cinco años después, se resume en tres carpetas de investigación —"por andar tan suelta y mandarme sola"—. Intempestivamente la Procuraduría Fiscal decidió hacerme una "investigación financiera", no a los huachicoleros, no a los polleros, no a la trata, no a las redes de pornografía. La denunciada soy yo, y así obtuvo el nefasto funcionario Eber Betanzos la documentación financiera y bancaria de mi propiedad con la que fabricaron carpetas administrativas y penales con documentación ilícita a modo en las carpetas FED/UEAF/UEAF-CDMX0000026/2020, FECCOC/UEIDFF/3783/2021, SIED/FUEIDFF/0014020/2021 y FED/FECC/UNAI-CDMX-/0000699/2019 (en esta última, el 30 de octubre de 2020 se determinó el no ejercicio de la acción penal).

La irresponsabilidad de esa gavilla y la indolencia de las instituciones del Estado, obligadas a intervenir ante este conjunto de arbitrariedades, parecen reafirmar los lazos indisolubles entre impunidad y corrupción en esta cadena de complicidades políticas y en el rol asignado a cada uno para evitar ser repudiados por el grupo; la mano "del hombre detrás" para no ser "tachados" como operadores ineficientes o traidores, o ser sustituidos por otros capaces de llevar a cabo cualquier orden.

En estos años pandémicos, dedicada entre otros casos a denunciar la ilegalidad, me quedó claro que hay que dedicarle tiempo y cabeza a pelear, que los adversarios sepan con claridad que no hay tregua, a pesar de que existe justicia selectiva. No importa, por ahora sigo en búsqueda de que algún día se activen quienes tienen la obligación de atender con profesionalismo la impartición de justicia y se difunda y sancione la serie de conductas graves, indignas, delictivas, inmerecidas de quienes reafirmamos la dignidad de una institución como la ASF, ante el deterioro institucional intencional que llevó a cabo la serie de funcionarios que intervinieron y omitieron detenerlas desde 2018.

Lo anterior se suma a la cadena de indicios —prueba circunstancial— y denuncias que avanzaron con velocidad inusitada, después de las amenazas transmitidas y cumplidas en diciembre de 2018, al no acatar sus "instrucciones", cuando entonces iniciaron una persecución penal y fiscal en mi contra. No esperaban que una mujer pudiera enfrentarlos en el peor nivel de alianzas para intimidarme. Así pues, contrariando una de las promesas de gobierno del titular del Ejecutivo "de que nunca más se fabricarían evidencias, delitos o expedientes para inculpar inocentes", tenemos aquí la muestra de actos intencionales y diversos de corrupción.

Tráfico de influencias

La corrupción política solapó la participación ilegal de personas ajenas en la ASF, el allanamiento a la DGAF y el conjunto de acciones intimidatorias en mi contra. Esto simboliza la escandalosa actuación de quienes permiten y prohíjan hasta hoy una serie de complicidades tendientes al desvío de recursos. ¿Quién dedicaría fondos públicos y humanos para pagar inserciones en distintos medios periodísticos, espectaculares, Twitter, sino los que poseen los recursos y el poder? El ejercicio indebido de la función pública en su máxima expresión.

Es difícil que hoy en día alguien le tenga respeto a la ASF. Se perdió la confianza, la independencia, la autonomía de gestión y la calidad de la fiscalización. Los grupos de interés que ahí se anclaron conviven de manera cordial con intereses mutuos; se convirtió en la madriguera de personajes inmorales vinculados a grupos de interés partidista del Partido Acción Nacional (pan), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano, Partido de la Revolución Democrática (PRD), políticos y funcionarios desempleados o caídos en desgracia por actos irregulares; muchos de ellos con historias de corrupción.

Imaginemos por un momento el poder asumido por varios diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia que se atrevieron a pactar —"yo veo que no te auditen"—, y al otro extremo, el uso de la ASF para intimidar a presidentes municipales, congresos estatales y gobernadores, con la consigna de fastidiar a quienes consideran adversarios o a quienes se nieguen a someterse.

Independientemente de los graves actos de corrupción denunciados y documentados, los actores principales en esta opereta carecen del perfil idóneo y representan conflictos de interés, como Heladio Ramírez, exgobernador de Oaxaca, vinculado a negocios con Colmenares; compartían el mismo domicilio fiscal y este último operaba como "consultor" en estados y municipios hasta semanas después de ser elegido auditor superior, y bajó el sitio web para ocultarlo, como comenté, cuando Humberto Musacchio publicó el artículo "El colmo de Colmenares".

Lo mismo ocurrió con Jaime Bolaños-Cacho Guzmán, tío del senador oaxaqueño por el PVEM Raúl Bolaños Cacho Cué y hermano del cónsul general en Brasil, que antes fue

magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, a quien le crearon una superestructura y lo nombraron titular de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas en la ASF desde el 16 de julio de 2018, cargo en el que permanece hasta la fecha.

Este, a su vez, contrató a un asesor de la ex Junta de Coordinación del Congreso que terminó su labor en julio de 2018: Íñigo Arnaud Blum, otro pago de prebendas, y lo hizo director de Vinculación con Entidades Federativas del Sistema Nacional Anticorrupción, de Fiscalización y Transparencia, y dos personas más, Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, nombrado director general de Planeación Estratégica a partir de diciembre de 2019, quien fue asesor en 2006 del diputado por Oaxaca José Luis Varela Lagunas, y desde 2008 consultor asociado en Colmenares Páramo y Asociados, y quien sustituyó a Isaac Rojkind en el cargo de auditor especial; con esa trayectoria, sí que son atrevidos.

En Tabasco, por ejemplo, durante la revisión que ocasionó en 2013 el despido fulminante de Colmenares en la ASF, se descubrió que en lugar de acatar la instrucción de fiscalizar los recursos federales desviados durante la gestión del gobernador Andrés Granier, se dedicó a obstaculizarla y a informar al que consideraba su "hermano", que resultó ser partícipe en ese gobierno como secretario de Planeación, Gustavo Jasso Gutiérrez,[27] situación que en ese momento ocultó de manera intencional, al existir un claro conflicto de interés.[28]

Nunca lo reveló a pesar de que se encontraba auditando, en lugar de ello manipuló los procedimientos para no obtener resultados (auditorías 660 y 692 CP 2012), y fue cuando le ordenaron a la DGAF la intervención para llevar a cabo esa revisión, donde se revelaron millones de pesos desviados en efectivo y transferidos a cuentas concentradoras, para luego ser retirados con el transporte de traslado de valores.

Durante la ejecución, manifestaron que les ordenaban llevarlos a un rancho y que otro tanto era entregado en la Secretaría de Finanzas de Tabasco, espacio físico que, cuando lo revisamos, aún olía a dinero nuevo, cuántos recursos habrán pasado por esa oficina, y una colaboradora responsable de contar el efectivo, según manifestó, fue uno de los chivos expiatorios de todo este entramado. Tal cual sucedió en algunas de las observaciones determinadas en la Estafa Maestra, millones de pesos en efectivo entregados en domicilios y a personas misteriosas en la zona de Polanco, en la Ciudad de México.

"De cualquier manera te vas a ir, habla con quien quieras hablar". Le respondió el exauditor Juan Manuel Portal cuando al pedirle que dejara el cargo por su falta de resultados y su ausencia en el encargo el mediocre funcionario le dijo que él tenía amigos, que no se iría, que los iba a buscar; respuesta retadora y estúpida como la de Javier Duarte cuando expresó: "de donde yo tenga que agarrar dinero voy a agarrar para cumplirle a Peña Nieto". Pues regresó agachadito y pidió irse pero que primero se le permitiera despedirse en el Consejo.

Ahí se equivocaron, debieron documentar la serie de omisiones en que incurrió y la negligencia en su actuación. No tenía ni idea de lo que es fiscalizar, como dijeran sus compinches priistas, ¿quién irá a trabajar en la ASF si lo nombran a él?

Esto que narro es una de las consecuencias del efecto dominó, producto de haber descuidado algo fundamental: darle un puesto a alguien sin haberlo conocido en el terreno profesional, sin el análisis de su historia, el perfil y antecedentes, de un embustero que en 2013 fue nombrado en un cargo de auditor especial de gran relevancia, sin contar con el conocimiento o especialización y sin haber leído su pobre trayectoria profesional, de otra manera se hubiera constatado su nivel de ignorancia y los exámenes de confianza sin duda habrían ayudado a develarlo.

Simplemente, un tipo que desde la universidad no se había actualizado ni preparado, esto muestra su escaso talante profesional, un engañabobos con el alcance de trepar para dinamitar a la ASF.

Durante su no gestión, de junio 2012 a octubre de 2013, los directores generales de su área no recibían instrucciones ni directrices sobre el trabajo de fiscalización; él nunca estaba, refieren, llegaba tarde, muy tarde, vivía en supuestos desayunos y comidas, no tenía la menor idea de la significancia ni de la existencia de normas, procesos y lineamientos internos y sistemas informáticos en la ASF, ni siquiera entendía cuál era su función para reportar avances en el Consejo de Dirección, pero eso sí, hacía ofrecimientos magnánimos a sus congéneres partidistas. No ha sabido vivir de otro modo. Del programa anual de auditoría ni idea tuvo ni tiene ahora mismo.

Sus "compromisos" eran tan frecuentes que asistía menos de 50% del horario laborable; viajaba constantemente a Oaxaca, los jueves regularmente alrededor de las 13:00 se iba para regresar los lunes o martes por la tarde; por eso siempre trataba de indagar qué compromisos tenía el entonces auditor durante esos días.

Las ocasiones en que era llamado a la oficina del titular normalmente no sabía ni podía contestar ningún cuestionamiento sobre el avance de los trabajos, ya que nada sabía del fondo, y su solución era pedir tarjetas informativas. No pocas veces varios funcionarios tuvieron acuerdo con él, mientras él veía un partido de futbol.

Repentinamente, la Auditoría Especial del Gasto Federalizado se llenó de sus alumnos, a algunos los llevó para prestar su servicio social y después fueron contratados, todos por honorarios. Era tal su predilección por sus estudiantes que con frecuencia pasaban horas platicando con él, si no uno, otro; mientras los directores generales hacían antesala o los regresaban a sus oficinas para luego avisarles a qué hora podían pasar.

Pero María Consuelo del Carmen Barrera Ríos, la viuda del difunto exdirector de Planeación y Desarrollo Social en Tabasco, Gustavo Jasso, quien presume que es tía de la esposa del auditor, a quien también se refiere como la "tía Chelo", no quedó desprotegida y la empleó;

creó la plaza de director de área para nombrarla asesora en su oficina —desde mayo de 2018—, ganando 90 000 pesos mensuales y ya jubilada. Quizá también porque es tía de la cónyuge del auditor, quien labora en el SAT de Oaxaca, a quien por cierto "coló" y acomodó en mesas de trabajo representando a la ASF en una asamblea general de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), realizada del 7 al 13 de octubre de 2018 en Buenos Aires, Argentina.[29]

Habría que verificar si el boleto de la cónyuge fue pagado con recursos del SAT o los que aportan a la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS), la asociación que integra y recibe aportaciones de dinero público de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y que maneja discrecionalmente el auditor superior, del cual no hay información pública para conocer su ejercicio y aplicación del gasto que es, sin duda, recurso público auditable. Opacidad absoluta.

Por cierto, una de las primeras reuniones que se inventó, en mayo de 2018, fue la firma del convenio general de colaboración para el fortalecimiento y desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, de donde apenas había dejado de cobrar. Otra con Luis Videgaray y José Antonio González Anaya y el personal de la SHCP, donde no paraban los elogios y aprovechó para pedirle a González Anaya su intervención, un aumento de sueldo y apoyos para su esposa, que labora en el SAT en Oaxaca, y que le dieran un "buen bono", aumento que por cierto le avisaron que se podría otorgar de inmediato en lo que recategorizaban su plaza, "pero no esperaba que fuera tan conservador el aumento de cinco mil pesos".

Mientras tanto, el hijo que estudiaba en la Ibero, siguiendo la "mística familiar", se la pasaba en la oficina comiendo y para lo que se ofreciera, tenía cuatro vehículos a su disposición, con chofer, para transportarlo y esperarlo en la universidad; viajes de sus amigos por la noche después de los reventones. Hay fotos y datos que muestran cómo con singular alegría abusaban de dos de los choferes, contratados *ex profeso* por órdenes del auditor para atender al joven, con vehículos oficiales, pago de peaje y gasolina a cargo de la ASF. Salieron muy buenos para gastar el dinero ajeno. No aguantaron el ritmo de los reventones y renunciaron.

En diciembre de 2018, mientras el país entraba a un programa de austeridad severo, se restringía la adquisición de vehículos para los funcionarios, el gobierno remataba los autos y todas sus dependencias comenzaban a adelgazar presupuesto, al auditor —que debía poner el ejemplo— no le importó y se despachó a lo grande en diciembre de 2018, adquiriendo 25 automóviles y camionetas de lujo nuevas para los mandos superiores del primer círculo, un Toyota y un Hyundai Corolla Base CVT, desde 300 mil y hasta casi 600 mil pesos, más seguro y tenencia; para uso de él, por supuesto, las tres más lujosas. La Auditoría Superior —que debería poner el ejemplo porque se supone que son quienes revisan todos estos programas— lo tuvo sin cuidado y se despachó a lo grande mandando comprar 25 automóviles y camionetas nuevas para sus amigos; a los del primer círculo un Toyota Corolla Base CVT, con chofer incluido, de casi 290 mil pesos cada uno. ¿Por qué se lo permitió la

Secretaría de Hacienda? Tampoco les quitaron un centavo de presupuesto en época de austeridad. Al contrario, se los han venido aumentando anualmente, y de entrada gastaron más de tres millones de pesos en autos para los allegados mientras la crisis apretaba. Esto tiene que ver con las negociaciones con el entonces secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, a propósito de la "moralidad" que pregona desde su salida del gabinete. Recordemos los pactos de impunidad. Nada observó tampoco la Comisión de Vigilancia. Quedando bien con dinero ajeno y sirviendo a los "desamparados políticos" que se quedaban sin empleo y sin vehículo. Los auditores en campo que se frieguen, son los que menos importan.

Por cierto, al exauditor especial de cumplimiento no le duró mucho el gusto de estrenar la camioneta de lujo adquirida por la ASF, pues resulta que la unidad Toyota Corolla 2019, que le fue asignada para su uso, se reportó como pérdida total tras sufrir un accidente de tránsito en día y hora no laborable, sábado 6 de abril de 2019, alrededor de las 11:00 p. m., ocultando intencionalmente que era conducida en estado inconveniente por Hugo Velázquez Oliver, el hijo del chofer de Lozano, quien se quedó dormido, impactó en plena calle Gabriel Mancera contra una jardinera y se volcó. Pérdida total de la camioneta, por supuesto. En lo que "desclasifican", que ya falta poco, ya nos enteraremos si ahí iba el titular, como se infiere, y por qué razón conducía el vehículo alguien no autorizado y en día inhábil. (Acta sinestro 40100-7593525 por volcadura, clasificada como información reservada por la ASF).[30] Y aquí siguen las mentiras, ocultamientos intencionales y omisiones graves que destacan de la lectura del acta administrativa de hechos levantada por Carlota Amalia Barroso Luján Fernández con motivo del accidente, no se establece modo, tiempo y circunstancia de los hechos. Ocultaron deliberadamente que el automóvil era conducido en un día inhábil por una persona ajena a la ASF, y quien tenía la obligación y el deber de velar por el cuidado de ese activo era el propio titular del uso y disposición del vehículo, AECF, que tanto habla su yo-yo contra la deshonestidad; entonces no solo el acta carece de la narrativa de los hechos que daría pie al inicio de la investigación y procedimiento administrativo por presuntas faltas graves tanto de Lozano como de su chofer, quienes están sujetos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al código de ética, al igual que todos los funcionarios —sus cuates del despacho— que firmaron y participaron del acta y del acto irregular, por cierto, sendos abogados, encubriendo de manera intencional un hecho grave, que solo dio lugar a la declarativa de pérdida total del vehículo, el pago del deducible por 5 747.50 pesos y el pago del seguro a valor de reposición en especie. Claro, le sirvió de coartada otra igual: Carlota, quien supuestamente era la resguardante y que se encargó de una manera bastante mala de "fabricar y acomodar los hechos". Nada de iniciar procedimientos administrativos. Son el uno para el otro, lo lamentable es que esta funcionaria, después de que la botaron de la ASF, se colocó en la SHCP. Qué tropelías y qué suerte. Mala para los ciudadanos. Qué sinvergüenzas para eludir la ley, los procedimientos y las sanciones, y de seguir en un puesto que les es indigno, y con esa característica peculiar de cinismo salir a fiscalizar a las entidades y dependencias. Las máscaras se las acomodan a conveniencia para disimular su verdadero rostro.

No conforme con adquirir los vehículos, sin transparencia ni resultados que justifiquen semejante gasto, mandó a construir sus aposentos para vivir ahí, en la ASF, junto a su oficina en el piso 12, con cocina, chef, cocinero, enfermera privada, mesero, todos pagados con el erario, argumentando que se cansa y necesita dormir;[31] construyó otra habitación igual en el edificio —que estaba ya desocupado— en la calle de Morelos, número 70. "Allá vive y duerme y come el hijo", comentan furiosos quienes se obligan a atenderlos… duermen ambos… el sueño de los corruptos.

Las estafas maestras

El arribo de este clan fue preámbulo de varias cosas interesantes: por un lado, desde antes de su llegada traían su plan maestro, no les interesaba fortalecer la operación y al personal de la ASF. Prescribieron varios de los procedimientos administrativos con la subsecuente pérdida de la recuperación y, por tanto, para beneficiar a los implicados.

Se carece de observaciones relevantes, las auditorías se realizan con un enfoque al desempeño, no se llevan a cabo auditorías forenses ni el mapeo de los vínculos; mucho menos aportes técnicos que beneficien a las EFS o a la sociedad en la detección o disuasión de la corrupción. Por otra parte, los únicos beneficiados reales han sido amigos y grupos de poder, y esto puede verse con claridad en la repartición de puestos y prebendas que hemos documentado en este libro, cuyos datos y mapas forman parte del sitio web, donde se podrá encontrar cada uno de los documentos que respaldan estas aseveraciones.

INEE, caso y el NAIM

Las actitudes son expresión de los valores, tanto individuales como organizacionales, y cuando se carece de ellos poco importa generar situaciones adversas y deshonestas a la organización, esa racionalización los lleva a fortalecer su comportamiento criminal. Es un sistema de significados compartidos por todos los miembros con la percepción común, encaminada a la corrupción que los une y practican de manera efectiva entre los integrantes de ese grupo, se apropian del modo y sienten pertenencia y agradecimiento por ser aceptados en lo que les significa esa cultura transgresora.

En este sentido, y siguiendo con la inmoralidad y conflicto de intereses de los funcionarios nombrados en la ASF, vamos a conocer y entender la historia del nombramiento de Agustín Caso Raphael, el mismo que no hace mucho conoció la opinión pública cuando salió a defender el dictamen sobre el cancelado aeropuerto de la Ciudad de México, porque como auditor especial de Desempeño fue responsable de la ejecución y la pifia de auditoría al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), tan controvertida, y al quien la UEC ni siquiera se tomó la molestia de simular su investigación.

Bien, vayamos al fondo, en 2015, después de que fuera despedido tanto de la ASF como del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), el desempleado Colmenares seguía tejiendo con las redes de siempre, y consistente como ha sido, fue "convocado" a

participar en licitación de servicios mediante la invitación a cuando menos tres personas IA-006A2O001-N47-2015 del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), cuyo fallo se emitió el 7 de agosto de 2015, para brindar "servicios de asesoría para el gasto federalizado en materia educativa, evolución, análisis de su distribución y de sus efectos sobre la equidad", el cual se traducía en un entregable de cuatro partes y cada una costaba 245 mil pesos. Esto es, 980 mil pesos más IVA.

Lo primero que llama la atención es que uno de los firmantes del acta correspondiente de adjudicación fue el entonces director de Fomento de la Investigación del INEE, Tizoc Villalobos Ruiz, quien ahora labora en la ASF como director general de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, bajo las órdenes de Caso, y que el "proveedor" beneficiado resultó ser la persona física con actividad empresarial David Colmenares Páramo.

Martes, 12 de mayo, 2015 11:44:44, TIZOC VILLALOBOS RUIZ escribió:

Hola Lic. David:

Envío 4 documentos: Anexo Técnico y Formato, estos serían los que nosotros le mandaríamos a usted.

El tercer documento es el formato de respuesta que usted nos mandaría a nosotros, con una impresión del Anexo Técnico firmada en todas sus hojas. Estos documentos ya están listos para que usted los revise y en caso de estar de acuerdo los firme o, en su caso, hacer los cambios que considere. El formato de proveedores también debe anexarse a la respuesta.

Para el segundo cotizante sería lo mismo, solo que el segundo debe cotizar sobre 1.2 más IVA. Si me manda los datos de la persona adecuamos los formatos nosotros. Quedo pendiente para cualquier duda.

Saludos, Tizoc

(Y en este mismo —además del soporte documental en el que se consigna el correo mismo— se anexa el recibo de honorarios No. 8, del "consultor experto" Colmenares).

Mensaje original De: David colmenares

Fecha: 2015/05/12 22:26 (GMT-06:00)

Para: TIZOC VILLALOBOS RUIZ

Asunto: Re: Documentos

El Martes, 12 de mayo, 2015 11:44:44, TIZOC VILLALOBOS RUIZ escribió:

Hola Lic. David:

Envío 4 documentos: Anexo Técnico y Formato, estos serían los que nosotros le mandaríamos a usted.

El tercer documento es el formato de respuesta que usted nos mandaría a nosotros, con una impresión del Anexo Técnico firmada en todas sus hojas. Estos documentos ya están listos para que usted los revise y en caso de estar de acuerdo los firme o, en su caso, hacer los cambios que considere. El formato de proveedores también debe anexarse a la respuesta.

Para el segundo cotizante sería lo mismo, solo que el segundo debe cotizar sobre 1.2 más IVA. Si me manda los datos de la persona adecuamos los formatos nosotros. Quedo pendiente para cualquier duda.

Saludos, Tizoc

Analicemos la línea de tiempo de este proceso fraudulento:

Tres días después, el 10 de agosto, se firmó el contrato INEE/DGAJ/02/08/2015 para oficializar el servicio, y en él aparece como representante del INEE quien entonces fungía como titular de la Unidad de Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación, y área administradora de este contrato, Agustín Caso Raphael, que estuvo en ese cargo de enero de 2014 a julio de 2016.

El nombramiento revela ciertamente lo que ya hemos abordado a lo largo de este libro, los políticamente indignos hablando de moralidad, o los méritos de ambos donde les une este tipo de relaciones, al menos el contrato que le otorgaron. Así es como se pagan los favores, ¿en qué parte de su media cuartilla de currícula tiene el señor Colmenares la *expertise* en materia de evaluación de la educación para considerarlo en una adjudicación por 1 136 000 pesos? Y, ¿qué uso se le dio y cuál fue la justificación para esos entregables que se supone solicitó Agustín Caso?

La calidad de la información contenida en los supuestos entregables es un fiasco, independientemente de que la etiología de su contratación demuestra por sí misma la asignación dirigida, se observa que los correos dirigidos a Colmenares —al igual que lo hizo Morones en la Estafa Maestra— le indican los documentos que debe enviar, el costo que deberá anotar, y le hacen llegar personalmente en Plaza Universidad los documentos ya elaborados a modo, para su firma, y Tizoc Villalobos es uno de los operadores de esta adjudicación dirigida.[32]

Sería muy bueno saber cuál fue el beneficio de ese gasto para el país o por qué lo hizo con invitación, ¿cuál fue la razón de que se le enviaran los entregables y documentos ya requisitados? Incluso, ¿por qué Luis Felipe Michel Díaz, el encargado del OIC del INEE que en ese momento debía vigilar los procesos, fue nombrado el 1º de septiembre de 2018 en la ASF como titular de la Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión? O mejor aún, ¿dónde quedó el entregable?

Un exservidor público me dijo que los entregables estaban muy mal, que eran muy básicos, estaban mal estructurados, que las fórmulas no eran las adecuadas y que era un *copy paste*, y que esa fue la razón por la que lo corrieron cuando indicó que no se debía realizar el pago, y que a pesar de las denuncias presentadas ante el INEE, por el ambiente de acoso a mujeres y hombres por parte de varios funcionarios y el mismo director de administración, ninguna queja era atendida por Agustín Caso, ni por el entonces titular del OIC, Luis Felipe Michel, quienes les recomendaban muy jocosos "acéptale el desayuno y dile que solo quieres una amistad".

Eso es no tener madre, tipos que traían denuncias por acoso desde antes de ingresar, incluso por eso los habían movido, desde Gobernación; el hostigamiento era parejo a hombres y mujeres. Esto reafirma las relaciones de negocios y prebendas entre las partes y las catafixias institucionales. Indignante.

Lo anterior implica la colusión y la permanente estafa al Estado mexicano; se prestaron a simular actos administrativos y jurídicos. ¿Quién y cómo se decidió la necesidad de ese servicio y el costo? Hasta hoy, no se conoce el uso ni beneficio que se le dio, ni se explicó por qué se pagó esa cantidad de dinero. Además, el INEE fue omiso en publicar al respecto y dar la información pertinente.

No solo eso, también las implicaciones de pasar a una estructura que necesita expertos, pero en su lugar llegan cuates. ¿Con qué conocimientos técnicos van a auditar a Petróleos Mexicanos (Pemex) o a la Secretaría de Educación Pública (SEP), que está dentro de sus atribuciones, si su trabajo anterior era armar licitaciones?, o ¿cómo van a poder evaluar algo que ni siquiera saben qué es, como aconteció con el NAIM? Lo que parece importar es el nivel de padrinazgo, no de conocimientos.

Algo sobre lo que Caso Raphael, Tizoc Villalobos, Michel Díaz y David Colmenares todavía deben explicaciones a la sociedad, porque además Agustín Caso reprodujo este modelo y le creó el puesto de director general del Centro de Estudios de la ASF, desde agosto de 2019, a Gerardo Gil Valdivia, que había sido secretario general del INAP y presidente de la sección mexicana del Club de Roma.

Esta muestra nos deja ver la escasa calidad ética en el servicio público conforme a los valores y características que distinguen a estos vergonzosos funcionarios; la obediencia y la suma de complicidades a costa de lo que sea. El resultado de las modificaciones y crecimiento de la estructura de la ASF ha sido para beneficio del grupo apoderado de la ASF.

Me queda claro que si cambian de barco a tiempo no se hunden. Por eso no hubo ni habrá una revisión técnica seria de la UEC, ni en la auditoría al desempeño del aeropuerto; es una lástima el presupuesto y gasto millonario que nos cuesta una estructura tan grande, por eso la ASF debe desaparecer para que en su momento se plantee un auténtico revisor en el que no tenga injerencia ningún partido político ni llegue la tentación de servir a algún amo; necesitamos una entidad técnicamente solvente y políticamente independiente, moderna,

con tecnología de punta y forense, y en un nuevo esquema transversal en el país donde pueda ayudar a las EFS a ser eficientes y auditar con la misma metodología de trabajo. Formar y conformar equipos de élite de investigación.

¿En qué mejoró la calidad y cantidad de observaciones derivadas de la fiscalización? La opacidad ha aumentado y ello no deja de ser contradictorio, pues siendo la institución que audita el programa de austeridad, es casi imposible conocer su estructura organizacional ni las centenas de contratos por honorarios que crecieron exponencialmente, que son un método de elusión y de empleados fantasma en muchos sentidos, y permiten realizar contrataciones de simuladas, altas y bajas sin control, que no son verificadas. Todos los bribones ganan.

A pesar de la operación de control de daños que desplegaron a partir de su patética actuación en el tema de la auditoría al NAIM, porque sí estuvo a un tris de irse, volvió a aliarse hasta con el diablo; porque donde debía estar no es en la calle, sino en la cárcel. Y de repente nada sucedió, ni la revisión y evaluación de la auditoría, ni la actuación de los funcionarios, ni la información de los resultados por la UEC. Es una opereta. Así esconden a sus esqueletos. En un silencio absoluto, y los ciudadanos estamos sin esperanza alguna para protegernos de la arbitrariedad, la negligencia y el abuso del poder. Así que son cómplices y aliados de este nivel de putrefacción.

Tantum y la simulación de servicios

De lo que presumes, careces, así que la "bandota" de cuates que feliz vive en la ASF haciendo de las suyas ha modificado radicalmente, para su beneficio, las compras, contrataciones y requerimientos que son de utilidad para la fiscalización y, paradójicamente, han aumentado los gastos por adjudicación en áreas de tecnología de la información (it), sin que se refleje ni conozca el beneficio en las actividades reales de fiscalización, es decir en la operación con los auditores. Al igual que los gastos de mantenimiento y ampliación y todo lo que se pueda "enterrar" en un edificio, igual se observa un aumento importante de gasto, aunque la ASF es un edificio nuevo, que no requiere ese tipo de arreglos que le han "fabricado". Hoy día todo se sabe. Es difícil esconder las raterías cuando interviene mucha gente.

Voy a analizar uno de los contratos irregulares, del mismo estilo que el anterior; se refiere a la simulación de contratos y a una historia de aparente corrupción que comenzó el 17 de septiembre de 2018, cuando el auditor superior informó a los directores generales que la empresa denominada Tantum realizaría la planeación estratégica de la ASF para el periodo 2018-2026, para lo cual se entrevistarían con los socios de esa empresa y les entregó un documento titulado Proyecto Integral de Planeación, Ejecución y Gestión de la Estrategia Institucional, elaborado por Tantum.[33]

Lo primero que llama la atención es que existen áreas en la ASF creadas *ex profeso*, cuya función es precisamente elaborar la estrategia institucional, y con la serie de modificaciones

al reglamento y la creación de estructuras organizacionales adicionales, incluida la auditoría especial y otras unidades, que supuestamente cuentan con toda una estructura y facultades expresas para elaborarla; sobre todo considerando el marco de la especialización y cuidado extremo con que debe manejarse, entendiendo que esta actividad por ser técnica y por su naturaleza de mucha discreción debe llevarse a cabo desde el interior, con la participación de los titulares, avalando cada uno su propuesta integral.

Bueno, al menos así sucedió durante 17 años, sin pagos de propaganda publicitaria, sin fugas de información con una estructura mucho menor, pero especializada y con resultados contundentes.

Otra bandera de alerta refiere a las actividades obligadas del titular de la ASF, que transcurre sin pena ni gloria, muy ocupado desmantelando la Dirección General de Auditoría Forense, pero sin un plan estratégico, aún nueve meses después de nombrado, no obstante haber modificado y agrandado como le vino en gana —para colocar a sus cuates— la estructura organizacional.

Se supondría que su plan y "estrategia planteada" al tomar posesión se debió plantear de inmediato ante el Consejo de Dirección como la primera actividad en conjunto con las distintas áreas fiscalizadoras para discutirlo, revisarlo y mejorarlo entre las "cabezas", que tienen las funciones primordiales desde planeación, ejecución, seguimiento y el reforzamiento de las ideas "brillantes" de la nueva administración, para llevar a cabo una estrategia institucional vigorosa considerando el alcance y los ejes transversales con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), tanto para su función auditora como jurídica. Sin embargo, lo que echaron a andar de inmediato fue su estrategia de inmoralidad, de contrataciones fachada y empleados fantasma, con la consiguiente simulación de servicios.

Pero bueno, "el trabajo es duro" y prefirieron contratar a una empresa externa que no tiene ni la menor idea de las actividades fiscalizadoras, para supuestamente llevar a cabo las actividades que le corresponden a la propia ASF, por lo delicado de la información y porque para eso crearon la Dirección General de Planeación Estratégica, que se supone dirigía Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, el entonces consultor de Colmenares Páramo y Asociados, y que nombró en septiembre 2021 como auditor especial de Seguimiento, o la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas, donde está Jaime Bolaños-Cacho Guzmán, y un Consejo de Dirección que decide el plan estratégico y el plan de auditorías, conformado por todos los titulares de primer nivel. Pues bien, ni idea alguna de lo que tendrían que diseñar, como estrategias concretas.

Entonces simularon una invitación a cuando menos tres proveedores, y resultó casualmente ganador Tantum Group, que en años anteriores —de 2012 a 2016— había tenido contratos muy menores en otras entidades federales, por adjudicación directa, como el Instituto Nacional del Emprendedor, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,

Forestal y Pesquero, o el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, que sumaron poco más de dos millones de pesos. Ese era su *expertise*. Así las cosas, permítanme explicar el engaño y la manipulación burda para otorgarle el contrato.

El 19 de septiembre de 2018, es decir, dos días después de que Colmenares informara a los directores generales que esa empresa realizaría las actividades, y de entregarles el material con el proyecto de esta empresa, inició "el procedimiento de invitación restringida" a cuando menos tres personas para contratar servicios de asesoría para realizar los trabajos del plan estratégico 2018-2026, que es el ASF-DGRMS-09/2018.

Pasaron dos días y en la junta de aclaraciones de la ASF se presentó un tal César Ceballos como representante de la empresa; el 27 de septiembre se hizo un acto para mostrar las proposiciones y la apertura de las propuestas técnico-económicas, cuyos montos son los siguientes: Tantum Group, 3 248 000 pesos; Accertare, 3 340 800 pesos, y Core One Information Technology, 3 millones 306 000 pesos. ¡Maravilloso!, tuvieron la visión futura del ganador 13 días antes de que se "emitiera el fallo".

En esa serie de actos irregulares plagados de opacidad y ocultamiento intencional, resultó que el acta no contiene el nombre ni datos de identificación de los supuestos representantes legales de las empresas y solo aparecen firmas. Y que las dos primeras comparten a Julián Pérez Duarte Escobar como socio. Esto es, dos licitantes coludidos.

El 1º de octubre se emitió el fallo y, sorpresa, el licitante adjudicado fue Tantum, por supuesto, y a los tres días quedó listo el contrato ASF-UGA-DAJ-030/2018, para ejecutar servicios de asesoría y elaboración del plan estratégico 2018-2026, cobrando los poco más de tres millones de pesos de su propuesta. Con esa misma velocidad y eficiencia, a tan solo ocho días de haberlo firmado, estuvo listo el entregable de la etapa uno, que consiste en un análisis del marco jurídico institucional, elaboración del plan estratégico, revisión de la visión y misión, capacitación sobre las metodologías a utilizar, resultados de encuestas, tendencias de impacto, análisis foda y objetivos estratégicos.

Pero lo interesante es que se trata del mismo documento con fecha del 17 de septiembre, anterior a la supuesta "licitación", y en la página 60 del entregable del 12 de octubre cometieron la pifia de indicar que el inicio de los trabajos es el "17 de septiembre", esto es, dos días antes de generar la simulación de licitación nombrada con el eufemismo de "invitación restringida a tres proveedores".

Frente a esto parece poca cosa, aunque no lo es, la falta de método y rigor del documento, como encuestar solo a cuatro personas, todas del mismo grupo, de modo que resultaba más parecido a ese club de Tobi de niños de historieta que un trabajo profesional. Me recordó cuando auditaba la Universidad Politécnica de Quintana Roo, y en las actas de quienes recibían la supuesta capacitación aparecían precisamente los nombres de los funcionarios de alto nivel cercanos al rector; todos firmando que recibieron los cursos. Es una vergüenza.

El 30 de octubre salieron los entregables de la etapa número dos, y el 14 de noviembre el entregable de la etapa tres. Así que en poco menos de dos meses se ganaron 3 248 000 pesos, de un solo contrato, pero vinieron más.

Tracé una línea del tiempo que describe claramente en conjunto el proceso irregular. Por ejemplo, el 19 de diciembre el ASF-UGA-DAJ-046/2018, para suministrar un software con las características de la plataforma web Clear Point Strategy y automatizar el proceso de información estratégica, de tan solo 37 100 dólares, y la misma lógica de no utilizar áreas de la auditoría que pudieron haberlo hecho y ahorrarse dinero y negocios privados. Asimismo, a través de www.plataformadetransparencia.org.mx es posible encontrar otros contratos que le ha adjudicado la ASF a esta empresa por alrededor de 8 740 182 pesos en 2018, 6 264 000 en 2019, y 1 869 673 pesos más en pleno año de pandemia.

Para noviembre de 2022, hurgando en internet, dado que la mayoría de los contratos permanecen en la opacidad y no son públicos, hallé casi 30 millones de pesos "adjudicados" por la ASF a Tantum Group, S. de R. L. de C. V., y 104 millones de pesos adjudicados a una empresa desconocida, Sistemas Integrales de Información Corporativa, S. A. de C. V., que no presenta mayor información en internet, su sitio web es inservible, digamos que una serie de contratos inusuales por más de mil 200 millones de pesos que le dio por gastar en la ASF con "empresas consentidas" (otra bandera roja), en los socorridos temas de software, "mantenimiento de licencias" Clearpoint, que por cierto no aparecen en alguna otra dependencia y que se ha documentado el nivel de corrupción en supuestas contrataciones de servicios de tecnología de la información, porque como banderas rojas tenemos los contratos, servicios, costos, dependencias, entidades que aparecen y los precios de servicios similares por debajo de la mitad, casualmente por adjudicación directa, y en áreas también señaladas por prácticas corruptas como la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario (fnd) o Aserca, como se observa a continuación:

Dependencia	Tipo	Título	Inicio	Fin	Importe mxn	Proveedor
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales	Adjudicación directa federal	Servicios de Consultoría	16/03/15	31/07/15	1790238.00	Tantum Group, S. de R. L. de C. V.
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	Adjudicación directa federal	Servicio para la Elaboración de un Diagnóstico del Modelo de Gestión Estratégica.	13/11/15	31/12/15	1380000.00	Tantum Group, S. de R. L. de C. V.

Instituto Nacional del Emprendedor	Adjudicación directa federal	Implementación y Aplicación de la Metodología "Excelencia en la Ejecución"	27/11/15	31/12/15	1300000.00	Tantum Group, S. de R. L. de C. V.
Instituto Nacional del Emprendedor	Adjudicación directa federal	Cuadros Estratégicos de Gestión de las Áreas de la DGAF del Inadem	10/11/16	31/12/16	310340.00	Tantum Group, S. de R. L. de C. V.
Instituto Nacional del Emprendedor	Adjudicación directa federal	Curso de Capacitación en Gestión Estratégica para Servidores Públicos del Inadem	02/11/16	31/12/16	39000.00	Tantum Trainings, S. de R. L. de C. V.
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	Adjudicación directa federal	Servicio de un Proyecto Integral de Gestión y Ejecución Estratégica	08/10/16	31/12/16	1800000.00	Tantum Group, S. de R. L. de C. V.
Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	Adjudicación directa federal	Servicios para la Planeación Estratégica de Aserca	08/08/16	31/12/16	1920000.00	Tantum Group, S. de R. L. de C. V.
Fideicomiso de los Sistemas Normalizados de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral	Adjudicación directa federal	Servicio de Cursos de Capacitación en Planeación y Ejecución	03/04/17	28/04/17	59000.00	Tantum Trainings, S. de R. L. de C. V.
Instituto Nacional del Emprendedor	Adjudicación directa federal	Curso de Capacitación en Gestión Estratégica para Servidores Públicos del Inadem	13/04/17	31/05/17	59001.60	Tantum Trainings, S. de R. L. de C. V.
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario	Adjudicación directa federal	Diplomado para la Certificación en Dirección de Planeación,	28/09/17	31/01/18	112000.00	Tantum Trainings, S. de R. L. de C. V.

		Ejecución y Gestión de Estrategias				
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario	Adjudicación directa	Diplomado para la Certificación en Dirección de Planeación Ejecución y Gestión	27/09/17	31/01/18	112000.00	Tantum Trainings, S. de R. L. de C. V
Instituto Mexicano del Seguro Social	Adjudicación directa	Servicio Capacitación Herramienta Balanced Scorecard	17/04/19	31/12/19	840000.00	Tantum Group, S. de R. L. de C. V.
Conalep Estado de México	Licitación pública	Contratación del Servicio de Arrendamiento de 56 Equipos de Fotocopiado en Planteles y Unidades Administrativas del Conalep Estado de México	01/03/19	31/12/19	2340155.00	Tantum Group, S. de R. L. de C. V.
Conalep Estado de México	Invitación a cuando menos tres personas	Contratación del Servicio de Administración de Mapa y Scorecards Estratégicos Mediante Licencia Autorizada para Planteles y Unidades Administrativas del Conalep Estado de México	01/06/19	31/05/20	542925.00	Tantum Group, S. de R. L. de C. V.
Auditoría Superior de la Federación	Adjudicación directa	Renovación del Mantenimiento de Licencias de la Herramienta Clearpoint	01/01/20	31/12/22	1611787.35	Tantum Group, S. de R. L. de C. V.

Conalep Estado de México	Invitación a cuando menos tres personas	Contratación del Servicio de Administración de Mapa y Scorecards Estratégicos Mediante Licencia Autorizada para Planteles y Unidades Administrativas del Conalep Estado de México	01/06/20	31/05/21	690000.00	Tantum Group S. de R. L. de C. V.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	Adjudicación directa	Servicio de Apoyo para la Actualización del Modelo de Administración del Desempeño para el Instituto Federal de Telecomunicaciones	18/11/21	31/01/22	438000.00	Tantum Group, S. de R. L. de C. V.
Conalep Estado de México	Invitación a cuando menos tres personas	Contratación de la Renovación del Plan Corporativo del Clearpoint del Conalep Estado de México	01/06/21	31/05/22	661200.00	Tantum Group, S. de R. L. de C. V.

En este sentido, otro detalle revelador que aparece en esta historia es que en el acta de "reunión" del Consejo de Dirección de la ASF, sin número, ni hora ni fecha de la terminación que se refiere al 28 de agosto de 2018, Jaime Bolaños Cacho Guzmán, titular de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación Transparencia y Sistemas, manifestó que contaba con el borrador sobre "la visión, misión y objetivos estratégicos institucionales" de la ASF, pero que con base en las "mejores prácticas" se haría uso de un asesor externo para que propusiera "una metodología de vanguardia" para la planeación estratégica 2018-2026. Qué manera tan burda de "cocinar" esta contratación. Tienen que leer los entregables para constatar el lodazal de la porqueriza, más que "vanguardista".

Llama la atención la ausencia de firma en el contrato del titular Bolaños Cacho, dada la "magnitud" y la importancia del tema, y lo delega en una directora de planeación, rango menor para la "atención y el seguimiento". ¡Cuánto se ha visto esta práctica de simulaciones donde embrocan a otros ingenuos o timoratos! Simplemente al cotejar los precedentes existentes y los entregables se puede hacer una serie de inferencias válidas.

Aplican la consigna aprendida que dicta que ellos no deben firmar para no involucrarse, y ponen a firmar a sus subordinados, muchos sin atribuciones por ser simplemente asesores. Así se cuidan la espalda y los bolsillos. Si hablamos de la planeación estratégica de un ente como la ASF, quien debía firmar en este caso era el titular de la Unidad de Homologación Legislativa. De este modo se evade la responsabilidad legal, elude su deber de cuidado y denota una conducta intencional para contratar esos servicios simulados. Esta en sí no es una revelación que podría sorprendernos, sabedores de la trayectoria de cada uno de los personajes de esa pandilla política, lo extraño hubiera sido no mostrar tan pronto su lado oscuro y el aprendizaje de conductas éticas.

Las contrataciones con Tantum, entre otros, son ejemplos que permiten ver la serie de graves irregularidades, encubrimiento, conflictos de interés, y que eso es lo que querían, dijera el preciso, y Lozano, calló como momia. No tiene credibilidad ni vergüenza.

De los casos planteados se desprende un conjunto de indicios que presuponen hechos indiciarios, al estar acreditados y vinculados con una variedad de actos demostrados, generadores de esos indicios y que guardan relación con el hecho que se trata de demostrar, es decir existe concordancia entre ellos. Conforme la jurisprudencia, satisfechos esos presupuestos, la prueba indiciaria se desarrolla mediante el enlace de esos hechos (verdad conocida), para extraer como producto la demostración de la hipótesis (verdad buscada), haciendo uso del método inductivo —no deductivo—, constatando que esta conclusión sea única, o bien, que de existir hipótesis alternativas se eliminen por ser inverosímiles o por carecer de respaldo probatorio, es decir, cerciorándose de que no existan indicios de fuerza probatoria tal que, si bien no la destruyen totalmente, sí la debilitan a tal grado que impidan su operatividad.

Para la mafia del poder y del no poder haber ganado la elección presidencial haciendo de las suyas apenas era el comienzo, por eso les urgía correrno*s*. No podían arriesgarse ni tantito. Pero todo se sabe y se sabrá mucho más. Que no les quepa duda. Ya sabemos ahora la historia del autor del NAIM, Caso, la simulación en contrataciones, agregando las de mantenimiento, cableado, la construcción de las "suites", todo lo que no se puede ver en el edificio por permanecer oculto.

También cuáles son algunas de las empresas "consentidas", como Ingeniería Alternativa e Innovación, S. A. de C. V., Construingeniería, S. A. de C. V., Construidas Innovación y Desarrollo, S. A. de C. V.,[34] que no tiene sitio web y cuyo representante legal es Lucio Revilla Pérez y fue inhabilitada por un año, según el *Diario Oficial de la Federación* del 20 de enero de 2021,[35] por irregularidades en un contrato con Telecomm donde se le "pagó de más" y se negó a regresar el dinero; también aparecen durante 2016 y 2017 pagos recibidos vía Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por casi 10 millones de pesos en el ramo de educación pública, donde Aurelio Nuño despachaba como secretario de Educación; Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, con contratos millonarios en el Estado de México. Otros contratos en Liconsa, SAT, IMSS, Pemex, todas estas entidades

conocidas con banderas rojas por alta corrupción, y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el último mes de 2018, casualmente por 3.3 millones de pesos. Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S. C., o Data Warden, S. A. de C. V., durante 2019 y 2020, de lo que se pudo escarbar, dado que se encuentran escondidos en internet, aparecen 48.5 millones de pesos de pagos al edificio nuevo y uno en desuso, en Morelos.

Colmenares invirtió dinero público en construcciones y modificaciones para las que no está autorizado, no tiene partida asignada para "vivir" del erario, distinto al presidente de la República, que expresamente tiene partidas asignadas para esos fines. Háganme el favor, tener que mantener a un zángano por ocho años, además de los negocios jugosos y tráfico de influencias que les ha redituado tanto y a tantos. Pero para eso tiene a su "amigo" Gerardo Gangoiti, que anteriormente era de Finanzas en Nayarit y quien me dijo que sería lo peor si llegara Colmenares a la ASF por su historia de pillerías en la entidad con él, pero debe estar muy necesitado del trabajo porque le firma y autoriza absolutamente todas las contrataciones irregulares, quizá pensará que va a estar blindado los mismos ocho años, no lo sé. No pensé que tuviera ese lado oscuro.

Esta caterva de cínicos me recuerda la anécdota de un funcionario en Nayarit, cuando le dijo su entonces jefe: "Oye, me engañaste con la venta que hiciste de manera ilegal de esos terrenos, te atreviste a vender el área común de una expropiación", le reclamaba enfurecido al deshonesto jefe de departamento cuando lo descubrió, quien cínicamente le dijo: "Sí, perdón, la vendí, jefe, pero ¿en dónde quedó la amistad?". No ha sido práctica la costumbre de actuar con honestidad, más bien la de llevar a cabo hechos fraudulentos sin rendir cuentas, hasta que te pescan.

Y a todo esto me pregunto: mientras esta serie de hechos presuntamente delictivos acontecía, ¿qué estaría haciendo tanto la UEC como el entonces auditor especial de Cumplimiento Financiero, Lozano, que resultó "prócer" anticorrupción cuando lo patearon a la calle? Su firma aparece en todas las actas de consejo y por ningún lado se lee su negativa a ejecutar estas contrataciones, al igual que una serie de documentos vinculados, y tan dadivoso que llegó a ofrecerse durante las vacaciones de diciembre para supervisar la obra irregular que se construía en el piso 12 del edificio Ajusco, sede principal de la ASF.

Tolerar y encubrir la serie de ilegalidades, contrataciones millonarias "asignadas", las remodelaciones, mantenimientos, y tanta porquería, iniciando con las amenazas y el allanamiento a la DGAF, no tienen nombre, así que le crean sus muertos; porque mientras "duró", todo firmó. Es peor que los demás, que al menos no se asumen como pregoneros de la honestidad.

Déjenme hacer un paréntesis para recordar una plática en 2014, con Emilio Zebadúa, exoficial mayor en la Sedesol y la SEDATU, a raíz de las auditorías que iniciamos. En una de las reuniones que sostuvimos cuando se percató de que seguiríamos las revisiones con

mayor profundidad, intempestivamente alterado, levantó la voz y preguntó: "¿Vas a auditar a Peña Nieto también?". Entonces yo no ligaba la pregunta con los hallazgos de las universidades, y le respondí: "Claro, si hay elementos también podemos auditarlo, no tenemos limitaciones en ese sentido, al igual que seguiremos con las revisiones a los contratos con las universidades".

Más alterado aún, agregó: "Pues a ver qué va a decir Aurelio Nuño", quien en ese momento era el jefe de la Oficina de la Presidencia, y a los pocos meses fue nombrado secretario de Educación Pública. En el momento de su nombramiento hizo clic la vinculación entre todos ellos, Jaime Valls y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) con las universidades, y el primer convenio de la Estafa Maestra se firmó por él con Robles, en Chiapas, para conformar los "comités comunitarios" de la Cruzada contra el Hambre, con un presupuesto mínimo de casi 61 millones de pesos; en las entidades federativas comenzaron a operar en entidades sureñas y algunas universidades y centros educativos como el Colegio de Bachilleres con varios despachos como Consulting Group Planeación, Estrategia Fiscal y Administrativa, S. C., similar a un "derecho de piso" para no ser auditados y garantizar solventar observaciones anteriores. Sumo otro hecho: el 2 de enero de 2023 fue nombrado Guillermo Valls Esponda como presidente del TFJFA para el periodo 2023-2025. Entretenidos como estaban los 4T en atender el cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejaron suelto al TFJFA y lo operó Ricardo Monreal. A partir de esto vamos a verificar qué casos, por responsabilidad que se llevan de sexenios anteriores, se resuelven "a favor" y qué cargos a partir de sus "recomendaciones" van a ocupar los distintos miembros de su familia, y los proveedores y servicios "nuevos", que no dudo que sean de software, y otras cosas más que en la realidad son "ficción". Todos actuando de forma coordinada: Nuño, Zebadúa y el jefe de la banda presidencial. Creo que desde ahí se confabularon muchos de los grandes desfalcos al país y con esto último festejaron como no lo habían hecho en sexenios anteriores.

Don gato y la pandilla

El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Víctor Manuel Andrade Martínez, de quien abundan las anécdotas sobre su ineptitud e incompetencia profesional, como la ocasión en que la SCJN estuvo a punto de destituir y encarcelar al exauditor por desacato, asunto que el Pleno de la Corte tenía enlistado para el siguiente lunes, y me enteré por casualidad el jueves previo por la noche, por un funcionario de la Corte, que me lo informó en un evento jurídico, y a última hora, se debió correr a poner la cara y presentar argumentos para mostrar que no hubo tal,[36] o el abandono de la denuncia del caso Javier Duarte, cuando la PGR "declinó" su competencia y se enteró siete meses después de que se envió la carpeta de investigación a Veracruz.

La responsabilidad de los abogados de las instituciones a las que representan jurídicamente es relevante y trascendente para la defensa, impulso y atención de las denuncias de hechos y sus obligaciones; incluyen la conformación del conjunto de pruebas que acompañan el

escrito y la argumentación lógica y razonada para satisfacer el estándar probatorio en las diferentes etapas judiciales, sobre todo en nuestro sistema en México, que ha demostrado que los pillos acaban ganando.

Por esto Andrade ha sido no solo negligente, sino omiso en su deber de cuidado, independientemente de otras conductas que puedan serle atribuibles, porque nunca en la historia de la ASF decidió, construyó o propuso la estrategia procesal para cada uno de los casos, eso ha sido un modo pasivo de convertirse en cómplice y encubridor. Han fracasado las investigaciones y lejos, muy lejos se advierte el éxito de algún caso.

Recordemos que para noviembre de 2017 estaba candente la precampaña presidencial y el proceso de selección del ASF, y estos factores aumentaron considerablemente la resistencia de la Unidad Jurídica, obstaculizando con cualquier excusa la presentación de las denuncias de hechos; por supuesto entendía su obstrucción y que tratara de evitarlo al costo que fuera, porque tenía compromiso con su grupo político, el mismo que fue responsable de esa serie de irregularidades.

Había convencido al entonces auditor para reformar el reglamento interior, para quitarse conforme su escaso criterio jurídico esa responsabilidad; sus lealtades políticas implicaban protección a los funcionarios de la Sedesol y la SEDATU; el contubernio con su hermano Virgilio, que le debía favores a Zebadúa cuando protegió y colocó a quien fuera su pareja en una dirección adjunta sin responsabilidades, por los favores recibidos hacia la madre de su hijo, no reveló el conflicto de interés y tampoco se iniciaron procedimientos administrativos por sus omisiones y encubrimiento.

¡Cómo no te voy a querer!, si Virgilio el incómodo llegaba repetidamente a la ASF a ofrecer su "intervención" a favor de la reelección, como si fuera de fiar; solo los ingenuos o ciegos obcecados podrían creer en él, se acercaba repetidamente a conocer y obtener la información de los asuntos relevantes vinculados con el PRI-gobierno y, por supuesto, mover con el hermano, Víctor, para la solventación posterior.

Otro ejemplo práctico que retrata el papel utilitario que fielmente cumple fue la acción de ocultar los nombres de las empresas y los proveedores que se desprendieron en los informes de auditoría de la tercera etapa de la Cuenta Pública 2017 de la Auditoria Forense, sin fundamento legal y contraviniendo con ello la normativa constitucional.

El ocultamiento de la información se encuadra en un tipo de falta administrativa grave, así como el ejercicio indebido o abuso de la función pública, y otras que resulten, en términos de la LGRA. Incluso pueden encuadrar en el orden penal.

De hecho, en el oficio UHLPTS/DGT/DTAIPD/0355/2019, con fecha de 26 de febrero de 2019, mediante el cual remite la solicitud de acceso a la información número 0110000016019, el mismo Andrade Martínez confiesa que como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, junto con el auditor especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard,

"determinaron publicar los informes individuales de auditoría reservando los nombres de personas morales lo anterior, derivado de un proceso de análisis interno".[37]

Así que es relevante preguntarle a esa mancuerna de funcionarios ignorantes y negligentes qué clase de "procesos internos de análisis para la conformación de los informes de auditoría" llevaron a cabo, que "no se formularon por instrumento escrito", como él mismo lo reconoce. Esto es, no existe documento alguno que funde y motive esa decisión de encubrir y ocultar.

Prosiguió con una respuesta estúpida: "no se tiene conocimiento de que se haya iniciado un procedimiento de responsabilidad administrativa sancionatoria" por no cumplir lo mandatado en las leyes y evadió explicar la razón, así como el nombre, cargo o facultades del servidor público que tomó esta decisión. En todos los casos estas acciones implican el uso indebido de facultades y abuso de funciones, además la discrecionalidad con la que se exoneran a sí mismos. Atrás de eso, de nueva cuenta el mensaje que privilegia la corrupción: pueden hacer lo que les dé la gana sin que haya sanción. La UEC duerme. Eso es lo más grave.

Cuando se publicó ese informe un periodista buscó al entonces titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que se pronunciara y emitiera un exhorto para corregir. Pero él pidió "hablar en corto" y explicó que no iba a declarar nada porque no quería problemas con Colmenares; "somos del sistema, pero no lo vayas a comentar", dijo. La presión mediática finalmente obligó a la ASF a emitir un comunicado en el cual señaló, sin mencionarlos por su nombre sino por sus cargos, a Víctor Manuel Andrade y a Gerardo Lozano Dubernard como responsables de esa "decisión" y que compartía "el malestar y la indignación generada".

Se limitó a instruir la publicación de los informes individuales de auditoría con los nombres de las personas morales, y tampoco faltó la retórica del compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, que obvio no practican y nadie les cree. En cuanto a los funcionarios responsables, solo dio para que ambos tragaran sapos, como se dice popularmente, pues más allá del escarnio en la opinión pública no hubo sanción alguna. Una suerte de "sacrificio" a unos subordinados abyectos.

Lo anterior me hizo recordar una anécdota de cómo tuvimos que defender hasta con las uñas la misma "tonada" de Andrade, planteada al entonces auditor, donde habían "perdido" el caso de un proveedor que se amparó sobre la publicación de su nombre y entonces manifestó que no se deberían publicitar más los resultados en los informes con los nombres de los proveedores, porque podrían demandar a la ASF y se perderían los casos; háganme el favor. Mi respuesta contundente fue que se pusiera a estudiar para ganar los casos, que su incompetencia no nos incumbía y que fundara y motivara su propuesta con elementos jurídicos.

Aún conservo esa respuesta vergonzosa para quien representa los intereses jurídicos y es el representante legal de la ASF, una serie de incoherencias jurídicas que ni un estudiante de primer semestre hubiera esgrimido. La SCJN establece que la publicación de los nombres de quienes reciben y ejercen recursos derivados de la fiscalización se justifica al existir un interés público, en consonancia con los artículos 79 y 134 constitucionales; el artículo 79 señala el carácter público de los informes individuales de la ASF, que tiene su razón de ser en la necesidad de transparentar los resultados de la fiscalización, a efecto de que sean conocidos por los gobernados para garantizar una verdadera rendición de cuentas, y que los recursos económicos de los que disponga, entre otros, la Federación, deben administrarse con eficiencia, eficacia, autonomía, transparencia y honradez.

De lo anterior, la primera sala resolvió que quien contrata con el Estado, no puede aspirar a la privacidad de la información relativa a ese contrato, pues la sociedad tiene el interés legítimo y constitucional de conocer el destino y administración de los recursos públicos involucrados, o no sería posible evaluar el cabal cumplimiento de los principios del artículo 134, que constituyen los pilares constitucionales de la rendición de cuentas.

Bajo el mismo parámetro de criterios, la publicación de las irregularidades encontradas por la ASF no causa una afectación al derecho al honor, reputación o prestigio, que amerite limitar el acceso a información de interés público, dado que rige el principio de la máxima transparencia. Se olvidó el tal hermano de Virgilio Andrade de su responsabilidad pública y tomó la que siempre escondió bajo su piel de oveja, la del falso elogio, la adulación, la mentira y la lisonjería a sus meros patrones.

Pues, al mero viejo estilo, su interés es sentirse cercano a los poderosos, no importa el despilfarro de recursos en plazas, carros, gasolina, alimentos, vajillas; casa y sustento del auditor superior, pagado con el erario, además de servicios personales con enfermera, choferes, chef, mesero… y aunque los años pandémicos pararon la actividad, casualmente los gastos no aminoraron. Aunado al tiempo y dispendio del dinero público invertido para armar varias decenas de actos protocolarios de firmas de convenios inútiles e innecesarios, donde les quitan a los servidores públicos y asistentes lo más valioso, su tiempo.

Aquí viene lo interesante, con quienes sí debía firmar los convenios de colaboración, y porque así lo mandata la ley del SNA, es con las entidades de fiscalización de los estados, pero, por supuesto, el perfil del depredador que cobra como auditor no podría permitir que alguien que no sea él mantenga la “cercanía” con el gobernador o gobernadora. Así que justificó la cancelación de los convenios con las auditorías estatales para auditar gasto federalizado en municipios, por la disparidad entre entidades y la existencia de auditores locales que hacen “malas auditorías”, pues obedecen a designaciones políticas (léase el burro hablando de orejas).

Recordemos cuando, en un par de entrevistas, al exauditor Portal declaró que “el actual titular está desmantelando la ASF y ha sacado a todos los servidores públicos de primer

nivel, situación que es preocupante porque no se sabe qué cuentas se van a entregar el próximo 30 de junio"; refirió que "en 2013 despidió a David Colmenares, dado que los asuntos a su cargo no avanzaban, no trabajaba, no hacía bien las auditorías, era lento y no les daba seguimiento a las cosas.[38] Se la pasaba en su celular, no atendía las reuniones ni el consejo de dirección, siempre llegaba tarde o no estaba cuando se le requería; nunca sabía nada, iba sucio y desaliñado, se la pasaba en actividades tratando de negociar las auditorías", dijo que podría mencionar que este jamás había hecho una auditoría, y que nunca le entendió", que quería estar solamente en comidas y reuniones con los gobernadores.

Quizá le faltó agregar que a pesar de que él se los advirtió a los líderes de los principales partidos cuando ya era inminente la elección de auditor, a ninguno le importó. Buscaban y lograron el pacto de impunidad idóneo para imponer un "severo y ejemplar castigo" a quienes habíamos tenido el "atrevimiento" de fiscalizar los contratos irregulares de la Sedesol y la SEDATU, y por otra parte limpiar su mugrero de observaciones acumuladas.

Conflicto de intereses

Un convenio de los que tanto le gustan fue con el INE; se firmó el 25 de junio de 2018 con el objetivo de colaborar en materia de coordinación, intercambio y capacitación. Representando al instituto estuvieron Lorenzo Córdova Vianello, Edmundo Jacobo Molina y Ciro Murayama Rendón, mientras que por la ASF firmaron David Colmenares Páramo y Víctor Manuel Andrade Martínez, cuyo enlace con el INE para el desarrollo de las actividades era el titular de la unidad técnica de fiscalización de ese instituto, Lizandro Núñez Picazo, sí, del mismo grupo de Meade.

Núñez Picazo estuvo antes en el SAT, posteriormente el 1º de enero de 2018, enviado para "cuidar"; luego, apenas a ocho meses de su salida del INE, el 31 de octubre de 2018, en conflicto de interés y total transgresión a la legislación, este funcionario público fue considerado para participar en una adjudicación y luego contratado por Colmenares, el 5 de agosto de 2019, mediante el contrato ASF-UGA-DAJ-DGARFT "D"-068/2019, por un monto de tres millones 100 000 pesos, por los servicios de "asesoría para realizar los trabajos de implementación de modelo de riesgos en la auditoría de gasto federalizado",[39] para desarrollarse en tres meses —soltando la firma del contrato y corriendo a iniciar los trabajos—; inverosímil.

Nadie de los auditores de campo, de los que sí tienen a cargo la fiscalización y fueron entrevistados, lo conoció o tuvo contacto con él, y los entregables no se hallan por ningún lado del sitio web; no hubo respuesta a la petición de información para la entrega de la misma y no se entendió la utilidad de esos servicios aplicados en la fiscalización, si son los mismos parámetros del SAT y se los agenció, ¡ah, qué cosas tenemos que ver!, idéntico a lo sucedido con la "estrategia institucional", contratada con Tantum.

Nadie sabe a qué se refiere. Ni siquiera se puede conocer a la fecha si hubo adenda a la contratación y si ha seguido en años posteriores, porque todo permanece oculto, es un gran misterio. Eso sí, también tuvo Lizandro contratos con otros gobiernos estatales. Del conflicto de interés y prohibición de hacer negocios durante el lapso estipulado en ley, mejor ni hablamos. Amaos y tapaos unos a los otros, pero sin moral pública.

Volvemos al dudario: ¿qué se pidió y para qué, dada la "especialización y convenios con el SAT" realizados para ese mismo supuesto fin? ¿Quién y por qué decidió invitar a Lizandro? ¿Qué entregó? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo se llevaron a cabo los trabajos? ¿Cuál ha sido la utilidad en la fiscalización? ¿Dónde se aplicó? ¿Quiénes colaboraron? Y ¿dónde se encuentra el conjunto de papeles de trabajo soporte? Esas incógnitas permanecerán, al igual que los entregables de estafas anteriores. Cómo fue el proceso de decisión de esta necesidad. La etiología de las contrataciones nos permite conocer con infinita claridad el proceso de "fabricación de la idea". Ahí inicia una de tantas responsabilidades. En este proceso caótico perviven los aliados y los intereses perversos y corruptos; nada en la opacidad es buena señal.

Una cadena de datos interesantes se desprende de estas contrataciones. El brazo poderoso de la ASF es el auditor especial de Gasto Federalizado, Emilio Barriga Delgado, quien llegó a cambio del voto del PRD en la elección, sin ninguna *expertise* en fiscalización, pero con la encomienda de limpiar todas las observaciones del PRD acumuladas a lo largo de años, y muchas de ellas que le correspondía aclarar desde cuando fue director de Enlace Interinstitucional en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, de octubre de 2008 a junio de 2011, y luego como tesorero hasta mayo de 2018, con Miguel Ángel Mancera. Recordemos que Colmenares a todo mundo le fue a ofrecer algo a cambio de votos, compromisos que precedieron al ungimiento.

Basta ver la foto que publicó Barriga en su Twitter al lado de Carlos Urzúa refiriéndose a su gran "amigo y maestro".[40] Pues cómo no, si forman parte de la misma banda, y ahí una más de las razones por las que no se fiscalizó la SHCP de manera objetiva, independiente, y mucho menos el gobierno saliente de la Ciudad de México, de donde todos ellos procedían. Más aún, el conjunto de razones por las cuales se la han vivido contratando durante cinco años a supuestos "expertos" externos a precios millonarios para servicios inservibles nos recuerda el pago de los compromisos que ha ido afrontando al tiempo de apoyar negocios.

Recordemos que al poco tiempo de nombrado llamó a Orcí y le dijo que tenía compromiso con el PRD por haberle ayudado a llegar y le pidió su renuncia inmediata, y en ese lugar colocó a Barriga, así que el conflicto para el cumplimiento de grandes intereses es el motor de vida en la ASF, y por ello también debían garantizar que en caso de ausencia del titular, la suplencia recayera por ley en el auditor especial del Gasto Federalizado, para que no les sucediera como cuando exigieron el "salvoconducto" para Meade, que negó mi entonces jefe Pérez Saavedra, respuesta que fue el propulsor del desquiciamiento de los diputados

del PRI, quienes sacando espuma por la boca decidieran: "Este wey no puede seguir un día más, este se va", y a nombrar al auditor.

De ahí que la mayor parte de su equipo provenga de la administración de la Ciudad de México y ninguno sepa de fiscalización, como el nuevo director general de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos C, Marciano Cruz Ángeles, que antes fue administrador de Planeación, Análisis e Información en el SAT, y de noviembre de 2016 a junio de 2018, director general de Enlace, Coordinación Fiscal y Programas Federales en la misma Secretaría de Finanzas; o el director general de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos D, Aureliano Hernández Palacios Cardel, que antes fue director general de Administración y director de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría de Obras y Servicios de la misma ciudad, de julio de 2015 a agosto de 2018, hijo del jefe delegacional en Tlalpan, Fernando Hernández Palacios Mirón, que fue denunciado penalmente por el líder del PRD capitalino acusado de presuntamente permitir la operación irregular del colegio Enrique Rébsamen, que colapsó con el temblor del 19 de septiembre de 2017.

Otro funcionario también adscrito a esta área deja ver el acomodo de otro grupo de interés: el peñismo, Octavio Mena Alarcón, actual director general de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos B, quien fue titular del OIC en Banobras, oficial mayor en la Secretaría de Turismo y auditor superior del Órgano Superior de Fiscalización (osf) del Estado de México, quien seguramente debe haber realizado la limpia absoluta de todas sus observaciones y procesos resarcitorios pendientes, y ahora también, pues sigue a cargo de auditar ese mismo estado.

Por eso tenemos grandes declaraciones del que cobra como auditor, donde menciona entidades federativas sin una sola observación. Imposible en la vida real. Conocen su propia historia, pero simulan y actúan como si de verdad fueran autónomos, hasta que les asestan un golpe para que no olviden los vínculos y alianzas que los llevaron a su "poder".

Todo lo anterior, y aprovechando que al gobierno actual le ha dado por eliminar instituciones, me lleva a proponer la desaparición de la ASF, la UEC y la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, para repensar en un nuevo modelo de institución fiscalizadora único, de avanzada, en donde tengan espacio los expertos en auditoría y fiscalización, con un riguroso control y metodología de confianza, fuera de las manos partidistas y con reglas claras para los nombramientos que eviten la tentación de venderse al mejor postor.

Se necesita la seriedad que ha demostrado Banxico, por ejemplo, y que utilice las herramientas forenses, *data analytics* y la inteligencia artificial de más alta vanguardia mundial para investigar, detectar, disuadir, y en su caso prevenir, conductas irregulares y corrupción en cualquier etapa, desde la presupuestación hasta el ejercicio final de recurso y posterior. No se puede servir a dos amos en la misma causa.

Para que tantos favores y compromisos cobraran la forma de nómina, contratos o adjudicaciones dirigidas, no solo debieron crear nuevas unidades, sino colocar a operadores de absoluta confianza y luego contactar a los líderes partidistas y funcionarios políticos precisos para sostenerles y ofrecerles todo tipo de servicios en su beneficio, una especie de soborno disfrazado. Entonces tenemos una plantilla organizacional integrada con recomendados, desde el presidente de la Cámara de Senadores, de la de Diputados, cuates y familiares de los diputados de la Comisión de Vigilancia, de los que mecen la cuna, como se podrá observar en el mapa de vínculos elaborado, que al igual que las contrataciones diversas que efectúan les permite blindarse de cualquier eventualidad, como la sucedida con el NAIM, aunque he ejemplificado algunas, pero quedan decenas por analizar.

Y como la falta de ética y el cinismo han sido la característica esencial en el mercado político, lo que esperan son las "indulgencias" expresadas en boca del auditor, como el cierre de las auditorías y procedimientos que estaban abiertos en contra de su círculo cercano, así negocian investigaciones y la solventación de irregularidades relacionadas con ellos y sus familiares; por ejemplo, presidentes municipales o secretarios de Estado; o vender consultorías "afines" con el servicio garantizado de solventar y atender procedimientos resarcitorios en las entidades federativas, o asegurar que sus municipios o programas "no sean incluidos" en el plan de auditoría; muchos contratados para "blindarse con el auditor" en los consejos o secretarías de Seguridad Pública, como recomendación suya, dando así "el remedio y el trapito".

Lo bueno de tener amigos exgobernadores y exsecretarios en las entidades es que me permite confirmar lo que ya todos saben, pero nadie quiere broncas con esa gente, así que prefieren pagar.

El tema de la Estafa Maestra sigue sin aclararse y pienso que no se sabrá más porque así se ha acordado en las cúpulas, pues hay toda una estructura organizada de poder "aceitando", conectada en un conjunto de complicidades y hechos de corrupción, que incluye a muchos funcionarios actuales que forman parte de esta red, negociando arreglos políticos y tomando ventaja de grandes puestos con aviadores, la vieja guardia desde siempre que permanece imperante modificando su disfraz de poder. Los estereotipos políticos y la adecuación exacta de sus necesidades. Esa impunidad la cobran y venden muy cara.

Auditoría forense

La auditoría forense implica un enfoque técnico con el propósito del examen y revisión exhaustiva de los indicios, procesos, hechos y evidencias para la detección o investigación de conductas que puedan implicar alguna irregularidad o presuntos actos delictivos, con el propósito de documentar con datos y evidencia suficiente, pertinente y competente, modo, tiempo y circunstancia en un caso concreto.

Se enfoca en la investigación de actos o conductas irregulares con la finalidad de determinar presuntas responsabilidades, por lo que requiere experiencia en procesos investigativos y

asegurar la calidad probatoria de los medios de convicción, con el fin de que las denuncias de hechos se acompañen de la evidencia documental técnica y legal necesaria que pueda demostrar fehacientemente las conclusiones y los hallazgos derivados de la investigación.[41]

En este sentido, ya sea en el ámbito privado o público, derivado de las indagaciones o auditorías, se está obligado a documentar y sustentar cada una de las irregularidades plasmadas en el informe de auditoría, por lo tanto, el contenido debe ser consistente con la metodología de investigación, la aplicación de la guía de procedimientos y las observaciones y resultados obtenidos. La mayoría de las conclusiones se traduce en la determinación de un daño patrimonial y la identificación de los presuntos implicados.

Esta metodología de investigación requiere formular y aplicar una serie de procedimientos y técnicas forenses enfocados a la detección de posible fraude y corrupción. La exhaustividad y la capacidad investigativa, aunado a las herramientas, competencias y habilidades del auditor, son elementos clave para el éxito de una investigación.

Por ejemplo, en las empresas fachada debe seguirse el flujo de los recursos, porque regularmente no tienen otros ingresos y entonces constatamos el recurso público recibido y su posterior egreso mediante el análisis de las cuentas bancarias para determinar el destino final del dinero; es decir, poder dar trazabilidad a los depósitos, pagos y transferencias a partir del proveedor directo, y seguir la ruta de los depósitos a terceros, de los que también llegamos a requerir la información, que igualmente pueden resultar empresas simuladas.

La prueba indiciaria o presuncional constituye una vía de demostración indirecta de hechos que, entrelazados entre sí, a través de inferencias y la demostración de ciertos hechos, permiten demostrar y acreditar por la suma de diversos indicios la interrelación entre ellos. La prueba indiciaria presupone que los hechos que se toman como indicios estén acreditados, que concurra una pluralidad y variedad de sucesos demostrados generadores de esos indicios y que guarden relación y concordancia con el hecho que se trata de demostrar.[42]

En la DGAF fuimos perfeccionando la aplicación de técnicas para allegarnos de la información necesaria, desde la fase de planeación, y solicitar a la Tesorería de la Federación sus bases de datos de CLC, emitidas por todas las dependencias y algunas entidades de la Administración Pública Federal, las cuales nos servían de base para determinar qué entes recibían recursos por parte de una dependencia o entidad pública y como insumo para programar las revisiones a estos entes públicos, basados en la suma de indicios y evidencia previa derivada del análisis de la Cuenta Pública correspondiente.

Los pasos en la investigación implican en la fase preliminar allegarnos de los mayores elementos de información, su análisis y posterior evaluación, especialmente de los comportamientos inusuales que pueden ser detectables, sobre todo relativos a corrupción organizada y sistémica. En el análisis holístico de los distintos escenarios puede advertirse

la trazabilidad de cada una de las conductas o comportamientos y la cadena de acontecimientos o circunstancias que, si se analizan aislados, podrían no tener mayor importancia, pero en el contexto general de los presupuestos, hechos, personas y demás circunstancias, se podría hacer un señalamiento bastante claro de estas etapas para unir y generar una probabilidad aceptable de que se consiguió tal o cual resultado.

El auditor debe sentirse motivado y disfrutar la actividad que realiza; contar con las habilidades cognitivas, resiliencia y persistencia requeridas en la búsqueda permanente de la obtención de evidencia directa o indirecta, a través de indicios e inferencias que lleven a construir razonamiento lógico-argumentativo sobre la base científica de hechos probables, con experiencia en documentar y recopilar evidencias, para lo cual se requiere un pensamiento crítico, análisis lógico-deductivo, mediante el uso de tecnología de información y diversas herramientas para el análisis de datos que permitan producir información útil y fiable, para afrontar y confrontar nuevos retos de la actividad fiscalizadora.

El juicio profesional del investigador implica un razonamiento lógico y articulado, competencias y capacidades investigativas, habilidades analíticas y destrezas desarrolladas, a partir de la identificación y resolución de problemas, experiencia en la conclusión de casos, conjunto de indicios, generación de inferencias, independencia mental y escepticismo profesional encaminado a la búsqueda de la verdad jurídica de los hechos que se investigan. Por ello deberían asegurar en los titulares y mandos altos ciertos niveles de integridad, para mejorar sus destrezas y capacidades de análisis e interpretación de la información.

Inhibir la corrupción requiere el trabajo conjunto real de todas las instituciones involucradas para prevenirla, disuadirla, investigarla y sancionarla; fortalecer las capacidades profesionales del personal con experiencia en distintas áreas y niveles de investigación. Garantizar el presupuesto para la independencia de su actividad y el uso de las distintas herramientas y tecnología para la investigación; protegerlos de presiones políticas y de Estado, y algo muy importante y estructural, que las cabezas sean éticas pero especializadas. El país ya no está para novatadas. La denuncia anónima se vuelve trascendental. La legislación de Gran Bretaña es un ejemplo para seguir en estas acciones y para la protección a informantes.

Consideremos el número de procedimientos que incluyeron revisiones documentales, análisis de la trazabilidad del recurso, peticiones de información, tanto a los entes fiscalizados como a las autoridades financieras y fiscales. No son auditorías a control remoto, de gabinete o el mero envío de oficios, hay que salir a buscar y producir información útil, fiable y de calidad.

La naturaleza de una auditoría forense requiere justificar la pertinencia del caso concreto que se investigará; una vez conformadas las hipótesis, validar la importancia relativa del porqué se considera relevante realizarla, y si es factible, según si el equipo auditor cuenta

con la *expertise*, la especialización, los conocimientos y las herramientas suficientes para llevarla a cabo.

Un buen investigador requiere integridad, creatividad, carácter, independencia, objetividad, autonomía profesional para entender cuáles son las probables conductas relacionadas con la investigación para obtener la idoneidad en las pruebas, es decir, las más adecuadas al caso concreto para acreditar los hechos.

La DGAF no tenía ninguna limitación en la revisión de los recursos federales públicos ejercidos en términos de su normatividad, situación que tuvo restricciones con la entrada en vigor del SNA, donde se limitó la petición de información financiera o fiscal al titular o auditores especiales. La excelsa red de funcionarios ya empezaba a blindar su "futuro", porque los tranzas son de todos los partidos, nadie se escapa, y su plataforma nacional no acaba de construirse.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA FORENSE C. P. 2015

Resumen de diversas visitas domiciliarias, solicitudes de información, inspecciones, entrevistas a servidores públicos, proveedores y/o beneficiarios apoyados, solicitudes de información a diferentes instancias gubernamentales, con el fin de detectar y/o confirmar irregularidades.

Núm. auditoría	Entidad fiscalizada	Contratos, convenios o proyectos revisados	Visitas domiciliarias		Solicitudes y análisis de información		Inspecciones físicas			Proveedores negativa de información	Entrevistas con		
			Dependencias y entidades	Proveedores y/o beneficiarios	Dependencias y entidades	Proveedores y/o beneficiarios	SAT (contribuyentes)	CNBV (cuentas bancarias)			Servidores públicos	Prestadores de servicios y/o beneficiarios	Proveedores
286-DS	Secretaría de Desarrollo Social (sedesol)	6	–	1	9	6	7	12	149 *	1	1	–	–
287-DS	Secretaría de Desarrollo Social (sedesol)	532	13	1	28	9	86	8	201 *	–	16	–	–
331-DE	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)	4	1	7	–	12	36	175	–	6	12	4	10
338-DE	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)	34	–	20	8	8	78	208	18	–	1	44	7

719-DS-GF	Gobierno del Estado de Chihuahua	13	–	7	–	2	12	51	1	–	12	2	–
1636-DS	Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México (utsemTejupilco)	2	–	1	–	–	4	6	–	1	3	–	–
1638-DS	Universidad Politécnica de Texcoco (uptex)	4	1	–	–	3	40	85	0	3	3	2	–

Nota: (*) Las inspecciones físicas realizadas contienen entrevistas con los beneficiarios

	Núm. auditoría	Entidad fiscalizada	Número de contratos, convenios o proyectos revisados	Visitas domiciliarias	Solicitudes y análisis de información			Proveedores negativa de información	Inspecciones físicas	Entrevistas
					Dep., ent., proveed. o benef.	SAT contribuyentes	CNBV cuentas bancarias			
1	206	unacar	11	15	28	21	198	20	–	2
2	207/229/1667	UAEM/sedesol/fovISSSTE	48	38	16	6	18	18	–	23
3	208	fondict-UAEM	18	13	28	48	15	15	1	1
4	209/1665	uaenor/sedesol	5	9	6	9	5	5	–	10
5	219	diconsa	12	23	77	–	–	–	–	65
6	262	SAGARPA	366	12	1	32	–	–	11	8
7	263	SAGARPA	49	16	–	77	–	–	10	6
		Totales	**509**	**126**	**156**	**193**	**58**	**58**	**22**	**115**

Los resultados de las auditorías realizadas con enfoque forense y el mapa de vínculos que por primera vez se utilizó en auditoría gubernamental y se hizo público dieron pauta para iniciar este tipo de investigaciones en periodismo y diversas organizaciones civiles, al tomar la metodología como ejemplo para realizar sus propias investigaciones; en la DGAF mostramos por primera vez en la historia de la fiscalización en México un enfoque técnico con procedimientos exhaustivos, tendientes a conocer no solo la trazabilidad y la ruta del dinero, sino a documentar los hallazgos, las relaciones y los vínculos de interés entre empresas, proveedores, personas físicas, organizaciones. Se reveló un *modus operandi* que

no era nuevo, ya se venía desarrollando desde sexenios atrás y sigue operando en la actualidad, con empresas fachada encaminadas a ocultar operaciones irregulares.

El mapa de vínculos y sus correlaciones sirvió como herramienta importantísima para entender el caso, visualizar el escenario holístico, dar trazabilidad a los hechos, personas y datos relacionados derivados del análisis de la información obtenida para producir datos de calidad. Examinar, disuadir, confirmar, analizar, investigar, verificar, corroborar, dilucidar, demostrar, explicar, comprobar y acreditar.

La investigación requiere atención, concentración, celeridad, conocimiento, sigilo, destreza, oportunidad, disciplina, pensamiento lateral, estudio de los delitos y tipologías de corrupción, escepticismo. El auditor/investigador genera hipótesis. No existe la casualidad en los hechos de corrupción.

Incorporar los mapas visuales en cada uno de los informes y casos relevantes que describen las observaciones y los hallazgos develados permite acompañar la relatoría "fría" con un seguimiento ocular como facilitador cognitivo para cualquier lector no especializado en estos temas.

Los distintos comportamientos analizados nos van guiando en ese entramado; la aplicación rigurosa de los procedimientos, las entrevistas forenses y el análisis de la información financiera y fiscal son pasos para estructurar un caso sólido. El auditor debe tener claro que todos los indicios y medios de prueba de que dispone y que fueron obtenidos durante la revisión van a ser utilizados para tomar decisiones jurídicas relevantes, es decir, la autoridad administrativa o penal resolverán con base en ellas, por tanto deben superar una serie de confrontas y obstáculos para demostrar que su versión de los hechos tiene la fuerza y sustentación tal para generar convicción, porque habremos de recordar que el juzgador no busca la verdad, su labor es en relación con la teoría del caso planteada y la versión de los hechos.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA FORENSE C. P. 2016

Resumen de diversas visitas domiciliarias, solicitudes de información, inspecciones, entrevistas a servidores públicos, proveedores y/o beneficiarios apoyados, solicitudes de información a diferentes instancias gubernamentales, con el fin de detectar y/o confirmar irregularidades.

Núm. auditoría	Entidad fiscalizada	Contratos, convenios o proyectos revisados	Visitas domiciliarias			Solicitudes y análisis de información	Inspecciones físicas			Proveedores negativa de información	Entrevistas con		
			Dependencias y entidades	Proveedores y/o beneficiarios	Dependencias y entidades	Proveedores y/o beneficiarios	SAT oficios/ contribuyentes	CNBV cuentas bancarias			Servidores públicos	Prestadores de servicios y/o beneficiarios	Proveedores
193-DS	Universidad Mexiquense del Bicentenario	–	0	7	0	1	6 (23)	20	4	0	7	3	6
195-DS	Universidad Politécnica de Chiapas	3	1	8	–	27	7 (106)	194	3	1	2	–	4
196-DS	Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (upem)	1	1	2	0	0	3 (26)	62	0	0	27	0	3
197-DS	Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas	6	2	1	1	1	3 (18)	20	0	0	18	15	0
198-DS	Universidad Tecnológica de Campeche	7	9*	12	1	14	3 (18)	28	17	–	2	0	3
199-DS	Universidad Tecnológica de Salamanca (uts)	9	3	1	3	7	3 (32)	40	0	0	1	12	0
283-DE	Secretaría de Agricultur	669	2	0	3	0	1 (99)	109	0	0	9	0	0

	a, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación												
286-DE	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	133	–	34	1	–	3 (24)	31	38	–	2	21	–
296-DE	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	110	1	103	4	61	3 (216)	211	103	–	0	63	40
1791-DS-GF	Sistema Quintanarroense de Comunicación Social ejercicio 2016	50	2	15	3	17	3 (95)	38	–	10	7	0	3
1792-DE	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	19	2	1	3	1	2 (50)	60	7	2	7	0	2
1794-DS-GF	Televisora de Hermosillo	4	1	10	1	10	2 (10)	18	7	–	2	–	3

1793-DS	Universidad Politécnica de Quintana Roo	14	2	11	3	5	3 (103)	32		5	7	0	5
1872-DE(*)	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (aserca)	3	2	2	8	2	4 (21)	24	1	0	13	1	0
1875-GB	Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social	3	–	1	1	3	–	10	1	–	6	–	10
D17002	Radio y Televisión de Hidalgo ejercicio 2015	55	3	13	3	18	1 (54)	70	–	12	9	0	6
D17011	Sistem Quintanarroense de Comunicación Social ejercicio 2015	37	1	8	2	21	1 (54)	23	–	4	6	0	2
D17012	Radio y Televisión de Hidalgo ejercicio 2014	50	2	20	3	18	1 (34)	36	–	0	6	0	0
		1173	25	249	**40**	**206**	**49 (983)**	**1026**	**181**	**34**	**131**	**115**	**87**

* Incluye 4 delegaciones y 5 inmuebles de SEDATU.

** Incluye 5 inmuebles de SEDATU.

Una testimonial recabada durante la auditoría simplemente es un indicio, y en un proceso penal, el fiscal habrá de investigar y aportar las pruebas necesarias para soportar esos testimonios, porque si bien es cierto que esa acta fue útil para el auditor, no lo es para el juez. Las pruebas que el auditor recaba durante la ejecución de la auditoría no precisamente servirán al juez para el mismo fin. Lo que se pretende demostrar es la versión de los hechos, y por ello es tan importante la participación de los abogados, responsables de construir el caso y desarrollar la hipótesis en la denuncia.

Esto nos explica por qué en muchos de los casos de corrupción acaba absolviéndose a los imputados, porque se abandonan las pesquisas, y aunque los auditores sabemos que los enjuiciados pueden ser realmente responsables debido a la interrelación de personas y una cadena de hechos entrelazados a través de un razonamiento inferencial —con base en los elementos de que la autoridad judicial no dispuso o que no pudo tomar en cuenta—, aun así tenemos que se pierden los casos.

La serie de indicios, evidencias, datos, hallazgos y el conjunto de pruebas circunstanciales recabada durante la auditoría forense es un precursor de prueba útil a las fiscalías para desarrollar la investigación y con esta identificar elementos de prueba de ciertos hechos, es decir que más allá de la declaración del imputado, puede ser sumamente útil para obtener y aportar indicios que beneficien al juicio. Por ejemplo, siempre nos llamó la atención que en la SAGARPA, la SEDATU y la Sedesol ninguno de sus titulares posteriores a Robles presentó una denuncia de hechos por los casos observados. Menos intentar coadyuvar a construir casos robustos. ¿Encubrimiento por omisión, negligencia? Desdoro.

Por todo lo anterior y por la naturaleza de las instituciones me queda claro que persisten las viejas prácticas de fiscalización y deben modificarse porque han sido rebasadas. Necesitamos un nuevo y vigoroso ente fiscalizador, técnico, solvente y políticamente independiente, que utilice y comparta la misma metodología de trabajo y las mejores prácticas auditoras que se apliquen uniformemente en todo el país, con los avances tecnológicos y el uso de inteligencia artificial, cuyos objetivos consideren la disuasión, la detección y la investigación de actos deshonestos.

Profesionalizar a las instituciones significa asegurar el personal idóneo, el perfil apropiado, las competencias, destrezas y credencial es que le agreguen un valor a la organización; las herramientas y tecnología de avanzada, capacitación y blindar a dicha institución contra tentaciones, presiones o intromisiones políticas o partidistas.

Las entidades fiscalizadoras, en todos los niveles, ya cumplieron su ciclo de vida útil y han sido rebasadas dada la obsolescencia de sus procesos y prácticas. Hay que maximizar el alcance y universo en las revisiones y eso se podrá el día en que sean coordinadas en un

marco riguroso de supervisión, y que se impidan los nombramientos. Una institución capaz de fiscalizar el recurso público sin un antes y un después, ya sea derivado de los riesgos, las denuncias o la metodología de detección apropiados para actuar consistentemente. Un proyecto que se vislumbre democrático y permita asegurar los mejores mecanismos para inhibir la corrupción del país.

El problema son las componendas políticas; nada más hay que voltear a ver el SNA, que debería desaparecer ya. Hay que construir una nueva era de auditoría y fiscalización, basada en estándares éticos, pero con los mejores expertos del país, y aprovechar el cúmulo de egresados de áreas vinculadas a la temática, como son la Escuela de Ciencias Forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde tuve el honor de participar, almas jóvenes, egresados con un perfil científico que puedan aportar y enriquecer las actividades de investigación periciales, fiscalización en el país y comenzar a desterrar la marrullería, el amiguismo y las lacras que han vivido de esto, convirtiéndolo en grandes negocios.

Historia de casos emblemáticos de corrupción

Déjenme compartir los testimonios de informantes que ya fuera de sus cargos se armaron de valor, y entiendo que pidan el anonimato, porque conocieron el mero corazón de la "fabricación" de los convenios, contratos y las oficinas donde Claudia Morones los citaba para instruirlos de qué y cómo respondernos y darles los entregables "supuestos" que habrían de entregarnos como si los hubieran realizado ellos, todos de la SEDATU y la Sedesol, y son concordantes con el "búnker" que fue objeto de la investigación periodística denominada "Operación Entregables", de *Aristegui Noticias*.

Refirieron que había más personas trabajando en el domicilio de la "casa de seguridad", en la planta de arriba, y que en la recepción se encontraban esperando a ser atendidos los rectores o sus enviados, que en algunas ocasiones eran los jurídicos o los de finanzas, quienes permanecían en la planta baja esperando impacientemente sus "entregables".

Veinte o 30 cajas rotuladas para cada universidad, se veían en la estancia; en la recepción había dos sillones, vidrios a modo para que no se vea al interior; éramos mucha gente joven elaborando los documentos que nos pedían, nadie volteaba, nadie platicaba; supimos por muchos años de universidades de Sinaloa, Tabasco, Quintana Roo, y otros Institutos tecnológicos y politécnicos que operaban; no podíamos simplemente llegar, se hacía cita y en el timbre había una cámara, donde esperaban un rato a que confirmaran la identidad para permitirles entrar, el tortuoso proceso de visita de los diversos búnkers.

Morones salía a recibirlos, saludaba simulando que todo estaba muy bien, ya después, al tema: "Oye, cómo van los entregables"; a algunos les hablaba muy feo: "Tengo cinco auditorías antes que ustedes, que son de mucho más dinero, entonces se esperan hasta que les toque su turno para sus entregables", les gritaba por teléfono y colgaba. En una ocasión, en un diferendo mayor estando con José Luis Pech le dijo: "Mira, ven, vamos a salir aquí

afuera [ella con su guarura como de dos metros], ya no te quiero ver aquí porque aquí no se alza la voz"; y lo corrió; ella se enojó mucho porque le exigía los entregables, pero a ella no le interesaba, lo tenía agarrado del pescuezo porque dos de los trabajadores eran los socios para la empresa fachada de Pech, a la que desvió casi siete millones de pesos y a los operadores menores los movió a trabajar en el plantel Playa del Carmen, donde la esposa de José Luis era la directora, y ahí los mandó para protegerlos.

Se le empezaba a juntar la "chamba" de fabricar documentos apócrifos; Providencia era la otra "oficina" de proveedores; un "proveedor" era Erick (uno flaquito medio alto), el de G214 (calle Guanajuato, número 214, en la colonia Roma), y ya les explicaba él. Otro similar, Alejandro Ortiz Monasterio de Noriega, representante de la empresa Almeva, S. A. de C. V, vinculado a las empresas fachada y mencionado como el contacto entre los gobernadores y funcionarios con la Sedesol/SEDATU, aparece como uno de los principales operadores. "Atiende a Ortiz, es para apoyar al presidente", les pidió Jaime V. a rectores, "nos está ayudando con temas del presidente". Los pleitos en el equipo al interior de la casa de seguridad comenzaban a exasperar a todos. Una joven, Alejandra Hinojosa, y un Erick peleaban: "Te dije que este proyecto se empalmaba con el otro", se echaban culpas.

Este grupo tenía la zona sur del país, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, y cobraban sus comisiones sobre comisiones. Era un esquema piramidal.

Pensaron que no revisaríamos y confrontaríamos cada uno de los documentos de manera exhaustiva. Son tan predecibles que incluso la mayoría de las empresas se negó a darnos información y se amparó después, pues cada documento era idéntico, solo variaba el logo "hechizo" de cada una, en la parte superior. Qué mal acostumbrados estaban. Esto es otro indicio, como el de decenas de empresas supuestamente distintas, que no se relacionan una con otra, para generar exactamente la misma respuesta a la ASF, palabra por palabra. Ahí estaba detrás el tal Mauro Rosas, operador externo de la oficialía mayor, que como dije, los citaba en Polanco para darles las órdenes precisas y entregarles los documentos.

Describen a Claudia Morones como autoritaria, arrogante y haciendo gala de que había trabajado en la ASF y sabía "cómo se trabajaba ahí". Instruía en esa casa alterna de seguridad a todos los rectores para que cuando llegáramos los auditores forenses dijeran que la contratación había sido por internet y vía telefónica, y que todo se había entregado. Explicaba el proceso a su modo: "Yo estuve ahí, no van a tener el tiempo para acabarla; ya sé cómo es y no va a pasar nada". "Los van a ir a entrevistar y les van a preguntar esto y esto, y entonces ustedes van a responder esto", los adiestraba cuidadosamente. No deja uno de preguntarse en qué momento decidió irse al lado oscuro.

Se equivocó rotundamente, no era como ella acostumbraba a auditar, quizá por eso la reclutaron, salió su lado corruptor. Por eso me llamó la atención cuando escuché en distintas entrevistas a la exsecretaria Robles, a más de tres rectores y al director de Telemax repetir y repetir las mismas respuestas, palabra por palabra y justificaciones bien aprendidas; era

un indicio de que estaban siguiendo la misma línea de discurso, las indicaciones que les habían ordenado; por eso cuando me tocó entrevistar al exrector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, y me respondió exactamente lo mismo, entendí que había una cadena de complicidades muy clara y que eran de tal magnitud que todos se protegerían.

Me di a la tarea de buscar viejas entrevistas con ella, en su calidad de jefa de Gobierno, y encontré una con Brozo; muy curioso el análisis de su discurso. Parecía que no había transcurrido el tiempo, el mismo "discurso elaborado", un interesante ejercicio de investigación. Y el tiempo confirmaría lo que ya sabíamos, porque en septiembre de 2018 la directora general Henestrosa, esa misma que recibió "jubilosa" el área y el cargo el 30 de mayo para después esconderse debajo del escritorio del auditor especial Lozano, mientras ambos celebraban y destrozaban la dirección y el laboratorio forense, esa misma negligente, indigna y vergonzosa funcionaria, ordenó a los auditores cerrar esa revisión, aun cuando estaba programada para la última entrega de informes en febrero de 2019.

Ella ordenó "que sacaran los resultados, así como estaban", aun cuando faltaba la aplicación de varios procedimientos y negaba al grupo encargado de la auditoría requerir la información fiscal o financiera, como tampoco permitió entrevistar a Daniel Hidalgo, director de Telemax; lo que significa que, de haber realizado una fiscalización exhaustiva, se hubiera documentado la trazabilidad de los recursos y el mapeo de proveedores.

Durante las auditorías que realizamos hasta 2017 se constató que existió el mismo *modus operandi*, sin embargo, intencionalmente se encubrió de alguna manera por la ASF. Lo que no esperaban es que el exdirector de Telefax, Daniel Hidalgo, públicamente reconoció, en entrevista con Proyecto Puente, en diciembre de 2022, que "como nada tuvo que ver, estaría dispuesto a dar a conocer lo que sabe al respecto de esa contratación, porque lo dejaron solo".

Dijo que en 2013 la televisora estaba en una situación muy compleja y grave en materia financiera y fiscal, cuyos pasivos superaban los 280 millones de pesos, que ni siquiera había para pagar la nómina, que año con año se generaba un déficit de 25 millones de pesos y había actualizaciones y moratorios en los pasivos.

Dado lo anterior, prosigue la entrevista, en enero de 2016 recibió una llamada de Alejandro Hinojosa y Claudia Morones, que lo buscaron telefónicamente y le plantearon el esquema, y en abril lo volvieron a buscar, a través de Gustavo Rodríguez, subsecretario de Finanzas de Sonora, quien le dijo que ese contrato podría ser de gran ayuda para lo que se necesitaba de dinero y la condición que ponían, le respondió, era que se subcontratara: "Yo le había dicho que no, pero el entonces contralor Murillo dijo que no habría problema porque era una sociedad anónima y no le aplicaba la legislación", lo único que le observaron fue la contratación de más de 49%, y que eso no era penal, sino administrativo.

La postura de la ASF era que no tenía la capacidad —aseveración tendenciosa, que intenta contradecir y justificar nuestros resultados publicados que demuestran el mapa de vínculos

y la trazabilidad de los recursos—. Su justificación, insistió, era que "eso podría ayudar a subsanar los problemas financieros que traían"; y concluyó diciendo que 27 millones de pesos se quedaron con ellos y se ayudó; lo que no dijo es que no tendría por qué haber obtenido ese porcentaje si ellos no llevaron a cabo los servicios, esto es una especie de soborno disfrazado, que fue parte de las ganancias de las instituciones y entes involucrados.

En cada aseveración iba implícita la mentira y se ponía en relieve el *modus operandi* y su responsabilidad en el desvío de recursos, al haber permitido ser únicamente "pagador" de las empresas que le indicaban vía transferencia, y que él no podía haberlo detectado. En los expedientes que hay en la televisora, esas empresas estaban vigentes, es lo único que dijo, pero no explicó cómo "eligió" a tales empresas.

Dijo además que en 2010, 2011 y 2012 se habían realizado en Telemax el mismo tipo de contratos, lo cual, de nuevo, nos deja pensando que si se había hecho ese tipo de contratos, ¿por qué estaban en tal situación financiera, como afirma la televisora? Finalmente, sin proponérselo confirmó lo que descubrimos durante la auditoría forense. Qué lástima que estos testimoniales no se consideren como indicios para la investigación en la Fiscalía.

Claudia Morones se hacía acompañar de David de J. Guerrero Sesma, ambos operadores directos de esta red de contrataciones y asignación de las empresas, dentro del abanico de las decenas que tenían creadas para estos fines, todo desde la Sedesol y la SEDATU; se presentaban ante las instituciones "apalabradas" para "amarrar" los fraudes y afinar los detalles de la operación del proyecto, así como dar de alta las empresas a las que les transferirían los recursos.

"Te lo vamos a entregar 'planchadito'", era la promesa, o "les vamos a dar todo el expediente y copia de los entregables", y así andaban de institución en institución, pertenecientes a la ANUIES; por cierto, pareciera que mucho se gestó desde esa directriz por el conjunto de inferencias, Sonora, Tabasco, Hidalgo, Quintana Roo, Tlaxcala, Chiapas, Estado de México, Morelos: cada uno de los operadores tenía su "cártel asignado".

Las empresas de G214 las operaba uno; las de la calle Providencia, Alejandro Hinojosa, pero todas bajo el mando de Morones según testimonios documentados en las auditorías forenses, que son públicas. Los rectores tenían miedo, muchos estaban avergonzados, pero sin el valor de dar la cara; al nivel del más alto poder, "ya ve usted cómo el presidente Peña la trata, y dígame usted qué se hace en este país con un sueldo de 7 000 pesos", justificaban; amenazaban a la gente, la despedían, incluso funcionarios "insurrectos" de Hidalgo fueron a dar a la cárcel.

La libertad para denunciar trae aparejada una serie mayor de repercusiones. Parece que a los cobardes les va mejor. No queda duda de que se requiere primero regenerar y luego remediar a este país.

Aquí es donde aparece el látigo de ira y furia en contra nuestra y es el precio que le hacen pagar estos grupos de poder a quienes se atreven a confrontarlos, a no permanecer en silencio y menos agachados. Ha sido una circunstancia y desgaste personal y moral terrible en una vida entera dedicada al servicio público. Investigar tiene un precio muy alto en este país para los que tenemos el valor y las competencias para hacerlo.

Edwin Sutherland y Donald Cressey, criminólogos, profesores e investigadores, llegaron a la conclusión de que los individuos están motivados a cometer un delito cuando se dan tres elementos: algún tipo de presión, la oportunidad y la racionalización de la conducta criminal al punto de percibirla como correcta.

Sutherland desarrolló la teoría de la asociación diferencial, para entender por qué la gente comete delitos y, según esta, la conducta delictiva está ligada a la asociación de una persona con un entorno delictivo, es decir, encuentra varias influencias internas/externas en su vida. Esto, aplicado en el campo de lo público y privado, podría explicar que algunos individuos tengan interacciones sociales con quienes presentan tendencias delictivas y se convierten en "perpetradores o delincuentes", como consecuencia de ese círculo de factores criminógenos.

Es decir, la conducta delictiva es aprendida por interacción con otros, a través de procesos de comunicación verbal y ejemplos, y ocurre con los grupos cercanos y personales. El aprendizaje del delito incluye la práctica de las técnicas para cometer el delito y los motivos, impulsos, racionalizaciones y actitudes que lo acompañan.

Las personas que se involucran en conducta delictiva han racionalizado con la seguridad y confianza de que violarán la norma en beneficio de una causa social "justa". La conducta delictiva ocurre cuando los incentivos para cometer un delito son mayores a la sanciones, es decir, una oportunidad percibida, violando una posición de confianza; claro, su argumento moral es tan falso que no lo pueden compartir, y negarán su responsabilidad política o moral, conscientes de que ese problema se puede atender y resolver en secreto, que su grupo político y contactos los protegerán y no se sabrá, incluso se autoperciben con concepciones sobreestimadas de sí mismos como usuarios legítimos de esos fondos o activos que se les han confiado.[43]

Para los que viven en la cercanía del poder, cobijados por el manto de la impunidad, nada es considerado ilegal, si lo contemplamos a partir de los estudios de Cressey, en relación con el triángulo del fraude que nos habla de tres elementos que inciden en los actos deshonestos o criminales: la racionalización, la motivación y la oportunidad; así tenemos a las estructuras y los bandos políticos conformados por distintos individuos que comparten su misma idiosincracia, narrativa y justificación moral, y porque su rango de amoralidad resulta muy amplio para evadir, razón por la que desarrollan sus propias normas y con ellas inventan excusas para convencernos del porqué de sus decisiones en una gama de razones diversas "fabricadas" para justificar su deshonestidad.

Así aparecen como Satélites en una estructura sistémica que encuentra y sostiene cualquier argumento para no solo justificar, sino aplaudir sus acciones corruptas. Conforme a esta teoría, veamos el caso de la elección del auditor. Tenemos la presión autocreada a partir de que necesitaban "comprarse" un auditor que les otorgara un "blindaje seguro", la oportunidad percibida de negociarlo con los partidos, pues los unía el mismo fin, beneficios, colocaciones, arreglos y prebendas, y la racionalización o normalización de la conducta "adecuada" con sus valores, sabedores de que todos gozan de protección y por lo tanto no tendrán repercusiones ni castigos por su actuación.

No importa la cantidad de actos cometidos en contra de le legalidad de la institución para alcanzar sus objetivos, ni la persecución y desmantelamiento emprendidos, eso es lo que menos les interesaba, a partir de la concepción de "justicia para ellos".

La conducta delictiva está ligada a la asociación de los individuos con un grupo o entorno criminal, es decir, quienes comparten las mismas influencias y factores cercanos, internos o externos en su vida. Esto, aplicado en el campo de lo público y privado, podría ayudar a entender las razones por las que existen funcionarios que anhelan y buscan sentir pertenencia y buscan las interacciones sociales, aunque no correspondan ni con su nivel social, cultural o económico, pero serán utilitarios, y debido a la admiración que perciben por los lujos y modo de vida que les rodea, interactuando con los factores predisponentes y preparantes, pueden convertirse en "perpetradores o delincuentes".

Hay funcionarios que sienten la necesidad de un reconocimiento del entorno, de obtención de beneficios inimaginables o inalcanzables para la mayoría de la clase media, como viajes, ropa, joyas y relojes costosos, acceso a los mejores clubes, bolsas, zapatos, accesorios, carros, casas de lujo, que no podrían lograr en toda una vida de otra manera. Así, han tenido como compensación por su actuación cargos, sueldos, vehículos, gasolina, apoyos, negocios, en fin, todos los medios al alcance que de otra manera no hubieran podido lograr, de no ser por los compromisos adquiridos y pactados para nombrar al auditor.

Tenemos entonces un hecho que se esconde en un cúmulo de complicidades y que no se puede compartir y permanecerá oculto; no imagino a ningún implicado en las grandes estafas y negocios que hemos conocido llegando jubiloso a una reunión familiar o de amigos, saltando de gusto a platicar que "se han birlado millones de pesos en negocios y arreglos irregulares", o cómo justifican cargos a los que no llegan a trabajar y en cambio tienen altos sueldos, vehículos, choferes y viajes incluso pagados, aunque en su racionalización ellos se describen y perciben como grandes funcionarios leales a sus "jefes políticos", que viven para obtener su aprobación y lograr una cercanía mayor, no importa lo que haya que hacer para lograrlo. Se sienten orgullosos de su ignorancia y lo difícil es ser crítico dentro y fuera de él, porque serás expulsado y puedes ser perseguido.

El aprendizaje psicosocial derivado del entorno en que crecen, se desenvuelven y conviven, les introyecta todo tipo de incentivos para la deshonestidad; son incapaces de controlarse

—por qué habrían de hacerlo— si hay un beneficio inmediato y las oportunidades abiertas para obtener recursos inimaginables, así que siempre habrá un motivo para justificarlo. Su arrogancia es tal que los lleva a no escuchar y a dar por hecho que el grupo al que pertenecen los salvará porque siempre ha sido así; la historia de impunidad cuasieterna.

La "indignación" de los funcionarios observados por irregularidades en su encargo en esa administración era cínica y uniforme; por ejemplo, Lozoya utilizaba y permitía el uso del avión y el helicóptero de Pemex porque existían "indicaciones" para viajes de "la primera dama, o que él tenía que asistir una vez al año a los Hampton, porque había una fiesta que reunía a los hombres más ricos y poderosos del mundo, él era invitado y por tanto no podía faltar", y su racionalización la justificaba en cumplimiento a su lealtad y el deber de servir a quien considera su supremo jefe, y por otra parte, que no existían lineamientos explícitos para su uso y por tanto no había limitaciones.

Eran motivaciones y justificaciones fuera de toda lógica jurídica, pero que introyectó; vincular estos factores con la etiología de su historia personal y familiar en el contexto político-amoral en que han crecido, vivido y disfrutado permite entender la razón por la que no se consideran responsables de actos irregulares que originaron el mayor desvío de recursos que haya sido documentado y revelado en nuestro país, lo cual puede dar una explicación clara y de cara a los hechos sucedidos.

En la Secretaría de la Función Pública (SFP), Gregorio Guerrero, por ejemplo, instruyó que nadie de mi equipo forense podía ingresar. Priista de toda la vida, beneficiado en este gobierno al cual atacaron, y ahora aparece como prócer en la función pública. ¿Qué pasará por su cabeza cuando actúan de esta manera deleznable? ¿Cómo resolverán sus conflictos valorativos, quién es y por qué se arroga ese poder? La arrogancia no les permite escuchar. Nadie quiere hacerse cargo de su irresponsabilidad, así llegamos a la crisis en nuestras instituciones.

Quienes participan en política en su mayoría traen aparejados otros intereses que no son precisamente inhibir la corrupción, por lo cual los resultados son absolutamente insuficientes. No hay credibilidad en el ámbito de la procuración de justicia y los ciudadanos estamos indefensos ante cualquier agravio; claro, quien tiene la fortuna de contar con buenos contactos, relaciones de poder y con amigos que ayuden para cargar a cuestas las injusticias de la ilegalidad suele tener mejor suerte.

La jerarquía de los daños propiciados, tolerados y ocasionados por los grupos de poder que en función de sus propios intereses permitieron "asaltar y repartir" en la ASF los cargos relevantes, sin importar que carecieran del perfil técnico y ético necesario, lo relevante es que estuvieran a la "altura de sus necesidades partidistas" con la consigna de desmantelar y desarticular a la institución Todo lo narrado permite inferir que intentaron enviar un mensaje claramente intimidatorio, como respuesta a lo que consideraron el mayor agravio recibido en su vida política y que ponía en riesgo "su candidatura presidencial".

Bien merece un análisis a partir de la oportunidad percibida para integrar a toda la "gavilla", recomendados, aviadores, allegados, exdiputados salientes, funcionarios con antecedentes de deshonestidad que justifican, al igual que los conflictos de interés, como "merecidas recompensas" por su apoyo, no importa la actitud vandálica que tengan que realizar, se saben protegidos por el poder y trabajan "motivados" para los poderosos, normalizando con ello la violencia desplegada que esconde con el rencor, la ira y el desprecio por la legalidad acumulada y practicada por años en ese sistema de colusión y encumbramiento.

Recuerdo perfectamente una reunión sostenida en 2014 en la ASF, con la entonces secretaria de Sedesol, Rosario Robles y su plana mayor, donde insistió en una serie de justificaciones que iban en oposición de los hallazgos, las empresas fachada y la ruta del dinero, intentando convencernos de que no existían irregularidades y que por lo tanto se debía solventar todo. Su despliegue de arrogancia mostraba claramente el tamaño de su racionalización.

Es una lástima que nunca le tomaron la palabra ni hicieron su trabajo ni los titulares del OIC, ni el secretario de la SHCP, ni el procurador, ni los tres titulares de la SFP, quienes se convirtieron en cómplices por omisión de esa y otras grandes estafas al país y a los ciudadanos en una concertación perversa de la más alta estructura del poder. No cabe la menor duda de que la ética y la integridad están alejadas de la vida pública, comparado con lo privado, si las en tendemos como las conductas esperadas de cualquier servidor público que asume la responsabilidad moral, legal y política a que les constriñe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a quien recibe, administra o ejecuta recursos públicos. La justicia no puede esperar y mientras no haya reparación del daño y resarcimiento del recurso no habrá justicia, porque las consecuencias sociales, al igual que esa historia, no tienen reversa.

Este conjunto de justificaciones los define a ellos, en razón de sus creencias o delirios, "del gran bien al país" que les debemos; también nos permite observarlos como "perpetradores utilitarios" desplegando la conducta esperada por la estructura de poder a la cual sirven y pertenecen, siempre defendiendo sus acciones corruptas.

Veamos como ejemplo el conjunto de aseveraciones de Rosario Robles obtenidas de diversas entrevistas, donde se aprecian las mismas justificaciones y el mismo discurso con que adiestraron a los rectores, a Colmenares, a los operadores de la estafa, de una manera burda y sin lógica:

a) Soy la primera interesada en pedir que se investigue hasta el cansancio.

b) Que presenten pruebas de que hubo triangulaciones a Rosario Robles de esas empresas.

c) La ASF habla de irregularidades y tú tienes que irlas solventando o desacreditando.

d) Que analicen mi situación financiera.

e) Yo no he sido denunciada en ningún momento por la ASF.

f) Tiene años que suceden las contrataciones porque es absolutamente legal y las utilizan varias instituciones.

g) Yo contraté al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones porque la ley lo permite, si no quieren que se haga que eliminen esa fracción.

h) Los entregables están acreditado que sí están.

i) A mí me gusta tomar al toro por los cuernos.

j) A mí me constan esos servicios, ayudamos a los alumnos y a las universidades.

k) Si los entregables no existen que se castigue.

l) He estado en la procuraduría personalmente solicitando que concluyan las investigaciones.

m) A mí me pidieron reorientar los recursos para ayudar a las instituciones.

n) Tenemos estos mecanismos que la ley nos da y no se requiere más.

o) Que cambie el artículo la Cámara de Diputados si lo ven como un riesgo.

p) Nos falta personal y si se considera que ese artículo primero debe cambiarse que lo cambie el legislador, a mí no me toca cambiarlo.

q) Yo no firmé nada, asígnese una responsabilidad si hay algún responsable.

r) Insiste en el mismo argumento, que se cambie el artículo, "es bien importante".

s) Vivo de mi trabajo, tengo los mismos bienes.

t) Que se pruebe, es muy fácil dañar a las personas.

u) Contribuí de manera importante a lo que el presidente EPN a mí me encomendó.

Ahora bien, todas las anteriores aseveraciones y declaraciones circulares con que la exsecretaria Robles intentó justificar las observaciones, primero, y luego las imputaciones de la FJR, se vienen abajo al contrastarlas con las declaraciones de funcionarios de la Sedesol y la SEDATU, sus colaboradores de primer nivel, subsecretarios y coordinadores que dependían directamente de ella, y que rindieron su testimonio ante la FJR y participaron de manera directa y conocieron el esquema de corrupción.

Al verse sitiados, decidieron hablar para acogerse al criterio de oportunidad y declararon amplia y puntualmente sobre su conocimiento y participación en el *modus operandi*, quién y cómo recibían las órdenes, las circunstancias de cada uno de los convenios y contratos en que se involucraron, cuántos firmaron y cuántos falsificaron; es decir, aceptaron su

participación en los hechos y aportan elementos relevantes para identificar modo, tiempo y circunstancia.

Los testimonios que tuve en conocimiento permiten abrir las indagaciones que debía realizar la FJR, y de llevar a cabo el conjunto de procedimientos y la investigación sobre cada uno de los expedientes, simplemente con ello, se vienen abajo los intentos de Robles para justificar las observaciones determinadas por el trabajo impecable que se realizó en la DGAF de la ASF.

En sus distintas participaciones en medios, al abordar el tema sobre los supuestos desvíos millonarios que se le imputan durante su encargo en la Sedesol y la SEDATU, se puede observar el uso de medias verdades para favorecer su teoría, que insisten en el mismo argumento y con las mismas justificaciones perfectamente racionalizadas, repetitivas y recurrentes con las que apela a su inocencia.

Sus palabras resultan ser la misma narrativa con que adiestraron a Colmenares para la defensa inmediata de este caso; basta ver sus declaraciones al respecto: "La ASF habla de irregularidades y tú tienes que irlas solventando o desacreditando, no queremos lanzar globitos como antes"... bla, bla, bla, hasta que le dieron de mero arriba, y fue obligado a presentar sendas denuncias de hechos que nosotros dejamos pendientes y enviar a dos abogados, lo cual es verdaderamente penoso, pues quien debía haber participado por la naturaleza del caso era el titular Andrade, el que cobra y muy bien, como jurídico de la ASF, pero eso sería traición al grupo que lo tiene y sostiene.

Lo interesante también es lo que no dice en esas entrevistas, lo que oculta, su sesgo cognitivo le permite discriminar todo aquello que no apoya sus argumentos y, por otra parte, tampoco le permite percatarse de la otra cara de sus aseveraciones, que para los que nos dedicamos a la investigación nos aportan una serie de elementos, indicios y un dudario que bien sirve a la autoridad investigadora en la búsqueda para profundizar en las indagaciones, para acreditar o no la credibilidad y la fiabilidad de sus afirmaciones y obtener datos significantes en esta trama de alta corrupción gubernamental.

Este tipo de políticos distingue la verdad de la mentira y oculta o manipula su verdad, a través de su mentira; son absolutamente cínicos, indiferentes y pueden decir medias verdades, incluso, siguiendo a Cressey, racionalmente dejan de creer en la verdad y solo hablan de aquello que confirma su verdad, en una práctica sesgada a favor de una sola élite: la suya.

Si bien es cierto que sus argumentos son redundantes, en ningún momento se aprecia que sus explicaciones o argumentos públicos se basen directamente en cuál fue la etiología de esas contrataciones, cómo fue el procedimiento para elegirlas, quién era el enlace oficial, cada cuánto se reunían a evaluar con su equipo de subsecretarios y oficialía mayor el avance de estas contrataciones, cómo se decidieron los costos de cada contrato, con base en qué

se decidieron los objetivos y el presupuesto asignado para cada institución y dependencia y quién autorizaba el ejercicio.

También, ¿cómo y cuándo decidió la estrategia que seguiría en relación con el artículo 1º de la laasp? ¿Cuándo sus subsecretarios hicieron de su conocimiento las falsificaciones de sus firmas en varios contratos? ¿Cuáles fueron las acciones que llevó a cabo? ¿Quién y cómo nombró a su titular de OIC? Javier Guerrero y Enrique Tiburcio afirman haber hecho personalmente de su conocimiento la falsificación de sus firmas en contrataciones, y que Robles respondió: "efectivamente no es tu firma, entrégasela a Emilio para que haga las investigaciones correspondientes".

El destino y ejercicio del techo presupuestal es responsabilidad del titular, ¿cómo definió usted cuáles serían las prioridades de acuerdo con la petición presidencial que usted manifiesta? Explíquenos los pasos que llevó usted a cabo para constatar, desde la justificación de las necesidades hasta la recepción de los entregables, para determinar las prioridades institucionales.

Independientemente de esta batería de preguntas, a partir de cada una de las afirmaciones de los testimoniales, es menester confrontar la versión de las partes con el fin de determinar cuál es plausible, se considera fiable y puede confrontarse con los hechos.

Ahora bien, las preguntas obligadas a partir de las declaraciones vertidas por Robles, que fue imputada en 2019 por el cargo de ejercicio indebido, podrían ser a manera de ejemplo, de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes:

a) ¿A qué tipo de contrataciones se refiere usted? Explique cómo y por qué decidió este esquema de adjudicación; ¿cómo fue el proceso de toma de decisiones para cada una de las contrataciones considerando las necesidades prioritarias de la secretaría y sus programas prioritarios?

b) Usted afirma que contrató directamente conforme la ley, eso significa que usted decidió contratar bajo ese esquema; indique al respecto: ¿cómo fue el proceso que llevó a cabo y desde cuándo lo utiliza? ¿Cuándo, cómo y con quiénes llevó a cabo reuniones para dar instrucciones debido a su decisión de adjudicar directamente? ¿Cuáles fueron las instrucciones que usted giró y quiénes se encontraban en la reunión?

Explique, en su calidad de titular, ¿cómo determinó las necesidades específicas y requerimientos para la selección de servicios? ¿Cuáles fueron los pasos para llevar a cabo las órdenes y acciones en cada una de las contrataciones? ¿Conoce usted la normativa aplicable en razón de su encargo para llevar a cabo este tipo de contrataciones? ¿Quiénes eran las áreas requirentes y el responsable de cada una para la elección de prioridades? ¿Cómo decidió qué instituciones y qué servicios podrían asignarse a cada una de ellas? ¿Cuál fue el criterio para autorizar los servicios y los montos a asignar? ¿Qué le llevó a pensar que

esta normativa era aplicable a las contrataciones que se realizaron dada la naturaleza y las funciones de la secretaría?

Explíquenos, por ejemplo, ¿cómo y cuándo se decidió la ejecución de conciertos en el Auditorio Nacional? ¿Quiénes serían los artistas? Háblenos sobre la compra millonaria de gorras y fotos del presidente por casi seis millones de piezas; el pago de 39 millones para revisión de adjudicaciones, servicios que corresponderían a la propia Sedesol; 30 millones para un documento de supuesto monitoreo en medios y personas de interés, el cual simplemente trae fotos de los diputados de la comisión, de distintos medios electrónicos y radio.

Si tienen un área de comunicación social, ¿cuál fue la naturaleza y la decisión de contratar este documento y cuál fue la aportación al combate a la pobreza? ¿Cuáles fueron los beneficios tangibles que obtuvo la dependencia a su cargo en razón de los servicios contratados? Y ¿cuáles fueron sus medios de convicción para asegurar, como lo afirma, que los entregables existen y los servicios brindados?

c) Al decir "hasta el cansancio", ¿a qué se refiere expresamente? ¿Cuáles fueron las investigaciones o indagaciones internas que usted realizó en su calidad de titular de la dependencia al enterarse por la propia ASF de los hallazgos? Explíquenos ¿cuáles fueron las acciones que usted llevó a cabo, a partir de las denuncias de sus propios colaboradores cercanos, subsecretarios y otros funcionarios que le informaron directamente a usted y ofrecieron evidencia de la fabricación y falsificación de sus firmas en contratos? ¿Cuáles fueron las acciones que usted llevó a cabo para supervisar el ejercicio de los recursos en razón del cúmulo de irregularidades denunciadas por la ASF por cinco años consecutivos, y sus propios colaboradores durante 2017 y 2018?

¿No le pareció grave que varios de ellos, que eran sus operadores, presentaran sendas denuncias sobre el oficial mayor y la falsificación de firmas? ¿Cuáles fueron las indicaciones que giró usted y a quién al enterarse de las denuncias que pesaban sobre el oficial mayor y varios de los funcionarios bajo su subordinación y mando? ¿Cuál era el proceso interno para la verificación de los proveedores?

d) Los resultados y observaciones derivados de las auditorías forenses que fueron hechos de su conocimiento establecen la trazabilidad del dinero y documentan diversas triangulaciones a varias empresas muchas inexistentes y no localizables. ¿No le llamó la atención ese cúmulo de datos? A partir de que tuvo usted conocimiento en 2014 de las observaciones y resultados de auditoría, ¿qué acciones emprendió para supervisar esas contrataciones? ¿Cómo constató que los servicios y precios asignados a cada contrato eran acordes al mercado? Explique la razón por la cual, a pesar de las recomendaciones recurrentes de la ASF, siguió adjudicando en ese esquema directo. ¿A qué evidencia se refiere usted al solicitar que le presenten pruebas? ¿Pruebas de qué? Más allá del acumulamiento de las denuncias de la ASF, de los subsecretarios en el mismo sentido, de

dos de sus coordinadores, que dieron a usted detalles y elementos sobre la falsificación de firmas, documentos y el desvío de recursos.

e) En relación con la petición de que analicen su situación financiera, ¿está usted de acuerdo en aportar voluntariamente a la autoridad toda la información sobre activos, contable, fiscal y financiera de 10 años a la fecha, incluidos sus familiares hasta el 3er grado, y explicar la razón por la que vivía y cómo se pagaba el exclusivo departamento en Reforma 222, o el piso de Tennyson que era supuesta propiedad del exsecretario Gerardo Ruiz Esparza?

f) ¿Cuántas reuniones tuvo usted directamente con funcionarios de la ASF desde 2014 y hasta 2018? ¿En dónde las llevaba a cabo? ¿Invitó y se reunió usted en varias ocasiones en un privado del hotel Four Seasons, con qué funcionarios de la ASF? ¿Con quiénes más se reunió que, aunque no eran funcionarios de ASF, eran enlaces del señor David Colmenares, qué temas se trataron y cuál fue la razón de esas reuniones? ¿Fueron pagadas las comidas y cenas con recursos públicos? De no ser así, ¿con qué recursos se pagaban, pensando que vamos a pedir directamente al hotel los datos al respecto? ¿Cuál fue la razón de la invitación y sobre qué temas versaron esas reuniones? ¿Le indicaron en dichas reuniones que usted en su calidad de titular era la responsable del ejercicio del recurso y que tenía un deber de cuidado?

¿Es cierto que en una cena en 2016 en el mismo hotel usted le prometió al entonces auditor que dejarían de utilizar ese esquema? ¿Le indicaron los funcionarios de la ASF en esas reuniones que se debían modificar esos esquemas de corrupción? ¿Qué acciones llevó a cabo al término de cada encuentro con la ASF para atender las observaciones y recomendaciones? ¿Cuál es la razón por la que propuso al entonces fiscal anticorrupción de Puebla, Enrique Flota Ocampo, como enlace para atender las recomendaciones de la ASF, si no formaba parte de la estructura ni laboraba en la dependencia a su cargo? ¿Cuáles fueron las indicaciones que usted le dio y estaba consciente de que el funcionario carecía de facultades para representarla "oficialmente"?

g) Al afirmar que hace años que suceden las contrataciones porque es absolutamente legal y las utilizan varias instituciones, mencione en qué otros encargos suyos las ha llevado a cabo, ¿cómo le consta que se realizan? Y ¿qué instituciones refiere usted conocer que aplican este esquema de adjudicaciones directas?

h) Explique ¿por qué considera que deben cambiar el artículo de la ley que usted ve "como un riesgo"? ¿A qué riesgos se refiere específicamente?

i) Usted afirma que acreditó que los entregables sí están, lo que supondría, dadas las observaciones recurrentes y las denuncias de hechos presentadas por la ASF en contra de diversos funcionarios y proveedores de las dependencias durante su encargo, que debió llamarle mucho la atención en su calidad de titular, porque ya se habla de una serie de elementos muy serios que implican deshonestidad y desvíos de recursos. ¿Qué hizo usted

al respecto? ¿Cuántas veces se reunió con los funcionarios para que le explicaran sobre esas denuncias y habló con el procurador general al respecto?

En razón del prestigio suyo y del escándalo político que se podría venir, ¿cuáles fueron sus indicaciones y a quiénes específicamente? ¿Verificó los hechos que habían denunciado Guerrero, Castellanos y Tiburcio? ¿Le informó a cada uno cabalmente cuál había sido el resultado de su intervención? ¿Supervisó las contrataciones realizadas por encargo de usted en calidad de titular? ¿Verificó a los supuestos proveedores que durante cinco años fueron contratados y señalados?

A partir de los testimonios de servidores públicos de distintas entidades y universidades que revelan la inexistencia de los servicios que dieron elementos y testimonios del *modus operandi*, ¿qué acciones llevó usted a cabo? ¿Consideró que los testimonios de los funcionarios de entes y universidades que explicaron cómo los obligaron a encubrir una serie de actos ilegales, irregulares y que desconocían, coincidían con las denuncias formuladas a usted directamente por sus subsecretarios y funcionarios de primer nivel? ¿Cuál fue la explicación que le dio el oficial mayor cuando usted supuestamente le confrontó sobre las falsificaciones de firmas y qué indagaciones y procesos llevó a cabo para verificar esas contrataciones? ¿Cuántas veces y con qué rectores se comunicó usted para verificar avances y confrontar las observaciones de la ASF?

j) ¿Cómo verificó la necesidad justificada, el uso y destino final de cada uno de los entregables que usted afirma que recibió de conformidad? Exprese ¿cuál fue la utilidad de cada uno de ellos en la Cruzada contra el Hambre y en qué apoyó en el abatimiento de la pobreza cada uno de los servicios requeridos? Explique a partir de la solicitud del área requirente ¿cómo fue el proceso de autorización, asignación y aprobación del presupuesto de la dependencia asignado por usted para ese fin? ¿Cuál fue el método para la elección de la institución que realizaría cada uno?

Justifique y motive la razón de la elección de la institución educativa o dependencia estatal por cada adjudicación; los nombres de cada uno de los funcionarios operativos asignados como enlace para llevar a cabo la supervisión y seguimiento de los convenios; en razón de cada convenio o contrato el titular del área requirente de qué manera y cómo le informaba del avance; los nombres de los responsables que usted, en calidad de titular, asignó para llevar a cabo la administración y supervisión de esos contratos.

Diga usted si las subsecretarías contaban con un presupuesto asignado de manera directa para ejercerlo en esas contrataciones; ¿cuál es el proceso para autorizar el ejercicio del recurso de una subsecretaría en las contrataciones que desea realizar? ¿Existen documentos internos donde se encuentren las firmas y autorizaciones de cada uno de los subsecretarios en relación con los diversos contratos que ellos supuestamente determinaron? ¿A qué se refiere cuando usa la expresión “me gusta tomar al toro por los cuernos”?, explique pormenorizadamente.

k) Declara usted que le constan esos servicios y que también ayudaron a los alumnos y a las universidades; ¿cómo pudo constatar el cumplimiento de los servicios? ¿Cuáles fueron los beneficios a las universidades y como ejemplo Telemax, Hidalgo o Quintana Roo, donde los extitulares y operativos aceptaron y dieron testimonio de que ellos no llevaron a cabo ningún servicio, sino que únicamente les instruían a quién y cuánto pagar? ¿Quiénes fueron los servidores públicos de cada una de las áreas requirentes que recibieron de conformidad los servicios?

Explique pormenorizadamente el uso y destino de cada entregable y el costo-beneficio en relación con los precios, y ¿por qué permitir que las universidades y entes se quedaran con un porcentaje si no realizaban el trabajo? ¿No lo considera usted un soborno disfrazado?

l) "Si los entregables no existen que se castiguen", expresa usted, lo cual se contradice con la anterior, si a usted le consta, ¿por qué tendría que pensar que no existen?

m) ¿Cuándo y cuántas veces estuvo usted en la Procuraduría como lo afirma? ¿Con quiénes se entrevistó? Y ¿qué fue lo que le expresaron en ese momento sobre el conjunto de denuncias de hechos que pesaban en contra de los funcionarios? ¿Qué le respondieron a su petición de que concluyeran ya las investigaciones? Explique pormenorizadamente.

n) En relación con su afirmación de que le pidieron reorientar los recursos para ayudar a las instituciones, el único jefe que tenía era el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ¿cuándo se lo pidió? ¿Cómo le explicó la reorientación del recurso? ¿Cuáles fueron las instrucciones precisas? Y ¿cuál era el objetivo de "reorientar el gasto"? Modo, tiempo y circunstancia de estos hechos que son relevantes, y en su caso, ¿qué sucedió posteriormente cuando fue enterado de los desvíos y a pesar de ello "seguía usted la reorientación del recurso"?

o) Ya que usted no había sido señalada directamente, indique si le hizo saber el entonces auditor la responsabilidad suya en relación con los hechos atribuidos y ¿cuál fue su respuesta?; por otra parte, considera que, por no estar señalada en un documento de manera expresa, ¿no existen acciones implícitas por omisión?

p) Usted afirma que con "estos mecanismos que la ley nos da no se requiere más", ¿a qué se refiere exactamente con ello?

q) Respecto a la "falta de personal y si se considera que ese artículo primero debe cambiarse que lo cambie el legislador, a mí no me toca cambiarlo", ¿cuál es la relación entre la falta de personal y el artículo mencionado? Si se modificara el artículo, ¿cuál sería el impacto en la actividad de la secretaría?

r) No obstante que afirma que no firmó nada, sí existen convenios de Chiapas y Edomex firmados por usted, y casualmente cuando empiezan las revisiones, ni usted ni el oficial mayor vuelven a firmar. ¿Cuál es la razón de delegar en directores generales las firmas de

convenios de esa magnitud y responsabilidad? Los presuntos responsables fueron señalados y negados tres veces por usted.

s) ¿Cuál es su insistencia para cambiar el artículo primero de la ley? Usted reitera que es bien importante, explique sus razones, dado que aun cuando es vigente, los titulares, dado la naturaleza de las contrataciones que usted realizó y el monto, tienen la obligación de licitar los servicios. Amplíe su explicación.

t) El argumento "vivo de mi trabajo, tengo los mismos bienes" fue el mismo que en una entrevista con Brozo, cuando era jefa de Gobierno, y otra con López-Dóriga en el noticiero nocturno, donde incluso llevó un estado de cuenta con saldo de 3 000.00 pesos, indicando que no tenía más recursos. Racionalización y un aprendizaje repetitivo, en aquel tiempo se hablaba del escándalo de Publicorp, que siguió el mismo *modus operandi*.

u) Esperamos que algún día, por diversos medios, testimonios y pruebas fehacientes, y ojalá fuera derivado de una investigación de la FJR —lo cual veo difícil—, se pueda probar esta cadena de hechos en el ámbito penal. No es muy fácil dañar a las personas, nadie les mandó a realizar actos indebidos. El fondo de los temas nunca se tocó, siempre reactiva repitiendo el discurso aprendido.

v) Usted dice: "Contribuí de manera importante a lo que el presidente EPN a mí me encomendó"; esta es una parte muy relevante para la investigación en la cual debería expresar: ¿cuál fue la encomienda a quien insiste con una gran lealtad por encima de la legalidad? ¿En qué consistió? Y ¿qué pasó cuando proseguían los resultados de la ASF? ¿Qué fue lo que platicó con Arely Gómez? ¿Cuál fue su contribución expresamente?

Indique, a partir de estas contrataciones, ¿cuál fue el beneficio al grupo y sector vulnerable en relación con los más de 10 000 millones desviados a otros fines? Por otra parte, habría que citar a EPN a que explique pormenorizadamente cuáles fueron las encomiendas a las que se refiere en dos ocasiones distintas, ¿qué sucedió y qué indicaciones dio cuando se enteró, no solo por los tres secretarios de la SFP lo que sucedía, porque ellos eran el enlace designado y tenían la obligación de informarle? ¿Qué comentó o qué instruyó a partir de ello tanto al procurador como a los demás involucrados?

El don de quien sabe mentir radica en aparentar que no miente. Recuerdo algunos "enviados" que abogaban en defensa de Robles, como el entonces diputado Carlos Flores Rico y Froylan Hernández Lara, extitular del Registro Agrario Nacional (ran), quienes aseguraban que Portal estaba "muy débil y se iba a ir", que había que esperar, que era cuestión de días; doble cara, porque por otra parte daban unas grandes comilonas donde eran convidados. Lo estaban zopiloteando, caray.

Una anécdota interesante sucedió en mayo de 2017, en una reunión con el exauditor; mi exjefe, el contador Pérez Saavedra, y Enrique Flota Ocampo, de quien se escuchaba en la Sedesol que sustituiría a Zebadúa. Flota en ese entonces acababa de ser designado fiscal

Anticorrupción en Puebla, y Robles negoció que se aceptara como enlace "especial" para solventar, porque lo conocía de tiempo y quería su participación.

En esa reunión yo esperaba realmente que por el perfil del personaje nos presentara los resultados derivados de su revisión interna, la confirmación de reintegros y el conjunto de denuncias que presentarían… en fin, acciones serias dignas de un fiscal Anticorrupción. Pero no, llegó acompañado exactamente del mismo bonche de documentos con respuestas fabricadas que nos habían enviado de la Sedesol para atención de los seguimientos, papeles que no soportaban el mínimo rigor de un análisis forense, y entonces, como respuesta le inquirí: "Oiga, y usted a qué se dedica", a lo que respondió: "Soy fiscal Anticorrupción en Puebla". De la forma más prudente posible le pregunté: "Oiga, y si este caso llegara a sus manos, ¿qué hubiera usted hecho entonces? ¿Solventar? ¿Es eso lo que considera que debe hacer un fiscal de su nivel y responsabilidad, o investigar y llegar al fondo?".

Guardó silencio y concluí: "Eso es la misma cosa que no solventa nada". No aceptamos los documentos. Los ojos de mis superiores estaban sobre él, y yo me retiré. Creo que esas eran varias de las razones por las que no me invitaban a participar en subsecuentes reuniones. La prudencia, prudencia política, no se me da.

Es desgastante lidiar con funcionarios que se sienten empoderados y no aceptan su responsabilidad. Mismos mapas mostrados decenas de veces, decenas. En más de un par de ocasiones Robles invitó a cenar al exauditor al Four Seasons —quien llegó acompañado del auditor especial—, en el privado, donde regularmente era atendida y conocida por su buen gusto con los mejores vinos. En esas reuniones pretendía "arreglar" las observaciones, alegando que ya no lo haría más, e insistiendo en que todo estaba correcto. La respuesta que obtenía siempre que se acaloraban las discusiones era: "Esto es corrupción y usted lo sabe", pero sus mecanismos de evasión operaban a toda marcha, al punto de pensar que su credibilidad debía ser más fuerte que la evidencia.

Las coincidencias de la vida. Había dos señalados como responsables en una serie de contratos, Saldaña y Tiburcio, que de denunciantes por falsificarles su firma pasaron a ser imputados, y me enteré en una citación que tuve en el Reclusorio Sur, en 2019, en relación con una auditoría de 2011, sobre un dictamen técnico presentado con motivo de nuestras auditorías. Saliendo de la audiencia, en esas coincidencias extrañas, me encontré de frente a un grupo de hombres bien trajeados y al quedar cara a cara todos nos quedamos viendo. De entre ellos, que estaban sorprendidos de verme, un par de caras se me hicieron familiares; sí, era Enrique Tiburcio.

Me extrañó encontrarlo en los juzgados del reclusorio, así que le pregunté: "¿Qué haces aquí?". Mi mente tenía muy claros, como los tengo hasta hoy, los resultados derivados de nuestras investigaciones, y por supuesto que no lo ubicaba en alguna responsabilidad; sorpresa la mía cuando me informó que fue imputado como presunto responsable en los contratos que denunció por falsificación de firma.

“¡Ah caray!”, le dije, “pero si recuerdo que tú denunciaste con el OIC y con la SFP en ese tiempo estos hechos, ¿qué pasó?”. Qué sentimiento de impotencia y de responsabilidad, atribuible a ya saben quién, y lo entendí porque todos se me quedaron viendo con esos ojos.

“Yo no recuerdo que tú estuvieras en ninguno de nuestros dictámenes o denuncias presentadas, porque incluso hubo testimonios de los rectores en relación con los hechos, tú no ejercías recursos porque no lo tenías, entonces ¿cómo te pudieron denunciar? ¿De dónde sale esto? Y los que sí están involucrados, ¿qué fue de ellos?”, le pregunté.

Me confirmó lo que yo recordaba: “Sin ningún vínculo, modo, tiempo o circunstancia que me reconozcan o que pudiera aparecer en las revisiones, ni recursos ejercidos por el área a mi cargo, me tienen vinculado a proceso, y en cambio las carpetas que entregué con las denuncias, los contratos y la evidencia de que se había utilizado mi nombre y firma para simular y fabricar contratos, pues a pesar de informar a la secretaria Robles, al OIC Miguel Ángel Vega García y a la SFP, de todos no se hizo nada. Ni la secretaria Arely, ni Eber Betanzos, ni Javier Vargas Zempoaltecatl, nadie absolutamente realizó alguna acción al respecto”.

Bueno, para concluir esta parte que visibiliza los mecanismos de negación y evasión echados a andar a todo lo que da, existe también el testimonio del jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la SEDATU, quien en octubre y noviembre de 2018 denunció que le habían falsificado cuatro firmas y los contratos respectivos, y ante la fg aceptó como testigo colaborador que sí había firmado cuatro bajo el *modus operandi* descubierto por nosotros, pero los otro cuatro no.

Ese hombre se encuentra encarcelado. Ya no sé si aplica la de ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, pero no dejo de imaginarme el escenario donde se llevaban a cabo esas discusiones, la oficina de Robles, la sala de juntas; discusiones entre truhanes.

Ahí tendrían mucho hilo para jalar. Políticamente indignos, pero hablando de moralidad, cobijados en una serie de pensamientos irracionales como forma de inocular sus propias justificaciones y explicaciones. El cerebro se adapta a la deshonestidad, lo que es consistente con el problema de la aceptación de la corrupción como algo cotidiano. Estas costumbres son determinadas por una sociedad que la ha vivido y padecido pensando que no existe una vida sin corrupción. Y tenemos derecho a vivirla.

Estos grupos y redes de poder consideran que no rompen las reglas y que pueden crear y fabricar sus propias reglas para beneficiarse a partir de su entorno y círculo político, no como individuos, sino a partir de un conjunto de relaciones que lo que menos atienden es la moral pública; manejan su propio código y racionalizan su lógica del ejercicio del poder, naturalizando la corrupción —su corrupción— frente a los otros porque son fungibles, utilitarios, y un día dirán: “A est@ imbécil l@ sacrificamos porque no hay otra manera”.

René Girard, en su libro *El chivo expiatorio*, explica maravillosamente esta figura que nos habla de la imitación de lo malo de una tribu y que, en un momento dado, canaliza la violencia colectiva para enfocarla en un solo individuo que es considerado responsable de una determinada crisis a la que se ha visto arrastrada, y esto permite a la comunidad reducir el caos, lleva la violencia de todos contra todos, a la violencia de todos contra uno, y así, en el caso de la Estafa Maestra, veo el contexto de ese momento y construyo la lógica de por qué acabó en la cárcel únicamente Robles, y cómo los operadores responsables involucrados y señalados por todos los testigos, implicados, proveedores, rectores, directores, se coludieron para sacrificarla a ella, y poner su cabeza en bandeja de plata, ofreciéndola como sacrificio.

En ese momento, los buenos y los malos sienten que controlan el caos y normalizan la corrupción y el *statu quo*. La paz adquirida no es atribuida a la capacidad de la comunidad, sino al mismo chivo expiatorio. Es aquí donde lo sagrado emerge con una naturalidad extraordinaria, para René Girard, en su libro *El chivo expiatorio*: "A la idea de que este puede destruir la comunidad se añade, de ahora en adelante, la de que puede reconstruirla. Es la invención de lo sagrado, que la vieja etnología había comprendido que existe en todas las culturas".

Para Foucault, el poder designa relaciones entre sujetos que, de algún modo, conforman una asociación o grupo, y para ejercerlo se emplean técnicas de amaestramiento, procedimientos de dominación y sistemas para obtener la obediencia. Dichos signos permiten distinguir el valor de cada uno de los niveles de saber. El poder no es una propiedad, sino que es una estrategia que se ejerce y les permite funcionar plenamente. Una declaración es cierta si lo que dice corresponde a la realidad, pero el significado puede ser relativo, moldeado por la interpretación subjetiva de cada uno, que depende de nuestras propias creencias.

La corrupción política implica un solapamiento mutuo con un efecto corruptor diseminado, en un entorno propicio dadas las condiciones preexistentes que se repite y se multiplica, mientras en el discurso y el pensamiento se concibe una lucha contra ella, la realidad muestra que no hay condiciones creadas ciertamente para inhibirla, menos para intentar generar conductas discapacitantes de corrupción.

Es una constante donde suelen coincidir las mismas personas con los mismos fines de apoderarse y vivir plácidamente de los recursos públicos, como si de verdad trabajaran y lo merecieran, y se convierte en un pensamiento distorsionado o "delirio" que pueden razonar como válido en cada acto ilegal que cometen; nuestra sociedad ha construido y labrado todo aquello que hoy nos genera impotencia y sufrimiento.

No se puede explicar de otra manera, es sistémico, profundo, introyectado en la cadena de eslabones que cada uno conforma, y a quienes les han asignado una actividad, una tarea

para seguir la pertenencia del grupo, pues de otra forma no podrían haber escalado a ese nivel.

6

El imperio de la corrupción

No importa cuán grande sea el tejido de falsedad que un mentiroso experimentado tenga para ofrecer, nunca será lo suficientemente grande para cubrir la inmensidad de los hechos.

Hannah Arendt

El capital no tiene ideología

Las complicidades trascienden sexenios eternos de impunidad, una de tantas razones por la que quienes investigamos escrupulosamente y revelamos casos importantes de corrupción enfrentamos y vivimos las consecuencias, nos volvemos incómodos y somos defenestrados por habernos atrevido a señalar la podredumbre del poder.

Basta ver lo que le implicó a Carmen Aristegui y su equipo la investigación sobre la famosa Casa Blanca; a Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, por la investigación a César Duarte; hubo una persecución personal y la detención de su fiscal, Francisco González Arredondo, y lo que he relatado en relación con mi persona y al equipo auditor de la Dirección General de Auditoría Forense (DGAF), en un marco de violencia simbólica.

Ahora resulta que los pillos se convierten en víctimas, torturados o perseguidos políticos, al menos; tuercen el sistema y los mecanismos a su favor, para obstaculizar y evitar el seguimiento, descarrilar las investigaciones y nunca llegar a conocer el fondo de las historias, es decir, ¿cómo ocurrieron los hechos? ¿Cuál fue el rol de cada implicado? ¿Cuál fue el destino de los recursos? Castigar a los autores intelectuales y materiales para alcanzar respuestas que pudieran demostrar fehacientemente modo, tiempo y circunstancia de los hechos.

Algo que es igual de trágico: se desincentiva cualquier intento de llevar a cabo indagaciones o auditorías por temas vinculados a corrupción o deshonestidad, nadie absolutamente en el ámbito gubernamental desea broncas gratuitas y fabricadas. Si bien para esas mafias políticas las personas son de deshecho y así lo han demostrado al botar a quienes ya no son utilitarios, el panorama es peor para los otros: los "abusivos a los que hay que poner en orden", se trata de los investigadores; he aquí una respuesta a por qué siempre ganan los perpetradores.

No es cierto que el bien triunfa sobre el mal, que las princesas se casan con el príncipe y son felices para siempre; nada de eso. Disfrutan, malgastan y viven mejor de lo que en dos vidas imaginarían; son funcionarios tan "afortunados" que luego los reciclan en los gobiernos, y caen en cargos donde hay mucha tela de dónde cortar, es decir, bien parados. Las pandillas

se fortalecen. No se puede explicar de otra manera. Un proyecto democrático con dignidad excluye la corrupción, tiene como finalidad el bien común y el respeto a la dignidad de las personas. Los valientes estorbamos.

"Nunca las cosas están tan mal para que no puedan ponerse peor", reza un dicho. Pensé que el cambio en el gobierno traería una mejoría notable en la investigación y revelación de los casos de corrupción, que mostrarían a los responsables después de una indagación criminal "a prueba de balas", con todo rigor metodológico; que del dinero que "desaparecieron" en efectivo y que fue entregado en diversos domicilios en Polanco se conocería su trazabilidad, ¿quién y cómo contrató? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo se llevaron a cabo los grandes saqueos del sexenio?

¿Quiénes estuvieron involucrados en los grandes contratos en los que había corrupción, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la Estafa Maestra, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA), Seguridad Pública, dispendios por más de 6 000 millones de pesos en comunicación social que nadie investigó ni pidió cuentas. Tenemos un "dudario" que requiere respuestas en un nuevo entorno de la legalidad, ¿quién observa el conjunto de contrataciones directas brincando toda la ley? ¿Quién revisa a los gobiernos que ahora dispondrán de buenos millones para capacitación de policías? Sabemos que por más de tres sexenios se han birlado esos recursos que ya existían, ni uniformes ni zapatos, menos sus bonos; sabemos que no existe interés por ello.

La esperanza era demostrar cómo el cambio de gobierno mejoraría en este rubro al país. Regenerar a las instituciones con dignidad republicana, pero es indiscutible que los ciudadanos siempre vamos a resentir estas omisiones y equivocaciones. Los comportamientos deshonestos se naturalizaron de tal manera que ahora se aprenden con mayor eficiencia, con aprendizajes reforzados en ambientes de corrupción perfectamente replicados y donde saben que no darán cuenta de sus actos y el repudio público no les es suficiente.

"La forma es todo en política", decía el entrañable periodista Jorge Saldaña, y que "lo que se trata de regenerar es porque se encuentra de-ge-ne-ra-do"; entonces, lo que está degenerado implica que no es acorde con los cánones del deber ser. Los valores y principios constitucionales que deben seguir los gobernantes los entienden "tergiversados". Es urgente regenerar la degeneración de nuestro país, caído, descompuesto, descompaginado. Sus valores están tergiversados.

Fiel seguidor, defensor y parte integrante del Movimiento Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), siempre esperanzado a que llegara el tiempo en que se convirtiera en presidente para investigar los actos de corrupción, desarticular redes de mafia política, ver a su amado Veracruz libre de corrupción, castigar a los delincuentes "políticos", bien decía, era un movimiento urgente y necesario dado el diagnóstico conocido. ¿Qué diría hoy?

Deberían elevar la mezquindad a rango constitucional. México se convirtió en un espacio de ganancia para los gobiernos corruptos, aprovechando los linchamientos y pleitos políticos; el fracaso se ve reflejado en la ausencia de la legalidad. El desplome ético ha sido devastador, no podemos cambiar el pasado, pero sí la manera en la que construimos nuestro futuro inmediato, hay que regenerar a las instituciones del país. Tenemos derecho a un proyecto democrático, pero con dignidad republicana y con instituciones obligadas a velar por la legalidad. Jorge Saldaña debería estar dando vuelcos en el paraíso eterno. Extrañamos tanto su análisis político y su modo único de abordarlo.

Redes y entretejo de poder

Lo narrado en este libro es consecuencia de un efecto dominó de sexenios, el descuido y la falta de atingencia en los nombramientos de relevancia: diputados, senadores, consejeros, fiscales, auditor, gobernadores, personajes, la mayoría sin el perfil ni el conocimiento o especialización de sus funcionarios.

Estos funcionarios con un alto nivel de codicia buscan colocarse precisamente donde puedan vender y cobrar facturas, sin resultados ni logros en razón de sus posiciones en un sistema de intereses políticos que demuestra las razones de la sinrazón.

Así se va tejiendo la red de vínculos que trasciende familias, convertidos en "agencia de colocaciones" en puestos clave; van conformando y cerrando el círculo de corrupción. Los fracasos en su combate derivan de los incentivos negativos que se mandan cuando los corruptos son incubados y mejorados en puestos de gobierno. ¿Quién entonces auspicia e incuba la corrupción? El mismo Estado.

La sumisión y la abyección total asegura a los corruptos que pueden vulnerar y transgredir la ley, actuar sin los estándares éticos y valores preponderantes sin que exista consecuencia alguna de sus actos. Soy escéptica, hemos atestiguado la presencia de funcionarios excelentes en paralelo con otros torpes, incompetentes y destructivos; cada uno nutre sus valores con lo que considera moral.

El discurso del gobierno actual se sostiene en su mayor parte en la ponderación de la ética y la integridad en el servicio público, por ello me llamó la atención que, a pesar de los hechos que acontecían en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no hubo pronunciamiento alguno de la Comisión de Vigilancia y la nueva bancada de la Cámara de Diputados o Senadores, con el fin de conocer los sucesos que sacudían a la entidad fiscalizadora del país.

Las razones son más que claras, no puede levantar la voz cualquiera que tenga compromiso con David Colmenares Páramo; ahí están familiares y amigos de los líderes de las cámaras que conforman el Congreso, a quienes les crearon plazas de estructura envidiables, a cambio de comprar su silencio, complicidad y, por lo tanto, abonan a la impunidad. Esto evidencia el derrumbamiento de una institución que se consideraba sólida, técnica, especializada y un referente internacional en materia de fiscalización superior.

Organizaron su propia red de tráfico de influencias para garantizar los apoyos políticos necesarios, descarrilar las investigaciones y solventar el cúmulo de irregularidades. La ilegalidad y la inmoralidad en su máxima expresión. Hoy las observaciones son irrelevantes, urgen mecanismos de revisión y supervisión del ejercicio del recurso público.

Lo que resiste, persiste

Parece inverosímil que la ASF se convirtiera en una caja de Pandora que encierra todo tipo de trampas, cochupos, negocios, bazofia; ejemplo claro de lo que no se debe hacer en la administración, carente del mínimo rigor metodológico que implica la selección de cada perfil, la aplicación de procedimientos en cada revisión; con una "caja chica" que más bien es la cuenta "licuadora", donde se concentran los gastos y pagos irregulares que exige el auditor, para "dispersarlos y perderlos"; pagos por softwares y tecnología de la información (ti), en adquisiciones ocultas e irregulares.

Tres años estuvo vacante la Dirección General de Inversiones Físicas para hacer lo que les viniera en gana, hasta el escándalo de la auditoría al aeropuerto, hecha sin cabeza ni pies, pues no había director a cargo; compras millonarias nunca antes vistas en la ASF vinculadas a supuesta ti con empresas proveedoras relacionadas con la Estafa Maestra; opacidad en la publicidad de la estructura organizacional, informes de resultados con cifras manipuladas, contratos de servicios inexistentes, falta de transparencia en el sitio web, construcción con recursos públicos de dos "aposentos para el señor"; uno en cada edificio, compras millonarias para una supuesta cocina, aún cuando estuvo cerrado dos años por la pandemia y, por cierto, sin resultados de fiscalización y el atrevimiento mayor de no haber llevado a cabo ni la fiscalización ni la entrega de un informe de resultados.

Pero esto ya no les sorprende a las autoridades, menos les importa el nivel de violencia política y emocional que han ejercido con los auditores profesionales que sí han hecho su labor, a pesar de las presiones y órdenes para "arreglar" observaciones, o descafeinarlas.

Con tantos favores y compromisos pendientes ampliaron la estructura en áreas ajenas a la fiscalización, se prescribieron y siguen dejando prescribir procedimientos resarcitorios que implican perder recuperaciones millonarias; contrataciones indebidas de personal inhabilitado, contrato y adjudicaciones directas con servicios simulados o innecesarios. ¿Dónde estaban y con qué fundamento aprobaron todos los miembros del Consejo de Dirección, antes de que decidieran desaparecerlo, esta serie de actos ilegales?

La casa sucia y las manos metidas en un estiercolero de quienes tienen la obligación de velar por la legalidad. No tienen la palabra completa aquellos que ahora quieren aparecer como próceres de la legalidad. Pesó más su preocupación al percibir que habría un cambio de gobierno inminente y prefirieron "auspiciar" a quien les asegurara limpiar su mugrero, desaparecer evidencias; defenestrar, perseguir, amenazar e intimidar a las personas que estorbábamos a esos intereses oscuros, con una agenda que iniciaba destruyendo todo aquello que simbolizaba su caída ante la proximidad de las elecciones. Esto fue uno de los

detonantes. Puede más el interés económico que el bienestar institucional. Es parte del círculo vicioso del poder que transforma lo malo en "virtudes públicas".

El tamaño de la intervención no tiene referente, buscar una explicación racional sería infructuoso, tenían una misión impúdica y consignas directas que cumplir; interfirieron con las auditorías forenses, evitaron y obstaculizaron las investigaciones que se realizaban para documentar el desvío y la colocación de millones, entregaron información y comprometieron los resultados de las revisiones.

Pareciera destino ineluctable, las compras públicas en México aparecen como sinónimo de corrupción, el combate a este infortunio es casuístico y no sistémico; no sirve para desarticular las redes. Sin esperanza para inhibir y protegernos de la arbitrariedad, la negligencia y el abuso del poder, no se percibe un escenario político que permita avanzar. La condena ciudadana y moral no es suficiente.

Tal como apunta Jesús Silva Herzog-Márquez:

el cinismo le permite a este tipo de funcionarios desplazarse por el mundo, sin vergüenzas sin asomo de incomodidad, una indecencia que no aflige. El cínico no es un ignorante. No es ciego a las categorías morales. Es indiferente a sus trazos. El cínico no desconoce las fronteras que separan lo correcto de lo incorrecto, se siente libre de cualquier remordimiento cuando tuerce principios en su beneficio. El político lo dice abiertamente, negoció con los nuevos dueños del poder y obtuvo grandes beneficios. Decidió entregar una porción importante de sus legisladores a la nueva mayoría y lo festeja como una transacción redituable. Bajo cualquier punto de vista, es un acto de corrupción parlamentaria.

No es poco lo que cedieron. Pobres de las instituciones y pobres de nosotros.

La euforia de la corrupción

Si hay un grupo inmoral en la ASF es porque quienes intervinieron en su elección están bien representados y lo encarnan perfectamente, a extremos tales de cometer una serie de acciones ilegales que les garantizaban impunidad y protección futura en el entorno de la fiscalización, responsabilidad administrativa y penal.

Por ello, los diputados que después resultarían "beneficiados" proclamaban jubilosos, en junio de 2018, en la primera entrega del Informe con el nuevo auditor: "Nos preocupa que la figura de auditor se adapte a intereses mezquinos y no a los de México" (tenían una bola mágica y pudieron ver el futuro inmediato que le deparaba a la ASF), exclamaba con rabia y fuera de sí el entonces diputado del Partido Acción Nacional (pan) y secretario de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Eukid Castañón.

"La renovación institucional no es propiedad de una sola persona ni sus resultados son de una sola persona", "no más emperadores y emperatrices que utilizaron su función como garrote", "se castigará con toda la fuerza de la ley la corrupción", "reitero, no habrá

mezquindades ni para la falta de ética de aquellos exfuncionarios que sin sustento han generado declaraciones, que lo único que vieron fue un botín personal, no habrá espacio para este tipo de funcionarios", "sí habrá la necesidad de auditar su gestión y poner sobre ellos todo el peso de la ley", Castañón sacaba espuma por la boca.

Recuerdo que este personaje se sentó a mi lado durante mi entrevista en el proceso de selección para la ASF; no lo conocía, pero noté en su mirada una profunda ira contenida. Cuando acabé fui a la oficina de Marko Cortés, con quien yo tenía una cita, y en la sala de espera estaba Gregorio Guerrero, también aspirante que iba al mismo fin; su hijo era el secretario particular de José Antonio Meade y por eso lo vetaría el pan.

Entonces entró Eukid, se anunció con Marko y se sentó a mi lado con una mirada retadora, así que le dije: "Lo veo molesto". Su respuesta fue: "Quiero que me diga por qué me está investigando". En ese momento salió Marko de su oficina a recibirlo con gran júbilo y se dieron un abrazo de esos que destrozan los pulmones de tanto golpe simulando afecto, al tiempo que le dijo: "¡Cachorro!, ¿cómo estás?". ¡Hasta parecía que se querían de verdad! Imagino que entró a leerle la cartilla en relación con mi persona.

En 2017 realizábamos una auditoría en Quintana Roo y los procedimientos incluían la revisión a los servicios por la elaboración de libros blancos, otro de los rubros de estafas, donde durante más de 30 años un grupo de despachos vinculados entre sí se ha visto beneficiado con esquemas de colusión, así que solicitamos la información y resultó que estaba su despacho.

Así es: cobraba como diputado del pan y como secretario de la Comisión de Vigilancia de la ASF; pero al mismo tiempo brindaba servicios de consultoría, solventación y contabilidad vinculados a la fiscalización; elaboración de libros blancos y auditoría, que vendía a gobiernos y municipios; entonces entendí su furia, pero también su flagrante conflicto de interés y falta de ética, pero ¿a quién diantres le interesa la legalidad en este mercado político?

En ese momento me vino a la cabeza la vinculación de sucesos y actores de esa opereta, y constaté que el designado sería Colmenares, pues necesitaban a alguien de su mismo nivel de inmoralidad. Tal para cual. No podían permitir que siguiéramos interfiriendo en sus negocios.

Pobre hombre, por eso se desquició; pero déjenme decirles que se la cobró muy bien, pues operó con los diputados federales de Puebla con Moreno Valle para sumar los votos que faltaban para ser electo Colmenares, es decir, si esa fracción del pan no hubiera votado a favor, no se hubiera alcanzado el consenso y habría sido el nuevo Congreso quien nombraría al auditor y la historia de la ASF sería otra. Esta experiencia permite apreciar la condición *inhumana* y los aspectos psicosociales de la miseria política.

Meses después, el 14 de junio de 2018, le pregunté a un panista de muy alto rango de "dónde había salido" el tal Eukid, y su respuesta puntual fue: "Es un mafioso, el brazo armado, negro, corrupto, ruin y sin escrúpulos de Rafael Moreno Valle. Y no es electo, es diputado federal saliente, amigo íntimo de Luis Maldonado. Un gatillero profesional. Por eso me enoja y al mismo tiempo me apena lo que se dice del pan. Era un don nadie, un corruptito que ayudaba al alcalde de Cancún. Su vida es de escándalo. Investiga un poco y verás. Lo desprecian, pero no se le enfrentan". "¿Por qué lo aguantan?", le inquirí. "Porque están con él Damián Zepeda y Marko Cortés".

En la gestión de Miguel Barbosa, en Puebla, hubo acusaciones públicas que lo relacionaron con el control del aparato de espionaje del gobierno; fue señalado por enriquecimiento ilícito, extorsión y lavado de dinero; entiendo que actualmente se encuentra preso en Puebla.

Un proyecto democrático exige instituciones con dignidad y las herramientas para alcanzar resultados, excluye a la corrupción y tiene como finalidad el bien común y el respeto a la dignidad humana. Los linchamientos y pleitos políticos son caldo de cultivo para el fracaso; se ve reflejado en una ausencia legal y técnica para ejecutar investigaciones por corrupción y otros delitos.

Totalmente ineficiente y rebasado, el modelo de fiscalización entró en crisis y se requiere un cambio de paradigma serio que permita blindar las instituciones de actos de corrupción, injerencias políticas y partidistas tanto a nivel federal, como estatal y municipal, en los tres poderes.

En el equipo de la DGAF fuimos precursores de las indagatorias, es decir, provocamos la investigación y le dimos forma respaldados en fuentes de prueba para que la autoridad estuviera en posibilidad de judicializar la carpeta de investigación y revelar la teoría del caso, maquinación deliberada y el *modus operandi*.

Aquí viene una parte interesante, el perfil y la calidad amoral de la persona que me sustituyó permite conocer otra faceta de la condición humana que revela hasta dónde la falta de escrúpulos y dignidad profesional permite alcanzar lo que nunca se había pensado. Ahora es muy difícil intentar hablar con un funcionario en la ASF que no intente perjudicarte o sobornarte, comentan los auditados, manada de protervos dedicados a la persecución, intimidación y la fabricación de expedientes.

Cuando el entonces contralor interno de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Miguel Ángel Vega García —aquel que "resolvió" que no había responsabilidades administrativas y que fue bien colocado en el gobierno de Veracruz en un estado que supuestamente "no tolera la corrupción", con Humberto Valverde Prado, coordinador de asesores—, mandó llamar a su oficina a César Castellanos Galdamez, subsecretario de Desarrollo Urbano y vivienda en la SEDATU, quien a principios de diciembre 2016 había enviado un oficio a Rosario Robles para informarle su preocupación por acciones

del oficial mayor que había destinado recursos millonarios del programa de infraestructura a fines distintos a los establecidos en las reglas de operación, y que de los 5 445 millones de pesos reportados como ejercidos en 2016, 53% se destinaría "para otros conceptos", sin su autorización.

La cita fue para instruirle: "Hay que retirar el oficio que mandaste porque estás exhibiendo a la secretaria, la estás afectando", y contestó: "No voy a retirar nada, y si tú no procedes es tu bronca, no es la mía, porque te avisé que no veía que estaban ejerciendo el dinero; no voy a retirar el oficio". Es maravilloso ver al gobierno como un negocio, en donde quitan y ponen a placer los "muebles" que les estorban. Este contralor ya había definido con el oficial mayor el proceso para ejercer el dinero que estaba en "pleito", habían validado su ejercicio distinto a los fines del programa, ¿con qué facultades?

Grave omisión en el deber de cuidado del contralor que sustituyó en el Órgano Interno de Control (OIC) a Aurelio Alvírez Orozco, quien se convirtió en una piedra en el zapato, porque sí les había puesto ojo a estas contrataciones irregulares, así que Emilio Zebadúa le dijo a Robles que vería lo del nuevo contralor con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y que ya se lo habían autorizado. Los que estorbaban, de inmediato los removían con un chasquido de dedos a los secretarios.

Así operaron la cancelación de convenios cuando se fueron de la Sedesol a la SEDATU; uno se preguntaría para qué cancelarlos, si supuestamente eran los servicios requeridos y necesarios. Se llevaron una partida de recursos importante, y siguieron gastando dinero en contrataciones simuladas con el sismo, millones del presupuesto asignado a las secretarías. "¿Qué quieres que haga si es instrucción del oficial mayor?", respondían a los reclamos los delegados estatales que vieron esfumar su dinero.

Lo que no acabamos de entender es la aplicación de justicia selectiva. Ahí tenemos a otro gran operador de la SEDATU, Juan Carlos Lastiri, que fungió y firmó como responsable de varios de los contratos fachada, entre ellos el de Tlaxcala, del que tienen dos o tres versiones del mismo documento; yo creo que se les olvidaba si ya lo habían fabricado o no y volvían a imprimirlo, la cosa es que no aparece por ningún lado.

La mayoría de los cercanos a Robles le insistían que cambiara al oficial mayor, pero "ya no puedo hacer más porque ya se le dijo a ella y no quiere", me comentó un funcionario de alto nivel en 2017, y nuevamente a inicios de 2018. La otra cuestión es que Miguel Ángel Osorio le había prometido a Robles que sería senadora y posteriormente jefa de Gobierno, y ella estaba ilusionada, segura de ello. Lo dejó en claro con varios de sus allegados. No permitiría "nuestra intromisión" para que se estropeara el proyecto. Pues se le cayó.

Así que la avalancha de resultados y el cambio de gobierno que la ciudadanía anhelaba, harta de tanta corrupción, se vino encima y adiós proyecto. Se lo acabaron de confirmar en un viaje antes de despegar de regreso de Oaxaca, donde informaron que la reforma a la legislación de la Ciudad de México no permitiría que fuera jefa de Gobierno quien ya había

desempeñado el puesto; eso le dolió muchísimo, duro golpe a lo que acarició por años, pero esperaría como consuelo la senaduría.

Es mucho el descaro y el cinismo que se exhiben ante la traición a los principios constitucionales, a la responsabilidad, a la ley y a la ética pública, en una cultura compartida que les permite introyectar sus propios "valores", para justificar y racionalizar su actuación. Con este panorama podríamos pensar: "Si quieres ser feliz, olvida aquello que es imposible cambiar".

Eréndira y la 4T

El poder transforma las relaciones. Andaba en mis luchas cotidianas a inicios de 2020, en el Instituto Nacional de Neurología, cuando arribó una turba de unas 20 personas de lo que parecía la entrada triunfal de personajes de una novela, rodeados de medios de comunicación, haciendo su aparición una especie de ejército de "gladiadores"; me enteraría después de que era una visita sorpresa de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira, y Jorge Alcocer, secretario de Salud, para "atender supuestas denuncias por falta de suministros y equipo", revisión realizada sin el menor decoro a la investidura de la autoridad ; luego supe que habían destituido al director general del hospital.

Así nada más, fui testigo ocasional del par de funcionarios de primer nivel que tenían un plan preliminar y que incitaron un atropello a la dignidad de la institución y de los profesionales de la salud que ahí laboran, un avasallamiento sin ton ni son, con declaraciones temerarias, acusando corrupción y malos manejos, sin una sola evidencia, y sin haberse entrevistado con todas las partes, o llevado a cabo investigaciones o auditoría pertinentes, junto con un amilanado titular del OIC, Óscar Rodríguez, que callado observaba y avalaba una serie de sandeces que merecerían un serio análisis de sus responsabilidades, porque a todas luces el montaje de la visita estaba fabricado.

Qué coraje y pena ajena me dio. Ninguna institución debe prestarse a los ajustes de cuentas o venganzas políticas. Era toda una puesta en escena para tener justificación a una serie de procedimientos administrativos y penales iniciados, así nomás, derivados de las "intempestivas y extrañas denuncias", echando vuelo en medios. Patético.

Así las cosas, era tan igual a los anteriores titulares, me dije, mientras era testigo de un despliegue de arrogancia, carros, medios, fotógrafos, declaraciones públicas, expresando opiniones personales sobre quienes se encontraban en procesos administrativos, con calificativos públicos que la denigraban más a ella que a los justiciables, qué necesidad de estas conductas tan repudiadas por los ciudadanos, promover las fotos diarias de sus reuniones con funcionarios faroleando, con sus historias de incompetencia y su falta de resultados que precedía a la SFP.

La dignidad de una institución médica reconocida y respetada que por años ha brindado servicios de calidad se veía denigrada, pisoteada, sin el menor recato de parte de ambos

secretarios, que de la noche a la mañana "descubrieron" que había manejos indebidos y que, hasta hoy, por cierto, no hemos tenido mayores noticias.

Mientras crecía mi indignación, no pude más que recordar las similitudes con los hechos irregulares denunciados en la ASF, un allanamiento, y otros actos criminales justificados por "denuncias recibidas", qué nivel de abuso de poder, "aprendieron rápido su lengua", pensé, y recordé al psicólogo Jonathan Haidt, quien dice que "las personas, al fin y al cabo, se unen a bandos políticos con los que comparten narrativas morales, y una vez que han aceptado una narrativa particular, se ciegan a otros mundos morales alternativos".

Jonathan Haidt, en su libro *La mente de los justos,* explica que las "acciones infames son formas en que pequeños grupos de hombres canalizan los resentimientos y las fricciones dentro del grupo en una fiesta de caza, de fortalecimiento grupal, coronada por una larga noche de cantos comunales de celebración".

Como corolario, el Instituto Nacional de Neurología, el mismo al que me he referido, cerró en 2021 con un subejercicio por 26 millones de pesos que corresponde en 32% a materiales y medicinas, y 68% a mantenimiento de equipos; si esto no es un acto criminal en estos tiempos de urgencias y necesidad de atención médica no sé qué es. La SFP no dijo ni hizo nada. Deberían iniciar un procedimiento por responsabilidades administrativas a todos los involucrados en esa cadena de omisiones. Será en otra vida.

Así era el estilo de Irma, gustaba de aparecer en medios, altercar y reñir en redes, tenía la necesidad de hacerse patente, un reconocimiento que lejos estaba de ganarse mediante el Palacio Nacional. Carente de cautela política, no halló cómo remediar la indignación creciente de quien habita en el Palacio, y así fue colmando el vaso y el ánimo de quien, por afecto hacia su padre, le tendió la mano al nombrarla titular de la SFP y se convirtió, más que en funcionaria, en una "militante desquiciada", con desplantes y provocaciones, actuando con una ceguera irracional que le hizo perder la lucidez de lo que debió ser su conducta, bajo los principios éticos que rigen el servicio público.

Irma se perdió en bravuconerías, se metió en embrollos partidistas, descalificaciones con un lenguaje Inapropiado, denostaciones a los que consideraba "enemigos políticos", y otras acciones bravatas contra quienes eran señalados con el "dedo flamígero" en las mañaneras, pésima actuación, con un lenguaje inapropiado, de una funcionaria con el deber de conducirse con respeto, profesionalismo y conforme lo establecen los principios constitucionales.

Lo que esperábamos los ciudadanos, hartos de todo lo anterior, era que la secretaria tuviera el aplomo y cuidado de limpiar las escaleras de la "casa", de arriba para abajo, y de abajo para arriba, mas no que actuara similar a los anteriores, ayudando a los "cuates y afines"; cuántos de los que nombró al interior de la SFP como en el OIC, de los que ni siquiera verificó antecedentes, sirvieron de cómplices y encubridores en la Estafa Maestra y actos irregulares de la ASF, pero fueron cobijados por ella.

Lo mismo ocurría con otros implicados en los graves actos que sucedían en la DGAF, que eran tan bien recibidos y apapachados. Menuda sorpresa nos llevamos con la elección y nombramiento de varios contralores y titulares, que llegaron con las viejas mañas aprendidas para congraciarse con los del "poder"; muchos de esos nombramientos más bien debieron ser el inicio de procedimientos administrativos y tendrían que rendir cuentas de sus actos.

Por ejemplo, nombró auditor del OIC de la SHCP al "ilustre" Romero Gudiño, funcionario priista, quien, en su cargo como titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), omitió atender las denuncias sobre los graves hechos en la ASF y se prestó a fabricar sendas denuncias y "expedientes de investigaciones" en contra nuestra. Lo que menos le interesó indagar a Eréndira fue el papel indigno y la historia que le precedía, menos pensó en entrevistarlo para conocer la verdad de lo sucedido antes de colocarlo en la "mejor pagada" contraloría del gobierno federal, con un claro conflicto de interés.

Alguien que en su vida ha sido un verdadero auditor, vinculado a funcionarios a quienes protegió, con quienes organizaba eventos junto con el pandillero mayor de la ASF para presentar sus libros; en fin, falta de empatía, asegurar elegir a los mejores perfiles para proteger de las tentaciones a quienes intentaban "hacer negocios, usar y apropiarse de los recursos públicos", anunciaba el triste futuro de la secretaria Sandoval.

Cercanos a ella comentaban sobre su falta de oficio y el desconocimiento en la materia de auditoría, fiscalización y responsabilidades. Asimismo, sobre la falta de un programa de auditorías robusto, o dotar de recursos y capacitación idónea con las herramientas necesarias a los auditores, una supervisión real y apropiada para evitar los hechos de corrupción que se sucedieron uno tras otro, los que se han conocido y los que nos falta por conocer.

También es de destacar la incompetencia de los nombramientos, las compras directas sin sustento ni justificación, el dispendio de recursos en muchas dependencias, mientras los auditores estaban sin pan ni agua. Estos tienen que llevar de sus recursos un paquete de hojas al mes, su papel higiénico, carecen de computadoras y espacios dignos, perciben sueldos ínfimos. Además se les sentencia que de ahí agarraren sus viáticos porque no hay dinero para eso.

Déjenme abordar las trampas que hacían para contratar: a los auditores de campo les pedían llevar, además de sus cv, otros dos "a modo" para presentarlos en un comité de adquisiciones y que fueran adjudicados por honorarios. No tengo palabras que no suenen altisonantes para estas conductas aberrantes de quienes estaban obligados a cambiar el rumbo de la Función Pública. Qué indecencia.

"No es lo mismo ser borracho que cantinero", reza un dicho. Al inicio del gobierno, en 2019, se empezó a conocer una serie de inconformidades y quejas donde asomaron pleitos a muerte entre los "oficiales mayores o tuaf y los contralores", era una necesidad de

demostrar quién era el más fuerte en lugar de ponerse a trabajar cada uno en lo que le correspondía; desobedecían y no hacían caso al titular.

Qué desfachatez, dado que, recordemos, el titular de administración, léase "oficial mayor", por disposiciones superiores era y es nombrado por un área de la SHCP cercana al presidente, sin que puedan meter la mano los titulares, y los OIC eran nombrados a modo, según acordara la exsecretaria Sandoval.

¿A qué me refiero?, si quería congraciarse, como lo hizo con el tal Urzúa, nombraba a quien le indicaba el titular, al viejo estilo que permitió el terrible desvío de recursos que hemos padecido, como sucedió entonces con el titular del OIC en la SEDATU y la Sedesol, y el mismo OIC de Meade, y se iban con los titulares, pues eran sus cercanos.

Cuando Germán Martínez Cázares era titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se expuso hasta dónde llegaba el nivel de los tuaf cuando en una llamada me pidió ser contralora, por los líos que se suscitaban al interior, el golpeteo con las compras que estaba provocando la parálisis institucional y el desparpajo del OIC que ya había cambiado dos veces, me parece recordar; en esa llamada telefónica le dije que no creía que fueran a aceptarme, dado que era muy claro el "amiguismo y protagonismo de Irma Eréndira y Colmenares".

Le dije que seguramente yo les sería incómoda porque no aceptaría ninguna instrucción contraria a derecho o que intentaran incrustarme en el equipo auditor a alguien sin el perfil o conocimientos, para no hacer nada. "Exactamente es lo que necesito, quiero a alguien que ponga orden y que te traigas a tu equipo, que me ayudes y asegures que no haya corrupción, porque están muy feas las cosas y estos tipos no respetan la autoridad, si tengo que hablarlo con el presidente AMLO, lo haré", dijo Germán.

Le agradecí apenada porque escuchaba su desesperación y la impotencia por esos funcionarios incrustados que no sabían respetar la autoridad y abrieron la puerta al desorden, al creerse intocables por ser cercanos y nombrados directamente por el "preciso", y su lealtad mal entendida, que persiste hasta hoy, es que no reciben indicaciones ni se subordinan al titular. Ni idea de la magnitud y responsabilidad de la administración pública.

Qué dilemas éticos debieron pasar por la cabeza del hoy senador, y qué mal que no se planteara ante el gabinete la inoperancia de una institución, cuando a lo que se dedican los administradores es a tratar de obstaculizar el desempeño, en una clara competencia para intentar subordinar a los superiores. Eso me hace pensar que no les tienen confianza a los titulares porque, de otra manera, debieran ser responsables cada uno de sus cabezas y grupo de trabajo.

Ahí la paradoja. Se sabe que en gobiernos anteriores había corrupción y funcionarios deshonestos en puestos clave, lo que en el actual gobierno supondría nombrar servidores con perfiles idóneos y éticos, pero resulta que no se fían de los titulares; es decir, de su

propia gente, y les incrustan a los administrativos. El gobierno vive en la desconfianza de unos con los otros, las buenas intenciones no son suficientes en este estilo de hacer política y propicia corrupción, tampoco ayuda ni a la operación ni a la vigilancia y les resta autoridad y responsabilidad a los titulares.

Es entonces cuando se generan cotos de poder, resentimientos y se arrogan privilegios. Falta la conciencia de la responsabilidad al elegir el mejor equipo de trabajo, rendir cuentas y dar resultados, no se requieren más problemas sino soluciones, acompañar y allanar el camino para el buen gobierno. Estamos lejos de instituciones con dignidad, operatividad, resultados y conocimiento.

Nuestro desencanto no acaba. A los pocos días, el ahora senador Cázares renunció al IMSS, no me había yo equivocado, imagínense que ahí hubiéramos estado. A la calle todos, simplemente porque así opera la administración. No hay calidad ni respeto profesional sustentado en conocimiento, competencias y habilidades.

La política puede llegar a ser tan sanguinaria como lo es una escena del crimen, solía decir un viejo criminólogo, lobo de mar. No existe la empatía, no importan las vidas humanas, con una orden pueden hacer un linchamiento tumultuario, no hay misericordia y siempre privilegiarán sus propios intereses porque no respetan ni sus propios códigos.

Otro caso que recuerdo es el del OIC que habían nombrado en la SEGOB, ni idea tenía de lo que es la administración, incluso provenía del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), no tenía nada de experiencia previa, porque se pagaban prebendas y favores a los cuates para nombrarlos contralores, y luego pedía a gritos la exministra Olga que se lo cambiaran. Sigue uno lamentándose de estos funcionarios sin escrúpulos que se venden como oro molido, cuando no son más que vidrio refresquero.

Igual sucedió con el titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) y simplemente los intercambiaba, pero en una de esas le dijeron: “Oye, secretaria, si te pidieron que lo quitaras por inepto, ¿para qué me lo mandas? Aguántalo tú”. El perfil era lo de menos, era quedar bien con titulares afines y no dejar desempleados a los recomendados, aunque no entendieran nada.

Con la pandemia por covid-19 no sabían los contralores qué hacer y en lugar de priorizar el acompañamiento al ejercicio del gasto en el corazón de las compras con riesgos de corrupción se dedicaron a revisar el plan de austeridad. Me vi rebasada por la indignación.

Así, no se aplicó una metodología de ingreso para garantizar la integridad y el conocimiento técnico de quienes ingresaron como OIC y en otros puestos internos; gozar de reflectores y zalamería al viejo estilo les venía bien. Los perfiles técnicos los dejaron de lado. Por la ineficacia llegaron una serie de quejas al presidente sobre la inoperancia y parálisis de las instituciones, acusando a las contralorías de entorpecer y obstaculizar la operación de las dependencias y entidades.

El ungimiento de Roberto Salcedo como secretario, en sustitución de Irma, no me sorprendió; más bien se había tardado, y fue precedido de un hartazgo del presidente López Obrador. Meses antes comenzó a pasar por la cabeza del presidente removerla, incluso había tenido un par de reuniones molesto con ella, donde había puesto sobre la mesa su renuncia, pero él, fiel a su estilo, sería quien decidiera cuándo, ya que le ocupaban otras cosas más inmediatas y no tenía claro a quién colocar, dado que se planteó que fuera sustituida por una mujer, pero pesaba más su cercanía con Salcedo, cauto astuto y conocedor del lenguaje burocrático, de tal modo que podría reorientar una secretaría que se volvió un dolor de cabeza.

En el servicio público, la puerta de entrada es la misma que la de salida, así que el presidente lo citó un par de días antes del 26 de junio, ya había tomado la decisión, estaba realmente molesto con Irma Eréndira por varias cosas: "Su estilo pendenciero que se había ido incrementado notablemente con motivo de la elección del candidato a gobernador en Guerrero, donde más bien actuaba como una militante agresiva, desbocada, pues", afirmó el presidente. Parecía más bien presidenta de Morena, no secretaria, y eso le estaba causando a él y al interior de su partido muchos problemas.

Además, ella se había puesto a inhabilitar a exservidores públicos, gente que ya estaba en la cárcel, así porque sí, y por 10 años, sin sustento ni soporte legal, ¿para qué hacer eso? Yo imagino que se refería a Robles. Conforme lo platicaba se manifestaba visiblemente más "encabronado", dirían en tierras sureñas, "para qué iniciar procesos a más personas que ya están en la cárcel, me lo han informado y no tenía caso. Igual no entendió por más que se lo dije", aseveró AMLO.

"También empezó con un estilo de perseguir, con la evolución patrimonial, a ese mismo tipo de gente de antes, cuando yo soy el que se iba a encargar de los del pasado y ya tendría ella que estar atendiendo que en este sexenio las personas que están no metan la mano en la bolsa pública", "y por andar en pleitos en redes dejó de un lado su función, ¿a qué hora trabaja?; ahora tuve que salir a poner orden; también las quejas de los titulares que me vienen a ver desesperados, acusando que la gente de contralorías internas se habían vuelto un obstáculo y se querían meter en la operación misma de las dependencias, muy pagados de sí mismos, que no ayudaban y sin ningún conocimiento opinaban, observaban, recomendaban y paralizaban la actividad".

La desobediencia institucional y el sesgo en la actividad auditora para favorecer de alguna manera la persecución a unos y las indulgencias a otros, resultado de la falta de una estrategia para prevenir, disuadir y detectar corrupción, influyeron, sin duda. Aparte, "le encantaba estar en redes, peleándose con todo mundo".

Así que la decisión estaba tomada, le dijo a Salcedo que estaba dispuesto a que lo pensara, a lo que le respondió que nada tenía que pensar, y claro que aceptó. Entonces AMLO le dijo que no se lo fuera a comentar absolutamente a nadie, porque ella no sabía y era capaz de

hacer algún comentario y por su enojo tratar de "golpearlo o desacreditarlo" antes de ser nombrado. Como dice el refrán: "Conocía el cebo de su ganado".

"Quiero que las cosas caminen", dijo AMLO. Así que lo citó para el lunes 27 de junio de 2021, a las 10:30 a.m., en el Palacio Nacional, y a ella a las 10 a.m. Salcedo llegó con anticipación suficiente y al anunciarse en la entrada el guardia le informó que ya estaba también la secretaria, así que hizo tiempo caminando en los pasillos del Palacio para no encontrarse cara a cara con ella y ser imprudente. No tenía idea de cómo se daría el cambio, pero al filo de las 10:20 a.m. llegó a la antesala de la hora fatal y ahí la halló sentada; ambos se saludaron.

Él fue frío, pero ella sorprendida le preguntó qué hacía ahí, él le respondió que lo habían citado a las 10:30, a lo cual ella agregó: "A mí a las 10:00", y en un reclamo oculto le inquirió: "¿Para qué lo citaron?", "No lo sé, nunca le pregunto al presidente para qué me llama, intuyo que por asuntos de mi encargo", respondió hosco.

¿Sabría ella que él era el sustituto? "Está un poco retrasado el presidente", le argumentó; entonces Roberto salió a dar una vuelta para no sentir ese momento incómodo o de pena ajena. A los 10 minutos lo mandaron llamar, regresó y entró a la oficina; se sorprendió, pues ya estaban las cámaras y todo el escenario listo y puesto. Como se vio en el video de debut y despedida.

AMLO estaba muy enojado, demasiado; no quiero ponerme en los zapatos de ella, pero creo que le faltó prudencia para todavía ponerse a leer su historia de supuestos logros; aquí aplica la máxima de hay que saber estar, pero hay que estar más preparado para no estar.

Saliendo de ahí, ella dijo: "Licenciado, vamos a mi oficina", y él le contestó que no, que tenía cosas que hacer y que mejor cuando estuviera lista la entrega-recepción le avisara y se veían para que ella le dijera qué pendientes había. Pienso que el colmillo viejo de Roberto sabía que podría ser capaz de no saber mantener un bajo perfil, quizá convocar a medios, qué tanto no podría hacer impulsivamente.

Más allá del sentido común, ella le expresó que el jueves habría una reunión de contralores en Oaxaca y le dijo: "¿Pues vamos a ir a Oaxaca, no?". O sea, ella quería seguir operando. La prudencia es una de las virtudes más apreciadas en el servicio público, más cuando los mensajes son más claros que nada. Él le respondió: "Por supuesto que no voy yo, incluso les dije que fuera virtual por los riesgos de covid".

El lenguaje corporal y verbal del presidente nos dijo todo lo que se guardó y que ella no atinó a interpretar. ¿Llevaba preparado su discurso, pensando en justificar los supuestos resultados y seguir aferrándose al cargo? No lo sé, pero habían pasado semanas sin que fuera convocada al Palacio, lo que no sabía es que se había decidido ya la sustitución. Creo que por eso su nerviosismo patente. Generó escándalos pensando que el poder es eterno.

Se les olvida a los funcionarios que el que manda, manda, y hacen todo lo que esté en sus manos para mantenerse en la jerarquía del poder que los cautiva tanto. No tuvo tiempo de dar ni de pedir explicaciones, metió en líos al presidente con persecuciones dirigidas sin ningún sentido ético ni de justicia, que ya no tenían caso, incluso con particulares a quienes defenestraba públicamente; le causó un daño porque lo etiquetaron como el persecutor. No pude más que recordar la escena que presencié en el Instituto de Neurología y que la rueda gira para todos.

A la fecha no se perciben cambios en relación con la prevención y combate a la corrupción. necesitamos auditores de verdad con oficio, perfiles idóneos y honestos, generar capacidades de investigación, asegurar su independencia y objetividad en el desempeño de su actividad; impulsar una actualización permanente, contar con el equipo y herramientas de trabajo dignas.

Son competencias, habilidades y destrezas que permiten asegurar las mejores revisiones, pesquisas confiables, ética, integridad individual y organizacional; ya no hay tiempo para indignarnos por el pasado, los ciudadanos estamos hartos de esperar resultados positivos y públicos.

Se requieren equipos élite de investigación. La verdad siempre va a estar ahí, solo hay que descubrirla y revelarla. El éxito sería que los parámetros de corrupción en el país fueran menores. Estamos en los últimos meses de respiro del gobierno antes de que comiencen a dedicarse a la elaboración de las entregas-recepción. Habría que apreciar que nada de fondo ha cambiado al interior de las instituciones.

En la SFP, al igual que antes, no se publican ni conocen los informes de auditoría, nada es público; CompraNet se cae un día sí y otro no, la información que contiene no está completa, carece de fiabilidad y, por lo tanto, de calidad; en una ocasión se dijo que se había bajado el sitio para mejorarlo, pero la realidad era otra, apenas se habían dado cuenta de que los datos y el sistema era operado por un externo del que ni idea tenían a casi cuatro años de gobierno.

Solo en estas instituciones suceden esas cosas raras, al igual que el sitio web de la ASF, que se ha caído varias veces, casualmente cuando aparece un tema de corrupción o de crisis. Con la paga que han derrochado en los años en "estudios" para mejorar CompraNet, se hubiera construido, adaptado, comprado, adquirido algo de gran calidad. Aunado a ello, hay un desorden generalizado en la administración pública y esto propicia riesgos de corrupción.

Dejo aquí un "dudario", del cual mantengo mis propias hipótesis: ¿por qué las universidades y los entes estatales se eligieron para el saqueo? ¿Cuál es la responsabilidad por negligencia, encubrimiento y omisión en su deber de cuidado, en las instituciones obligadas a actuar, como la PGR, la UIF, el SAT, el CISEN, la SFP, la SHCP? Después de todas las revelaciones, ¿qué acciones realizó la SFP, la SHCP y las distintas dependencias involucradas para evitar que se repitan hechos de esta magnitud? ¿Por qué se permitió el saqueo en Seguridad

Alimentaria Mexicana (Segalmex) y se protegió al entonces titular? ¿Quién regula y supervisa el servicio de transporte de valores como proceso preventivo y disuasivo? ¿El desvío de los recursos asignados para combatir la pobreza y desarrollar programas de salud deberían ser considerados delitos de lesa humanidad? A los ciudadanos también se nos levantan las escamas, inermes contra el abuso del poder y la corrupción.

Reafirmo lo dicho en capítulos anteriores, las instituciones fiscalizadoras, de control y vigilancia están rebasadas; se convirtieron en una bolsa de colocaciones para los cuates y recomendados. Hay que romper paradigmas y dejar de estar remendando los trapos viejos en que se convirtieron; así se ha ido el sexenio, reformando reglamentos, cambiando nombres, logos y papelería.

Reflexiones finales

La historia no tiene reversa. Los acontecimientos narrados han sido políticamente demoledores. Intentar desacreditar con declaraciones irónicas y deplorables el trabajo de quienes antecedieron y que obtuvieron resultados históricos y relevantes en la ASF ha sido una constante desde la llegada de ese grupo político.

En mi camino he coincidido con excelentes auditores, funcionarios, gobernadores, todo ellos con un verdadero compromiso en la función pública. Nos ha unido el valor, la ética y la convicción de que algún día las cosas habrán de mejorar. Los pilares que aseguran la estructura de un Estado democrático implican educación, gobernanza, rendición de cuentas, fiscalización, aplicación de la ley y sanciones. Ciudadanos y servidores públicos valientes, preparados, éticos, perseverantes, sin espacio para la mediocridad. Investigaciones efectivas, rápidas, con un marco normativo que sí sea aplicable.

La estigmatización que rodea los temas de política y corrupción deriva de las estructuras partidistas que los posibilitan y los mantienen mientras celebran la debilidad de las instituciones. Que invocar la ley y la justicia no dependa de los contactos políticos o de nuestro nivel económico para acceder a la justicia. Ya no. Plantear el futuro inmediato para lograr una coordinación compartida y ética con intercambio real de información entre las instituciones que deban involucrarse. La resistencia para hacer lo correcto de quienes están obligados a rendir cuentas y actuar conforme a derecho merece enviar un mensaje con actos simbólicos y contundentes para erradicar la corrupción.

Sin castigos ejemplares, se genera una resistencia al cambio de conducta y se refuerzan los comportamientos deshonestos. Los errores en el servicio público son entendibles, pero la intencionalidad para desviar recursos encauzados a programas de salud, pobreza, educación, vivienda, vida digna, ha tenido costos muy altos en las vidas. Eso es imperdonable.

El liderazgo ético en las distintas instituciones de fiscalización gubernamental está en decadencia. Sus valores institucionales se trastocaron, ahora son débiles, desarticulados y caracterizados por historias de actos irregulares cuasicriminales.

Estos relatos coloquiales de redes y entretejos del poder tras bambalinas muestran el entramado existente en las relaciones y las decisiones políticas que mueven dinero y poder, y revelan aspectos interesantes de diversos personajes. No cualquiera puede llegar a esos niveles sin tener "las características patológicas que el puesto requiere", la capacidad es lo de menos; los grandes intereses, "historias de amores y desamores partidistas", sus rencores, reencuentros, utilitarismo y servilismo, los pecados capitales reflejados en su devenir político; la oportunidad siempre llegará en el momento más inesperado para saldar cuentas pendientes.

La desesperación del grupo de poder en la agonía del sexenio más corrupto conocido en nuestra historia reciente desencadenó una serie de actos de orden delincuencial, verdaderamente alarmantes, con la incubación de grupos políticos antecedidos por una historia de irregularidades que terminó por debilitar no solo a la ASF, sino la significancia de la fiscalización en México, que hoy en día es nula por decisión propia de quienes estarían obligados a fortalecerla, y me refiero a los Poderes de la Unión y cada uno representado en los estados de nuestro país.

La integridad es la cualidad de poseer y adherirse firmemente a altos principios morales o estándares profesionales. Cuando la vida interna de las instituciones en todos sus niveles logre armonizarse con la integridad de quienes las viven, se reflejará en resultados. La ética debe ser el eje transversal que cruce por toda la administración pública.

Pero no todo es malo, aunque tengo la proclividad de ver solo la parte pesimista. Grandes y entrañables colegas, amigos y afectos, sirven y honran el servicio público en México. La vida se rige por normas, esperemos que algún día se respeten y mejore la impartición de justicia, que prevalezca la legalidad. La justicia es hija del amor y va más allá de las leyes del hombre.

La degradación de las instituciones pasa en un eje transversal, desde la cabeza, hasta quienes las integran. En el caso de la ASF, se tejieron las alianzas y pactos en el peor nivel de complicidad del régimen. La deshonestidad ha calado en el alma del país mientras el espíritu de la corrupción aparece en cada obra pública o en nuevos y cotidianos escándalos, y no pasa nada. Habrá que emprender una estrategia seria y comprometida para impulsar la prevención y la disuasión de conductas deshonestas.

necesitamos educarnos, informarnos, y no se vislumbra un compromiso real más allá del discurso en la lucha contra la corrupción y deshonestidad; la práctica cotidiana de las instituciones obligadas a vigilar, prevenir, disuadir, investigar o sancionar actos de corrupción no presenta estructura, coordinación ni metodología. Se carece de los perfiles idóneos y se han quedado en un estado de letargo y comodidad, sin adaptarse al nuevo entorno global.

Las historias de fraude utilizando empresas fachada se repiten como una constante. No hemos aprendido a construir verdaderos mecanismos para inhibir y disuadir esquemas recurrentes de fraude, pareciera que estamos encadenados a la fatal impunidad. No quiero parecer determinista, pero no veo una estrategia sólida y medianamente cercana para atender este grave problema que incide en la vida y muerte de los mexicanos.

"Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no solo inmoral, sino criminal y abominable", sentencia Cicerón. Hoy en día, la Comisión de Vigilancia, la UEC y la ASF mantienen en común un entorno corrupto, y bajo esa misma lógica se sienten identificados con valores de escasa moral pública. En este proceso perviven los aliados y los intereses mezquinos; nada que propicie y se desarrolle en la opacidad es buena señal. Conocen su propia historia, actúan sirviendo fielmente a quienes les llevaron al poder, no ejercen las funciones para las que fueron nombrados. No se puede servir a dos amos en la misma causa.

La fiscalización se ha mercantilizado y se convirtió en un negocio muy redituable. Considero que deben desaparecer el SNA, la ASF, la UEC y la Comisión de Vigilancia, estructuras inoperantes, inútiles y corruptas que no han servido más que para generar gasto. Inhibir la corrupción requiere instituciones fortalecidas y dignas, con el personal idóneo, experto y especializado para prevenirla, investigarla y castigarla.

Profesionalizar implica una selección de perfiles éticos, capacitación, remuneraciones competitivas; modernizar y homologar la metodología de trabajo en cada uno de los distintos rubros y programas, para asegurar que cuenten con las herramientas, el conocimiento y el personal especializado. Proteger a las instituciones y a sus integrantes de presiones y tentaciones políticas o partidistas; la experiencia nos ha mostrado mucho, entonces habrá que trabajar para alcanzar resultados y generar mayor confianza ciudadana.

México necesita romper la cadena de corrupción y requiere de una nueva entidad fiscalizadora, técnica, ética, autónoma, independiente, moderna, con estatura y solvencia moral, equipada con las mejores herramientas, tecnología y equipos élite en investigación, apelando a la energía y el talento humano especializado y que se dispendió. Reactivar una entidad viva, vigorosa, capaz de sacudirse, intrusiva, enfocada a nuevos retos; con una visión integral que permita reafirmar su dignidad. La búsqueda de justicia activó un golpe inmerecido a una institución impecable. Hoy la ruindad y deterioro son notorios y devastadores.

En la narración de este libro he intentado demostrar que todo conecta en un entramado de lo que puede ser la muestra más amplia de las redes de personajes vinculados a la alta esfera transexenal de corrupción gubernamental, donde un caso conecta con otro y otro, y los protagonistas de estas historias son los mismos, ahora cómodamente blindados en los "brazos del poder", y donde persiste el encubrimiento y el encumbramiento.

Para disuadir hay que pensar y potenciar una serie de acciones que aseguren las mejores prácticas gubernamentales, esto es el mayor reto para las labores de auditoría y fiscalización como uno de los primeros pasos para redimir la indignación colectiva. Todo aquello que se perseguía sigue ahí. La honestidad no ha sido la característica de nuestros gobiernos.

La corrupción parece inatacable e inacabable, y la responsabilidad es compartida. Siguen vigentes las frases atribuidas a César Garizurieta: "Amistad que no se ve reflejada en la nómina, es pura demagogia", "vivir fuera del presupuesto es vivir en el error", "en México no solo se puede vivir de diputado, se puede ser senador", "no cabe duda de que en la vida no hay mejor negocio que una bragueta bien administrada", "yo no soy embajador de carrera, soy embajador a la carrera" y "las embajadas se aceptan, pero no se agradecen".

La fiscalización requiere un cambio inminente de paradigma. Aprovechando la ruindad en que la convirtieron, la ASF debe desaparecer. A mediano plazo la visualizo como una nueva institución autónoma y robusta, con facultades para auditar, sin limitaciones de tiempo ni de presupuesto; que no se doblegue y pueda sacudirse la injerencia del poder partidista, que utilice la ciencia y tecnología con una innovación completa en el concepto de fiscalización y auditoría, y que en conjunto alcance mayor cobertura, con el uso especializado de inteligencia artificial y *data analytics*.

Construir nuevas instituciones resilientes que se adapten al nuevo entorno global, con una gran capacidad de reinterpretación de su misión y objetivos, a partir de un nuevo afrontamiento que permita trazar nuevos significados que abonen a la gobernanza.

Una auténtica reformulación de la fiscalización en una interacción transversal respetuosa y clara, con todos los poderes y niveles de gobierno. Lo que se criticaba persiste y ocurre dentro de un contexto gubernamental donde se percibe como normal. Necesitamos ser los mejores en nuestro oficio, que se pueda fiscalizar sin más restricción que la norma. Ir más allá en todos los aspectos técnicos y regulatorios, en la implementación automatizada de controles con enfoque forense para la atención inmediata de potenciales casos de corrupción. Promover la formación de auditores y de ministerios públicos, como una carrera con especialización académica de alto nivel de al menos seis meses intensivos escolarizados con casos prácticos, previo proceso riguroso de selección mediante una metodología de confianza diseñada para elegir los mejores perfiles.

No se puede seguir haciendo lo mismo si buscamos resultados diferentes. Replantear el futuro inmediato de la fiscalización, revolucionarla y evolucionarla con un frente común para articular los esfuerzos gubernamentales y contar con datos completos y de calidad, información estandarizada, confiable, transparente, interconectada en un sistema de ti.

Esa es mi convicción. Debe prevalecer la integridad, lealtad, congruencia, honestidad, perseverancia, talento, especialización, responsabilidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones y asegurar los mecanismos eficaces de investigación para evitar represalias

de los grupos o intereses del poder y se inhiban las complicidades; que no los alcancen los brazos corruptos.

La vida ha sido muy generosa conmigo, me dio la posibilidad de estudiar y trabajar en lo que me gusta, con responsabilidades extraordinarias, entender las entrañas del poder y del no poder también; conocer gente y contar con amigos maravillosos, disfrutar tres generaciones de mujeres fuertes, guerreras y valientes; coincidir con grandiosos hombres y mujeres que a lo largo de mi vida han estado siempre presentes en momentos difíciles o de agobio, en las alegrías y tristezas, son lazos indisolubles y desinteresados que reconozco con un cariño recíproco.

La tranquilidad y el sosiego me han acompañado en mi trayectoria profesional, para actuar en congruencia con lo que pienso, creo y hago. No me he equivocado en mis decisiones, y suscribo que cada una de ellas, en su momento, fueron las idóneas. Entonces, la respuesta a la pregunta insolente e insistente de mis adversarios —"¿no me digan que se mandaba ella sola?"— es sí y no.

Sí, porque bajo ninguna circunstancia hubo intervención alguna para sesgar o intervenir en las auditorías forenses, y no lo hubiera permitido. Y no, no me mandé sola porque mis límites fueron siempre en el marco de actuación acorde a la legalidad. Y el tiempo nos ha colocado a todos en el lugar apropiado.

Valentía, probidad, conocimiento, talento, perseverancia y decisión son requisitos esenciales de todos aquellos que aspiran al servicio público. No hay esfuerzo perdido. La cotidianeidad de acciones ilegales y los actos de corrupción sin consecuencias jurídicas ha generado un ambiente de impunidad.

Así que con los datos, información y testimoniales que corroboran cada uno de los hechos aquí narrados pudimos elaborar la reconstrucción de la Casa Sucia. ¡Qué tiempo de pillos! Nada desdora mi dignidad.

Como lo dije antes, enfatizo mi compromiso para conducirme con la verdad, pero también para saber decirla oportunamente, para señalar transgresiones y, en su caso, denunciarlas. En mi calidad de exfuncionaria, por un principio de justicia y una demanda de respeto en mi calidad profesional, comencé a escribir este libro hace más de tres años, pues para documentarse y defenderse hay que dedicar tiempo.

Con el ánimo intacto lo digo: cuidemos nuestras acciones que el prestigio viene solo. Este libro es un testimonio de las acciones y conductas que dan vida o muerte a las instituciones, y como dijera el entrañable Jorge Saldaña: "Es tan bueno este libro que apenas puedo creer que lo hayas hecho tú".

[1] https://lacasasucia.com/auditoria-1793-ds-cp-2016/.

[2] https://lacasasucia.com/auditoria-dn18008/.

[3] https://lacasasucia.com/oficio-ucegp-209-301-2018/.

[4] https://lacasasucia.com/comunicado-cpcSNA/.

[5] https://lacasasucia.com/auditoria-forense-1697/.

[6] Véase Auditoría Forense pública 2017-0-04100-12-1697-2018 1697-GB, Autorizaciones de Servicios de Comunicación Social y Publicidad de la Administración Pública Federal, al Amparo del Artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, www.ASF.gob.mx.

[7] Que son los artículos 1; 2 Fracción XXXVI; 38; y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66 Fracción I; y 122 párrafos segundo y tercero del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 1; 3; 4; 5; 6; 7; 12; 13; 14; 15; 16; 23; 25; 28; 29; 30; 57 del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2017.

[8] https://lacasasucia.com/hereda-ruiz-esparza-proceso-por-lavado/.

[9] https://lacasasucia.com/los-multimillonarios-contratos-otorgados-en-gestion-de-ramirez-pineda-en-ISSSTE/

[10] https://lacasasucia.com/titular-de-la-ASF-tapo-las-transas-del-exdirector-del-ISSSTE/

[11] https://lacasasucia.com/persecucion-politica-campana-con-mana/.

[12] https://lacasasucia.com/auditoria-forense-266-ds-cp-2019/.

[13] https://lacasasucia.com/agenda-rector-UAEMor-gustavo-urquiza/.

[14] https://lacasasucia.com/la-corrupcion-una-institucion-nacional-afirma-david-colmenares/.

[15] https://lacasasucia.com/empresas-de-aramburuzabala-obtienen-contratos-con-calderon-y-pena-por-casi-33-mil-mdp/.

[16] https://lacasasucia.com/investigan-en-bansefi-incumplimientos-en-contratos-por-5-mil-mdp/.

[17] https://www.borderhub.org/noticias-especiales/hirata-de-profesor-a-politico-evasor-de-la-justicia/.

[18] https://lacasasucia.com/respuestas-de-meade/.

[19] https://lacasasucia.com/nombramiento-de-valls-como-magistrado-puede-configurar-conflicto-de-intereses-dolores-padierna/.

[20] https://lacasasucia.com/PRI-y-verdes-imponen-a-romero-gudino-como-titular-de-la-UEC/.

[21] https://lacasasucia.com/implementar-en-lo-inmediato-el-SNA-el-reto/.

[22] https://lacasasucia.com/allanamiento-ilegal-a-la-DGAF/.

[23] https://lacasasucia.com/demanda-de-amparo-89-2020/.

[24] https://lacasasucia.com/entrevista-aristegui-perez-saavedra/.

[25] https://lacasasucia.com/tuit-reunion-santiago-nieto/.

[26] https://lacasasucia.com/declaracion-inicial-walter-garcia-SHCP/.

[27] https://lacasasucia.com/directorio-de-servidores-publicos-de-la-secretaria-de-planeacion-de-tabasco/.

[28] https://lacasasucia.com/vinculo-colmenares-y-el-secretario-de-planeacion-de-tabasco/.

[29] https://lacasasucia.com/OLACEFS/.

[30] https://lacasasucia.com/accidente-automovilistico/.

[31] https://lacasasucia.com/despacho-5-estrellas/

[32] https://lacasasucia.com/servicios-simulados/.

[33] https://lacasasucia.com/contrataciones_simuladas_ASF/.

[34] https://lacasasucia.com/contratos-de-obra-publica-de-la-ASF/.

[35] https://lacasasucia.com/dof-28012021/.

[36] https://lacasasucia.com/juan-manuel-portal-libra-destitucion-que-iba-a-ordenar-la-corte/.

[37] https://lacasasucia.com/ocultamiento-de-nombres-en-informes-de-auditoria/.

[38] https://lacasasucia.com/entrevistas-a-juan-manuel-portal/.

[39] https://lacasasucia.com/contrato-ASF-uga-daj-dgarftd-068-2019/.

[40] https://lacasasucia.com/tuit-emilio-barriga/.

[41] Definición propia, véase Muna Dora Buchahin, *Auditoría forense: Delitos contra la administración pública*, México, Bosch- UNAM.

[42] Jurisprudencia 9ª época, reg. 166315, tesis I.10.P.J/19 página 2982.

[43] Véase Edwin H. Sutherland y Donald Cressey, *PRInciples of Criminology*, Lippincott, 1978.

MÉXICO ES UNA CASA INCREÍBLEMENTE SUCIA… SUCIA DE CORRUPCIÓN.

En esa casa viven 130 millones de mexicanos, sumergidos en una cloaca de redes de sobornos, amiguismo, extorsiones, cohecho e ilegalidad.

En esta obra, la persona que más y mejor ha investigado esta podredumbre documenta el alcance de la catástrofe.

Muna Dora Buchahin, quien fue directora de auditoría forense en la Auditoría Superior de la Federación, desenmascara evidencias, datos, nombres y apellidos, las tramas de corrupción que controlan buena parte del país.

La investigadora central en el caso de la Estafa Maestra, entre otros muchos, nos cuenta, además, los incentivos y la lógica de los corruptos: por qué estas redes se han fortalecido en el sexenio actual y qué deberíamos hacer para desarticularlas.

Como cereza del pastel, revela el oscuro y perverso ardid mediante el que ella y su equipo fueron "despedidos", amenazados e intimidados, en uno de los hechos más indignos de la política moderna en México.

MUNA D. BUCHAHIN, doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; maestra en Administración por el ITESM; licenciada en Derecho y en Educación; reconocida como entrevistadora forense certificada por el Center for Interviewer Standards & Assessement, Ltd. Posee las certificaciones internacionales de Certified Government Audit Professional (cgap), Certified Risk Management Assurance (crma), Certified Forensic Interviewer (cfi) y especialista anticorrupción por el International Centre for Parliamentary Studies de Inglaterra.

En su último puesto como directora general de auditoría forense en la ASF, donde laboró por 13 años, tuvo a cargo la ejecución de diversas auditorías forenses (incluida la de la llamada Estafa Maestra) con resultados exitosos que dieron lugar a establecer un protocolo de investigación en México para identificar esquemas fraudulentos con empresas fachada, uso de documentos apócrifos, robo de identidad y la simulación de servicios.

En 2016 fue reconocida como Certified Fraud Examiner of the Year Award, distinción que otorga ACFE Global a los examinadores de fraude por su notable desempeño en el desarrollo de investigaciones significativas y su contribución en la divulgación de la cultura antifraude

La casa sucia
La red de corrupción que llegó para quedarse

Edición en formato digital: febrero, 2024

D. R. © 2024, Muna Dora Buchahin

D. R. © 2024, derechos de edición mundiales en lengua castellana:
Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. de C. V.

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra núm. 301, 1er piso,
colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, C. P. 11520,
Ciudad de México

penguinlibros.com

Penguin Random House, por el diseño de portada
iStock by Getty Images, por la fotografía de portada
Cortesía de la autora, por la fotografía de semblanza

Penguin Random House Grupo Editorial apoya la protección del *copyright*. El *copyright* estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del Derecho de Autor y *copyright*. Al hacerlo está respaldando a los autores y permitiendo que PRHGE continúe publicando libros para todos los lectores.

Queda prohibido bajo las sanciones establecidas por las leyes escanear, reproducir total o parcialmente esta obra por cualquier medio o procedimiento, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo público sin previa autorización. Si necesita reproducir algún fragmento de esta obra diríjase a Compro (Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, https://cempro.com.mx).

ISBN: 978-607-384-061-3

Composición digital: Tangram. Comunicación y Estrategias Digitales

Facebook: @penguinebooks

Twitter: @penguinlibrosmx

Instagram: @penguinlibrosmx

Youtube: @penguinlibrosmx

Índice

Prólogo

1. El sistema de la corrupción

2. El espíritu de la corrupción

3. La jauría

4. La casa sucia

5. La historia de corrupción

6. El imperio de la corrupción

Sobre este libro

Sobre la autora

Créditos